



**AMPARO EN REVISION NO. 690/99.  
QUEJOSO: EDGARDO MEDINA DURÁN.**

**PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.  
SECRETARIA: MA. DEL SOCORRO OLIVARES DE FAVELA.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día  
veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y



MA CORTE DE  
A DE LA NACION  
I GENERAL DE ACUERDOS

**VISTOS y  
RESULTANDO:**

**PRIMERO.-** Por escrito presentado el treinta uno de  
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de  
Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la  
ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, EDGARDO MEDINA  
DURAN, por su propio derecho, promovió demanda de amparo  
en contra de las autoridades y por los actos que a continuación  
se precisan:

**"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: LA  
"SEGUNDA SALA (CIVIL) DEL TRIBUNAL  
"SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con  
"domicilio conocido en el tercer piso del Recinto  
"del Poder Judicial del Estado, ubicado en la calle**

"treinta y cinco, por calle sesenta y dos de esta ciudad."

**"IV.- ACTO RECLAMADO:** Tienen este carácter la "sentencia dictada dentro de los autos del Toca "número 2456/98 con fecha veintisiete de "noviembre último, publicada en el Diario Oficial de "Gobierno del Estado, con fecha nueve de "diciembre próximo pasado, mediante la cual se "declaran infundados los agravios expresados por "el suscrito y se confirma el auto aprobatorio de "remate de fecha dieciocho de agosto de mil "novecientos noventa y ocho, verificado a las diez "horas con treinta minutos dictado por la "ciudadana Juez Cuarto de lo Civil del <sup>PRIMER</sup> ~~PRIMER~~ "Departamento Judicial del Estado en el juicio "extraordinario hipotecario promovido por la "Licenciada María de los Milagros Espinosa Faller y "continuado por los Licenciados Luis Enrique "García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez como "pretendidos apoderados de "Bancomer", "Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, "Grupo Financiero, en contra de Luis Eugenio "Molina Poot."

**SEGUNDO.-** El promovente del amparo manifestó que se violan, en su perjuicio, las garantías consignadas por los artículos 14 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló como tercero perjudicado a



Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero y al propio Luis Eugenio Molina Poot y narró como antecedentes de su demanda los que enseguida se transcriben:

**"VI.- ANTECEDENTES: PRIMERO.-** El día dieciocho  
"del mes de agosto del año de mil novecientos  
"noventa y ocho, comparecía en los autos del  
"expediente relativo al juicio extraordinario  
"hipotecario marcado con el número 1294/95 que  
"curra ante la Juez Cuarto de lo Civil del Primer  
"Departamento Judicial del Estado, a ostentarme  
"postor en la celebración de la diligencia de remate  
"en pública subasta y tercera almoneda del predio  
"número TRESCIENTOS VEINTICINCO de la calle  
"TREINTA Y NUEVE del fraccionamiento  
"MONTEALBÁN de esta ciudad.  
"**SEGUNDO.-** De la diligencia a la que se hace  
"referencia en el párrafo anterior se levantó un acta  
"y se dictó la resolución que expresó lo siguiente:  
"(*Se transcribe lo conducente*).

**"TERCERO.-** En consecuencia, el suscrito  
"interpuso el Recurso de Apelación en contra de la  
"referida resolución, en la que se aprobó el remate  
"en pública subasta y tercera almoneda del predio  
"número TRESCIENTOS VEINTIOCHO DE LA  
"CALLE TREINTA Y NUEVE DEL  
"FRACCIONAMIENTO MONTEALBAN DE ESTA  
"CIUDAD, (a pesar de que el predio descrito y

"deslindado anteriormente en esa acta y que fuera  
 "secuestrado en este juicio era el predio  
 "trescientos veinticinco de la propia calle), cerrado  
 "y fincado a favor de **BANCOMER SOCIEDAD**  
 "**ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,**  
 "**GRUPO FINANCIERO,** en virtud de que me  
 "ocasionó, tal y como lo manifesté oportunamente  
 "al Tribunal Superior de Justicia del Estado, los  
 "siguientes agravios: (Se transcribe lo  
 "conducente).

"En mi mencionado escrito de expresión de  
 "agravios ante el Tribunal de alzada, también se  
 "mencionó lo siguiente: (Se transcribe lo  
 "conducente).



"Así mismo se hizo ver al referido Tribunal  
 "Superior de Justicia del Estado la siguiente  
 "violación: (Se transcribe lo conducente).

"En este orden de ideas el día veintisiete de  
 "noviembre de mil novecientos noventa y ocho la  
 "autoridad responsable dictó la resolución que  
 "constituye el acto reclamado en el presente juicio  
 "de garantías, mediante la cual se declaran  
 "infundados los agravios expresados por el  
 "suscrito y se confirma el auto aprobatorio de  
 "remate de fecha dieciocho de agosto de mil  
 "novecientos noventa y ocho, siendo el  
 "considerando cuarto de dicha resolución la parte  
 "medular de la misma por lo que a continuación se



199



**"transcribe de manera literal: (Se transcribe lo  
"conducente).**

Solo se reproducirá el concepto de violación necesario para  
informar la cuestión planteada:

**"CUARTO.- Independientemente de las  
"consideraciones que al respecto se hagan, la  
"responsable se erige en interprete de la  
"Constitución, hecho que corresponde única y  
"exclusivamente a los Tribunales de la Federación  
"o si se permite ser extremoso a la Suprema Corte  
"de Justicia de la Nación.**



A CORTE SUPLEN-  
DE LA NACIÓN  
GENERAL DE

**"La autoridad responsable al emitir el acto  
"reclamado incurre nuevamente en la falta de  
"estudio de los agravios planteados por el suscrito.  
"El ahora quejoso argumentó ante la hoy  
"responsable la inconstitucionalidad del auto  
"aprobatorio de remate referido en los  
"antecedentes de este escrito, por contravenir lo  
"dispuesto por la fracción V del artículo 27 de la  
"Constitución Política de los Estados Unidos  
"Mexicanos.**

**"En efecto, dicho artículo y fracción establecen  
"literalmente se transcriben: (Se transcriben.)**

**"De la redacción del numeral constitucional en cita,  
"se desprende que en un contexto general contiene  
"la garantía de propiedad de tierras y aguas,**

"consagrada originalmente a la Nación la cual tiene  
 "el derecho de transmitir el dominio de ellas a los  
 "particulares constituyéndose así la propiedad  
 "privada. El propio numeral constitucional ordena  
 "que algunas entidades tales como las  
 "asociaciones religiosas, las instituciones de  
 "beneficencia pública o privada, las sociedades  
 "mercantiles, los bancos y las entidades  
 "federativas, ven limitada su capacidad de adquirir  
 "el dominio de tierras y aguas conforme a lo  
 "dispuesto en las fracciones del párrafo Noveno  
 "del numeral en estudio, de donde puede colegirse  
 "que las entidades a que se hace referencia líneas  
 "arriba son INCAPACES JURIDICAMENTE PARA  
 "ADQUIRIR EL DOMINIO DE TIERRAS, salvo las  
 "excepciones a que se refieren en cada una de las  
 "fracciones, en especial, para el caso que nos  
 "interesa, lo dispuesto en la fracción V, que refiere  
 "a los enteramente necesarios para su objeto  
 "directo, es decir, los que sean indispensables para  
 "llevar a cabo su fin social como veremos mas  
 "adelante, sin embargo, cabe destacar que la  
 "capacidad como sinónimo de aptitud jurídica,  
 "extiende su alcance a todo ordenamiento jurídico,  
 "no solamente a la Constitución como Carta  
 "Magna, de donde es meridianamente claro que los  
 "incapaces carecen de aptitud jurídica para  
 "celebrar actos de esa naturaleza. En la especie, se



MA CORTE F.  
LA DE LA NACION  
LA GENERAL DE JUSTICIA

"trata de la adquisición del dominio sobre tierras y  
 "aguas, por parte de ciertas entidades entre las que  
 "se encuentran las Instituciones Bancarias o  
 "Bancos como lo menciona el texto constitucional,  
 "que contrario a lo sostenido por la Sala  
 "responsable, la prohibición para adquirir que se  
 "somete a las Instituciones, es imperativa y de  
 "orden público, lo cual redundaría en la incapacidad  
 "jurídica para adquirir, bienes inmuebles, (tierras)  
 "que si bien no es una incapacidad jurídica para  
 "adquirir, bienes inmuebles, (tierras) que si bien no  
 "es una incapacidad total, ya que permite dicha  
 "adquisición con ciertas limitaciones específicas  
 "las cuales se consagran en el propio texto  
 "constitucional, si se plantea como una  
 "incapacidad jurídica expresa e imperativa.  
 "El espíritu del constituyente fue el evitar el  
 "acaparamiento de tierras y bienes inmuebles en  
 "manos muertas. La actividad de los bancos no es  
 "la administración de bienes de adquirir o  
 "administrar más bienes inmuebles que los  
 "enteramente necesarios a su objeto directo.  
 "El objeto directo a que se refiere el numeral  
 "constitucional evidentemente atiende a la  
 "capacidad como atributo de la personalidad, la  
 "capacidad se divide en: 'de goce' y de 'ejercicio';  
 "la primera es la aptitud de ser titular de derechos  
 "o para ser sujeto de obligaciones, y la segunda es

"la aptitud de participar directamente en la vida  
 "jurídica. La capacidad de goce de las personas  
 "morales está delimitada por su objeto social, la  
 "declaración del objeto social es quizás el requisito  
 "más importante en un contrato de sociedad,  
 "puesto que mediante su determinación, los socios  
 "fijan los límites de la capacidad de goce de la  
 "persona moral. En el caso particular de las  
 "instituciones de crédito dicho objeto social  
 "(capacidad de goce) se determina por ministerio  
 "de ley, atento a lo dispuesto en el numeral 46 de la  
 "Ley de Instituciones de Crédito, es decir que la  
 "capacidad de goce de tal persona moral se limita a  
 "lo dispuesto en tal numeral 46 de la ley ibídem en  
 "concordancia con la fracción V del artículo 27  
 "constitucional, de que se ha hecho mérito, en los  
 "cuales se atiende directamente a que los bancos  
 "sólo podrán tener y adquirir los bienes inmuebles  
 "que sean eternamente necesarios para su objeto  
 "directo, en ese orden de ideas los bienes que no  
 "sean estrictamente necesarios para realizar el  
 "objeto social de la Institución crediticia no pueden  
 "ser adquiridos por la misma.

"En abundancia a lo anterior, siendo objeto directo  
 "de 'Bancomer', Sociedad Anónima, Institución de  
 "Banca Múltiple, Grupo Financiero, la prestación de  
 "los servicios bancarios a que se refiere el artículo  
 "46 de la Ley de Instituciones de Crédito, es

201



"notoriamente evidente que los bienes inmuebles  
 "enteramente necesarios para su objeto son los  
 "destinados a oficinas del citado banco.

"En efecto, por enteramente necesarios debemos  
 "entender totalmente útiles, indispensables, si los  
 "cuales no se podría cumplir con el objeto social,  
 "es decir en la especie, prestar el servicio de  
 "banca.

"De ninguna manera se puede concluir que el bien  
 "inmueble adjudicado en remate es enteramente  
 "necesario, indispensable para la prestación del  
 "servicio público de banca. Y si dicho bien  
 "rematado no es indispensable para la prestación  
 "de los servicios bancarios, la institución de  
 "crédito no puede adquirirlo. Sin embargo la  
 "autoridad responsable apartándose del espíritu  
 "del constituyente se produce de manera contraria  
 "al artículo 27 Constitucional, aun cuando para  
 "resolver lo invoca.

LA CORTE DE  
 DE LA NACIÓN  
 GENERAL DE ACUERDO

"En lo conducente, la Sala responsable se  
 "manifiesta de la siguiente forma:

"...Es infundado este agravio, toda vez que no  
 "debe perderse de vista,... que dicho artículo no  
 "establece una prohibición absoluta a las  
 "Instituciones de Crédito, de no adquirir bienes  
 "raíces, sino que lo limita a no adquirir más bienes  
 "que los estrictamente necesarios para su objeto  
 "social,... como es la Ley de Instituciones de

"Crédito, las que regulan los actos a que se deben  
 "sujetar las Instituciones de Crédito y siendo que  
 "dicha ley federal no contraviene el espíritu del  
 "legislador constitucional, sino todo lo contrario,  
 "vigila que se cumpla al disponer en su artículo  
 "fracción VIII, párrafo segundo, que cuando una  
 "Institución de crédito reciba en pago de adeudos o  
 "para adjudicación en remate, como en la especie,  
 "dentro de juicios relacionados con créditos a su  
 "favor, títulos o valores, así como bienes o  
 "derechos que no deba conservar en su activo,  
 "deberá sujetarse a las disposiciones de carácter  
 "general que establezca la Comisión Bancaria.  
 "Además,... el que los bancos se adjudiquen  
 "predios a su favor, no contraviene el aludido  
 "artículo 27 Constitucional, ya que este no prohíbe  
 "tal circunstancia, máxime que la Institución de  
 "Crédito compareció la subasta con el carácter de  
 "acreedor directo, a fin de poder recuperar a  
 "posteriori, la inversión que realizó a favor de los  
 "particulares demandados, cumpliendo así con el  
 "objeto social que le fue encomendado, por lo tanto  
 "tal circunstancia queda prevista en la fracción XIII  
 "del artículo 46 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito, que enumera las operaciones que podrán  
 "ser efectuadas por las Instituciones de Crédito...'  
 "Ahora bien, la responsable considera que la  
 "prohibición a la que se contrae la fracción V del



"artículo 27 constitucional no es imperativa sin  
 "embargo, lo que la responsable deliberadamente  
 "omite considerar es que al ser el servicio de banca  
 "y crédito una actividad concesionada por el  
 "Estado, dicha actividad se encuentra sujeta al  
 "régimen de autoridad, y de esta forma, lo que no le  
 "está jurídicamente permitido a los bancos, les está  
 "legalmente prohibido. Por lo que, con mayor razón  
 "les está prohibido. A los Bancos  
 "adquirir más bienes que los indispensables a su  
 "objeto directo.



A CORTE DEL  
 DE LA NACION  
 ENERAL DE AGOSTO

"Las instituciones de crédito presta un servicio  
 "público, que es el de banca y crédito. Este servicio  
 "es regulado por la Federación, quien ejerce la  
 "rectoría económica del Estado y del Sistema  
 "Bancario Mexicano, según disponen el artículo 25  
 "de nuestra Carta Magna y los numerales 1º, 3º y 4º  
 "de la Ley de Instituciones de Crédito.

"De todo lo anteriormente expuesto, podemos  
 "concluir que estamos en presencia de una  
 "actividad, que por una parte está sujeta a un  
 "régimen de Derecho Público y por la otra se trata  
 "de un Servicio Público. Siendo en consecuencia  
 "una actividad que corresponde al Estado regular y  
 "vigilar, a través de dicha rectoría del Sistema  
 "Bancario Mexicano, podemos afirmar que las  
 "instituciones de crédito les es aplicable lo que la  
 "doctrina ha definido como el "Régimen de

"Autoridad" en contraposición al llamado  
"Régimen de Libertad".

"Las diferencias esenciales de dichos regímenes  
son las siguientes:

"En cuanto al régimen de libertad, éste es el que la  
doctrina ha establecido a favor de las personas  
físicas o individuos y que se contiene en el  
principio de que en el ejercicio de sus derechos  
subjetivos pueden los individuos realizar todas las  
conductas, excepto las que expresamente estén  
prohibidas por la ley.

"Es importante hacer notar que dicho enunciado no  
puede ser aplicado en términos absolutos, pues  
aun cuando el individuo puede realizar cualquier  
acto que no le esté prohibido, ello en modo  
alguno implica que pueda con ello contravenirse  
disposiciones expresas de una ley.

"El régimen de la autoridad se manifiesta bajo el  
siguiente principio jurídico incontrovertible que  
reza: "Las autoridades no tienen más facultades y  
por lo mismo no deben realizar más actos que los  
que expresamente le estén autorizados por las  
leyes".

"Lo anterior está corroborado por diversos  
tratadistas en materia de fideicomiso, como lo es  
el señor JULIAN BERNAL MOLINA (Práctica y  
Teoría Jurídica del Fideicomiso, Miguel Angel  
Porrúa en colaboración con Banco Internacional,





"S.N.C., 1988, pág. 99), quien al respecto dice en  
"relación a los actos que pueden realizar las  
"Instituciones Bancarias;

"Para estas instituciones, como personas morales,  
"no rige el principio que existe para las personas  
"físicas, en el sentido de que pueden realizar todos  
"los actos que no estén prohibidos. Los Bancos solo  
"pueden ejecutar aquellos actos que están  
"expresamente señalados como propios de su  
"objeto y en este caso por la ley'.

Visto todo lo hasta este momento expresado,  
podemos concluir válidamente, que para quienes  
están sujetos al régimen de autoridad, aquéllos  
"actos que no le estén expresamente autorizados  
"por la ley, le están jurídicamente prohibidos y que  
"tanto las autoridades y quienes en virtud de  
"concesión o autorización realizan actividades del  
"servicio público que a esta corresponde, como lo  
"es el de Banca y Crédito, no pueden realizar ni  
"tienen más atribuciones que las que  
"expresamente les otorga la ley, por lo que no  
"pueden realizar ni tienen más atribuciones que las  
"que expresamente les otorga ésta, por lo que no  
"pueden efectuar válidamente ningún acto que no  
"esté expresamente o específicamente autorizado  
"por dicha ley, ya que, como antes vimos si no  
"están permitidos y regulados, les está legalmente  
"prohibido efectuarlos.

LA CORTE  
DE LA NACION  
GENERAL DE

"En ese sentido, lo que a las instituciones de  
 "crédito no les está permitido realizar  
 "jurídicamente, les está legalmente prohibido, al  
 "contrario del razonamiento esgrimido por la  
 "responsable la cual considera que no es total la  
 "prohibición constitucional impuesta a los Bancos  
 "de adquirir bienes inmuebles rústicos o urbanos  
 "más que los que enteramente necesarios para su  
 "objeto directo.

"Lo mejor y más sana práctica bancaria para  
 "proteger las inversiones de las instituciones de  
 "crédito es un cuidadoso estudio de viabilidad del  
 "proyecto de inversión, de ninguna manera lo es  
 "recuperar el importe del crédito comprando bienes  
 "inmuebles por remate.

"Asimismo, debe considerarse que en caso de  
 "llevar a cabo un juicio para recuperar la inversión,  
 "la institución crediticia tiene la opción de  
 "recuperar su inversión mediante las cantidades  
 "que los custodios convocados exhiban con su  
 "postura.

"Como se manifestó en el escrito de expresión de  
 "agravios citado en el capítulo de antecedentes de  
 "este escrito, el adquirir bienes en remate no forma  
 "parte del servicio de banca y crédito, y  
 "'Bancomer', Sociedad Anónima, Institución de  
 "Banca Múltiple, Grupo Financiero, se encuentra  
 "legalmente imposibilitado de entrar a remates, aun



"y cuando sean relativos a créditos otorgados por  
"dicha institución, máxime que el objeto social de  
"dicha Institución de Crédito está limitado  
"únicamente a la prestación de servicios bancarios  
"a los cuales se refiere el artículo 46 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, lo que significa otra  
"invitación a la capacidad de Bancomer para  
"adjudicarse bienes en pública subasta.

"El artículo 46, anteriormente citado fue  
"debidamente analizado en el escrito de expresión  
"de agravios mencionado en el capítulo de  
"antecedentes de este escrito por lo que para evitar  
"repeticiones solicito que dichos razonamientos se  
"tengan por reproducidos aquí, a la letra (páginas  
"19, 20 y 21 de esta demanda),

LA CORTE  
DE LA NACION  
GENERAL DE ABOGADOS

"Asimismo, es oportuno transcribir  
"consideraciones doctrinales acerca de las  
"limitaciones de la capacidad de las sociedades:

"El doctor Walter Frisch Phipps se manifiesta de la  
"siguiente manera: (Transcribe párrafo del autor.)

"El jurista Manuel García Rendón se expresa al  
"respecto de la forma que sigue: (Lo transcribe).

"De todo lo anteriormente manifestado se puede  
"colegir que por disposición expresa del artículo  
"27, fracción V, de la Constitución Política de los  
"Estados Unidos Mexicanos, las limitaciones  
"establecidas en el artículo 46, de la Ley de  
"Instituciones de Crédito y las facultades

"contenidas en su objeto social, LA INSTITUCION  
"DE CREDITO DENOMINADA 'BANCOMER',  
"SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA  
"MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, CARECE DE  
"CAPACIDAD LEGAL PARA OSTENTARSE  
"POSTOR EN ALGUNA DILIGENCIA DE REMATE,  
"por lo que la postura presentada por los  
"licenciados García Bert y Rivero Ramírez debió  
"ser desechada y, en esa virtud, se deberá declarar  
"que el suscrito se adjudicó en remate el bien  
"inmueble mencionado en los antecedentes de este  
"escrito.

"El acto reclamado se origina en el auto  
"aprobatorio del remate al cual se hace referencia  
"en los antecedentes de este escrito.

"Frecuentemente se utiliza almoneda, remate, y  
"subasta como sinónimos, por lo que es pertinente  
"transcribir los conceptos relativos:

"ALMONEDA.- (Transcribe definición)

"REMATE.- (Transcribe definición)

"SUBASTA.- (Transcribe definición)

"El acto reclamado causa agravios en detrimento  
"de los derechos del suscrito en virtud de que LAS  
"INSTITUCIONES DE CREDITO NO PUEDEN  
"OSTENTARSE COMO POSTOR EN LA  
"CELEBRACION DE UNA DILIGENCIA DE REMATE.

"La anterior afirmación se basa en las siguientes  
"dos premisas:



"1.- LA CAPACIDAD DE GOCE Y EJERCICIO DE  
 "LAS INSTITUCIONES DE CREDITO SE  
 "ENCUENTRA LIMITADA CONSTITUCIONAL Y  
 "LEGALMENTE IMPIDIENDO LA PARTICIPACION  
 "DE LAS MISMAS COMO POSTOR EN UNA  
 "DILIGENCIA DE REMATE.



EMA CORTE DE  
 LA DE LA NACION  
 LA GENERAL DE JUEROS

"El artículo 27, fracción V, de la Constitución  
 "establece una prohibición que significa una  
 "limitación a la capacidad de goce y ejercicio de las  
 "instituciones de crédito, misma que se traduce en  
 "la imposibilidad de tener en propiedad bienes  
 "muebles más haya de los enteramente  
 "necesarios para la realización de su objeto  
 "directo.

"En el mismo sentido, el artículo 46 fracción XXIII,  
 "de la Ley de Instituciones de Crédito establece  
 "que los Bancos solo podrán adquirir los bienes  
 "muebles e inmuebles necesarios para la  
 "realización de su objeto.

"Esta limitante aparentemente clara, origina sin  
 "embargo, la problemática relativa al identificar  
 "cuales son los bienes enteramente necesarios  
 "para la realización de dicho objeto.

"De una correcta interpretación de la disposición  
 "en comento, se debe colegir que dichos bienes  
 "inmuebles son aquellos en los cuales funcionen  
 "las oficinas y demás instalaciones propias de las  
 "actividades bancarias.

"2.- EL BANCO SIENDO ACTOR EN UN  
"PROCEDIMIENTO PUEDE ADJUDICARSE EL BIEN  
"PUESTO A REMATE SIN NECESIDAD DE SER  
"POSTOR.

"Los acreedores pueden adquirir los bienes a  
"través de la 'dación en pago' o 'la adjudicación en  
"pago' pues dichos actos jurídicos son algunas de  
"las formas en que los actores pueden satisfacer  
"sus pretensiones en el juicio, en el presente caso,  
"las instituciones de crédito pueden recuperar sus  
"inversiones de las siguientes maneras:

"1.- PAGO.

"2.- DACION EN PAGO.- La transmisión en  
"propiedad de una cosa hecha por el deudor a  
"favor de su acreedor para pagar con ella su deuda.

"3.- ADJUDICACION EN PAGO.- Aplicar a un  
"acreedor la propiedad de una cosa, para pagar su  
"crédito. En principio, no puede obligarse al  
"acreedor a recibir en pago una cosa diversa de la  
"debida, porque tiene derecho de exigir  
"precisamente la cosa o prestación estipuladas,  
"pero en caso de remate, la ley le concede el  
"derecho de adjudicarse el bien rematado, sino se  
"han presentado postores que lo compren.

"4.- POR POSTURA FINAL.- Ofrecida por el postor  
"que se adjudique el bien en remate. Es necesario  
"atender a los siguientes conceptos:



**"POSTOR.-** La persona que pone u ofrece precio o alguna cosa que es vendida o arrendada en subasta judicial."

**"POSTURA.-** El precio que se señala a cualquier cosa, como asimismo el modo, pacto o condición que se pone entre dos o más contratantes...; pero muy singularmente se entiende aquél precio que en las almonedas o arrendamientos de abastos, ejecutados públicamente por las ciudades y pueblos, y ventas judiciales hechas de mandatos de la justicia, se fija cuando sacan estos a público remate alguna cosa" (Diccionario de Cornejo).

CORTE DE  
E LA NACIÓN  
SERIE DE ASESORÍA

También se entiende por postura el escrito formulado por la persona que quiere comprar la cosa que se remata, y en el cual expresa el precio que ofrece y las condiciones de pago.

De lo anterior se desprende que el precio pagado por el rematador (postura) constituye la forma legal más frecuente mediante la cual el acreedor puede cobrar las prestaciones que reclama en un procedimiento. La ley lo ha planteado de esta manera, y únicamente a falta de postores puede el banco acreedor adjudicarse en pago el bien casado a venta judicial, pero de ninguna manera puede ostentarse postor para comprar el mismo.

Es necesario remarcar que es en adjudicación el pago donde efectivamente se puede considerar que el Banco recupera parte o la totalidad del

*"crédito otorgado al deudor mientras que el hecho  
 "de adquirir bienes ostentándose postor en remate  
 "no significa la recuperación de un crédito sino una  
 "inversión inmobiliaria al comprar predios a un  
 "precio normalmente más bajo que el comercial, lo  
 "que se traduce en una inmediata violación del  
 "artículo 27, fracción V, de la Constitución y del  
 "artículo 46, fracción XXIII, de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito. Dicha violación se  
 "produce en perjuicio de los derechos del suscrito.  
 "En mérito de lo anteriormente expresado, **SECRETARÍA DE JUSTICIA**  
 "Señoría deberá dictar sentencia declarando que la  
 "Justicia Federal me ampara y protege en contra de  
 "los actos de que me quejo,"*

**TERCERO.-** Con fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la Ciudad de Mérida admitió la demanda de garantías, registrándola con el número 6/99, tuvo como terceros perjudicados **BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO** y a **LUIS EUGENIO MOLINA POOT** a quienes ordenó emplazar a juicio. Seguidos los trámites de ley, con fecha diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva y a continuación se emitió el fallo del caso, mismo que se terminó de engrosar en diecinueve de marzo siguiente y que culminó con el siguiente punto resolutivo:



207



**"UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI  
"PROTEGE a EDGARDO MEDINA DURAN en contra  
"del acto que reclamó de la Segunda Sala del  
"Tribunal Superior de Justicia del Estado de  
"Yucatán, el cual quedó precisado en el resultando  
"primero del presente fallo."**



as consideraciones en que se sustenta el citado fallo, son  
del tenor siguiente:

A CORTE DE  
DE LA NACIÓN  
EN EL DE ACUERDO

**"SEGUNDO.- Resulta cierto el acto reclamado por  
"la quejosa, porque así expresamente lo admitió la  
"Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal  
"Superior de Justicia del Estado de Yucatán en su  
"informe justificado, rendido en diverso oficio el  
"once de enero del año en curso, al que acompañó  
"original del toca número 2456-98 de donde emana  
"el acto reclamado."**

**"TERCERO.- Sin que se advierta causal de  
"improcedencia que haya sido invocada por las  
"partes, que deba hacerse valer aún de oficio por  
"este juzgado en el presente juicio de garantías,  
"procede entrar al fondo de la cuestión planteada,  
"por lo cual los conceptos de violación expresados  
"por la quejosa se tienen aquí por reproducidos  
"como si literalmente se insertasen a fin de evitar  
"innecesarias repeticiones."**

"CUARTO.- El primero de los conceptos de  
 "violación esgrimido por el quejoso es inoperante,  
 "en la medida que no combate de manera directa  
 "todas de las consideraciones expuestas por la  
 "sala responsable para fundar el fallo recurrido,  
 "cuando alega que éste carece de los requisitos  
 "mínimos de fundamentación y motivación  
 "exigidos por la ley, y que no menciona los  
 "números de los artículos en los que pretende  
 "sustentar su razonamiento, como puede  
 "apreciarse en la página cuatro de la sentencia  
 "recurrida, ya que en el considerando cuarto se lee  
 "'vigila que se cumpla al disponer en su artículo  
 "fracción VIII, párrafo segundo' y que en  
 "consecuencia abandona al quejoso en la anarquía  
 "jurídica ya que no se puede alegar sobre un  
 "artículo desconocido, cuyo contenido se ignora.  
 "No expresa la relación razonada entre el acto  
 "reclamado y los derechos fundamentales que  
 "estime violados, demostrando jurídicamente la  
 "contravención de éstos por dicho acto, que  
 "comprueben la transgresión a sus derechos  
 "públicos individuales.  
 "Sin embargo, cabe decirle que se observa de la  
 "resolución combatida, fojas ciento cuarenta y  
 "siete a ciento cincuenta de los presentes autos,  
 "que la sala responsable sí invocó los  
 "ordenamientos jurídicos aplicables al caso

208



"concreto, exponiendo con precisión las razones  
 "jurídicas que estimó necesarias para declarar  
 "improcedentes e infundados los agravios del  
 "apelante. Y en efecto, en el cuarto considerando  
 "de la resolución, la sala sostuvo en una parte, que  
 "la personalidad de los señores Luis Enrique  
 "García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez en su  
 "carácter de apoderados de Bancomer, S.A.  
 "Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero,  
 "quedó debidamente acreditada con la copia  
 "certificada de la escritura pública del día  
 "veinticinco de septiembre de mil novecientos  
 "noventa y siete, documento al que le otorgó pleno  
 "valor probatorio en términos de lo dispuesto por  
 "los artículos 290 y 317 del Código de  
 "Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán,  
 "por contenerse en tal testimonio las facultades de  
 "los señores Miguel García y García, Francisco  
 "Javier Fernández Carbajal y Víctor Manuel Borrás  
 "Setién, quienes comparecieron ante el notario  
 "actuante a otorgar a nombre de Bancomer,  
 "sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple,  
 "Grupo Financiero, poder general para actos de  
 "dominio a favor de los licenciados Javier Jesús  
 "Rivero Ramírez y Luis Enrique García Bert,  
 "limitado para que lo ejerciten en forma  
 "mancomunada entre ellos o con cualquier otro  
 "apoderado de la institución que goce de las

CORTE DE  
 LA NACION  
 AL DE AGOSTO

"*mismas facultades, exclusivamente en aquellos*  
 "*casos en que la institución en su carácter de*  
 "*acreedor, sea parte o tenga interés jurídico en los*  
 "*términos del artículo 465 del Código de*  
 "*Procedimientos Civiles; que para acreditar la*  
 "*personalidad del primero de los otorgantes se*  
 "*exhibieron entre otros documentos, la escritura*  
 "*pública número veinticinco mil noventa y siete de*  
 "*fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y*  
 "*seis, otorgada ante el propio Notario autorizante*  
 "*cuya parte conducente fue transcrita por dicho*  
 "*fedatario en el punto 26 de los documentos*  
 "*acumulados al apéndice de la escritura de poder a*  
 "*estudio, en la que consta la protocolización*  
 "*parcial del acta de sesión del Consejo de*  
 "*Administración de la Institución actora, de fecha*  
 "*veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y*  
 "*seis, en la que el referido Consejo de*  
 "*Administración, acordó el nombramiento del*  
 "*Licenciado Miguel García y García, representante*  
 "*legal de la citada institución, así como concederle*  
 "*entre otros, poder general para pleitos y*  
 "*cobranzas y poder general limitado para actos de*  
 "*dominio, que deberá ejercer conjuntamente con*  
 "*otro apoderado investido de la misma facultad,*  
 "*con la facultad expresa para delegar el poder*  
 "*conferido, a favor de terceras personas; respecto*  
 "*de los dos últimos otorgantes Ingeniero Francisco*



SECRETARÍA DE LA FISCALÍA  
 DE LA NACIÓN  
 GENERAL DE AGENCIAS

"Javier Fernández Carbajal y Contador Público  
 "Víctor Manuel Borrás Setién para acreditar su  
 "personalidad, se exhibieron entre otros  
 "documentos, la escritura pública número  
 "veinticinco mil noventa y ocho de fecha tres de  
 "mayo de mil novecientos noventa y seis, otorgada  
 "ante el propio Notario autorizante, cuya parte  
 "conducente fue transcrita por dicho fedatario en el  
 "punto 27 de los documentos acumulados al  
 "apéndice de la escritura de poder a estudio, en la  
 "que consta la protocolización parcial del acta de  
 "sesión del Consejo de la Administración de la  
 "Institución actora, del veintiocho de marzo de mil  
 "novecientos noventa y seis, en la que el referido  
 "Consejo de Administración, acordó el  
 "nombramiento del Ingeniero Francisco Javier  
 "Fernández Carbajal y Contador Público Víctor  
 "Manuel Barras Setién, entre otras personas, como  
 "representantes legales de la citada Institución, así  
 "como concederles entre otros, poder general para  
 "pleitos y cobranzas y poder general ilimitado para  
 "actos de dominio, así como la facultad expresa  
 "para otorgar y delegar poderes generales y  
 "especiales, para revocar unos y otros y  
 "sustituirlos en todo o en parte, confiriéndoseles  
 "también la facultad para que, en su caso, las  
 "personas a quienes otorguen dichos poderes  
 "puedan, a su vez, otorgarlos, delegarlos,

"substituirlos o revocarlos en todo o en parte a  
 "favor de terceros, con las limitaciones que en  
 "cada caso concreto se establezcan; asimismo el  
 "poder exhibido en autos, contiene en el punto 22  
 "la inserción relativa al nombramiento de los  
 "consejeros integrantes del Consejo de  
 "Administración y en el punto 29 el Notario  
 "autorizante transcribió las facultades del referido  
 "Consejo de Administración de la sociedad actora,  
 "entre las que destaca la facultad de otorgar  
 "poderes generales para pleitos y cobranzas, para  
 "actos de administración y para actos de dominio,  
 "entre otros, así la facultad para otorgar y delegar  
 "poderes generales y especiales, revocar unos y  
 "otros y sustituirlos en todo o en parte, incluyendo  
 "expresamente la facultad para que las personas a  
 "quienes se otorguen dichos poderes puedan a su  
 "vez, otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o  
 "revocarlos, en todo o en parte a favor de terceros;  
 "siendo evidente que el poder exhibido fue  
 "otorgado conforme a derecho y contiene las  
 "inserciones exigidas en el artículo 90 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito, por lo que en concepto  
 "de la sala responsable resultó suficiente para  
 "acreditar la personalidad y facultades de los  
 "comparecientes en representación de la parte  
 "actora, a la diligencia de remate; que en cuanto a  
 "la violación del artículo 27 constitucional y 46 de

210



MA CORTE DE  
I DE LA NACION  
A GENERAL DE

"la Ley de Instituciones de Crédito, sostuvo la sala  
 "que si bien es cierto que la fracción V del artículo  
 "27 de la Constitución General de la República,  
 "establece que los bancos no pueden adquirir en  
 "propiedad o administración, más bienes raíces  
 "que los enteramente necesarios para su objeto  
 "directo, también resulta cierto que dicho artículo  
 "no establece una prohibición absoluta a las  
 "Instituciones de crédito de poder adquirir bienes  
 "raíces, sino que lo limita a no adquirir mas bienes  
 "que los estrictamente necesarios para su objeto  
 "social; que la Ley de Instituciones de Crédito no  
 "contraviene el espíritu del legislador al disponer  
 "en su artículo 106 fracción XIII párrafo segundo,  
 "que cuando una institución reciba en pago de  
 "adeudos o para adjudicación en remate dentro de  
 "los juicios relacionados con créditos a su favor,  
 "títulos, valores así como bienes o derechos que  
 "no deba conservar en su activo, deberá sujetarse  
 "a las disposiciones de carácter general que  
 "establezca la Comisión Nacional Bancaria,  
 "máxime que la institución de crédito compareció a  
 "la subasta como acreedor directo a fin de  
 "recuperar a posteriori la inversión que realizó a  
 "favor de los particulares demandados, tal  
 "circunstancia queda prevista en la fracción XXIII  
 "del artículo 46 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito.

"Por otra parte, resulta infundado el argumento  
 "encaminado a señalar que la resolución reclamada  
 "abandona al quejoso en la anarquía jurídica por no  
 "poder alegar sobre un artículo desconocido,  
 "refiriéndose a la ausencia de numeral que aprecia  
 "de la parte conducente del cuarto considerando  
 "de la resolución de la sala (parte media inferior de  
 "la foja ciento cincuenta de los autos) cuando la  
 "responsable señaló "...vigila que se cumpla al  
 "disponer en su artículo fracción VIII, párrafo  
 "segundo, que cuando una institución de  
 "crédito..." porque del contexto de aquella parte  
 "considerativa se observa con plena claridad y sin  
 "lugar a dudas que la responsable se refiere de  
 "manera directa a la fracción XIII del artículo 106 de  
 "la Ley de Instituciones de Crédito, el cual  
 "establece lo siguiente:

"106.-. A las instituciones de crédito les estará  
 "prohibido:

"Fracción XIII.- ...(primer párrafo)

"Segundo párrafo:

"Cuando una institución de crédito reciba en pago  
 "de adeudos o por adjudicación en remate dentro  
 "de juicios relacionados con créditos a su favor,  
 "títulos o valores, que no deba conservar en su  
 "activo, así como bienes o derechos de los  
 "señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las





"disposiciones de carácter general que establezca  
"la Comisión Nacional Bancaria"

"SENTENCIAS, CITA EQUIVOCADA DE  
"PRECEPTOS LEGALES EN LAS.- La revocación de

"la sentencia de primera instancia con base  
"solamente en la invocación errónea de un

"precepto jurídico por parte de la autoridad judicial,  
"significa una denegación clara y de justicia para el

"actor. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de  
"Justicia de la Nación comparte el criterio de la

"responsable en ese sentido, puesto que sostiene  
"la tesis de jurisprudencia número 341, que se

"publicó a fojas 1028, de la Cuarta Parte del último  
"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

"en que se considera que es insuficiente ese solo  
"motivo para conceder el amparo a un quejoso."

"Con lo anterior se pone de manifiesto que,  
"contrariamente a lo sostenido por el quejoso, en el

"caso concreto hoy sujeto a examen, la sala  
"responsable sí fundó y motivó la resolución

"combatida, lo que impone considerar que además  
"de inoperantes, resultan infundados los

"argumentos expuestos como primer concepto de  
"violación. En apoyo de esta consideración, se

"invoca la jurisprudencia número 173, que aparece  
"visible a fojas 116 del tomo VI materia común, del

"apéndice al Semanario Judicial de la Federación  
"1917-1995, cuyo título y texto son los siguientes:

CORTE DE  
DE LA NACIÓN  
CENTRAL DE QUEJOSOS

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON  
 "INOPERANTES SI NO ATACAN LOS  
 "FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.- Si los  
 "conceptos de violación no atacan los  
 "fundamentos del fallo impugnado, la Suprema  
 "Corte de Justicia no está en condiciones de poder  
 "estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo,  
 "pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias  
 "de la queja en un caso no permitido legal ni  
 "constitucionalmente, si no se está en los casos  
 "que autoriza la fracción II del artículo 107  
 "reformado, de la Constitución Federal, y los dos  
 "últimos párrafos del 76, también de la Ley de  
 "Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en  
 "leyes declaradas inconstitucionales por la  
 "jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se  
 "trate de una queja en materia penal o en materia  
 "obrera en que se encontrare que hubiere habido  
 "en contra del agraviado una violación manifiesta  
 "de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni  
 "menos se trate de un caso en materia penal en  
 "que se hubiere juzgado al quejoso por una ley  
 "inexactamente aplicable."

"QUINTO.- Los conceptos de violación  
 "identificados como segundo y tercero de la  
 "demanda de garantías que aparecen de la foja  
 "trece vuelta a la diecisiete, se analizarán  
 "conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto



72

"por el artículo 79 de la Ley de Amparo, porque  
"además de encontrarse relacionados de manera  
"directa e inmediata, ambos se dirigen a combatir  
"la resolución de la sala responsable, por haber  
"reconocido ésta, personalidad jurídica a los  
"señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
"Pérez Ramírez como apoderados legales de  
"Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple  
"Grupo Financiero; y a los señores Miguel García y  
"García, Francisco Fernández Carrajal y Víctor  
"Mandel Borrás Setién, particularmente cuando se  
"advierte del contenido del tercer concepto de  
"violación, que la propia quejosa se remite a parte  
"de las inconformidades expuestas en el segundo  
"de ellos (parte final de la foja dieciséis y diecisiete  
"del expediente) y porque la personalidad jurídica  
"de todos ellos, deriva del mismo documento  
"cuestionado por el quejoso, es decir, de la  
"escritura pública número veintinueve mil  
"quinientos ochenta y siete (29,587) exhibida en el  
"juicio natural, en copia certificada.  
"Refiere esencialmente la quejosa en los conceptos  
"de violación numerados como segundo y tercero,  
"que la resolución impugnada viola en su perjuicio  
"las garantías de legalidad y de exacta aplicación  
"de la ley, en virtud de que la autoridad  
"responsable, al igual que la Juez Cuarto de lo Civil  
"del Primer Departamento Judicial en el Estado,

LA CORTE DE  
DE LA NACION  
JEFES DE ACUERDO

"reconoció a los señores Luis Enrique García Bert  
 "y Jesús Rivero Ramírez una representación o  
 "personalidad legal de la cual carecen, pues el  
 "documento con el cual pretenden acreditar su  
 "personalidad como apoderados de Bancomer,  
 "sociedad anónima, institución de banca múltiple,  
 "grupo financiero, no contiene las inserciones en  
 "derecho requeridas y que la autoridad  
 "responsable resuelve conjuntamente  
 "aspectos que fueron planteados por separado en  
 "el escrito de expresión de agravios por ser  
 "cuestiones distintas, referidas a hechos diversos,  
 "los cuales son; la falta de personalidad de los  
 "señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
 "Rivero Ramírez, y la falta de personalidad de los  
 "señores Miguel García Y García, Francisco  
 "Fernández Carvajal y Víctor Manuel Borrás Setién;  
 "que el estudio del mandato debe realizarse de  
 "conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de  
 "la Ley de Instituciones de Crédito, el cual  
 "establece los requisitos de validez que son de  
 "obligatoria observancia; que el otorgamiento de  
 "un poder de una institución bancaria requiere  
 "necesariamente los siguientes elementos: que  
 "obre inserto en él, el acuerdo del consejo de  
 "administración; (en caso de banca múltiple) o del  
 "consejo directivo (para el caso de la banca de  
 "desarrollo); que obre también la inserción relativa

COSEPREM  
 JUSTICIA  
 SECRETARIA DE




CORTE DE  
LA NACION  
L DE ACUERDOS

"a las facultades que en los estatutos sociales o en  
 "sus respectivas leyes orgánicas se concedan al  
 "mismo consejo; y, que obre la comprobación del  
 "nombramiento de los consejeros; que es evidente  
 "que el consejo de administración de Bancomer, S.  
 "A., nunca autorizó el otorgamiento de poderes a  
 "los señores Luis Enrique García Bert y Javier  
 "Jesús Rivero Ramírez, pues el poder exhibido por  
 "dichos señores no contiene inserción alguna  
 "relativa a ese respecto; y que al no acreditarse su  
 "personalidad no se cumple con lo que disponen  
 "los artículos 461, 464 y 465 del Código de  
 "Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán;  
 "que como consta de la resolución que combate,  
 "los señores Miguel García y García Ingeniero  
 "Francisco Javier Fernández Carbajal y contador  
 "Víctor Manuel Borrás Setién pretendieron  
 "acreditar sus facultades con las escrituras  
 "veinticinco mil noventa y siete y veinticinco mil  
 "noventa y ocho, ambas del tres de mayo de mil  
 "novecientos noventa y seis, otorgadas ante la fe  
 "del Notario Público número ciento cincuenta y  
 "seis del Distrito Federal, tampoco se realizó  
 "alguna inserción relativa a las facultades que en  
 "los estatutos sociales o en sus respectivas leyes  
 "orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan  
 "al consejo; ni a la comprobación del  
 "nombramiento de consejeros, inserciones que

"como lo dispone el artículo 90 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, son indispensables para  
"estar en aptitud de llevar la representación de la  
"institución de crédito mandante.

"Los argumentos cuyo sustento queda expuesto en  
"los puntos antes señalados, son todos ellos,  
"notoriamente infundados.

"De su minucioso examen, se concluye que:

"Como acertadamente lo sostuvo la  Sala Plena del Poder Judicial de la Federación  
"responsable, la copia certificada de la escritura  
"pública número veintinueve mil quinientos  
"ochenta y siete (29,587) del día veinticinco de  
"septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
"otorgada por el Notario Público Número 156 del  
"Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal,  
"se ajusta a los requerimientos del párrafo  
"segundo del artículo 90 de la Ley de Instituciones  
"de Crédito. La razón le asiste a la sala  
"responsable, no así al peticionario de garantías, y  
"para demostrarlo, examinemos ahora este  
"dispositivo legal.

"Previene aquél segundo párrafo lo siguiente:

"Los poderes que otorguen las instituciones de  
"crédito no requerirán otras inserciones que las  
"relativas al acuerdo del consejo de administración  
"o del consejo directivo, según corresponda, que  
"haya autorizado su otorgamiento, a las facultades  
"que en los estatutos sociales o en sus respectivas



**"leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se  
"concedan al mismo consejo y a la comprobación  
"del nombramiento de los consejeros".**

**"De lo anterior se deduce que son tres los  
"requisitos esenciales que deben insertarse en los  
"documentos públicos que contengan la concesión  
"de poderes, otorgados por las instituciones de  
"crédito, a saber: 1) Las relativas al acuerdo del**

**consejo de administración que haya autorizado su  
"otorgamiento; 2) Las relativas a las facultades  
"que en los estatutos sociales se conceden al  
"propio consejo; y, 3) Las relativas a la  
"comprobación del nombramiento de los  
"consejeros. Así lo ha establecido la tesis  
"jurisprudencial número XXI.1º.55 C emitida por el  
"Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer  
"Circuito, publicada a fojas 774 del tomo V del mes  
"de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la  
"Federación, novena época, la cual se consulta con  
"el siguiente rubro:**

**"PODERES EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE  
"CREDITO, INSERCIONES EN LOS.- En términos  
"del artículo 90, segundo párrafo, de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, los poderes exhibidos  
"por las instituciones de crédito de banca múltiple,  
"no requieren para su eficacia de otras inserciones  
"más que las siguientes: a). Las relativas al  
"acuerdo del consejo de administración que haya**

"autorizado su nombramiento; b). Las relativas a  
 "las facultades que en los estatutos sociales se  
 "concedan al propio consejo; y, c). Las relativas a  
 "la comprobación del nombramiento de los  
 "consejeros; por lo tanto, es claro que la  
 "aprobación de la junta de gobierno de la Comisión  
 "Nacional Bancaria, en relación con el  
 "nombramiento de consejeros, a que se refiere el  
 "artículo 24, último párrafo, del cuerpo legal en  
 "cuestión, es innecesaria su inserción el poder  
 "respectivo, en razón de que, al ordenar en forma  
 "expresa el dispositivo en estudio que los poderes  
 "expedidos por aquellas instituciones, no  
 "requerirán de otras inserciones más que las  
 "indicadas, excluye cualquiera que pudiere  
 "inferirse de las diversas disposiciones de la Ley  
 "de Instituciones de Crédito."  
 "En cuanto al primero de los requisitos, a saber,  
 "sobre el acuerdo del consejo de administración  
 "que haya autorizado el otorgamiento de poderes,  
 "se advierte de la escritura número veintinueve mil  
 "quinientos ochenta y siete (29,587) del veinticinco  
 "de septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
 "otorgada por el Notario Público Número 156 del  
 "Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal,  
 "documental cuestionada por la quejosa, que por  
 "escritura pública número veinticinco mil noventa y  
 "siete, (25,097) del tres de mayo de mil novecientos





"noventa y seis, autorizada por el mismo notario  
 "antes mencionado, se hizo constar la  
 "protocolización parcial del acta de sesión del  
 "consejo de administración de Bancomer, sociedad  
 "anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo  
 "Financiero, -celebrada en la ciudad de México,  
 "Distrito Federal, a las doce horas del veintiocho de  
 "marzo de mil novecientos noventa y seis- en la  
 "Corte de la Nación se acordó el nombramiento de  
 "representantes legales y otorgamiento de  
 "poderes, designándose en primer termino como  
 "representante legal, al señor Miguel García Y  
 "García, con poder general para pleitos y  
 "cobranzas y especial para denuncias y querellas;  
 "poder general para actos de administración; poder  
 "general no delegable para suscribir títulos de  
 "crédito; poder en materia laboral y facultad para  
 "expresa para otorgar y delegar poderes generales  
 "y especiales, revocar unos y otros y sustituirlos  
 "en todo o en parte; y otorgamiento de poder  
 "general limitado para actos de dominio en favor de  
 "los señores Miguel García y García y Javier  
 "Francisco Lozano Morales, quedando facultados  
 "expresamente para delegar el poder conferido  
 "mediante poderes especiales a favor de terceras  
 "personas para casos concretos (fojas 76 vuelta a  
 "82 vuelta del expediente).

"Por lo que se refiere a las facultades otorgadas al  
 "señor Víctor Manuel Borrás Setién, de la misma  
 "manera, la sala responsable obró correctamente al  
 "sostener que dichas facultades quedaron  
 "debidamente acreditadas con la escritura pública  
 "número veinticinco mil noventa y ocho, (25,098)  
 "del tres de mayo de mil novecientos noventa y  
 "seis en la que consta la protocolización parcial del  
 "acta de sesión del consejo de administración de la  
 "institución de crédito aquí tercero perjudicada,  
 "celebrada el veintiocho de marzo de mil  
 "novecientos noventa y seis- relativa al  
 "nombramiento de funcionarios y otorgamiento de  
 "poderes, en cuyo cuarto acuerdo se ratificaron los  
 "nombramientos, entre otros, del señor Víctor  
 "Manuel Borrás Setién a quien el consejo de  
 "administración le otorgó poderes generales para  
 "el adecuado desempeño de su cargo: para pleitos  
 "y cobranzas y especial para denuncias y  
 "querellas; poder general para actos de  
 "administración; poder general para actos de  
 "dominio, sin limitación alguna de conformidad con  
 "lo establecido en el párrafo tercero del artículo  
 "2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de  
 "sus correlativos de los códigos civiles vigentes en  
 "los Estados de la República; poder general para  
 "suscribir títulos de crédito; poder en materia  
 "laboral y facultad expresa para otorgar y delegar

UPRE  
 JUSTICI  
 SECRETARI



"poderes generales y especiales, revocar unos y  
 "otros y sustituirlos en todo o en parte (fojas 82  
 "vuelta a 86 del expediente).

"De la misma manera, la personalidad jurídica de  
 "Francisco Javier Fernández Carbajal quedó  
 "demostrada con la escritura pública número  
 "veinticinco mil noventa y ocho (25,098) relativa a

CORTE DE  
 LA JEFATURA  
 FEDERAL DE  
 AGUASCALIENTES

"la protocolización parcial del acta de sesión del  
 "consejo de administración de Bancomer, sociedad  
 "anónima -celebrada el veintiocho de marzo de mil  
 "novecientos noventa y seis, en la cual se acordó,  
 "entre otros puntos, ratificar los nombramientos de  
 "funcionarios en los cuales destaca el de Francisco  
 "Javier Fernández Carbajal, otorgándole los  
 "siguientes poderes: general para pleitos y  
 "cobranzas y especiales para querellas y  
 "denuncias; poder general para actos de  
 "administración; poder general para actos de  
 "dominio; poder general para suscribir títulos de  
 "crédito; poder en materia laboral; y, facultad para  
 "otorgar y delegar poderes generales y especiales,  
 "revocar unos y otros y sustituirlos en todo o en  
 "parte, confiriéndosele expresamente la facultad  
 "para que, en su caso, las personas a quienes  
 "otorguen dichos poderes puedan, a su vez,  
 "otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o revocarlos,  
 "en todo o en parte a favor de terceros, con las  
 "limitaciones que en cada caso establezcan (fojas

"de la ochenta y dos a la ochenta y nueve de los  
"autos).

"De lo anterior se demuestra, que contrariamente a  
"lo argumentado por la quejosa, el notario público  
"que autorizó la escritura que se viene analizando,  
"sí realizó las inserciones necesarias, al transcribir  
"el acuerdo del consejo de administración que  
"autorizó el otorgamiento de poderes, conforme lo  
"ordena el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley  
"de Instituciones de Crédito.

"Por cuanto al segundo de los requisitos  
"establecidos en el párrafo segundo del artículo 90  
"de la Ley de Instituciones de Crédito, las relativas  
"a las facultades que en los estatutos sociales se  
"conceden al propio consejo, se observa que la  
"Sala Segunda del Tribunal de Justicia del Estado,  
"hizo una correcta apreciación y valoración de la  
"escritura pública número veintinueve mil  
"quinientos ochenta y siete (29,587) del día  
"veinticinco de septiembre de mil novecientos  
"noventa y siete, otorgada por el Notario Público  
"Número 156 del Distrito Federal y del Patrimonio  
"Inmueble Federal, documental cuestionada por la  
"quejosa, porque se desprende de ella que los  
"señores Miguel García y García, Francisco  
"Fernández Carvajal y Víctor Manuel Borrás Setién  
"otorgaron a nombre de Bancomer, sociedad  
"anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo

217



"Financiero, poder general para pleitos y cobranzas  
 "y especial para querellas y denuncias, y poder  
 "general para actos de dominio limitado para  
 "ejercerlo mancomunadamente o bien, uno de ellos  
 "con cualquier otro apoderado de la institución que  
 "pocce de las mismas facultades; a favor de los  
 "señores Javier Jesús Rivero Ramírez y Luis  
 "Enrique García Bert, con las amplias facultades  
 "que recibieron del consejo de administración, las  
 "cuales quedaron comprobadas ante el notario  
 "otorgante con la escritura pública número  
 "veinticuatro mil ochocientos siete (24,807) del  
 "quince de marzo de mil novecientos noventa y  
 "seis, en la que se hace constar la protocolización  
 "del acta de asamblea general extraordinaria de  
 "accionistas de Bancomer, sociedad anónima,  
 "Institución de Banca Múltiple, Grupo  
 "Financiero, -celebrada el cuatro de marzo de mil  
 "novecientos noventa y seis- en la que se tomaron  
 "entre otros acuerdos, modificar diversos artículos  
 "de los estatutos sociales, del que destaca la  
 "reforma al artículo 29, quedando en definitiva  
 "consagradas las facultades del consejo de  
 "administración, de la siguiente manera: para  
 "administrar, acordar y dirigir los asuntos de la  
 "sociedad, así como para la realización de las  
 "operaciones y la prestación de los servicios a que  
 "se refiere el artículo 46 de la Ley de Instituciones

CORTE DE  
 LA NACION  
 H. RAL DE ACUERDOS

"de Crédito, de manera enunciativa más no  
"limitada, investido de las facultades o poderes  
"generales para pleitos y cobranzas y especial para  
"querellas y denuncias, con facultades expresas  
"para pedir el remate de los bienes embargados y  
"tomar parte en la subasta haciendo posturas; con  
"poder general para actos de administración; poder  
"general para actos de dominio; para suscribir  
"títulos de crédito, poder en materia laboral;  
"investido con la facultad para otorgar y delegar  
"poderes generales y especiales, revocar unos y  
"otros y sustituirlos en todo o en parte, incluyendo  
"expresamente la facultad para que las personas a  
"quienes otorguen dichos poderes puedan a su  
"vez, otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o  
"revocarlos, en todo o en parte a favor de terceros.  
"(fojas 70 vuelta a 76 de los presentes autos).  
"Entre otras, son estas las facultades expresas del  
"consejo de administración, de lo cual el notario  
"público insertó en lo conducente, en la escritura  
"pública exhibida por los representantes legales de  
"la institución de crédito, actora en el juicio natural.  
"Y, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, sí  
"quedaron debidamente insertas, con la  
"transcripción que hizo el citado notario público en  
"la escritura que autorizó.  
"Cabe puntualizar, que las facultades del consejo  
"de administración contenidas en el reformado



"artículo 29 de los estatutos sociales, se otorgaron  
 "por la asamblea general de accionistas de  
 "Bancomer, S.A., celebrada el día cuatro de marzo  
 "de mil novecientos noventa y seis, como órgano  
 "máximo de decisión, en términos de lo dispuesto  
 "por el artículo 178 de la Ley General de  
 "Sociedades Mercantiles, el cual prevé que la  
 "asamblea general de accionistas es el órgano  
 "supremo de la sociedad, y podrá acordar y  
 "ratificar todos los actos y operaciones de ésta y  
 "sus resoluciones serán cumplidas por la persona  
 "que ella misma designe, o a falta de designación,  
 "por el administrador o por el consejo de  
 "administración.  
 "Finalmente, y por cuanto al tercero de los  
 "requisitos, que se hace consistir en la  
 "comprobación del nombramiento de los  
 "consejeros de la institución de crédito de que se  
 "trata, de la misma manera quedó debidamente  
 "acreditado, ante el juez natural, y ante su superior  
 "jerárquico, aquí autoridad señalada como  
 "responsable, con la escritura pública número  
 "veintidós mil setecientos noventa y uno (22,791)  
 "del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa  
 "y cinco, en la que se hizo constar la  
 "protocolización de las actas de las asambleas  
 "especiales de accionistas de las series "A" y "B"  
 "y en lo conducente de la asamblea general

*"ordinaria de accionistas de Bancomer, sociedad  
 "anónima, institución de banca múltiple, grupo  
 "financiero, -celebradas el día veintiuno de abril de  
 "mil novecientos noventa y cinco-, en las cuales se  
 "tomaron los acuerdos de designar a los  
 "consejeros y comisarios de las series "A" y "B"  
 "nombrar al consejo de administración y  
 "comisarios de las series "A" y "B" de aquella  
 "institución crediticia, de las cuales el notario  
 "público número ciento cincuenta y seis del  
 "Distrito Federal, licenciado Rogelio Magaña Luna,  
 "insertó la parte relativa a dichos nombramientos,  
 "transcribiendo incluso el acuerdo correspondiente  
 "y relacionando los nombres de las personas que  
 "resultaron consejeros y comisarios, propietarios y  
 "suplentes de las series "A" y "B" (fojas 63 vuelta a  
 "67 del expediente).*

*"En este orden de ideas, resulta correcta la  
 "consideración legal sostenida por la sala  
 "responsable al tener por acreditada plenamente la  
 "personalidad jurídica de los señores Luis Enrique  
 "García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez como  
 "apoderados legales de Bancomer, S.A. Institución  
 "de Banca Múltiple, Grupo Financiero, e inexactos  
 "los argumentos expuestos por la quejosa para  
 "debatir aquella consideración, con lo cual queda  
 "demostrado, que los poderes generales otorgados  
 "por la institución de crédito actora en el juicio*





"natural, sí cumplen con los requerimientos del  
"segundo párrafo del artículo 90 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, cuyas inserciones  
"agregadas a la escritura pública exhibida en el  
"juicio extraordinario hipotecario para acreditar la  
"personalidad jurídica de los apoderados del banco  
"actor, quedaron plenamente identificadas y  
"definidas.

Lo anterior nos conduce necesariamente a  
"concluir, que los agravios dirigidos a combatir  
"aquellas consideraciones de la sala responsable,  
"son notoriamente infundados, y de la misma  
"manera, también lo son los argumentos  
"enderezados a sostener que no se cumplió con lo  
"dispuesto por los artículos 461, 464 y 465 del  
"Código de Procedimientos Civiles para el Estado  
"de Yucatán, en razón de que el primero estos  
"dispositivos legales se refiere la obligación del  
"juez natural de dar lectura y revisión de las  
"propuestas presentadas; el segundo de ellos  
"establece los requisitos que deben reunir las  
"posturas escritas que se presenten ante el juez  
"rematante; y por último, el artículo 465 del mismo  
"código procesal invocado, se refiere a que el  
"postor no puede rematar para un tercero sino con  
"poder para ejercer actos de dominio, preceptos  
"legales a los que la sala civil responsable dio  
"cumplimiento al confirmar el auto aprobatorio de

"remate, habida cuenta que resultó correcta la  
 "calificación que el juez natural hizo de la postura  
 "presentada por Bancomer, S.A., no así la postura  
 "presentada por el quejoso, quien al haber  
 "ofrecido en su postura y en pago del inmueble a  
 "rematar, sólo la cantidad de cien pesos, este  
 "precio hace incorrecta dicha postura, si se toma  
 "en cuenta que aún cuando se trate de tercera  
 "almoneda, la venta judicial que así se opere,  
 "queda sujeta irrestrictamente a lo dispuesto por el  
 "artículo 1462 del Código Civil del Estado de  
 "Yucatán, el cual previene que las ventas judiciales  
 "en almoneda, subasta o remate público, se regirán  
 "por las disposiciones de este título en cuanto a la  
 "substancia del contrato; y, en esencia, la  
 "substancia del contrato de compraventa lo es el  
 "precio y la cosa; de ahí que aquél dispositivo legal  
 "deba ser relacionado con los artículos 1451, 1452  
 "y 1453 del mismo código sustantivo, de lo que se  
 "concluye que aún ante la ausencia de postores a  
 "la audiencia de remate en que compareció el  
 "impetrante de garantías, la postura propuesta por  
 "el hoy quejoso no podría ser calificada de legal,  
 "por haber ofrecido un previo lesivo, visiblemente  
 "inferior al precio fijado para el remate, con las  
 "correspondientes deducciones a que se refiere el  
 "artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles  
 "del Estado; por otra parte, se observa que fue



"correcta la consideración de la sala al confirmar el  
"auto apelado, al estimar legal la declaratoria de su  
"juez inferior para fincar el remate a favor de la  
"institución actora en el juicio natural, por tener los  
"señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
"Rivero Ramírez como representantes legales de  
"Bancomer, S.A., poder general, aún para actos de  
"dominio, y para pedir el remate de los bienes  
"asegurados, tomar parte en las subastas haciendo  
"posturas y recibir pagos.


"No debe pasar desapercibido, y cabe aquí  
"puntualizarlo para ratificar la legalidad del fallo  
"combatido, en contraposición a lo alegado en los  
"conceptos de violación analizados, que cuando la  
"parte quejosa sostiene y reitera, que en el  
"documento cuestionado, este es, la escritura  
"pública número veintinueve mil quinientos  
"ochenta y siete, (29,587) del veintiocho de  
"septiembre de mil novecientos noventa y siete  
"exhibida en el juicio de primer grado en copia  
"certificada, no se contienen las inserciones  
"relativas a la sesión del consejo de administración  
"de la institución de crédito Bancomer, sociedad  
"anónima, institución de banca múltiple, grupo  
"financiero, en la cual se autoriza el otorgamiento  
"de poderes a favor de los señores Luis Enrique  
"García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez como  
"representantes legales de Bancomer, S.A., poder

"general, aún para actos de dominio, y para pedir el  
 "remate de los bienes asegurados, tomar parte en  
 "las subastas haciendo posturas y recibir pagos.  
 "No debe pasar desapercibido, y cabe aquí  
 "puntualizarlo para ratificar la legalidad del fallo  
 "combatido, en contraposición a lo alegado en los  
 "conceptos de violación analizados, que cuando la  
 "parte quejosa sostiene y reitera, que en el  
 "documento cuestionado, esto es, la escritura  
 "pública número veintinueve mil quinientos  
 "ochenta y siete, (29,587) del veinticinco de  
 "septiembre de mil novecientos noventa y siete  
 "exhibida en el juicio de primer grado en copia  
 "certificada, no se contienen las inserciones  
 "relativas a la sesión del consejo de administración  
 "de la institución de crédito Bancomer, sociedad  
 "anónima, institución de banca múltiple, grupo  
 "financiero, en la cual se autoriza el otorgamiento  
 "de poderes a favor de los señores Luis Enrique  
 "García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez, ni las  
 "inserciones correspondientes a la sesión del  
 "consejo de administración que autoriza otorgar  
 "poderes a los señores Miguel García y García,  
 "Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor  
 "Manuel Borrás Setién, cabe considerar sin lugar a  
 "dudas, que lo que pretendía la parte quejosa es  
 "que en la escritura pública examinada, se  
 "plasmara expresamente que el consejo de



"administración de la institución de crédito de la  
"que se viene hablando, otorgara directamente a  
"los señores Luis Enrique García Bert y Javier  
"Jesús Rivero Ramírez, los poderes y facultades de  
"los que se encuentran investidos, sin la  
"intervención de otros funcionarios facultados para  
"delegar poderes u facultades, lo que constituye  
"aquí un aspecto insostenible, cuando los poderes  
"a que se refieren los artículos 2553 y 2554 del  
"Código Civil para el Distrito Federal, por su  
"naturaleza pueden ser delegables, cuando así  
"expresamente lo autoriza el órgano máximo de  
"una sociedad mercantil, y en el caso, se demostró  
"que tanto Luis Enrique García Bert como Javier  
"Jesús Rivero Ramírez recibieron poderes y  
"facultades, de los señores Miguel García y García,  
"Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor  
"Manuel Borrás Sotén, quienes a su vez recibieron  
"poderes del consejo de administración de  
"Bancomer, sociedad anónima, con facultades  
"expresas para delegarlos en terceras personas y,  
"como se precisó, el consejo de administración  
"recibió también, amplísimas facultades de la  
"asamblea general de accionistas de la institución  
"de crédito señaladas, como órgano máximo de  
"decisión y de acuerdo con sus estatutos sociales.  
"Explicado de otra manera:

"1).- La asamblea general de accionistas de  
"Bancomer, sociedad anónima, institución de  
"banca múltiple, grupo financiero, órgano máximo  
"de decisión, de conformidad con sus estatutos  
"sociales acordó nombrar a los consejeros que  
"integrarían el consejo de administración y  
"otorgarle amplios poderes con expresa facultad  
"para delegarlos.

"2).- Este consejo de administración, con facultad  
"para delegar poderes y facultades, los confirió a  
"su vez en favor de Miguel García y García,  **REMA**  
"Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor **JUSTICIA E**  
"Manuel Borrás Setién, trasladándoles también, la **SECRETARIA DE**  
"facultad expresa para delegar esos poderes que  
"recibieron del consejo.

"3).- A su vez, con esta facultad delegatoria, Miguel  
"García y García, Francisco Javier Fernández  
"Carbajal y Víctor Manuel Borrás Setién otorgaron  
"poderes a favor de los señores Luis Enrique  
"García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez.

"4).- Luis Enrique García Bert y Javier Francisco  
"Rivero Ramírez, con las facultades y poderes  
"recibidos sucesivamente por delegación que  
"acreditaron con la escritura pública número  
"veintinueve mil quinientos ochenta y siete (29,587)  
"del veinticinco de septiembre de mil novecientos  
"noventa y seis, demostraron su personalidad



"jurídica como apoderados de la institución de  
"crédito mencionada.

"Tan claro como está, que tanto Luis Enrique  
"García Bert como Javier Jesús Rivero Ramírez,  
"quienes comparecieron al juicio de primer grado,  
"en donde el hoy quejoso compareció como postor  
"a la audiencia de remate, recibieron poderes y  
"facultades de la asamblea general de accionistas,  
"a través de la facultad delegatoria que otorgó  
"aquella asamblea, se llega al punto concluyente,  
"de que el quejoso carece de razón legal en la  
"controversia jurídica que planteó en el segundo y  
"tercer conceptos de violación.

CORTE  
DE LA NACION  
DE AL RECURSO

"SEXTO.- En el cuarto concepto de violación la  
"quejosa se inconforma contra el fallo de la sala  
"responsable argumentando esencialmente, que la  
"autoridad responsable al emitir el acto reclamado  
"incurre nuevamente en la falta de estudio de los  
"agravios planteados, porque argumentó la  
"inconstitucionalidad del auto aprobatorio de  
"remate por contravenir lo dispuesto por la  
"fracción V del artículo 27 Constitucional; que  
"Bancomer, S.A., aquí tercero perjudicada, carece  
"de capacidad para adquirir bienes de la cual no  
"goza de acuerdo con lo establecido en el artículo  
"27 de la Constitución Federal y 46 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito; que los bancos tienen  
"limitada su capacidad de adquirir el dominio de

*"tierras y aguas y que sólo podrán tener y adquirir  
 "los bienes inmuebles que sean enteramente  
 "necesarios a su objeto directo, y que los bienes  
 "que no sean estrictamente necesarios para  
 "realizar el objeto social de la institución crediticia  
 "no pueden ser adquiridos por la misma; que en el  
 "caso, de ninguna manera se puede concluir que el  
 "inmueble adjudicado en remate sea enteramente  
 "necesario e indispensable para la prestación de  
 "servicio público de banca, y que si no es  
 "indispensable para la prestación de los servicios  
 "bancarios, la institución de crédito no puede  
 "adquirirlo, apartándose la autoridad responsable  
 "del espíritu del constituyente y de manera  
 "contraria al artículo 27 Constitucional aún cuando  
 "lo invoca para resolver; que la responsable  
 "consideró que la prohibición a que se contrae la  
 "fracción V del artículo 27 Constitucional no es  
 "imperativa, sin embargo, lo que la responsable  
 "deliberadamente omite considerar es que al ser el  
 "servicio de banca y crédito una actividad  
 "concesionada por el Estado, dicha actividad se  
 "encuentra sujeta al régimen de autoridad, y las  
 "leyes de instituciones de crédito, podrán tener  
 "capitales impuestos sobre propiedades urbanas y  
 "rústicas de acuerdo con las prescripciones de  
 "dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o*





"en administración más bienes raíces que los  
"enteramente necesarios para su objeto directo;

"En la especie, es menester precisar el alcance  
"legal de la transcrita fracción V del artículo 27 de  
"la Constitución Federal.

"Para llevar a cabo esa labor, conviene acudir a los  
"principales métodos de interpretación de una

"norma, a saber: 1.- El gramatical, cuya función es  
"encontrar el significado, sentido, extensión y

"connotación de los términos del lenguaje; 2.- El de  
"exégesis; analítico-sintético, que pretende

"descubrir el pensamiento auténtico y la voluntad  
"del legislador, en el momento en que dictó la

"norma, tomando también en cuenta el momento  
"literal; 3.- El histórico, también llamado de la

"evolución histórica, cuya finalidad es fijar la  
"aplicación que debe darse a las normas positivas

"en las nuevas condiciones político-sociales,  
"históricas y económicas de la época en que debe

"aplicarse la ley, al considerar en esta época su  
"naturaleza propia, ajena a la voluntad del

"legislador; 4.- El sistemático, que pretende  
"investigar la costumbre para resolver conforme a

"ella el caso dudoso; 5.- El dialéctico, que sirve  
"para determinar el alcance de la norma, tomando

"en cuenta no sólo la costumbre sino el fin social  
"que persiguió al dictar la norma; 6.- El causal, que

"persigue la finalidad de encontrar la verdad



"investigada, los fines políticos y sociales, así  
 "como la naturaleza de su régimen; y, 7.- El crítico,  
 "que parte de la letra de la ley y de la voluntad del  
 "legislador para procurar la verdad mediante la  
 "libre investigación por el juzgador de las  
 "condiciones económicas, sociales y políticas,  
 "usando para ello un criterio científico.

"Así, para entender la causa motivadora de la  
 "redacción de la fracción V del artículo 27  
 "constitucional, debe acudirse al método de  
 "interpretación histórico, tomando en cuenta las  
 "condiciones que prevalecían en el país en 1917,  
 "dada la posición especial en que se encontraban  
 "en esa época los bancos y por el régimen de  
 "derecho en que se desarrollaban sus actividades.  
 "De lo que es lógico concluir que se pretendió  
 "legislar en cuestión bancaria, sobre bases más  
 "acordes con la equidad y más bien encausadas  
 "para derivar los resultados de la función  
 "económica de los bancos hacia el colectivo  
 "beneficio y no para el singular privilegio de los  
 "capitales privados con interés en aquellas  
 "instituciones, pretendiendo desaparecer un  
 "sistema de privilegios en perjuicio de los pobres.  
 "Este fue el espíritu filosófico del legislador para  
 "proteger el libre juego de la riqueza pública,  
 "evitando su estancamiento y defectuosa  
 "productividad en poder de manos muertas.



"Ahora bien, si bien es cierto que el texto original  
 "de la fracción transcrita, pretendió modificarse por  
 "la comisión respectiva del Congreso  
 "Constituyente de 1917, para agregarle: "que  
 "transitoriamente y por el breve plazo que fijaran  
 "las leyes, los bancos podían tener en propiedad  
 "aquellos bienes que se les adjudicara  
 "judicialmente en pago de sus créditos", y también  
 "es verdad que dicha adición no fue aprobada.

"Efectivamente, del Diario de Debates del Congreso  
 "Constituyente correspondientes a los días  
 "veintinueve, treinta y treinta y uno de enero de mil  
 "novecientos diecisiete, se puede leer:

"...El C. secretario: La fracción V del artículo 27,  
 "dice: "V. Los bancos debidamente autorizados  
 "conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
 "podrán tener capitales impuestos sobre  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes; pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración  
 "más bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo."

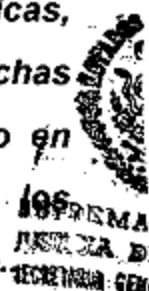
"Está a discusión.

"El C. Espinosa: Pido la palabra para hacer una  
 "interpelación a la comisión. (Voces: ¡Está  
 "ocupada!)

"El C. Zavala Dionisio: Qué el ministro de Hacienda  
 "diga algo sobre esto.

*"El. C. Presidente: Tiene la palabra el C. Nieto.*

*"El C. Nieto: Una sencilla aclaración, señores  
"diputados. Dice el dictamen: "V. Los bancos  
"debidamente autorizados conforme a las leyes de  
"instituciones de crédito, podrán tener capitales  
"impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas,  
"de acuerdo con las prescripciones de dichas  
"leyes; pero no podrán tener en propiedad o en  
"administración más bienes raíces que los  
"enteramente necesarios para su objeto directo.*



*"Indudablemente, la Comisión tuvo en su mente el  
"Banco Unico de Emisión, pero no se acordó de  
"que hay otros bancos. Indudablemente que se  
"establecerá un sistema de bancos hipotecarios y  
"sería absurdo decir que los bancos hipotecarios  
"pueden hacer hipotecas; como si dejáramos que  
"el Banco Unico de Emisión puede emitir billetes.  
"Además, hay casos en que los bancos, aun los no  
"hipotecarios, pueden tener necesidad de adquirir  
"propiedades, transitoriamente. En una ley de 1859,  
"hay un precepto que dice que los bancos de  
"emisión pueden tener propiedades raíces, cuando  
"tengan créditos que sean insolutos en otra forma;  
"por consiguiente, me permito proponer que se  
"forme esta fracción: "Los bancos hipotecarios  
"debidamente autorizados por las leyes de  
"instituciones de crédito, podrán, además de  
"imponer capitales sobre bienes raíces, poseer y*



"administrar dichos bienes en el sentido que  
 "determinen las leyes. En cuanto a los bancos no  
 "hipotecarios, sólo podrán poseer los edificios  
 "necesarios para su objeto directo". etcétera.

"Se propone:

"V: Los bancos debidamente autorizados,  
 conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
 "podrán tener capitales impuestos sobre  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes, pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración,  
 "mas bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo; y transitoriamente, por el  
 "breve plazo que fijan las mismas leyes, los que se  
 "les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
 "créditos."

"Está a discusión.

"El C. Espinosa: Pido la palabra.

"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Espinosa.

"El C. Espinosa: He pedido la palabra para esto:  
 "necesito saber si la Comisión ya se desocupó.

"El C. Múgica: Ya está lista la Comisión.

"El C. Espinosa: Las instituciones de crédito  
 "hipotecario, entre otros objetos determinados,  
 "tienen el de gravar bienes raíces para que cuando  
 "se venza el plazo de la cantidad prestada, puedan  
 "ser devueltas esas propiedades, como es natural;  
 "yo quiero saber si ese es el objeto a que se

"contrae esta fracción V; quiero que se me  
"conteste.

"El C. Lizardi: Como la Comisión está ocupada,  
"según parece, yo contestaré en nombre de ella en  
"ese sentido: el objeto de los bancos hipotecarios  
"no es apoderarse de los bienes raíces, sino  
"sencillamente garantizarse con ellos para que en  
"caso de que no se pague la cantidad prestada  
"sacarlos a remate.

"El C. Espinosa: Así es como lo entiendo pero de  
"aquí se desprende otra cosa:

"V. Los bancos debidamente autorizados  
"conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración,  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo y transitoriamente, por el  
"breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se  
"les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
"créditos."

"Pero no se entiende eso así, no está clara la  
"redacción por eso es que yo pregunto.

"El C. Colunga, miembro de la Comisión: Me voy a  
"permitir leer nuevamente el inciso a discusión:

"V. Los bancos debidamente autorizados  
"conforme a las leyes de instituciones de crédito,



"podrán tener capitales impuestos sobre  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes, pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración,  
 "más bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo; y transitoriamente, por el  
 "breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se  
 "les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
 "créditos."

ITE D

NACION

ACUERDO

"La Comisión no comprende el fragmento de la  
 "objeción del C. diputado Espinosa, parece que  
 "está bastante claro el asunto; en primer lugar, se  
 "autoriza a los bancos para tener capitales  
 "impuestos; y, en segundo lugar, se les prohíbe  
 "tener bienes raíces, fuera de los que sean  
 "estrictamente indispensables para su objeto.  
 "El C. secretario: Se considera suficientemente  
 "discutido? Se reserva para su votación.  
 "(Voces: ¡No! ¡No!)"

"Se retira la propuesta.

"APROBADO EL TEXTO: Los bancos debidamente  
 "autorizados, conforme a las leyes de instituciones  
 "de crédito, podrán tener capitales impuestos  
 "sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo  
 "con las prescripciones de dichas leyes, pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración  
 "mas bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo"

"Sin embargo, el hecho de que no haya sido  
 "aprobada la adición propuesta, no quiere decir,  
 "que era claro el espíritu del legislador en el  
 "sentido de prohibir tajantemente que los bancos  
 "adquirieran, aun provisionalmente, bienes raíces  
 "adjudicados judicialmente, supuesto que como se  
 "lee de la parte transcrita del Diario de Debates,  
 "cuando ya se iba a someter a votación la aludida  
 "fracción V, por haberse considerado  
 "suficientemente discutida, la comisión retiró la  
 "adición propuesta, circunstancia que originó que  
 "la asamblea no manifestara su opinión mediante  
 "una votación sobre la facultad de adjudicación  
 "temporal de los bancos, quedando el precepto en  
 "la forma que actualmente existe en la Carta  
 "Magna.

"Así, si la prohibición que contenía la fracción V del  
 "artículo 27 constitucional, tenía por origen impedir  
 "que la propiedad raíz se incorporara a bienes de  
 "manos muertas, es inconcuso e indudable que  
 "toda decisión que contraría el motivo del  
 "legislador para consignar esa norma en la  
 "Constitución, violará ésta; pero las necesidades  
 "propias del funcionamiento del crédito y las  
 "circunstancias económicas del país, requieren  
 "que provisionalmente exista esa adjudicación,  
 "conservando la movilidad de la propiedad raíz, de  
 "modo que resulta evidente que no se contraría en






227

"el fondo el motivo ni la mente del legislador  
"constitucional al considerar esas limitaciones. A  
"mayor abundamiento, no hubo, como ya se dijo,  
"votación expresa en el sentido de desechar la  
"adición, ni pudo haberla, porque ésta fue retirada  
"por la comisión, por haber sido objetada.

"Esta es la conclusión a que se llega, tomando  
"como base para ello el análisis del mencionado  
"precepto constitucional, en razón de la  
"interpretación histórica, cuya finalidad, como se  
"dijo, es fijar la aplicación que debe darse a las  
"normas positivas en las nuevas condiciones  
"político-sociales, históricas y económicas de la  
"época en que debe aplicarse la ley.

"Por otra parte, aun recurriendo como medio de  
"interpretación auténtica a la ficción de establecer  
"que el criterio de la Asamblea Constituyente (al  
"discutir la fracción V del artículo 27), fue el mismo  
"de la comisión (erradicar la posibilidad de que los  
"bancos tuvieran aun transitoriamente en su poder  
"bienes raíces), puede asegurarse que el texto  
"constitucional es susceptible de una  
"interpretación progresiva, acorde con la economía  
"social y con el desarrollo evolutivo y progresista  
"del país.

"Ciertamente, las condiciones que prevalecían en  
"el país en 1917, por la posición especial en que se  
"encontraban los bancos y por el régimen de

"derecho en que se desarrollaban sus actividades,  
 "ya no pueden hacerse valer, pues desaparecida la  
 "causa del temor de consagrar un sistema de  
 "privilegios en perjuicio de los pobres, o con más  
 "propiedad de la conveniencia social o colectiva,  
 "desaparece también la repugnancia de aquella  
 "adición propuesta, no pugna pues con el espíritu  
 "filosófico, con la causa, con la esencia, con la  
 "razón motriz en la que se inspiró el Constituyente  
 "de proteger el libre juego de la riqueza pública,  
 "evitando su estancamiento y defectuosa  
 "productividad en poder de manos muertas.  COR  
 TIBUTON DE LA I  
 RESEVADA GENERAL DE

"El momento psicológico en que actuaron los  
 "legisladores constituyentes, ha cambiado; el  
 "sociológico también; la evolución no se detiene, y  
 "la economía del país requiere que las leyes, aun  
 "las constitucionales, se interpreten en  
 "concordancia y armonía con la época en que  
 "deben aplicarse.

"En esa medida, es válido concluir que la  
 "adjudicación temporal para los bancos, en juicios  
 "seguidos por ellos, sin privilegio procesal alguno,  
 "exactamente en las condiciones de cualquier  
 "particular sólo podría estimarse encaminada al  
 "desacato de la prohibición constitucional de  
 "adquirir y administrar bienes raíces, si esa  
 "temporalidad corriese el riesgo de convertirse en  
 "perpetuidad.



TE D  
LACION  
ACUERDO

"Lo que no sucede en la actualidad, toda vez que  
 "por ello precisamente el artículo 106, fracción XIII,  
 "de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone que  
 "cuando una institución de crédito reciba en pago  
 "de adeudos o por adjudicación en remate dentro  
 "de juicios relacionados con créditos a su favor,  
 "títulos o valores que no deba conservar en su  
 "activo, así como bienes o derechos de los  
 "señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las  
 "disposiciones de carácter general que establezca  
 "la Comisión Nacional Bancaria, esto es, a las  
 "relativas a que los bancos saquen a remate los  
 "bienes que, a su vez, hubieren adquirido en  
 "remates judiciales. De donde se puede advertir,  
 "finalmente, la temporalidad en que las  
 "instituciones de crédito tienen en su poder bienes  
 "raíces que no son estrictamente necesarios para  
 "su objeto social.

"Ahora bien, respecto de las violaciones al artículo  
 "46 de la ley de Instituciones de Crédito, son  
 "infundadas, pues de una interpretación armónica  
 "con lo expuesto en los párrafos precedentes, se  
 "desprende que las instituciones de crédito están  
 "facultadas para adquirir bienes que no estén  
 "destinados a su objeto social, siempre y cuando  
 "sea de manera transitoria.

"Sirve de apoyo a todo lo anteriormente expuesto,  
 "la tesis de la Tercera Sala de la H. Suprema Corte

"de Justicia de la Nación, visible en la página 2586,  
"del tomo LIV, del Semanario Judicial de la  
"Federación, Quinta Epoca, que dice:

"**INSTITUCIONES DE CREDITO, SU CAPACIDAD  
"PARA POSEER Y ADMINISTRAR BIENES RAICES.-**

"La comisión respectiva del Congreso  
"Constituyente, siguiendo el criterio sustentado en

"el proyecto, respecto de las corporaciones civiles  
"y eclesiásticas y de las sociedades anónimas

"civiles y mercantiles, sometió a la aprobación de  
"la asamblea una adición al artículo 27

"constitucional, en el sentido de que los bancos no  
"podrían tener propiedad ni administrar más

"bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo, adición que primordial y

"esencialmente tuvo como origen seguir la  
"tendencia de que la propiedad raíz fuera manejada

"individualmente y no por personas morales, y  
"dejar esos bienes raíces dentro del juego

"económico del país; ésta idea fundamental es la  
"que se objetiva de la fracción V del artículo 27

"constitucional y la que da su significado jurídico.  
"Es cierto que también se propuso la adición en el

"sentido de conceder a los bancos la facultad de  
"adjudicarse transitoriamente los bienes sobre los

"que accionaran a virtud de sus créditos, y que al  
"ponerse a discusión fue objetada, fundándose la


"objeción, esencialmente, en el sentido de las





77a

"irregularidades y abusos que cometían las  
"instituciones de crédito, por los privilegios y  
"prerrogativas que les concedía la Ley de  
"Instituciones de Crédito de 1897, ya que sólo  
"utilizaban a los jueces para la aprobación de los  
"remates y privaban a sus deudores de todos los  
"derechos que les confieren en los litigios que se  
"desarrollan entre particulares, haciendo mención  
"también a las grandes ganancias que obtenían  
"con sus operaciones y con la adjudicación de las  
"propiedades raíces, y cuando ya se iba a someter  
"a votación la fracción, por haberse considerado  
"suficientemente discutida, la comisión retiró la  
"adición propuesta, circunstancia que originó que  
"la asamblea no manifestara su opinión mediante  
"una votación sobre la facultad de adjudicación  
"temporal de los bancos quedando el precepto en  
"la forma que actualmente existe en la Carta  
"Magna. Si pues, no hubo manifestación expresa  
"de la voluntad de la asamblea constituyente,  
"prohibiendo a los bancos, de manera absoluta la  
"propiedad y administración de bienes raíces, y en  
"cambio, si la prohibición que contiene la fracción  
"V del artículo 27 constitucional, tenía por origen el  
"de impedir que la propiedad raíz se incorporara a  
"bienes de manos muertas, es inconcuso e  
"indudable que toda decisión que contrarie el  
"motivo del legislador para consignar esa norma en

"la Constitución, violará ésta; pero las necesidades  
 "propias del funcionamiento del crédito y las  
 "circunstancias económicas del país, requieren  
 "que provisionalmente exista esa adjudicación,  
 "conservando la movilidad de la propiedad raíz,  
 "resulta evidente que no se contraría en el fondo el  
 "motivo ni la mente del legislador constitucional al  
 "considerar esas limitaciones. A mayor  
 "abundamiento, no hubo, como ya se dijo, votación  
 "expresa en el sentido de desechar la adición. ni  
 "pudo haberla, porque ésta fue retirada por la  
 "comisión, por haber sido objetada, pero  SUPREMA CORT  
 JUSTICIA DE LA R  
 "recurriendo como medio de interpretación  
 "auténtica a la ficción de establecer que el criterio  
 "de la Asamblea Constituyente fue el mismo de la  
 "comisión, puede asegurarse que el texto  
 "constitucional es susceptible de una  
 "interpretación progresiva, acorde con la economía  
 "social y con el desarrollo evolutivo y progresista  
 "del país. El argumento de la objeción, o mejor  
 "dicho, sus conclusiones, no pueden  
 "desarticularse de los hechos en que descansa: las  
 "condiciones que prevalecían en el país en 1917,  
 "por la posición especial en que se encontraban  
 "los bancos y por el régimen de derecho en que se  
 "desarrollaban sus actividades de lo que es lógico  
 "concluir que suprimidos de la República, sobre  
 "bases distintas más acordes con la equidad y más



B0

"bien encausadas para derivar los resultados de la  
"función económica de los bancos hacia el  
"colectivo beneficio y no para el singular privilegio  
"de los capitales privados con interés en aquellas  
"instituciones, la conclusión obtenida entonces ya  
"no puede valer después, y desaparecida la causa  
"del temor de consagrar un sistema de privilegios  
"en perjuicio de los pobres, o con más propiedad  
"de la conveniencia social o colectiva, desaparece  
"también la repugnancia de aquella adición  
"propuesta, no pugna con el espíritu filosófico, con  
"la causa esencia, con la razón motriz en la que se  
"inspiró el Constituyente de proteger el libre juego  
"de la riqueza pública, evitando su estancamiento y  
"defectuosa productividad en poder de manos  
"muertas. El momento psicológico en que actuaron  
"los legisladores constituyentes, ha cambiado; el  
"sociológico también; la evolución no se detiene, y  
"la economía del país requiere que las leyes, aun  
"las constitucionales, se interpreten en  
"concordancia y armonía con la época en que  
"deben aplicarse, sin desatender a las variantes y  
"modalidades que presenta el progreso económico  
"y a los organismos encargados más  
"cuidadosamente de llenar una verdadera  
"necesidad social. La adjudicación temporal para  
"los bancos, en juicios seguidos por ellos, sin  
"privilegio procesal alguno, exactamente en las

"condiciones de cualquier particular y después de  
 "que no se han conseguido en la almoneda, sólo  
 "podría estimarse encaminada al desacato de la  
 "prohibición constitucional de adquirir y  
 "administrar, si esa temporalidad corriese riesgo  
 "de convertirse en perpetuidad; pero aun siendo  
 "así, existiendo la prevención expresa de  
 "desprenderse de lo adquirido en corto plazo, no  
 "sólo no se atenta contra el espíritu y objetos  
 "verdaderos de la ley fundamental, sino que  
 "conciliándose intereses respetables, se garantiza  
 "el desarrollo de una importante rama de la  
 "economía nacional."

"Asimismo, es aplicable al caso, la tesis de la  
 "Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de  
 "la Nación, visible en la página 1803, del tomo  
 "XXXI, Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la  
 "Federación, que dice:

"BANCOS, BIENES RAICES DE LOS.- Aunque el  
 "artículo 27 constitucional dice: que los bancos  
 "debidamente autorizados no podrán tener en  
 "propiedad o en administración, mas bienes raíces  
 "que los enteramente necesarios para su objeto  
 "directo, y que el artículo 256 de la ley bancaria,  
 "repite esa prohibición, permitiendo solo que  
 "posean transitoriamente y previo permiso de la  
 "secretaría de hacienda, los que tengan que  
 "adjudicarse para cobrar sus créditos, como la





"misma ley manda que si los bancos no enajenan  
"dentro de determinado plazo, los inmuebles que  
"por esa razón adquieran, los mismos serán  
"sacados a remate por la secretaría de hacienda, es  
"indudable que no hay contradicción alguna entre  
"las prevenciones del artículo 27 constitucional y  
"las de la ley bancaria, pues lo que la constitución  
"y la citada ley han querido evitar, es la  
"incorporación de bienes de manos muertas. nota:  
"el artículo 27 constitucional se refiera a su  
"fracción V."

Finalmente, se invoca la tesis jurisprudencial  
"numero XI.2º.37 C emitida por el Segundo Tribunal  
"Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a  
"fojas 930 del tomo III mes de junio de mil  
"novecientos noventa y seis, del Semanario  
"Judicial de la Federación novena época, con el  
"siguiente título:

"REMATE LA ADJUDICACION POR, EFECTUADA  
"A FAVOR DE INSTITUCIONES DE CREDITO NO ES  
"CONTRARIA AL ARTICULO 27, FRACCION V,  
"CONSTITUCIONAL.- Del estudio armónico que se  
"hace de los artículos 1º., 2º., 9º. y 30 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, se arriba al conocimiento  
"de que la misma tiene por objeto regular entre  
"otros, el servicio de banca y crédito, considerando  
"éste como la captación de recursos del público  
"para su colocación en el mercado nacional,

"mediante actos causantes de pasivo directo o  
 "contingente, quedando el intermediario obligado a  
 "cubrir el principal y, en su caso, los accesorios  
 "financieros de los recursos captados. Así, si los  
 "bancos tienen como objeto directo, la prestación  
 "del servicio de banca y crédito en los términos de  
 "dicha Ley, resulta inconcuso que tanto la  
 "colocación de dichos créditos en el público como  
 "su recuperación forma parte del objeto directo,  
 "margen de que para esto último las instituciones  
 "de crédito se apropien en adjudicación, por  
 "remate, los bienes raíces, puesto que **ESTOS**  
 "representan en sí dichos recursos captados que  
 "en su oportunidad fueron colocados en el público.  
 "De lo anterior, es inobjetable que el dominio y  
 "administración que los bancos ejercen sobre los  
 "bienes raíces en esa forma adjudicados, se hace  
 "con la finalidad indiscutible y necesaria de  
 "continuar cumpliendo con su objeto directo, lo  
 "que desde luego, lejos de pugnar con el artículo  
 "27, fracción V, constitucional, es acorde con él, al  
 "disponer que no podrán las instituciones de  
 "crédito tener más bienes raíces que los  
 "enteramente necesarios para su objeto directo".  
 "En las relatadas condiciones, se concluye que la  
 "Sala responsable estuvo en lo correcto al  
 "confirmar el auto aprobatorio de remate dictado  
 "en los autos del juicio natural, pues como ya se





"precisó con anterioridad, las instituciones de  
 "crédito como la ahora tercero perjudicada, si  
 "pueden adquirir transitoriamente bienes raíces,  
 "sin que ello implique desacato a la norma  
 "constitucional prevista en la fracción V del artículo  
 "27 de la Carta Magna, según se ha precisado con  
 "anterioridad, ni transgresión a lo dispuesto por los  
 "artículos 46 y 106 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito, cualquiera que sea el mecanismo por el  
 "cual adquieran los bienes inmuebles, ya sea  
 "mediante adjudicación judicial, o concurriendo  
 "como postores al remate en el que hayan  
 "comparecido como parte actora, puesto que  
 "ambos modos de adquirir la propiedad tienen  
 "como única y exclusiva finalidad, recuperar la  
 "inversión de los créditos otorgados a los diversos  
 "deudores, que como se puntualizó, constituye uno  
 "de los objetos directos de las instituciones  
 "bancarias.  
 "Como resultado de ello, al estimarse en una  
 "primera parte inoperantes, y por la otra  
 "infundados, los conceptos de violación  
 "expresados por la parte quejosa, lo procedente es  
 "negar el amparo y protección de la Justicia  
 "Federal solicitado."

Inconforme con dicha sentencia el quejoso EDGARDO  
 MEDINA DURAN, interpuso recurso de revisión.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, admitió el referido recurso y, a la vez, ordenó dar vista al Procurador General de la República para que formulara el pedimento respectivo.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, formuló el pedimento número IV-3/99 en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.

**CUARTO.-** En distinto acuerdo de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Presidente de este Alto Tribunal dispuso turnar el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza para que formulara el proyecto de resolución respectivo.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y, 11 fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en audiencia constitucional de un juicio de amparo en que se hizo la



interpretación directa del artículo 27, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el recurso subsiste el problema de inconstitucionalidad que originó tal interpretación.

Respecto a la interpretación directa de un precepto constitucional, este Tribunal Pleno se pronunció en la tesis número CLXI/97, de la Novena Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 179, que es del tenor siguiente:

**INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL "RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA "SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO "EN LA QUE HAGA DICHA INTERPRETACIÓN, SON "COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS "SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. "Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de "Amparo, establecen la competencia de la Suprema "Corte de Justicia para conocer de los recursos de "revisión en contra de sentencias en las que se "haya efectuado la interpretación directa de un "precepto constitucional. A su vez, los artículos 10, "fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley "Orgánica del Poder Judicial de la Federación,**

"indican que esa competencia corresponde a las  
 "Salas, tanto en amparo directo, como en amparo  
 "indirecto, pero tratándose del Tribunal Pleno se  
 "observa una disparidad porque, aparentemente,  
 "sólo es competente para pronunciarse sobre  
 "dicha materia en la resolución de revisiones en  
 "amparo directo, como señala la fracción III del  
 "citado artículo 10, pero no en la revisión de  
 "amparos indirectos, toda vez que ni la fracción II  
 "del mismo precepto, ni ninguna otra disposición  
 "le otorgan competencia expresa. Esta  
 "interpretación letrista, que cercenaría al Pleno una  
 "de las atribuciones exegéticas más importantes,  
 "de las que le son propias, no es admisible, en  
 "virtud de que rompería el sistema de control de la  
 "constitucionalidad que, en la vía judicial, se  
 "encomienda a la Suprema Corte y, por  
 "antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de  
 "acuerdo con las disposiciones constitucionales y  
 "legales invocadas, la decisión de las cuestiones  
 "más trascendentes que pueden plantearse en  
 "amparo, tocándole conocer, así, del recurso de  
 "revisión en el juicio de amparo indirecto cuando  
 "se reclaman leyes federales, estatales o del  
 "Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados  
 "internacionales por estimarlos directamente  
 "violatorios de algún precepto constitucional o  
 "cuando se alegan violaciones por las entidades





"federativas a la esfera de competencia que la  
 "Constitución reserva a la Federación, o viceversa,  
 "encomiendas mediante las cuales se reconoce al  
 "Pleno de este alto tribunal el carácter de máximo  
 "intérprete de la Constitución Política, que es  
 "acorde con la intención perseguida con el actual  
 "texto del comentado artículo 107 constitucional,  
 "de que a este órgano corresponda,  
 "principalmente, el control de la constitucionalidad  
 "y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los  
 "textos constitucionales, intención que aparece  
 "revelada en la exposición de motivos de la  
 "iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma  
 "de ese artículo 107, que entró en vigor el quince  
 "de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las  
 "precisiones realizadas ponen de relieve que el  
 "Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia  
 "también tiene competencia para conocer, en  
 "definitiva, de amparos indirectos en los que tenga  
 "que determinarse la interpretación directa de un  
 "precepto constitucional, resultando así que en  
 "esta materia pueden válidamente conocer de las  
 "revisiones de amparos directos e indirectos, tanto  
 "el Pleno, como las Salas, conclusión que amplía la  
 "interpretación gramatical de los artículos 10,  
 "fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley  
 "Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

**SEGUNDO.-** Los agravios que se hicieron valer son del tenor literal siguiente:

**"AGRAVIOS: PRIMERO.-** El señor Juez de Distrito al resolver incurre en apreciaciones incorrectas, similares a las esgrimidas por la Sala Responsable al emitir el acto reclamado. En efecto, la sentencia del C. Juez Constitucional en su parte conducente manifiesta :

**"Los conceptos de violación identificados como segundo y tercero de la demanda de garantías, que aparecen de la foja trece vuelta a la foja diecisiete se analizaran conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, porque además de encontrarse relacionados de manera directa e inmediata ambos se dirigen a combatir la resolución de la Sala responsable, por haber reconocido ésta, personalidad jurídica, a los señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez como apoderados legales de Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero; y a los señores Miguel García y García, Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor Manuel Borrás Setién, particularmente cuando se advierte del contenido del tercer concepto de violación, que la propia quejosa se**







"remite a parte de las inconformidades expuestas  
 en "el segundo de ellos (parte final de las fojas  
 "dieciséis y diecisiete del expediente) y porque la  
 "personalidad jurídica de todos ellos, deriva del  
 "mismo documento cuestionado por el quejoso  
 "(sic), es decir, de la escritura pública número  
 "veintinueve mil quinientos ochenta y siete (29-587)  
 "exhibida en el juicio natural, en copia certificada.  
 "Refiere esencialmente la quejosa en los conceptos  
 "de violación numerados como segundo y tercero  
 "que la resolución impugnada viola en su perjuicio  
 "las garantías de legalidad y de exacta aplicación  
 "de la ley, en virtud de que la autoridad  
 "responsable al igual que la Juez Cuarto de lo Civil  
 "del Primer Departamento Judicial en el Estado,  
 "reconoció a los señores Luis Enrique García Bert  
 "y Jesús Riveró Ramírez una representación o  
 "personalidad legal de la cual carecen, pues el  
 "documento con el cual pretenden acreditar su  
 "personalidad como apoderados de Bancomer,  
 "Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,  
 "Grupo Financiero, no contiene las inserciones en  
 "derecho requeridas y que la autoridad  
 "responsable resuelve conjuntamente dos  
 "aspectos que fueron planteados por separado en  
 "el escrito de expresión de agravios por ser  
 "cuestiones distintas, referidas a hechos diversos  
 "los cuales son; la falta de personalidad de los

RE P  
 ACION  
 MEXICO

"señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
 "Rivero Ramírez y la falta de personalidad de los  
 "señores Miguel García y García, Francisco  
 "Fernández Carbajal y Víctor Manuel Borrás Setién;  
 "que el estudio del mandato debe realizarse de  
 "conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de  
 "la Ley de Instituciones de Crédito el cual establece  
 "los requisitos de validez que son de obligatoria  
 "observancia; que el otorgamiento de un poder de  
 "una Institución bancaria requiere necesariamente  
 "los siguientes elementos: que obre inserto en él,  
 "el acuerdo del consejo de administración (en caso  
 "de banca múltiple) o del consejo directivo (para el  
 "caso de la banca de desarrollo); que obre también  
 "la inserción relativa a las facultades que en los  
 "estatutos sociales o en sus respectivas leyes  
 "orgánicas se concedan al mismo consejo; y, que  
 "también obre la comprobación del nombramiento  
 "de los consejeros; que es evidente que el consejo  
 "de administración de Bancomer, S.A. nunca  
 "autorizo el otorgamiento de poderes a los señores  
 "Luis Enrique García Bert y Javier Jesús Rivero  
 "Ramírez, pues el poder exhibido por dichos  
 "señores no contiene inserción alguna relativa a  
 "ese respecto; y al no acreditarse su personalidad  
 "no se cumple con lo que disponen los artículos  
 "461, 464 y 465 del Código de Procedimientos  
 "Civiles para el Estado de Yucatán; que como





"consta de la resolución que combate, los señores  
"Miguel García y García, Ingeniero Francisco Javier  
"Fernández Carbajal y Contador Víctor Manuel  
"Borras Setién pretendieron acreditar sus  
"facultades con las escrituras Veinticinco mil  
"noventa y siete y Veinticinco mil noventa y ocho  
"ambas del tres de mayo de mil novecientos  
"noventa y seis, otorgadas ante la fe del Notario  
"Público número ciento cincuenta y seis del  
"Distrito Federal, tampoco se realizó alguna  
"inserción relativa a las facultades que en los  
"estatutos sociales o en sus respectivas leyes  
"orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan  
"al consejo; ni a la Comprobación del  
"nombramiento de consejeros, inserciones que  
"como lo dispone el artículo 90 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito son indispensables para  
"estar en aptitud de llevar la representación de la  
"Institución de Crédito mandante.  
"Los argumento cuyo sustento queda expuesto en  
"los puntos antes señalados, son todos ellos  
"notoriamente infundados.  
"De su minucioso examen se concluye que:  
"Como acertadamente lo sostuvo la sala  
"responsable; la copia certificada de la escritura  
"publica numero veintinueve mil quinientos  
"ochenta y siete (29,587) del día veinticinco de  
"Septiembre de mil novecientos noventa y siete,

"otorgada por el Notario Público número 156 del  
 "Distrito Federal y de Patrimonio Inmueble Federal,  
 "se ajusta a los requerimientos del párrafo  
 "segundo del artículo 90 de la Ley de Instituciones  
 "de Crédito. La razón le asiste a la sala  
 "responsable, no así al peticionario de garantías y  
 "para demostrarlo examinemos ahora este  
 "dispositivo legal.

"Previene aquel segundo párrafo lo siguiente: Los  
 "poderes que otorguen las Instituciones de Crédito  
 "no requerirán otras inserciones que las relativas al  
 "acuerdo del consejo de administración o del  
 "consejo directivo según corresponda, que haya  
 "autorizado su otorgamiento, a las facultades que  
 "en los estatutos sociales o en sus respectivas  
 "leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se  
 "concedan al mismo consejo y a la comprobación  
 "del nombramiento de los consejeros'



"De lo anterior se deduce que son tres los  
 "requisitos esenciales que deben insertarse en los  
 "documentos públicos que contengan la concesión  
 "de poderes, otorgados por las instituciones de  
 "crédito, a saber: 1.- Las relativas al consejo de  
 "administración que haya autorizado su  
 "otorgamiento; 2.- Las relativas a las facultades  
 "que en los estatutos sociales se concedan al  
 "propio consejo; y 3.- Las relativas a la  
 "comprobación del nombramiento de los



"consejeros. Así lo ha establecido la tesis  
 "jurisprudencial número XXI. 1º. 55 C emitida por el  
 "Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer  
 "Circuito, publicada a fojas 774 del Tomo V del mes  
 "de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la  
 "Federación, Novena Epoca, la cual se consulta  
 "con el siguiente rubro: "PODERES EXPEDIDOS  
 "POR INSTITUCIONES DE CREDITO, INSERCIONES  
 "EN LOS. En términos del artículo 90, segundo  
 "párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, los  
 "poderes expedidos por las instituciones de crédito  
 "de banca múltiple, no requieren para su eficacia  
 "de otras inserciones más que las siguientes: a).  
 "Las relativas al acuerdo del consejo de  
 "administración que haya autorizado su  
 "otorgamiento; b). Las relativas a las facultades  
 "que en los estatutos sociales se concedan al  
 "propio consejo, y, c). Las relativas a la  
 "comprobación del nombramiento de los  
 "consejeros; por lo tanto, es claro que la  
 "aprobación de la junta de gobierno de la Comisión  
 "Nacional Bancaria, en relación con el  
 "nombramiento de consejeros, a que se refiere el  
 "artículo 24, último párrafo, del cuerpo legal en  
 "cuestión, es innecesaria su inserción en el poder  
 "respectivo, en razón de que, al ordenar en forma  
 "expresa el dispositivo en estudio que los poderes  
 "expedidos por aquellas instituciones, no

DE  
 NION;  
 EDO.

"requerirán de otras inserciones más que las  
"indicadas, excluye cualquiera que pudiere  
"inferirse de las diversas disposiciones de la Ley  
"de Instituciones de Crédito'.

"En cuanto al primero de los requisitos, a saber,  
"sobre el acuerdo de los consejos de  
"administración que haya autorizado el  
"otorgamiento de poderes, se advierte de la  
"escritura número Veintinueve mil quinientos  
"ochenta y siete (29,587) del veinticinco de  
"septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
"otorgada por el Notario Público número 156 del  
"Distrito Federal y del patrimonio inmueble federal,



"documental cuestionado por la quejosa, que por  
"escritura publica número veinticinco mil noventa y  
"siete (25,097), del tres de mayo de mil novecientos  
"noventa y seis, autorizada por el mismo notario  
"antes mencionado se hizo constar la  
"protocolización parcial del acta de sesión del  
"consejo de administración de Bancomer, sociedad  
"anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo  
"Financiero, -celebrada en la Ciudad de México  
"Distrito Federal a las doce horas del veintiocho de  
"marzo de mil novecientos noventa y seis- en la  
"cual se acordó el nombramiento de  
"representantes legales y otorgamiento de  
"poderes, designándose en primer termino como  
"representante legal, al Señor Miguel García y



"García, con poder general para pleitos y  
"cobranzas y especial para denuncias y querellas,  
"poder general para actos de administración, poder  
"general no delegable para sustituir títulos de  
"crédito, poder en materia laboral y facultad  
"expresa para otorgar y delegar poderes generales  
"y especiales revocar unos y otros y substituirlos  
"en todo o en parte; y otorgamiento de poder  
"general limitado para acto de dominio en favor de  
"los señores Miguel García y García y Javier  
"Francisco Lozano Morales, quedando facultados  
"expresamente para delegar el poder conferido  
"mediante poderes especiales e (sic) favor de  
"terceras personas para casos concretos (fojas 76  
"vuelta a 82 vuelta del expediente).  
"Por lo que se refiere a las facultades otorgadas al  
"Señor Víctor Manuel Borrás Setién, de la misma  
"manera, la Sala responsable obro correctamente  
"al sostener que dichas facultades quedaron  
"debidamente acreditados con la escritura publica  
"número veinticinco mil noventa y ocho (25,098)  
"del tres de Mayo de mil novecientos noventa y  
"seis, en la que consta la protocolización parcial  
"del acta de sesión del consejo de administración  
"de la Institución de Crédito aquí tercero  
"perjudicada, - celebrada el veintiocho de marzo de  
"mil novecientos noventa y seis- relativa al  
"nombramiento de funcionarios y otorgamiento de

"poderes, en cuyo cuarto acuerdo se ratificaron los  
 "nombramientos del señor Víctor Manuel Borrás  
 "Setién a quien el consejo de administración le  
 "otorgó poder general para el adecuado  
 "desempeño de su cargo: para pleitos y cobranzas  
 "y especial para denuncias y querellas; poder  
 "general para actos de administración; poder  
 "general para actos de dominio, sin limitación  
 "alguna de conformidad con lo establecido en el  
 "párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil  
 "para el Distrito Federal y de sus correlativos de  
 "los códigos civiles vigentes en los estados de la  
 "república; poder general para suscribir títulos de  
 "crédito; poder en materia laboral y facultad para  
 "otorgar y delegar poderes generales y especiales,  
 "revocar unos y otros y substituirlos en todo o en  
 "parte (fojas 82 vuelta a 86 del expediente).  
 "De la misma manera la personalidad la  
 "personalidad jurídica de Francisco Javier  
 "Fernández Carbajal quedo demostrada con la  
 "escritura pública número Veinticinco mil noventa  
 "y ocho (25,098) relativa a la protocolización parcial  
 "del acta de cesión del consejo de administración  
 "de Bancomer sociedad anónima, - celebrada el  
 "veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y  
 "seis, en la cual se acordó, entre otros puntos,  
 "ratificar los nombramientos de funcionarios en los  
 "cuales destaca el de Francisco Javier Fernández







230

"Carbajal, otorgándole los siguientes poderes:  
"General para pleitos y cobranzas, y especiales  
"para querellas y denuncias; poder general para  
"actos de administración; poder general para actos  
"de dominio; poder general para suscribir títulos de  
"crédito; poder en materia laboral y, facultad para  
"otorgar y delegar poderes generales y especiales,  
"revocar unos y otros y substituirlos en todo o en  
"parte, confiriéndosele expresamente la facultad  
"para que, en su caso, las personas a quienes  
"otorguen dichos poderes puedan a su vez  
"otorgarlos, delegarlos, substituirlos o revocarlos en  
"todo o en parte a favor de terceros, con las  
"limitaciones que en cada caso establezcan (fojas  
"de la ochenta y dos a la ochenta y nueve de los  
"autos)  
"De lo anterior se demuestra que contrariamente lo  
"argumenta por la quejosa el notario público que  
"autorizó la escritura que se viene analizando, si  
"realizó las inserciones necesarias, al transcribir el  
"acuerdo del consejo de administración que  
"autorizó el otorgamiento de poderes conforme lo  
"ordena el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley  
"de Instituciones de Crédito".  
"Es menester para iniciar los agravios que la  
"resolución que se combate causa al aquí  
"recurrente, realizar un estudio de la naturaleza  
"jurídica de lo en derecho se conoce como

"Las Personas Morales', en efecto, el libro  
"Primero del Código Civil del Distrito Federal,  
"dedica sus dos primeros Títulos a las Personas  
"Físicas y a la Personas Morales, enumerando a  
"estas últimas en siete fracciones contenidas en su  
"artículo 25 las cuales son a saber:

"ARTÍCULO 25.- Son personas morales:

"I.- La Nación, los Estados y los Municipios;

"II.- Las demás corporaciones de carácter público

"reconocidas por la ley;

"III. - Las sociedades civiles o mercantiles;

"IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales

"y las demás a que se refiere la fracción **XXVI** del

"artículo 123 de la Constitución Federal;

"V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas;

"VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas

"que se propongan fines políticos, científicos,

"artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito,

"siempre que no fueren desconocidas por la ley.

"VII.- Las personas morales extranjeras de

"naturaleza privada, en los términos del artículo

"2736.

"Por otra parte, los subsiguientes numerales 26, 27

"y 28 del propio código invocado a la letra dicen :

"ARTÍCULO 26.- Las personas morales pueden

"ejercitar todos los derechos que sean necesarios

"para realizar el objeto de su institución.





**"ARTÍCULO 27.- Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.**

**"ARTÍCULO 28.- Las personas morales se registrarán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.**

**"Las personas morales son una ficción jurídica, que sólo existe en el mundo abstracto del derecho, y su ánimus lo determinan las personas físicas en quienes recae su Administración, ya que las Personas Morales carecen de voluntad por se; conforme a la fracción I del artículo 89 de la propia legislación las personas morales están constituidas por dos o más personas físicas (aunque también pueden formar parte de ellas otras personas morales), el ánimo de la persona moral es conjunto de las voluntades de todas aquellas personas que conforman el órgano máximo de esta, (Asamblea General de Accionistas conforme al artículo 178 de la ley ibídem), y solo es través de las personas físicas a quienes se ha confiado su administración que estas llevan a cabo diversos actos que pueden ser de muy distinta índole, como podrían ser compraventas, arrendamientos, etcétera, de esta manera se establece la Representación de las**

"personas morales, pero distinto es el caso del  
 "Mandato, a que define el numeral 2546 del Código  
 "Civil Federal 'El mandato es un contrato por el  
 "que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta  
 "del mandante los actos jurídicos que este le  
 "encarga.' Por otra parte, se encuentra también el  
 "poder, palabra a la cual se han dado diversos  
 "significados, en una primera acepción se refiere a  
 "la institución por medio de la cual una persona  
 "puede representar a otra en virtud de un acto  
 "derivado de la autonomía de su voluntad o de la  
 "ley; en otra acepción, se refiere al acto por el cual  
 "una persona queda facultada por otra en su  
 "nombre y representación; y finalmente se le  
 "considera el documento por el cual se acredita la  
 "representación que ostenta una persona en  
 "relación a otra. Así las cosas, es evidente que  
 "todas las instituciones antes señaladas, tienen  
 "como punto de partida la voluntad de la persona  
 "que otorga las facultades, llámense mandante,  
 "poderdante o representado.  
 "Asentado lo anterior es menester observar con  
 "detenimiento el artículo 90 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito, que a la letra reza:  
 "ARTÍCULO 90.- Para acreditar la personalidad y  
 "facultades de los funcionarios de las instituciones  
 "de crédito, incluyendo a los delegados fiduciarios,  
 "basta exhibir una certificación de su





"nombramiento, expedida por el secretario o  
"prosecretario del consejo de administración o  
"consejo directivo.

"Los poderes que otorguen las instituciones de  
"crédito no requerirán otras inserciones que las  
"relativas al acuerdo del consejo de administración  
"o del consejo directivo, según corresponda que  
"haya autorizado su otorgamiento, a las facultades  
"que en los estatutos sociales o en sus respectivas  
"leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se  
"concedan al mismo consejo y a la comprobación  
"del nombramiento de los consejeros.

"Se entenderá que los poderes conferidos de  
"acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero  
"y segundo del artículo 2554 del Código Civil para  
"el Distrito Federal, en materia común, y para toda  
"la República en materia federal, comprenden la  
"facultad de otorgar, suscribir, avalar y endosar  
"títulos de crédito, aun cuando no se mencione  
"expresamente dicha facultad.

"Los nombramientos de los funcionarios bancarios  
"deberán inscribirse en el Registro Público de  
"Comercio, previa ratificación de firmas, ante  
"fedatario público, del documento auténtico en que  
"conste el nombramiento respectivo.

"Los nombramientos del secretario y prosecretario  
"del consejo de administración o consejo directivo,

**"deberán protocolizarse ante notario público y ser  
"inscritos en el Registro Público de Comercio.**

**"Al respecto cabe aquí precisar que una Institución**

**"Bancaria o Banco no es otra cosa que una**

**"Sociedad Anónima con capital fijo que ha recibido**

**"autorización para prestar el servicio de banca y**

**"crédito, según lo dispone el numeral 9 de la Ley**

**"de Instituciones de crédito, que a la letra dice:**

**"ARTÍCULO 9o.- Sólo gozarán de autorización las**

**"sociedades anónimas de capital fijo, organizadas**

**"de conformidad con lo dispuesto por la Ley**

**"General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que**

**"no esté previsto en esta Ley y, particularmente,**

**"con lo siguiente:**

**"I. Tendrán por objeto la prestación del servicio de**

**"banca y crédito, en los términos de la presente**

**"Ley;**

**"II. La duración de la sociedad será indefinida;**

**"III. Deberán contar con el capital social y el capital**

**"mínimo que corresponda conforme a lo previsto**

**"en esta Ley, y**

**"IV. Su domicilio social estará en el territorio**

**"nacional.**

**"La escritura constitutiva y cualquier modificación**

**"de la misma, deberá ser sometida a la aprobación**

**"de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

**"Una vez aprobadas la escritura o sus reformas**

**"deberán inscribirse en el Registro Público de**





"Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial."

"Tan es así que la propia ley de la materia establece como supletorias de manera primordial la legislación mercantil y civil atento a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley ibídem que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente:

I. La legislación mercantil;

II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y

III. El Código Civil para el Distrito Federal.

IV. El Código Fiscal de la Federación, para efectos de las notificaciones y los recursos a que se refieren los artículos 25 y 110 de esta Ley.

"Las instituciones de banca de desarrollo, se registrarán por su respectiva ley orgánica y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo."

"Asentado lo anterior, es menester retornar a la materia del asunto, es decir, el poder otorgado por las instituciones de crédito, pero atendiendo a la legislación supletoria, que en este caso resulta la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en sus artículos respectivos establece:

"ARTÍCULO 178.- La asamblea General de accionistas es el órgano supremo de la sociedad;

"Podrá acordar y ratificar todos los actos y  
"operaciones de ésta y sus resoluciones serán  
"cumplidas por la persona que ella misma designe,  
"o a falta de designación por el administrador o por  
"el Consejo de Administración..."

"ARTÍCULO 10.- La representación de toda  
"sociedad mercantil corresponderá a su  
"administrador o administradores, quienes podrán  
"realizar todas las operaciones inherentes al objeto  
"de la sociedad, salvo lo que expresamente  
"establezcan la Ley y el contrato social.

"Para que surtan efecto los poderes que otorgue la  
"sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del  
"órgano colegiado de administración, en su caso,  
"bastará con la protocolización ante notario de la  
"parte del acta en que conste el acuerdo relativo a  
"su otorgamiento, debidamente firmada por  
"quienes actuaron como presidente o secretario de  
"la asamblea o del órgano de administración según  
"corresponda, quienes deberán firmar el  
"instrumento notarial, o en su defecto lo podrá  
"firmar el delegado especialmente designado para  
"ello en sustitución de los anteriores.  
"(ADICIONADO, D.O. 11 DE JUNIO DE 1992).

"El notario hará constar en el instrumento  
"correspondiente, mediante la relación, inserción o  
"el agregado al apéndice de las certificaciones, en  
"lo conducente, de los documentos que al efecto



243



"se le exhiban, la denominación o razón social de  
 "la sociedad, su domicilio, duración, importe del  
 "capital social y objeto de la misma, así como las  
 "facultades que conforme a sus estatutos le  
 "correspondan al órgano que acordó el  
 "otorgamiento del poder y, en su caso, la  
 "designación de los miembros del órgano de  
 "administración. (ADICIONADO, D.O. 11 DE JUNIO  
 "DE 1992).

"Si la sociedad otorgare el poder por conducto de  
 "una persona distinta a los órganos mencionados,  
 "en adición a la relación o inserción indicadas en el  
 "párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que  
 "dicha persona tiene las facultades para ello."

"Aterrizando en la especie las instituciones de  
 "crédito conforme a la legislación de la materia,  
 "pueden ser: 'Instituciones de banca múltiple' e  
 "'Instituciones de Banca de desarrollo', Bancomer  
 "Sociedad Anónima, aquí tercero perjudicada es  
 "una Institución de Banca Múltiple, por lo que le  
 "resultan aplicables lo dispuesto por los numerales  
 "21, 22 y 23 de la Ley de Instituciones de Crédito  
 "mis mas que a la letra preceptúan:

"ARTÍCULO 21.- La administración de las  
 "instituciones de banca múltiple estará  
 "encomendada a un consejo de administración y a  
 "un director general, en sus respectivas esferas de  
 "competencia".

**"ARTÍCULO 22.- El consejo de administración**  
**"estará integrado, a elección de los accionistas de**  
**"la sociedad, por once consejeros o sus múltiplos.**  
**"Su nombramiento deberá hacerse en asamblea**  
**"especial por cada serie de acciones. A las**  
**"asambleas que se reúnan con este fin, así como a**  
**"aquéllas que tengan el propósito de designar**  
**"comisarios por cada serie de acciones, les serán**  
**"aplicables, en lo conducente, las disposiciones**  
**"para las asambleas generales ordinarias previstas**  
**"en la Ley General de Sociedades Mercantiles.**

**"En el supuesto de que el consejo se integre con**  
**"once miembros, los accionistas de la serie "A"**  
**"designarán a seis consejeros y por cada diez por**  
**"ciento de acciones de esta serie que exceda del**  
**"cincuenta por ciento del capital pagado ordinario,**  
**"tendrán derecho a designar un consejero más.**  
**"Los accionistas de la serie "B", en su caso,**  
**"designarán a los consejeros restantes.**

**"Los accionistas de cada una de las citadas series,**  
**"que representen cuando menos un diez por ciento**  
**"del capital pagado ordinario de la institución,**  
**"tendrán derecho a designar un consejero de la**  
**"serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el**  
**"nombramiento de los consejeros de minoría,**  
**"cuando se revoque el de todos los demás de la**  
**"misma serie.**



CAA



"En los supuestos de los consejos que se integren  
 "por múltiplos de once o cuenten con más de seis  
 "consejeros de la serie "A", así como en los casos  
 "previstos en el párrafo anterior y en los artículos  
 "23 fracción II, 73 y 75 de esta Ley, se deben  
 "guardar las proporciones correspondientes  
 "conforme a lo dispuesto en este artículo.

"El Presidente del consejo deberá elegirse de entre  
 "los propietarios de la serie "A", y tendrá voto de  
 "calidad en caso de empate. Por los propietarios se  
 "nombrarán suplentes, los cuales podrán suplir  
 "indistintamente a cualesquiera de los propietarios,  
 "en el entendido de que dentro de cada sesión, un  
 "suplente sólo podrá representar a un propietario.

"ARTÍCULO 23.- Los nombramientos de consejeros  
 "de las instituciones de banca múltiple deberán  
 "recaer en personas con reconocida honorabilidad  
 "y que cuenten con amplios conocimientos y  
 "experiencia en materia financiera o administrativa.  
 "En ningún caso podrán ser consejeros:

"I. Los funcionarios y empleados de la institución,  
 "con excepción del director general y de los  
 "funcionarios de la sociedad que ocupen cargos  
 "con las dos jerarquías administrativas inmediatas  
 "inferiores a la de aquél, sin que éstos constituyan  
 "más de la tercera parte del consejo de  
 "administración.

"II. El cónyuge. Las personas que tengan  
"parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el  
"segundo grado, o civil, con más de dos  
"consejeros;

"III. Las personas que tengan litigio pendiente con  
"la institución de que se trate;

"IV. Las personas sentenciadas por delitos  
"patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el  
"comercio o para desempeñar un empleo, cargo o  
"comisión en el servicio público, o en el sistema  
"financiero mexicano;

"V. Los quebrados y concursados que no hayan  
"sido rehabilitados;

"VI. Quienes realicen funciones de inspección y  
"vigilancia de las instituciones de crédito, y

"VII. Quienes realicen funciones de regulación de  
"las instituciones de crédito, salvo que exista  
"participación del Gobierno Federal en el capital de  
"las mismas, o reciban apoyos del Fondo Bancario  
"de Protección al Ahorro.

"Los consejeros que representen a la serie "A"  
"deberán ser mexicanos o extranjeros residentes  
"en el territorio nacional."

"Tomando como base todo lo anteriormente  
"expuesto se puede concluir validamente que para  
"que surta efectos los poderes otorgados por una  
"Sociedad Mercantil es menester, conforme a lo





**"preceptuado en el artículo 10 de la Ley General de  
"Sociedades Mercantiles lo siguiente:**

**"Que la sociedad mediante acuerdo de la asamblea  
"o del órgano colegiado de administración, en su  
"caso, protocolice ante notario público la parte del  
"acta en que conste el acuerdo relativo a su  
"otorgamiento, debidamente firmada por quienes  
"actuaron como presidente o secretario de la  
"asamblea o del órgano de administración según  
"corresponda, quienes deberán firmar el  
"instrumento notarial, o en su defecto lo podrá  
"firmar el delegado especialmente designado para  
"ello en sustitución de los anteriores.**

**"El notario hará constar en el instrumento  
"correspondiente, mediante la relación, inserción o  
"el agregado al apéndice de las certificaciones, en  
"lo conducente, de los documentos que al efecto  
"se le exhiban, 1.- la denominación o razón social  
"de la sociedad, 2.- su domicilio, 3.- duración, 4.-  
"importe del capital social y 5.- objeto de la misma,  
"6.- así como las facultades que conforme a sus  
"estatutos le correspondan al órgano que acordó el  
"otorgamiento del poder y, 7.- en su caso, la  
"designación de los miembros del órgano de  
"administración.**

**"El artículo en comento sigue diciendo que para el  
"caso de que la sociedad otorgare el poder por  
"conducto de una persona distinta a los órganos**

"mencionados, en adición a las relaciones o  
 "inserciones indicadas en el párrafo anterior, se  
 "deberá dejar acreditado que dicha persona tiene  
 "las facultades para ello, es decir que además de  
 "las inserciones anteriores se requiere que quien  
 "se presente ante el notario a materializar el acto  
 "de la delegación debe además acreditar que tiene  
 "facultades para llevar a cabo tal delegación,  
 "independientemente de que se hagan las  
 "inserciones a que se refieren los dos párrafos que  
 "antecedan.

"Ahora bien, la Ley de Instituciones de Crédito al  
 "respecto establece:

"LOS PODERES QUE OTORGUEN LAS  
 "INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO REQUERIRÁN  
 "OTRAS INSERCIONES que las relativas al acuerdo  
 "del consejo de administración o del consejo  
 "directivo, según corresponda, que haya  
 "autorizado su otorgamiento, a las facultades que  
 "en los estatutos sociales o en sus respectivas  
 "leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se  
 "concedan al mismo consejo y a la comprobación  
 "del nombramiento de los consejeros.

"Es decir, en esencia son los mismos requisitos  
 "que requieren todas las sociedades mercantiles,  
 "pero tratándose de Instituciones de crédito, la  
 "Legislación de la materia establece que '... NO  
 "SE REQUERIRAN OTRAS INSERCIONES que las





"relativas. . ." es decir que aunque la Ley General  
"de Sociedades Mercantiles, establezca ciertos  
"requisitos para el otorgamiento de poderes, en el  
"caso de las instituciones de crédito, únicamente  
"son indispensables las inserciones a que refiere el  
"segundo párrafo del numeral noventa transcrito  
"líneas arriba.

"Ahora bien, en lo referente a que se debe  
"establecer plenamente que el hecho de constituir  
"un poder en favor de determinada persona es  
"precisamente la expresión de la voluntad social,  
"sin importar si ya se han otorgado otros poderes  
"anteriormente, ya que el segundo párrafo del  
"numeral 90 de la Ley de Instituciones de Crédito  
"establece 'LOS PODERES QUE OTORGUEN LAS  
"INSTITUCIONES . . .' sin hacer diferencia, sobre el  
"momento de haberse otorgado, es decir, si ya se  
"han emitido otros con anterioridad.

"La Sala Responsable y el C. Juez A Quo,  
"resuelven dos conceptos de violación que fueron  
"planteados por separado, por constituir dos  
"cuestiones distintas, aunque relacionadas, pues  
"ambas derivan en la falta de personalidad y  
"facultades de los Señores García Bert y Rivero  
"Ramírez. Dichas cuestiones son:

"1. Que el documento exhibido por los señores  
"Luis Enrique García Bert y Javier Jesús Rivero  
"Ramírez carece de la inserción relativa a la sesión

"del Consejo de Administración de la Institución de  
 "Crédito, en la cual se autorizara el otorgamiento  
 "de poderes a favor de los citados García Bert y  
 "Rivero Ramírez; por lo tanto, al no haber sesión  
 "del Consejo de Administración es imposible  
 "acreditar la designación de los consejeros  
 "asistentes a una inexistente sesión de consejo, y  
 "en consecuencia las facultades de tal.

"2. Que las certificaciones insertas en  
 "documento exhibido por los señores García Bert y  
 "Rivero Ramírez, marcadas con los números 26 y  
 "27 no acreditan la personalidad y facultades de los  
 "señores Miguel García y García, Francisco Javier  
 "Fernández Carbajal y Víctor Manuel Borrás Setién,  
 "en virtud de que dichas certificaciones adolecen  
 "de las inserciones relativas a las facultades del  
 "Consejo de Administración del banco tercero  
 "perjudicado así como de las relativas a la  
 "comprobación del nombramiento de los  
 "consejeros.



"El Juez de Distrito en cuanto a los requisitos  
 "esenciales que deben insertarse en los  
 "documentos públicos relativos a los poderes  
 "otorgados por las Instituciones de Crédito se  
 "produce de la siguiente manera:

"De lo que se evidencia que el C. Juez de Distrito,  
 "afirma erróneamente que los requisitos del  
 "numeral 90 Segundo Párrafo de la Ley de





"Instituciones de Crédito se encuentran reunidos  
"en los documentos que soportan los testimonios  
"de escritura publica que contienen los supuestos  
"poderes otorgados por las instituciones de crédito  
"que hoy nos ocupan, lo cual no es verdad.

"De estar equivocados la hoy recurrente pide se me  
"especifique en dónde, en que parte de los  
"documentos que constan el presente expediente,  
"está la inserción relativa al acuerdo del consejo  
"de administración que autoriza el otorgamiento de  
"poderes a los señores Luis Enrique García Bert y  
"Javier Jesús Rivero Ramírez.

"A este respecto lo sostenido por la aquí recurrente  
"es en sentido opuesto, es decir, estos requisitos  
"esenciales no se encuentran reunidos en las  
"documentales de mérito, de donde en  
"consecuencia se colige que en esta alzada, la  
"quejosa ha de probar hechos negativos, es decir,  
"que los argumentos que conforman los agravios  
"tendrán que acreditar la falta de los requisitos, ya  
"que el A Quo los tuvo por satisfechos con las  
"documentales que según él precisó, extremo que  
"desde luego no es acertado como se acredita mas  
"adelante.

"Es claro que tanto el quejoso, como la sala  
"responsable y el juez A quo coinciden en afirmar  
"que las inserciones mencionadas en el artículo 90  
"de la ley de instituciones de Crédito SON

**"REQUISITO INDISPENSABLE DE VALIDEZ, sin embargo, el punto de diferencia entre nosotros radica en definir, si el numeral en cita, se refiere:**

**"Según el Juez de Distrito a insertar cualquier acuerdo de sesión de consejo de administración que autorice el otorgamiento de poderes, sin importar a quien se les otorguen; y el suscrito sostiene que en un poder otorgado por persona**

**"moral como lo es una institución de crédito, el acuerdo de sesión del consejo de administración,**

**"en el cual se autorice expresamente el**

**"otorgamiento de un poder a una persona**

**"determinada, solo se puede aplicar a esa persona,**

**"a manera de ejemplo se dice, QUE EN EL**

**"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PODER**

**"OTORGADO A FAVOR DE "X" SE INSERTE EL**

**"ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**"DONDE SE AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE**

**"PODERES AL MISMO "X".**

**"De la resolución que por este medio se impugna**

**"podemos suponer que el Juez A quo considera**

**"que es suficiente con que se inserte cualquier**

**"acuerdo de sesión de consejo de administración**

**"en la cual se autorice el otorgamiento de poderes,**

**"aunque dicha autorización se refiera a persona**

**"distinta a aquélla que pretende acreditar su**

**"personalidad de apoderado de banco con el**

**"documento en cuestión, extremo que resulta**





"inconcebible, ya que el contrato de mandato es  
"personalísimo entre mandante y mandatario.

"Es pertinente ahora, realizar un pequeño estudio,  
"que para una mayor claridad se expresan en  
"cuadros sinópticos, de los documentos cuya  
"validez se impugnó en la alzada que da origen al  
"acto reclamado, y a los cuales se refieren los  
"conceptos de violación marcados como segundo  
"y tercero del escrito de demanda de amparo,  
"mismos que fueron estudiados por el Juez A quo  
"en el considerando quinto de la resolución que  
"por esta vía se impugna:

Poder "A":	
Escritura número:	29,587 Veintinueve mil quinientos ochenta y siete.
Fecha:	25 de Septiembre de 1997.
Notario	Rogelio Magaña Luna, Titular de la Notaría Número 156 del Distrito Federal.
Otorgantes	Licenciado Miguel García y García. Ingeniero Francisco Javier Fernández Carbajal. Contador Público Víctor Manuel Borrás Setién.
Supuestos Apoderados	Licenciado Javier Jesús Rivero Ramírez. Licenciado Luis Enrique García Bert.
Forma de Integración al expediente:	Fue exhibido por los licenciados Javier Jesús Rivero Ramírez y Luis Enrique García Bert en expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario marcado con el número 319/97 del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, señalando como constancia para la tramitación del recurso de apelación del cual deriva el acto reclamado en el juicio de amparo que da origen a esta revisión.

Poder "B":	
Escritura número:	25,097 Veinticinco mil noventa y siete.
Fecha:	3 de Mayo de 1996.
Notario	Rogelio Magaña Luna, Titular de la Notaría Número 156 del Distrito Federal.
Otorgantes	Ingeniero Francisco Javier Fernández Carbajal.
Supuestos	Licenciado Miguel García y García.

apoderados	Licenciado Francisco Lozano Morales.
Forma de Integración al expediente:	<p>Certificación inserta en el poder arriba designado con la letra "A" como número 26, páginas de la 40 a la 52.</p> <p>En las páginas de la 40 a la 48 se trata de la protocolización parcial del Acta de Sesión de Consejo de Administración del banco tercero perjudicado, de fecha 28 de marzo de 1996;</p> <p>En la página de la 48 a la 52 se contienen las facultades otorgadas a los supuestos apoderados mencionados en este poder.</p>
Poder "C":	
Escritura número:	25,098 Veinticinco mil noventa y ocho.
Fecha:	3 de Mayo de 1996.
Notario	Rogelio Magaña Luna, Titular de la Notaría Número 156 del Distrito Federal.
Otorgantes	Ingeniero Francisco Javier Fernández Carbajal.
Supuestos apoderados	<p>Ricardo Guajardo Toucho.  Guillermo Aguilar Villalobos.  Contador Público Victor Manuel Borrás Setién.  Juan Carlos Braniff Hierro.  Guillermo Chavez Eckstein.  Ingeniero Francisco Javier Fernández Carbajal.  Jorge Laborín Gómez.  Mario Laborín Gómez  Héctor Rangel Domene  Steven Saide Azar.</p>
Forma de Integración al expediente:	<p>Certificación inserta en el poder arriba designado con la letra "A" como número 27, páginas de la 52 a la 65.</p> <p>En las páginas de la 52 a la 61 se trata de la protocolización parcial del Acta de Sesión de Consejo de Administración del banco tercero perjudicado de fecha 28 de marzo de 1996.</p> <p>En las páginas de la 61 a la 65 se contienen las facultades otorgadas a los supuestos apoderados mencionados en este poder.</p>



SUPREMA CORTE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**"Así pues, procedamos a realizar un análisis  
comparativo de los poderes líneas arriba descritos  
e identificados con las letras "A", "B" y "C", con  
los requisitos del segundo párrafo del artículo 90  
de la Ley de Instituciones de Crédito.**

Inserciones requeridas por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito.	PODER "A"	PODER "B"	PODER "C"

249



1.- Relativas al consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento.	NO OBRAN INSERTAS EN ESTE PODER	Reproducida en la certificación inserta en el poder "A" como número 26, a páginas de la 40 a la 48.	Reproducida en la certificación inserta en el poder "A" como número 27, a páginas de la 52 a la 61.
2.- Relativas a los estatutos sociales que concedan al propio consejo;	Certificación inserta como número 24, contenida en las páginas de la 28 a la 40 de este poder. La cual no se debe considerar válida.	NO OBRAN INSERTAS EN ESTE PODER	NO OBRAN INSERTAS EN ESTE PODER
3.- Relativas a la comprobación del nombramiento de los consejeros.	Certificación inserta como número 22, contenida en las páginas de la 14 a la 28 de este poder. La cual no se debe considerar válida.	NO OBRAN INSERTAS EN ESTE PODER	NO OBRAN INSERTAS EN ESTE PODER.

"Podemos afirmar que:

"A.- El acuerdo referido por el artículo 90 de la Ley  
 "de Instituciones de Crédito ES LA  
 "MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA  
 "INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, TOMADA POR LOS  
 "MIEMBROS DE SU CONSEJO DE  
 "ADMINISTRACIÓN (CONSEJEROS), COMO  
 "VOLUNTAD DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE  
 "MANERA TAL QUE SE CONSTITUYE EL ENCARGO  
 "AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2546 DEL  
 "CÓDIGO CIVIL FEDERAL, para la ejecución de  
 "actos jurídicos que deberá realizar el mandatario;

"B.- LAS FACULTADES QUE EN LOS ESTATUTOS  
"SE CONCEDEN AL CONSEJO DEMARCAN LA  
"CAPACIDAD LEGAL LIMITADA, NO PLENA, DE  
"LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO dentro de la  
"cual deberá actuar el mandatario; y

"C.- LA COMPROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE  
"CONSEJEROS ES LA GARANTÍA DE VALIDEZ DE  
"DICHOS ACUERDOS EN RAZÓN DE QUE LAS  
"PERSONAS QUE LO TOMARON SEAN  
"EFECTIVAMENTE AQUELLAS A LAS QUE EL  
"ÓRGANO SOBERANO LES OTORGÓ TALES  
"ATRIBUCIONES.



"En otras palabras son estos tres extremos los que  
"deben concurrir en el 'poder'.

"Como es evidente, los poderes a los que se hace  
"referencia no son suficientes para acreditar la  
"personalidad de que los supuestos representantes  
"de la tercero perjudicada pretenden ostentar, y al  
"no acreditarse dicha personalidad son  
"procedentes los conceptos de violación  
"esgrimidos ante el Juez de Distrito, y por lo tanto  
"es procedente el presente concepto de agravio.

"Por lo que respecta al Primero de los requisitos  
"señalados por el segundo párrafo de citado  
"numeral 90 de la Ley de Instituciones de Crédito,  
"mismo que refiere a las inserciones relativas al  
"consejo de administración que haya autorizado su  
"otorgamiento, es decir, en la especie SE REFIERE



"ESPECÍFICAMENTE A LA INSERCIÓN RELATIVA  
"AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
"BANCOMER QUE HAYA AUTORIZADO EL  
"OTORGAMIENTO DE PODERES A LOS SEÑORES  
"GARCÍA BERT Y RIVERO RAMÍREZ, el C. Juez de  
"Distrito sostiene que tal requisito se encuentre  
"satisfecho, con la inserción relativo a la sesión  
"donde se autorizó el otorgamiento de poderes a  
"García García y Borrás Setién, sin que conste que  
"el consejo de administración de la Institución de  
"crédito, haya decidido otorgar poder a García Bert  
"y Rivero Ramírez, que resulta la única manera en  
"que se puede establecer que tal requisito se  
"encuentre cubierto, por la única razón de que no  
"existe el mencionado acuerdo.  
"En tal virtud y recordando que el Consejo de  
"Administración de la persona moral es quien  
"determina su ánimo social, es sorprendente lo  
"manifestado en su resolución por el C. Juez A  
"Quo, quien pretende sostener que el acuerdo del  
"consejo de administración donde se autoriza la  
"expedición de poderes a García Bert y Rivero  
"Ramírez estriba en la autorización dada en el  
"Consejo de Administración para otorgarle poder a  
"Miguel García García, extremo totalmente  
"inconcebible, ya que en principio el artículo 90  
"segundo párrafo de la Ley de Instituciones de  
"Crédito establece lo contrario, además de que si la

"persona moral decidió otorgar poder a García  
 "García y Borrás Setién con las facultades  
 "suficientes para en su caso delegarlo, tal acto de  
 "delegación no puede ser arbitrario, sino que tal  
 "facultad sólo la podrá ejercitar por acuerdo directo  
 "y expreso del mandante, en este caso Bancomer,  
 "mismo acto de delegación que debe ser aprobado  
 "por su consejo de administración, por la única  
 "razón de que así expresamente lo preceptúa el  
 "artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y  
 "aun en el supuesto, sin conceder para que un  
 "mandatario con facultades de delegación pueda  
 "legítima y válidamente delegar su poder o  
 "sustituirlo, es indispensable que lo haga  
 "siguiendo instrucciones expresas de su mandante  
 "pues así lo ordena el diverso numeral 2562 del  
 "Código Civil Federal el cual dispone: " el  
 "mandatario, en el desempeño de su encargo, se  
 "sujetará a las instrucciones recibidas del  
 "mandante y en ningún caso podrá proceder contra  
 "disposiciones expresas del mismo.", sin  
 "embargo, esto no ocurre en la especie, ya que no  
 "obra inserto en el poder (sin conceder) el acuerdo  
 "de referencia que constituye el primer elemento de  
 "los requeridos por el numeral 90 tantas veces  
 "citado, sin el cual no puede estimarse que García  
 "Bert y Rivero Ramírez legalmente tengan la  
 "personalidad que ostentan.





"El pretender sostener que tal autorización se  
 "deriva del poder otorgado a Miguel García García  
 "y Borrás Setién es tanto como pretender que por  
 "tal autorización estos supuestos apoderados  
 "pudieron delegar sus facultades en cualquier  
 "persona que a ellos buenamente se les ocurra,  
 "como podría darse el caso de otorgar un poder a  
 "el hoy recurrente o inclusive al personal de  
 "intendencia del mismo banco ya que todo  
 "mandato (según lo entiende el C. Juez de Distrito  
 "a quien se le delega, o siquiera tenga  
 "conocimiento de tal delegación.

OPORTE DE  
 LA TERCERA  
 DE ACUERDO

"Si Bancomer S.A. otorgó a García García y Borrás  
 "Setién la facultad de delegar poder eso no  
 "significa que lo puedan delegar a su arbitrio, sino  
 "únicamente que cuando Bancomer (léase el  
 "Consejo de Administración) acuerde, cumpliendo  
 "con los requisitos del artículo 90 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito, el otorgamiento de mas  
 "poderes a otras personas serían precisamente  
 "García Y García y Borrás Setién quienes  
 "comparecerían ante el Notario Público  
 "exhibiéndole que se cumplió con los requisitos  
 "citados con anterioridad en apego a lo ordenado  
 "en el acuerdo del consejo de administración de  
 "Bancomer para delegar únicamente las facultades  
 "que la mandante les autorice.

*"En efecto, el acto de protocolizar las facultades  
"que se le confieren a determinada persona para la  
"ejecución de un mandato, únicamente es un  
"requisito de forma de tal acto jurídico, ya que el  
"fondo de este se desprende de la voluntad  
"soberana de la persona moral, que constituye la  
"esencia del mandato, tal y como lo dispuso de la  
"ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en  
"Materia Administrativa del Primer Circuito que*

*"continuación de cita:*

*"Séptima Epoca*

*"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*"Fuente: Semanario Judicial de la Federación*

*"Tomo: 47 Sexta Parte*

*"Página: 39*

*"MANDATO OTORGADO POR UNA SOCIEDAD.*

*"FECHA EN QUE SE TIENE POR CONFERIDO.*

*"Conforme al artículo 200 de la Ley General de  
"Sociedades Mercantiles, los acuerdos de la  
"asamblea de accionistas son negocios jurídicos  
"mediante los cuales se manifiesta la voluntad  
"social, de manera que si en asamblea de  
"accionistas se tomó el acuerdo de conferir  
"mandato, tal acuerdo es la manifestación de la  
"voluntad de la persona moral tomada por sus  
"socios, como voluntad soberana, de manera que  
"constituye el encargo a que se refiere el artículo  
"2546 del Código Civil Federal para la ejecución de*





"actos jurídicos que deberá realizar el mandatario;  
"y como esa determinación debe cumplirse por la  
"persona delegada ante el Notario correspondiente,  
"es indudable que el mandato se entiende  
"conferido desde el momento en que produjo el  
"acuerdo que, por su naturaleza, no podía  
"realizarse sino mediante la formalización ante  
"Notario.

"Amparo en revisión 331/72. Fraccionamiento "La  
"Aurora", S. A. 6 de noviembre de 1972.  
"Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega  
"Calderón.

"Por todo lo anterior, es insostenible lógica y  
"jurídicamente los argumentos esgrimidos por el  
"Juez Primero de Distrito del Estado de Yucatán, en  
"referencia al acuerdo del Consejo de  
"Administración que autorice la expedición de  
"poderes en la Institución de Crédito.

"SEGUNDO. En lo concerniente a la inserción  
"relativa a las facultades del Consejo de  
"Administración del Banco, hoy tercero  
"perjudicado, el señor Juez de Distrito la considera  
"cumplida con la inserción del artículo 29 de los  
"estatutos sociales del banco en cuestión, ya que  
"en la parte conducente de su sentencia manifestó  
"lo siguiente:

"Por cuanto al segundo de los requisitos  
"establecidos en el párrafo segundo del artículo 90

"de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, los  
 "relativos a las facultades que en los estatutos  
 "sociales se conceden al propio consejo, se  
 "observa que la Sala Segunda del Tribunal de  
 "Justicia del Estado, hizo una correcta apreciación  
 "y valoración de la escritura pública numero  
 "veintinueve mil quinientos ochenta y siete (29,587)  
 "del día veinticinco de septiembre de mil  
 "novecientos noventa y siete, otorgada por el  
 "Notario Público número 156 del Distrito Federal  
 "del patrimonio inmueble federal, documental  
 "cuestionado por la quejosa, que los señores  
 "Miguel García y García, Francisco Fernández  
 "Carbajal (sic), y Víctor Manuel Borrás  
 "otorgaron a nombre de Bancomer, sociedad  
 "anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo  
 "Financiero, poder general para pleitos y cobranzas  
 "y especial para querellas y denuncias y poder  
 "general para actos de dominio limitado para  
 "ejercer mancomunadamente o bien, uno de ellos  
 "con cualquier otro apoderado de la institución que  
 "goce de las mismas facultades; a favor de los  
 "señores Javier Jesús Rivero Ramírez y Luis  
 "Enrique García Bert, con las amplias facultades  
 "que recibieron del consejo de administración, las  
 "cuales quedaron comprobadas ante el notario  
 "otorgante con la escritura publica numero  
 "veinticuatro mil ochocientos siete (24,807) del





"quince de marzo de mil novecientos noventa y  
"seis, en la que se hace constar la protocolización  
"del acta de asamblea general extraordinaria de  
"accionistas de Bancomer, sociedad anónima,  
"Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, -  
"celebrada el cuatro de marzo de mil novecientos  
"noventa y seis- en la que se tomaron entre otros  
"acuerdos modificar diversos artículos de los  
"estatutos sociales, del que destaca la reforma del  
"artículo 29, quedando en definitiva consagradas  
"las facultades del consejo de administración, de la  
"siguiente manera: para administrar, acordar y  
"dirigir los asuntos de la sociedad, así como para  
"la realización de las operaciones y la prestación  
"de los servicios a que se refiere el artículo 46 de la  
"Ley de Instituciones de Crédito, de manera  
"enunciativa mas no limitativa, investido de las  
"facultades o poderes generales para pleitos y  
"cobranzas y especial para querellas y denuncias,  
"con facultades expresas para pedir el remate de  
"los bienes embargados y tomar parte en la  
"subasta haciendo postura; con poder general para  
"actos de administración; poder general para actos  
"de dominio; para suscribir títulos de crédito,  
"poder en materia laboral, e investido con la  
"facultad para otorgar y delegar poderes generales  
"y especiales, revocar unos y otros y sustituirlos  
"en todo o en partes, incluyendo expresamente la

*"facultad para que las personas a quienes otorguen  
"dichos poderes puedan a su vez otorgarlos,  
"delegarlos, sustituirlos o revocarlos en todo o en  
"parte a favor de terceros (fojas 70 vuelta a 76 de  
"los presentes autos).*

*"Entre otras, son estas las facultades expresas del  
"consejo de administración, de lo cual el Notario  
"Público inserto lo conducente a la escritura  
"publica exhibida por los representantes legales de  
"la Institución de Crédito, actora en el juicio  
"natural. Y, contrariamente lo sostenido por la  
"quejosa, si quedaron debidamente insertas, con la  
"transmisión que hizo el citado Notario Público en  
"la escritura que autorizó.*



*"Cabe puntualizar, que las facultades del consejo  
"de administración contenidas en el reformado  
"artículo 29 de los estatutos sociales, se otorgaron  
"por la asamblea general de Bancomer, S.A.,  
"celebrada el día cuatro de marzo de mil  
"novecientos noventa y seis, como órgano máximo  
"de decisión, en términos de lo dispuesto por el  
"artículo 178 de la Ley General de Sociedades  
"Mercantiles, el cual prevé que la asamblea general  
"de accionistas es el órgano supremo de la  
"sociedad, y podrá acordar y ratificar todos los  
"actos y operaciones de esta y sus resoluciones  
"serán cumplidas por la persona que ella misma*



"designa, o a falta de asignación, por el  
"administrador o por el consejo de administración.

"A este respecto es prudente mencionar que la  
"capacidad y facultades legales de las personas  
"morales, se encuentran limitadas por la  
"Constitución, Leyes y Reglamentos respectivos de  
"conformidad con la materia específica de las  
"sociedades, dependiendo del objeto social de las  
"mismas. Todos estos ordenamientos crean una  
"esfera de facultades, derechos y obligaciones  
"dentro de las cuales puede cada persona moral  
"ejercitar y gozar de derechos.

"En este orden de ideas, podríamos decir que la  
"barrera máxima e infranqueable de ese ámbito de  
"capacidad de las personas morales lo constituyen  
"los preceptos constitucionales, los cuales son de  
"obligatoria y general observancia.

"Inmediatamente después, nos encontramos con  
"una primera barrera interior, constituida por la  
"legislación aplicable a la persona moral, la cual no  
"puede ser contraria a la Constitución, es decir,  
"dicha barrera interior no puede traspasar los  
"límites impuestos constitucionalmente y que  
"regula de una manera más específica a la persona  
"moral.

"Por último, el límite más cerrado a la capacidad de  
"las personas morales lo constituye su objeto  
"social, y es en razón del mismo que se

"desprenden las facultades de las que goza la  
"persona moral y que asimismo puede conferir a  
"sus representantes legales, siempre y cuando,  
"dicho objeto social sea concordante con la  
"legislación aplicable y obedezca fielmente a  
"nuestra Carta Magna.

"De lo anterior, es procedente afirmar que no es  
"suficiente que los miembros de la persona moral  
"le confieran facultades a dicha corporación para  
"que estas sean válidas, pues es indispensable que  
"las facultades conferidas se encuentren dentro del  
"marco jurídico que regula a la persona moral  
"específica, es decir, que la Constitución  
"primeramente y la demás legislación aplicable le  
"otorguen ese derecho subjetivo a la persona  
"moral.

"Por lo tanto, aún cuando el artículo 29 de los  
"estatutos sociales de Bancomer le otorgue  
"facultades al Consejo de Administración para  
"hacer posturas, dicho facultamiento es nulo pues  
"contraviene la legislación aplicable y la propia  
"norma fundamental.

"Es necesario recordar que los bancos son sujetos  
"al régimen de autoridad pues prestan un servicio  
"público concesionado por el Estado, y en virtud  
"del mismo, únicamente gozan de las facultades  
"que la propia Ley les confiere expresamente, por  
"lo que cualquier prohibición es absoluta y, por lo





"tanto, no ha lugar a considerar prohibiciones  
"parciales.

"En el caso que nos ocupa, el artículo 27 fracción V  
"de la Constitución impone a los bancos la  
"prohibición de adquirir bienes inmuebles más allá  
"de los totalmente necesarios para su objeto  
"social. El comprar bienes en remate ~~no es~~  
"totalmente necesario para prestar el servicio de  
"banca y crédito, por lo cual ~~les~~ está  
"absolutamente prohibido a los bancos, en los  
"terminos del precepto en comento.

RTE DE  
NACIONAL  
E ADECUADO

Como se manifestó al Juez de Distrito, el fin  
"jurídico que persigue el numeral 90 de la ley de  
"Instituciones de Crédito ~~al~~ exigir la inserción  
"relativa a las facultades que en los estatutos  
"sociales se conceden al propio consejo, es  
"acreditar que ~~las~~ facultades que ejerce el  
"apoderado le han sido otorgadas por un órgano  
"que goza ~~de~~ ellas, pues nadie puede delegar  
"poderes de los que no le han sido conferidos. Sin  
"embargo, dicha inserción no es suficiente, cuando  
"las facultades que han sido concedidas al consejo  
"de administración por los miembros de la  
"sociedad no les han sido otorgadas por las leyes  
"aplicables y son contrarias a la Constitución  
"General de la República. Luego entonces dicha  
"inserción no cumple con el propósito de acreditar  
"la personalidad del supuesto apoderado, máxime

"en la especie cuando el acto que se reclama  
 "proviene una diligencia de remate donde lo que  
 "se precisamente se controvierte es por una parte  
 "la representación de la Institución Bancaria en  
 "dicha diligencia y por otra parte que tal acto de la  
 "propia institución crediticia resulta contrario a la  
 "fracción V del artículo 27 Constitucional, ya que,  
 "en la especie, Bancomer pretende comparecer  
 "como postor a una diligencia de remate de un  
 "bien, hacer pujas a fin de adjudicarse el bien  
 "inmueble sujeto a remate, llevando con ello una  
 "adquisición de un inmueble, extremo  
 "expresamente prohibido por la fracción V del  
 "Numeral 27 constitucional antes citado.

"TERCERO.- En relación a la tercera inserción  
 "requerida por el numeral 90 de la ley de  
 "Instituciones de Crédito, el Juez A quo la tiene por  
 "cumplida con relación a los tres poderes líneas  
 "arriba marcados como "A", "B" y "C", cuando  
 "manifestó:

"Finalmente, y por cuanto al tercero de los  
 "requisitos, que se hace consistir en la  
 "comprobación del nombramiento de los  
 "consejeros de la Institución de crédito de que se  
 "trata, de la misma manera quedo debidamente  
 "acreditado ante el juez natural y ante su superior  
 "jerárquico aquí autoridad señalada como  
 "responsable, con la escritura publica número



"veintidós mil setecientos noventa y uno (22,791)  
"del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa  
"y cinco, en la que se hizo constar la  
"protocolización de las actas de las asambleas  
"especiales de accionistas de las series "A" y "B"  
"y en lo conducente de la asamblea general  
"ordinaria de accionistas de Bancomer Sociedad  
"Anónima, Institución de Banca Múltiple -  
"celebradas el día veintiuno de abril de mil  
"novecientos noventa y cinco-, en las cuales se  
"tomaron los acuerdos para designar a los  
"consejeros y comisarios de las series "A" y "B" y  
"nombrar al consejo de administración y  
"comisarios de las series "A" y "B" de aquella  
"Institución Crediticia de las cuales el Notario  
"Público número ciento cincuenta y seis del  
"Distrito Federal, Licenciado Rogelio Magaña Luna,  
"inserto la parte relativa a dichos nombramientos,  
"transcribiendo incluso el acuerdo correspondiente  
"y relacionando los nombres de las personas que  
"resultaron consejeros y comisarios propietarios y  
"suplentes de las series "A" y "B" (foja 63 vuelta a  
"67 del expediente).

"En este orden de ideas, resulta correcta la  
"consideración legal sostenida por la sala  
"responsable al tener por acreditada plenamente la  
"personalidad jurídica de los señores Luis Enrique  
"García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez como

"apoderado legales de Bancomer, S.A. Institución  
 "de Banca Múltiple, Grupo Financiero, e inexactos  
 "los argumentos expuestos por la quejosa para  
 "debatir aquella consideración, con lo cual queda  
 "demostrado, que los poderes generales otorgados  
 "por la Institución de Crédito actora en el juicio  
 "natural, si cumplen con los requisitos del segundo  
 "párrafo del artículo 90 de la Ley de Instituciones  
 "de Crédito, cuyas inserciones agregadas a la  
 "escritura pública exhibida en el Juicio  
 "Extraordinario Hipotecario para acreditar  
 "personalidad jurídica de los apoderados del banco  
 "actor, quedaron plenamente identificadas  
 "definidas.

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
 SECRETARÍA GENERAL DE AC

"El propósito perseguido por la norma al exigir el  
 "acreditamiento de los Consejeros participantes en  
 "la sesión del Consejo de Administración que  
 "autorice el otorgamiento de cualquier poder, es  
 "asegurarse de la validez del acuerdo del Consejo  
 "de Administración en razón de las personas que  
 "alcancen dicho acuerdo son aquellas  
 "efectivamente designadas por la Asamblea  
 "General de Accionistas para ocupar dicho cargo, y  
 "la seguridad que se cumplen los requisitos  
 "establecidos por el artículo 23 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito. Es decir, que al enunciar  
 "el multicitado numeral 90: "... y a la comprobación  
 "del nombramiento de los consejeros." obviamente




"en referencia a los consejeros asistentes a la  
"sesión del Consejo de Administración de la cual  
"se origina la autorización del otorgamiento del  
"supuesto poder otorgado a García Bert y Rivero  
"Ramírez. Luego entonces, es imposible acreditar  
"el nombramiento de consejeros asistentes a una  
"sesión que nunca tuvo lugar.

"Sin embargo, EL SEÑOR JUEZ DE DISTRITO SE  
"ATREVE A AFIRMAR QUE SE ACREDITÓ EL  
"NOMBRAMIENTO DE CONSEJOS QUE  
"ASISTIERON A UNA INEXISTENTE SESIÓN DE  
"CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

"CUARTO.- Respecto a la parte final del  
"Considerando Quinto de la Resolución que nos  
"ocupa los argumentos que sostuvo la quejosa de  
"que no se cumplió cabalmente con lo dispuesto  
"por los artículos 461, 464 y 465 del Código de  
"Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán,  
"no es únicamente en razón de la obligación del  
"juez natural de dar lectura a las posturas, sino a la  
"relativa a la revisión jurídica de que se cumple con  
"la legalidad de las propuestas presentadas, esto  
"en función de que se cumplan los requisitos que  
"deben de reunir las posturas, tales como que sean  
"por escrito, presentadas por el representante legal  
"de una persona moral, quien debe contar con  
"poder jurídico suficiente y legalmente expedido  
"para este tipo de comparecencias ante un juez en

"un remate; pero todo ello observando lo ordenado  
 "por el artículo 465 del mismo código procesal  
 "invocado, en lo que se refiere a que el postor no  
 "puede rematar para un tercero sino con poder  
 "para ejercer actos de dominio, poder que como ya  
 "se dijo en el presente caso es insuficiente tal y  
 "como se encuentra expresado líneas arriba  
 "respecto a las deficiencias que tiene el poder con  
 "el que banco acude al presente remate, lo que en  
 "obvio de repeticiones inútiles solicito se tenga por  
 "transcrito como si a la letras se insertare.

"Lo que sorprende sobre manera a   
 "recurrente es que el juez de distrito <sup>primero y</sup>  
 "categóricamente que la juez natural <sup>JUSTICIA DE LA NACION</sup>  
 "posteriormente la sala civil responsable <sup>DE ACUER</sup>  
 "legalmente al confirmar el auto aprobatorio de  
 "remate y expresa que resulto correcta la  
 "calificación que el juez natural hizo de la postura  
 "presentada por Bancomer S.A., pero audazmente  
 "y sin que obviamente nadie haya dicho que la  
 "postura presentada por el suscrito no cumplió con  
 "lo dispuesto en el 462, (primera almoneda), y  
 "procede a descalificarla de plano e ilegalmente  
 "relevada a la Institución de Crédito de observar  
 "los requisitos del artículo 464 del referido código  
 "procesal el cual ordena claramente los requisitos  
 "que se deben de reunir las posturas que se



"presenten ante el juez rematante, cuando en la  
"parte conducente de su resolución afirmó:  
"Lo anterior nos conduce necesariamente a  
"concluir, que los agravios dirigidos a combatir  
"aquellas consideraciones de la Sala Responsable,  
"son notoriamente infundados, y de la misma  
"manera, lo son los argumentos enderezados a  
"sostener que no se cumplió con lo dispuesto por  
"los artículos 461, 464 y 465 del Código de  
"Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán,  
"en razón de que el primero de éstos dispositivos  
"legales se refiere la obligación del juez natural de  
"dar lectura y revisión de las propuestas  
"presentadas; del segundo de ellos se establece  
"los requisitos que se deben de reunir las posturas  
"escritas que se presenten ante el juez rematante;  
"y por ultimo el artículo 465 del mismo código  
"procesal invocado, se refiere a que el postor no  
"puede rematar para un tercero sino con poder  
"para ejercer actos de dominio, preceptos legales a  
"los que la sala civil responsable dio cumplimiento  
"al confirmar el auto aprobatorio de remate, habida  
"cuenta que resulto correcta la calificación que el  
"juez natural hizo de la postura presentada por  
"Bancomer, S.A. no así la postura presentada por  
"el quejoso, quien al haber ofrecido en su postura y  
"en pago del inmueble a rematado solo la cantidad  
"de cien pesos, este precio hace incorrecta dicha

"postura, si se toma en cuenta que aun cuando se  
 "trate de tercera almoneda, la venta judicial que así  
 "se opere, queda sujeta irrestrictamente a lo  
 "dispuesto por el artículo 1462 del Código Civil del  
 "Estado de Yucatán, el cual previene que las ventas  
 "judiciales en almoneda, subasta o remate público  
 "se regirán por las disposiciones de este titulo en  
 "cuanto a la substancia del contrato; en esencia la  
 "substancia del contrato de compraventa lo es el  
 "precio y la cosa; de ahí que aquel dispositivo legal  
 "deba ser relacionado con los artículos 1451, 1452  
 "y 1453 del mismo código sustantivo, de lo que se  
 "concluye que aun ante la ausencia de postores  
 "la audiencia de remate en que comparecieron  
 "impetrante de garantías, la postura propuesta por  
 "el hoy quejoso no podría ser calificada de legal,  
 "por haber ofrecido un precio lesivo visiblemente  
 "inferior al precio fijado para el remate, con las  
 "correspondientes deducciones a que se refiere el  
 "artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles  
 "del Estado; por otra parte, se observa que fue  
 "correcta la consideración de la sala al confirmar el  
 "auto apelado, al estimase legal la declaratoria de  
 "su juez inferior para fincar el remate a favor de la  
 "institución actora en el juicio natural, por tener los  
 "señores Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
 "Rivero Ramírez como representantes legales de  
 "Bancomer S.A., poder general aún para actos de







"dominio y para pedir el remate de los bienes  
"asegurados tomar parte en la subastas haciendo  
"postura y recibir pagos.

"No debe pasar desapercibido, y cabe aquí  
"puntualizar para ratificar la legalidad del fallo  
"combatido, en contraposición a lo alegado en los  
"conceptos de violación analizados, que cuando la  
"parte quejosa sostiene y reitera, que en el  
"documento cuestionado esto es, la escritura  
"pública número veintinueve mil quinientos  
"ochenta y siete (29,587) del veinticinco de  
"septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
"exhibida en el juicio de primer grado en copia  
"certificada, no se contienen las inserciones  
"relativas a la sesión del consejo de administración  
"de la institución de crédito Bancomer, Sociedad  
"Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo  
"Financiero, en la que se autoriza el otorgamiento  
"de poderes en favor de los señores Luis Enrique  
"García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez, ni las  
"inserciones correspondientes a las sesiones del  
"consejo de administración que autoriza otorgar  
"poderes a los señores Miguel García y García,  
"Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor  
"Manuel Borrás Setién, cabe considerar sin lugar a  
"dudas, que lo que pretendía la parte quejosa es  
"que en la escritura pública examinada, se  
"plasmara expresamente que el consejo de

"administración de la Institución de Crédito de la  
 "que se viene hablando, otorgara directamente a  
 "los señores Luis Enrique García Bert y Javier  
 "Jesús Rivero Ramírez, los poderes y facultades de  
 "los que se encuentran investidos, sin la  
 "intervención de otros funcionarios facultados para  
 "delegar poderes y facultades, lo que constituye  
 "aquí un aspecto insostenible, cuando los poderes  
 "a que se refieren los artículos 2553 y 2554 del  
 "Código Civil para el Distrito Federal, por su  
 "naturaleza pueden ser delegables, cuando así  
 "expresamente lo autoriza el órgano máximo de la  
 "sociedad mercantil y en el caso, se demuestra que  
 "tanto Luis Enrique García Bert y Javier Jesús  
 "Rivero Ramírez recibieron poderes y facultades de  
 "los señores Miguel García y García, Francisco  
 "Javier Fernández Carbajal y Víctor Manuel Borrás  
 "Setién, quienes a su vez recibieron poderes del  
 "consejo de administración de Bancomer, sociedad  
 "anónima, con facultades expresas para  
 "delegarlos, y, como se precisó, el consejo de  
 "administración recibió también, amplísimas  
 "facultades de la asamblea general de accionistas  
 "de la institución de crédito señalada, como órgano  
 "máximo de decisión y de acuerdo a sus estatutos  
 "sociales.

"Explicado de otra manera:



"1.- La asamblea general de accionistas de  
"Bancomer, sociedad anónima, Institución de  
"Banca Múltiple, Grupo Financiero, órgano máximo  
"de decisión, de conformidad con sus estatutos  
"sociales, acordó nombrar a los consejeros que  
"integrarían el consejo de administración y  
"otorgarle amplios poderes con expresa facultad  
"para delegarlos;

"2.- Este consejo de administración, con facultad  
"para delegar poderes y facultades, les confirió a  
"su vez en favor de Miguel García y García,  
"Francisco Javier Fernández Carbajal y Víctor  
"Manuel Borrás Setién, trasladándoles también, la  
"facultad expresa para delegar esos poderes que  
"recibieron del consejo;

"3.- A su vez, con esta facultad delegatoria, Miguel  
"García y García, Francisco Javier Fernández  
"Carbajal y Víctor Manuel Borrás Setién, otorgaron  
"poderes en favor de los señores Luis Enrique  
"García Bert y Javier Jesús Rivero Ramírez;

"4.- Luis Enrique García Bert y Javier Francisco  
"Rivero Ramírez, con las facultades y poderes  
"recibidos, sucesivamente por delegación que  
"acreditaron con la escritura pública número  
"veintinueve mil quinientos ochenta y siete (29,587)  
"del veinticinco de septiembre de mil novecientos  
"noventa y seis, demostraron su personalidad

"jurídica como apoderados de la institución de  
"crédito mencionada.

"Tan claro como esta, que tanto Luis Enrique  
"García Bert como Javier Jesús Rivero Ramírez,  
"quienes comparecieron al juicio de primer grado,  
"en donde el hoy quejoso compareció como postor  
"a la audiencia de remate, recibieron poderes y  
"facultades de la asamblea general de accionistas,  
"a través de la facultad delegatoria que otorgó  
"aquella asamblea, se llega al punto concluyente,  
"de que el quejoso carece de razón legal en la  
"controversia jurídica que planteó en el segundo y  
"tercer conceptos de violación.

SUPREMA COR  
JUSTICIA DE LA N  
REPUBLICA DE

"Lo que el juez de distrito no observa, resuelve  
"oficiosamente y se equivoca al dictar su  
"resolución, es que en este asunto nos  
"encontramos en presencia de UNA TERCERA  
"ALMONEDA, regida por el artículo 478 del Código  
"de Procedimientos Civiles para el Estado de  
"Yucatán, el cual a la letra dice:

"Artículo 478.- En la tercera almoneda, la venta se  
"hará al mejor postor; pero los postores deberán  
"exhibir en el acto mismo del remate el importe  
"total de su postura, así como el de las pujas y  
"mejoras que hicieren."

"Con lo que queda aclarado que la postura  
"presentada por el suscrito en la diligencia de  
"remate objeto del presente asunto sí cumple con



"todos los requisitos necesarios para una tercera  
 "almoneda que es el caso específico que hoy nos  
 "ocupa.

"La argumentación sostenida por el C. Juez de  
 "distrito recuerda aquella acalorada discusión de  
 "un cuerpo colegiado en que se debatía sobre la  
 "posesión de un pequeño local en un aeropuerto,  
 "en el cual ambas partes sostenían les  
 "correspondía la posesión de la fracción del  
 "inmueble, y a uno de los participantes de aquel  
 "pleno de discusión se le ocurrió sugerir que él ya  
 "conocía ese aeropuerto, que por cierto era muy  
 "elegante y que sus dimensiones eran las  
 "suficientes para que se reubicare a una de las  
 "partes en otro local, para lo cual otro de los  
 "participantes de aquella reunión recordó a aquel  
 "que a los jueces les toca resolver a cual de las  
 "partes contendientes le corresponde el mejor  
 "derecho sobre tal local, sin reparar en la grandeza  
 "o belleza del edificio que lo contiene. En las  
 "debidas proporciones tal es el argumento que  
 "sostiene el A Quo, al pretender examinar las  
 "condiciones de una compraventa, y si el precio en  
 "ella lesiona a una parte, cuando tal aspecto no  
 "resulta parte de la litis constitucional y lo que se  
 "cuestiona es la personalidad y la capacidad de  
 "adquirir de la persona moral supuestamente  
 "representada. No es necesario abundar en el

"razonamiento del Juez de Distrito por sus propios  
"argumentos.

"QUINTO.- (INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL  
"ARTÍCULO 27 FRACCIÓN V CONSTITUCIONAL)

"Por lo que respecta al Punto Sexto de los  
"considerandos del C. Juez Primero de Distrito, y  
"que refiere al concepto de violación enumerado  
"como "Cuarto" en la demanda de garantías, el C.

"Juez del conocimiento sostiene que no le asiste la  
"razón a la quejosa, argumentando para ello  
"consideraciones que son de apreciación errónea,

"y que contrario a lo manifestado por el resolutor  
"federal, sus propios argumentos son suficientes

"para Conceder el Amparo y protección de la  
"Justicia Federal a la Quejosa en atención a lo  
"siguiente:

"En el cuarto concepto de violación la quejosa se  
"inconforma en contra del fallo de la sala  
"responsable argumentando esencialmente, que la  
"autoridad responsable al emitir el acto reclamado  
"incurre nuevamente en la falta de estudio de los  
"agravios planteados, porque argumentó la  
"inconstitucionalidad del auto probatorio de remate  
"por contravenir lo dispuesto por la fracción V del  
"artículo 27 constitucional que Bancomer, S.A.,  
"aquí tercero perjudicada, carece de capacidad  
"para adquirir bienes de la cual no goza de acuerdo  
"con lo establecido en el artículo 27 de la



"constitución federal y 46 de la Ley de Instituciones  
 "de Crédito; que los bancos tienen limitada su  
 "capacidad de adquirir el dominio de tierras y  
 "aguas y que solo podrán tener y adquirir los  
 "bienes inmuebles que sean enteramente  
 "necesarios a su objeto directo, y que los bienes  
 "que no sean estrictamente necesarios para  
 "realizar el objeto social de la institución crediticia  
 "no pueden ser adquiridos por la misma; que en el  
 "caso de ninguna manera se puede concluir que el  
 "inmueble adjudicado en remate sea enteramente  
 "necesario o indispensable para la prestación del  
 "servicio público de banca y que si no es  
 "indispensable para la prestación de los servicios  
 "bancarios, la institución de crédito no puede  
 "adquirirlo, apartándose la autoridad responsable  
 "del espíritu del constituyente y de manera  
 "contraria al artículo 27 Constitucional aún cuando  
 "lo invoca para resolver; que la responsable  
 "consideró que la prohibición a que se contrae la  
 "fracción V del artículo 27 Constitucional n es  
 "imperativa, sin embargo lo que la responsable  
 "deliberadamente omite considerar es que al ser el  
 "servicio de la banca y crédito una actividad  
 "concesionada por el Estado, dicha actividad se  
 "encuentra sujeta al régimen de autoridad, y de  
 "esta forma, lo que no esta jurídicamente permitido  
 "a los bancos, les esta legalmente prohibido, por lo

"que con mayor razón les está prohibido adquirir  
"más bienes que los indispensables a su objeto  
"directo.

"No le asiste la razón a la quejosa porque las  
"consideraciones legales que dan sustento a sus  
"agravios son todas ellas inexactas.

"El artículo 27 de la Constitución Política de los  
"Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V,  
"dispone: "Los Bancos debidamente autorizados  
"conforme a las leyes de Instituciones de Crédito  
"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo".

"En la especie es menester precisar el alcance  
"legal de la transcrita fracción V del artículo 27 de  
"la Constitución Federal.

"Para llevar a cabo esa labor, conviene acudir a los  
"principales métodos de interpretación de una  
"norma, a saber: 1.- El gramatical, cuya función es  
"encontrar el significado, sentido, extensión y  
"connotación de los términos del lenguaje; 2.- El de  
"exégesis; analítico-sintético, que pretende  
"descubrir el pensamiento auténtico y la voluntad  
"del legislador, en el momento en que dictó la  
"norma, tomando también en cuenta el momento





"literal; 3.- El Histórico, también llamado de la  
"evolución histórica cuya finalidad es fija la  
"aplicación que debe darse a las normas positivas  
"en las nuevas condiciones político-sociales,  
"históricas y económicas de la época en que debe  
"aplicarse la ley, al considerar en está época su  
"naturaleza propia, ajena a la voluntad del  
"legislador; 4.- El sistemático, que pretende  
"investigar la costumbre para resolver conforme a  
"ella el caso dudoso; 5.- El dialéctico, que sirve  
"para determinar el alcance de la norma tomando  
"en cuenta no solo la costumbre sino el fin social  
"que persiguió al dictar la norma; 6.- El causal, que  
"persigue la finalidad de encontrar la verdad  
"investigada, los fines políticos y sociales, así  
"como la naturaleza de su régimen; y, 7.- El crítico,  
"que parte de la letra de la ley y de la voluntad del  
"legislador para procurar la verdad mediante la  
"libre investigación por el juzgador de las  
"condiciones económicas, sociales y políticas,  
"usando para ello un criterio científico.

"Así para entender la causa motivadora de la  
"redacción de la fracción V del artículo 27  
"constitucional, debe acudirse al método de  
"interpretación histórico, tomando en cuenta las  
"condiciones que prevalecían en el país en 1917,  
"dada la posición especial en que se encontraban  
"en esa época los bancos y por el régimen de

"derecho en que se desarrollaban sus actividades.

"De lo que es lógico concluir que se pretendió

"legislar en cuestión bancaria, sobre bases más

"acordes con la equidad y mas bien encausadas

"para derivar los resultados de la función

"económica de los bancos hacia el colectivo

"beneficio y no para el singular privilegio de los

"capitales privados con interés en aquellas

"instituciones, pretendiendo desaparecer un

"sistema de privilegios en perjuicio de los pobres.

"Este fue el espíritu filosófico del legislador para

"proteger el libre juego de la riqueza pública

"evitando su estancamiento y deficiente

"productividad en poder de manos muertas.

"Ahora bien, si bien es cierto que el texto original

"de la fracción transcrita, pretendió modificarse por

"la comisión respectiva del congreso constituyente

"de 1917, para agregarle: "que transitoriamente y

"por el breve plazo que fijarán las leyes, los bancos

"podían tener en propiedad aquellos bienes que se

"les adjudicaran judicialmente en pago de sus

"créditos", y también es verdad que dicha adición

"no fue aprobada.

"Efectivamente, del diario de debates del congreso

"de constituyente correspondientes a los días

"veintinueve, treinta, treinta y uno de enero de mil

"novecientos diecisiete, se puede leer:



"...El C. Secretario: La fracción V del artículo 27,  
"dice "V. Los bancos debidamente autorizados  
"conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes; pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo."

"Está a discusión.

"El C. Espinosa: Pido la palabra para hacer una  
"interpelación a la comisión (Voces: ¡Esta  
"supada!).

"El C. Zavala Dionisio: Que el Ministro de Hacienda  
"diga algo sobre esto.

"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Nieto.

"El C. Nieto: Una sencilla aclaración, señores  
"diputados. Dice el dictamen: "V. Los bancos  
"debidamente autorizados conforme a las Leyes de  
"Instituciones de Crédito, podrán tener capitales  
"impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas,  
"de acuerdo con las prescripciones de dichas  
"leyes; pero no podrán tener en propiedad o en  
"administración más bienes raíces que los  
"enteramente necesarios para su objeto directo.

"Indudablemente, la comisión tuvo en su mente el  
"Banco Unico de Emisión, pero no se acordó de  
"que hay otros bancos. Indudablemente que se

"establecerá un sistema de Bancos Hipotecarios y  
 "sería absurdo decir que los Bancos Hipotecarios  
 "pueden hacer hipotecas; como si dejáramos Que  
 "el Banco Unico de Emisión puede emitir billetes.  
 "Además, hay casos en que los Bancos, aún los no  
 "hipotecarios, pueden tener necesidad de adquirir  
 "propiedades, transitoriamente. En una ley de 1859,  
 "hay un precepto que dice que los Banco de  
 "Emisión pueden tener propiedades raíces, cuando  
 "tengan créditos que sean insolutos en otra forma;  
 "por consiguiente, me permito proponer que se  
 "forme esta fracción: "Los Bancos Hipotecarios  
 "debidamente autorizados por las **Suprema Corte de Justicia de la Nación** **Secretaría General de**  
 "Instituciones de Crédito, podrán, además de  
 "imponer capitales sobre bienes raíces, poseer y  
 "administrar dichos bienes en el sentido que  
 "determinen las leyes. En cuanto a los bancos no  
 "hipotecarios, solo podrán poseer los edificios  
 "necesarios para su objeto directo". Etcétera.

"Se propone:

"V. Los bancos debidamente autorizados,  
 "conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
 "podrán tener capitales impuestos sobre  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes, pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración,  
 "mas bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo; y transitoriamente, por el



"breve plazo que fijan las mismas leyes, los que se  
 "les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
 "créditos."

"Está a discusión.

"El C. Espinosa: Pido la palabra.

"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Espinosa.

"El C. Espinosa: He pedido la palabra para esto:  
 "necesito saber si la comisión ya se desocupó.

"El C. Múgica: Ya esta lista la comisión.

"El C. Espinosa: Las Instituciones de Crédito  
 "Hipotecario, entre otros objetos determinados,  
 "tienen el de gravar bienes raíces para que cuando  
 "se venza el plazo de la cantidad prestada, puedan  
 "ser devueltas esas propiedades, como es natural;  
 "yo quiero saber si ese es el objeto a que se  
 "contrae esta fracción V; quiero que se me  
 "conteste.

"El C. Lizardi: Como la comisión esta ocupada,  
 "según parece yo contestaré en nombre de ella en  
 "ese sentido: El objeto de los Bancos Hipotecarios  
 "no es apoderarse de los bienes raíces, sino  
 "sencillamente garantizarse con ellos para que, en  
 "caso de que no se pague la cantidad prestada,  
 "sacarlos a remate.

"El C. Espinosa: Así es como lo entiendo pero de  
 "aquí se desprende otra cosa:

"V. Los bancos debidamente autorizados  
 "conforme a las leyes de instituciones de crédito,

"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración,  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo y transitoriamente, por el  
"breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se  
"les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
"créditos."

"Pero no se entiende eso así, no está clara  
"redacción por eso es que yo pregunto.

"El C. Colunga, miembro de la comisión: Me voy a  
"permitir leer nuevamente el inciso a discusión:

"V. Los bancos debidamente autorizados  
"conforme a las leyes de instituciones de crédito,  
"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más raíces que los enteramente necesarios para  
"su objeto directo; y transitoriamente, por el breve  
"plazo que fijen las mismas leyes, los que se les  
"adjudiquen judicialmente en pago de sus  
"créditos."

"La Comisión no comprende el fragmento de la  
"objeción del C. Diputado Espinosa, parece que  
"está bastante claro el asunto; en primer lugar, se  
"autoriza a los bancos para tener capitales



"impuestos; y, en segundo lugar se les prohíbe  
"tener bienes raíces, fuera de los que sean  
"estrictamente indispensables para su objeto.

"El C. Secretario: ¿Se considera suficientemente  
"discutido?

"Se reserva para su votación. (Voces: ¡no! ¡no!)

"Se retira la propuesta.

"APROBADO EL TEXTO: Los bancos debidamente  
"autorizados, conforme a las leyes de instituciones  
"de crédito, podrán tener capitales impuestos  
"sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo  
"con las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"los bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo."

"Sin embargo, el hecho de que no haya sido  
"aprobada la adición propuesta, no quiere decir,  
"que era claro el espíritu del legislador en el  
"sentido de prohibir tajantemente que los bancos  
"adquieran, aún provisionalmente, bienes raíces  
"adjudicados judicialmente supuesto que como se  
"lee de la parte transcrita del diario de debates  
"cuando ya se iba a someter a votación la aludida  
"fracción V, por haberse considerado  
"suficientemente discutida, la comisión retiró la  
"adición propuesta, circunstancia que originó que  
"la asamblea no manifestara su opinión mediante  
"una votación sobre las facultades de adjudicación

"temporal de los bancos, quedando el precepto en  
"la forma que actualmente existe en la Carta  
"Magna.

"Así, si la prohibición que contenía la fracción V del  
"artículo 27 constitucional, tenía por origen impedir  
"que la propiedad raíz se incorporara a bienes de  
"manos muertas es inconcuso e indudable que  
"toda decisión que contrarie el motivo del  
"legislador para consignar esa norma en la  
"constitución, violará ésta; pero las necesidades  
"propias del funcionamiento del crédito y las  
"circunstancias económicas del país, requieren  
"que provisionalmente exista esa adjudicación  
"conservando la movilidad de la propiedad raíz, de  
"modo que resulta evidente que no se contraría en  
"el fondo el motivo ni la mente del legislador  
"constitucional al considerar esas limitaciones. A  
"mayor abundamiento, no hubo, como ya se dijo,  
"votación expresa en el sentido de desechar la  
"adición, ni pudo haberla, porque esta fue retirada  
"por la comisión, por haber sido objetada.

"Esta es la conclusión a que se llega, tomando  
"como base para ello el análisis del mencionado  
"precepto constitucional, en razón de la  
"interpretación histórica, cuya finalidad, como se  
"dijo, es fijar la aplicación que debe darse a las  
"normas positivas en las nuevas condiciones







"políticos-sociales históricas y económicas de la  
"época en que debe aplicarse la ley.

"Por otra parte, aún recurriendo como medio de  
"interpretación autentica a la ficción de establecer  
"que el criterio de la asamblea constituyente (al  
"discutir la fracción V del artículo 27), fue el mismo  
"de la comisión (erradicar la posibilidad de que los  
"bancos tuvieran aún transitoriamente en su poder  
"bienes raíces), puede asegurarse que el texto  
"constitucional es susceptible de una  
"interpretación progresiva, acorde con la economía  
"social y con el desarrollo evolutivo y progresista  
"del país.

"Ciertamente, las condiciones que prevalecían en  
"el país en 1917, por la posición especial en que se  
"encontraban los bancos y por el régimen de  
"derecho en que se desarrollaban sus actividades,  
"ya no pueden hacerse valer, pues desaparecida la  
"causa del temor de consagrar un sistema de  
"privilegios en perjuicio de los pobres, o con más  
"propiedad de la conveniencia social o colectiva,  
"desaparece también la repugnancia de aquella  
"adición propuesta, no pugna pues con el espíritu  
"filosófico, con la causa, con la esencia, con la  
"razón motriz en la que se inspiró el constituyente  
"de proteger el libre juego de la riqueza pública,  
"evitando su estancamiento y defectuosa  
"productividad en poder de manos muertas.

"El momento psicológico en que actuaron los  
"legisladores constituyentes, ha cambiado; el  
"sociológico también; la evolución no se detiene, y  
"la economía del país requiere que las leyes, aún  
"las constitucionales, se interpreten en  
"concordancia y armonía con la época en que  
"deben aplicarse.

"En esa medida, es válido concluir que la  
"adjudicación temporal para los bancos, en juicios  
"seguidos por ellos, sin privilegio procesal alguno,  
"exactamente en las condiciones de cualquier  
"particular sólo podría estimarse encaminada al  
"desacato de la prohibición constitucional de  
"adquirir y administrar bienes raíces, si esa  
"temporalidad corriese el riesgo de convertirse en  
"perpetuidad.

"Lo que no sucede en la actualidad, toda vez que  
"por ello precisamente el artículo 106, fracción XIII,  
"de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone que  
"cuando una institución de crédito reciba en pago  
"de adeudos o por adjudicación en remate dentro  
"de juicios relacionados con créditos a su favor,  
"títulos o valores que no deba conservar en su  
"activo, así como bienes o derechos de los  
"señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las  
"disposiciones de carácter general que establezca  
"la Comisión Nacional Bancaria, esto es, a las  
"relativas a que los bancos saquen a remate los



"bienes que, a su vez, hubieren adquirido en  
"remates judiciales. De donde se puede advertir,  
"finalmente, la temporalidad en que las  
"instituciones de crédito tienen en su poder bienes  
"raíces que no son estrictamente necesarios para  
"su objeto social.

"Ahora bien, respecto de las violaciones al artículo  
"46 de la Ley de Instituciones de Crédito, son  
"infundadas, pues de una interpretación armónica  
"con lo expuesto en los párrafos precedentes, se  
"desprende que las Instituciones de Crédito están  
"facultadas para adquirir bienes que no estén  
"destinados a su objeto social, siempre y cuando  
"sea de una manera transitoria.

"Sirve de apoyo a todo lo anteriormente expuesto  
"la tesis de la Tercera Sala de la H. Suprema Corte  
"de Justicia de la Nación, visible en la página 2586,  
"del Tomo LIV, del Semanario Judicial de la  
"Federación, Quinta Epoca, que dice:

"INSTITUCIONES DE CREDITO, SU CAPACIDAD  
"PARA POSEER Y ADMINISTRAR BIENES RAICES.

"La comisión respectiva del Congreso  
"Constituyente, siguiendo el criterio sustentado en  
"el proyecto, respecto de las corporaciones civiles  
"y eclesiásticas y de las sociedades anónimas  
"civiles y mercantiles, sometió a la aprobación de  
"la asamblea una adición al artículo 27  
"constitucional, en el sentido de que los bancos no

"podrían tener propiedad ni administrar más bienes  
 "raíces que los enteramente necesarios para su  
 "objeto directo, adición que primordial y  
 "esencialmente tuvo como origen seguir la  
 "tendencia de que la propiedad raíz fuera manejada  
 "individualmente y no por personas morales, y  
 "dejar esos bienes raíces dentro del juego  
 "económico del país; ésta idea fundamental es la  
 "que se objetiva en la fracción V del artículo 27  
 "constitucional y la que da su significado jurídico.  
 "Es cierto que también se propuso la adición en el  
 "sentido de conceder a los bancos la facultad de  
 "adjudicarse transitoriamente los bienes, sobre los  
 "que accionaran a virtud de sus créditos, y que al  
 "ponerse a discusión fue objetada, fundándose la  
 "objeción, esencialmente, en el sentido de las  
 "irregularidades y abusos que cometían las  
 "instituciones de crédito, por los privilegios y  
 "prerrogativas que les concedía la Ley de  
 "Instituciones de Crédito de 1897, ya que sólo  
 "utilizaban a los jueces para la aprobación de los  
 "remates y privaban a sus deudores de todos los  
 "derechos que les confieren en los litigios que se  
 "desarrollan entre particulares, haciendo mención  
 "también a las grandes ganancias que obtenían  
 "con sus operaciones y con la adjudicación de las  
 "propiedades raíces, y cuando ya se iba a someter  
 "a votación la fracción, por haberse considerado



"suficientemente discutida, la comisión retiró la  
"adición propuesta, circunstancia que originó que  
"la asamblea no manifestara su opinión mediante  
"una votación sobre la facultad de adjudicación  
"temporal de los bancos quedando el precepto en  
"la forma que actualmente existe en la Carta  
"Magna. Si pues, no hubo manifestación expresa  
"de la voluntad de la asamblea constituyente,  
"prohibiendo a los bancos, de manera absoluta la  
"sentencia y administración de bienes raíces, y en  
"cambio, la prohibición que contiene la fracción V  
"del artículo 27 constitucional, tenía por origen el  
"de impedir que la propiedad raíz se incorporar a  
"bienes de manos muertas, es inconcuso e  
"indudable que toda decisión que contrarie el  
"motivo del legislador para consignar esa norma en  
"la Constitución, violará ésta; pero las necesidades  
"propias del funcionamiento del crédito y las  
"circunstancias económicas del país, requieren  
"que provisionalmente exista esa adjudicación,  
"conservando la movilidad de la propiedad raíz,  
"resulta evidente que no se contraría en el fondo el  
"motivo ni la mente del legislador constitucional al  
"considerar esas limitaciones. A mayor  
"abundamiento, no hubo, como ya se dijo, votación  
"expresa en el sentido de desechar la adición, ni  
"pudo haberla, porque ésta fue retirada por la  
"comisión, por haber sido objetada, pero aun

"recurriendo como medio de interpretación  
 "auténtica a la ficción de establecer que el criterio  
 "de la Asamblea Constituyente fue el mismo de la  
 "comisión, puede asegurarse que el texto  
 "constitucional es susceptible de una  
 "interpretación progresiva, acorde con la economía  
 "social y con el desarrollo evolutivo y progresista  
 "del país. El argumento de la objeción, o mejor  
 "dicho, sus conclusiones, no pueden  
 "desarticularse de los hechos en que descansa las  
 "condiciones que prevalecían en el país en 1917  
 "por la posición especial en que se encontraban  
 "los bancos y por el régimen de derecho en que se  
 "desarrollaban sus actividades de lo que se concluye  
 "concluir que suprimidos de la República, sobre  
 "bases distintas más acordes con la equidad y más  
 "bien encausadas para derivar los resultados de la  
 "función económica de los bancos hacia el  
 "colectivo beneficio y no para el singular privilegio  
 "de los capitales privados con interés en aquellas  
 "instituciones, la conclusión obtenida entonces ya  
 "no puede valer después, y desaparecida la causa  
 "del temor de consagrar un sistema de privilegios  
 "en perjuicio de los pobres, o con más propiedad  
 "de la conveniencia social o colectiva, desaparece  
 "también la repugnancia que aquella adición  
 "propuesta, no pugna con el espíritu filosófico, con  
 "la causa esencia, con la razón motriz en la que se



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACION  
 SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACION



"inspiro el Constituyente de proteger el libre juego  
"de la riqueza pública, evitando su estancamiento y  
"defectuosa productividad en poder de manos  
"muertas. El momento psicológico en que actuaron  
"los legisladores constituyentes, ha cambiado; el  
"sociológico también; la evolución no se detiene, y  
"la economía del país requiere que las leyes, aun  
"las constitucionales, se interpreten en  
"concordancia y armonía con la época en que  
"deben aplicarse, sin desatender a las variantes y  
"modalidades que presenta el progreso económico  
"y a los organismos encargados más  
"cuidadosamente de llenar una verdadera  
"necesidad social. La adjudicación temporal para  
"los bancos, en juicios seguidos por ellos, sin  
"privilegio procesal alguno, exactamente en las  
"condiciones de cualquier particular y después de  
"que no se han conseguido en la almoneda, sólo  
"podría estimarse encaminada al desacato de la  
"prohibición constitucional de adquirir y  
"administrar, si esa temporalidad corriese riesgo  
"de convertirse en perpetuidad; pero aun siendo  
"así, existiendo la prevención expresa de  
"desprenderse de lo adquirido en corto plazo, no  
"sólo no se atenta contra el espíritu y objetos  
"verdaderos de la ley fundamental, sino que  
"conciliándose intereses respetables, se garantiza

"el desarrollo de una importante rama de la  
"economía nacional.

"Asimismo, es aplicable al caso, la Tesis de la  
"Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de  
"la Nación visible en la página 1803, del Tomo  
"XXXI, Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la  
"Federación, que dice:

"**"BANCOS, BIENES RAICES DE LOS.** Aunque el  
"artículo 27 constitucional dice: que los bancos  
"debidamente autorizados no podrán tener en  
"propiedad o en administración, mas bienes raíces  
"que los enteramente necesarios para su objeto  
"directo, y que el artículo 256 de la ley bancaria  
"repite esa prohibición, permitiendo solo que  
"posean transitoriamente y previo permiso de la  
"secretaría de hacienda, los que tengan que  
"adjudicarse para cobrar sus créditos, como la  
"misma ley manda que si los bancos no enajenan  
"dentro de determinado plazo, los inmuebles que  
"por esa razón adquieran, los mismos serán  
"sacados a remate por la secretaria de hacienda, es  
"indudable que no hay contradicción alguna entre  
"las prevenciones del artículo 27 constitucional y  
"las de la ley bancaria, pues lo que la constitución  
"y la citada ley han querido evitar, es la  
"incorporación de bienes de manos muertas. nota:  
"el artículo 27 constitucional se refiere a su  
"fracción V.





"Finalmente se invoca la tesis jurisprudencial  
 "número XI.2°37C. emitida por el Segundo Tribunal  
 "Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a  
 "fojas 930 del Tomo III mes de junio de mil  
 "novecientos noventa y seis, del Semanario  
 "Judicial de la Federación novena época, con el  
 "siguiente título:

"**REMATE. LA ADJUDICACION POR, EFECTUADA**  
**"EN FAVOR DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO**  
**"ES CONTRARIA AL ARTÍCULO 27, FRACCION V,**  
**"CONSTITUCIONAL.** Del estudio armónico que se  
 "hace de los artículos 1o., 2o., 9o. y 30 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito, se arriba al conocimiento  
 "que que la misma tiene por objeto regular entre  
 "otros, el servicio de banca y crédito, considerando  
 "éste como la captación de recursos del público  
 "para su colocación en el mercado nacional,  
 "mediante actos causantes de pasivo directo o  
 "contingente, quedando el intermediario obligado a  
 "cubrir el principal y, en su caso, los accesorios  
 "financieros de los recursos captados. Así, si los  
 "bancos tienen como objeto directo, la prestación  
 "del servicio de banca y crédito en los términos de  
 "dicha Ley, resulta inconcuso que tanto la  
 "colocación de los créditos en el público como su  
 "recuperación forman parte del objeto directo, al  
 "margen de que para esto último las instituciones  
 "de crédito se apropien en adjudicación por

"remate, de bienes raíces, puesto que éstos  
 "representan en sí dichos recursos captados que  
 "en su oportunidad fueron colocados en el público.  
 "De lo anterior, es inobjetable que el dominio y  
 "administración que los bancos ejercen sobre los  
 "bienes raíces en esa forma adjudicados, se hace  
 "con la finalidad indiscutible y necesaria de  
 "continuar cumpliendo con su objeto directo, lo  
 "que desde luego, lejos de pugnar con el artículo  
 "27, fracción V, constitucional, es acorde con él, al  
 "disponer que no podrán las instituciones de  
 "crédito tener más bienes raíces que los  
 "enteramente necesarios para su objeto directo.  
 "En las relatadas condiciones, se concluye que la  
 "Sala Responsable estuvo en lo correcto al  
 "confirmar el auto aprobatorio de remate dictado  
 "en los autos del juicio natural, pues como ya se  
 "precisó con anterioridad, las instituciones de  
 "crédito como la ahora tercero perjudicada, si  
 "pueden adquirir transitoriamente bienes raíces,  
 "sin que ello implique desacato a la norma  
 "constitucional prevista en la fracción V del artículo  
 "27 de la Carta Magna, según se ha precisado con  
 "anterioridad, ni transgresión a lo dispuesto por los  
 "artículos 46 y 106 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito cualquiera que sea el mecanismo por el  
 "cual adquieran los bienes inmuebles, ya sea  
 "mediante adjudicación judicial, o concurriendo



"como postores al remate en el que hayan  
 "comparecido como parte actora, puesto que  
 "ambos modos de adquirir la propiedad tienen  
 "como única y exclusiva finalidad, recuperar la  
 "inversión de los créditos otorgados a los diversos  
 "deudores, que como se puntualizó, constituye uno  
 "de los objetos directos de las instituciones  
 "bancarias.

"Como resultado de ello, al estimarse en una  
 "primera parte inoperante, y por la otra infundados,  
 "los conceptos de violación expresados por la  
 "parte quejosa, lo procedente es negar al amparo y  
 "protección de la justicia federal solicitado."

"El Juez del conocimiento expone que existen  
 "diversos tipos de interpretaciones de la Norma  
 "Jurídica, que según se lee son los siguientes: El  
 "gramatical, El de exégesis; el histórico, el  
 "sistemático, el dialéctico, el causal y el crítico. Y a  
 "la postre examina la fracción V del numeral 27  
 "constitucional a la luz de lo que el llama el método  
 "histórico, expresado literalmente: "también  
 "llamado de la evolución Histórica, cuya finalidad  
 "es fijar la aplicación que debe darse a las normas  
 "positivas en las nuevas condiciones político -  
 "sociales, históricas y económicas de la época en  
 "que debe aplicarse la Ley, al considerar en esta  
 "época su naturaleza propia, ajena a la voluntad del  
 "legislador".(sic)

"Con la llamada interpretación histórica a que el A  
 "Quo somete a la fracción V del numeral 27  
 "Constitucional, el C. Juez de Distrito atenta contra  
 "diversas disposiciones de nuestra Carta Magna  
 "dentro de las cuales podemos mencionar el  
 "numeral 128, que establece la obligación de los  
 "funcionarios públicos antes de tomar posesión del  
 "cargo, de guardar la constitución, entendiéndose  
 "por tal expresión, el compromiso expreso y formal  
 "de hacer cumplir y respetar el texto  
 "constitucional; de la misma manera atenta contra  
 "lo dispuesto en el artículo 40 constitucional, ya  
 "que este reza:

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en  
 "una República representativa, democrática,  
 "federal, compuesta de Estados libres y soberanos  
 "en todo lo concerniente a su régimen interior;  
 "pero unidos en una Federación establecida según  
 "los principios de esta Ley Fundamental."

"Texto del cual se puede escribir un tratado  
 "completo, pero que sin embargo lo importante de  
 "este para la especie se puede sintetizar en lo que  
 "la palabra democrática implica, por su origen  
 "etimológico, el poder del pueblo. Si las cuestiones  
 "que atañen a toda la comunidad deben ser  
 "resueltas por ella misma, que es el concepto de  
 "república, (de los vocablos latinos: res, publica) y  
 "en el entendido de que no toda la comunidad



"puede participar a la vez en las decisiones y debe  
 "nombrar representantes, de lo cual se desprende  
 "el adjetivo de representativa; la manera de  
 "nombrar a esos representantes resulta definitiva  
 "del término democrática. Quiere decir que el  
 "pueblo debe manifestar su voluntad mediante el  
 "voto para que sus representantes obtengan  
 "legitimidad y tengan la capacidad para resolver  
 "por todos como una voluntad conjunta de la  
 "república.

"Por su parte el diverso Artículo 49 Constitucional  
 "establece: "El Supremo Poder de la Federación se  
 "divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo  
 "Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos  
 "Poderes en una sola persona o corporación, ni  
 "depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el  
 "caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de  
 "la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29.



A CORTE  
 DE LA NACION  
 FEDERAL DE JUDICIA

"En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el  
 "segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán  
 "facultades extraordinarias para legislar."

"Este artículo constitucional consagra el principio  
 "de la llamada "división de poderes", por lo que es  
 "uno de los preceptos más importantes de nuestra  
 "Constitución.

"Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados  
 "Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso

**"General, que se dividirá en dos Cámaras, una de  
"Diputados y otra de Senadores.**

**"El transcrito artículo 50 se ubica en el título  
"tercero, capítulo II, denominado "Del Poder  
"Legislativo", y dispone que éste se deposita en un  
"Congreso General dividido en dos Cámaras, una  
"de Diputados y otra de Senadores. Adopta el  
"precepto en cuestión el sistema bicamarista para  
"el desempeño de "la función legislativa" en la que  
"intervienen los diputados, representantes del  
"pueblo y los senadores que representan a los  
"Estados de la Federación.**

**"Por último el diverso artículo 135 Constitucional  
"establece el procedimiento de reformas a la  
"Constitución mismo que a la letra dice: "La  
"presente Constitución puede ser adicionada o  
"reformada. Para que las adiciones o reformas  
"lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el  
"Congreso de la Unión, por el voto de las dos  
"terceras partes de los individuos presentes,  
"acuerde las reformas o adiciones, y que éstas  
"sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas  
"de los Estados.**

**"El Congreso de la Unión o la Comisión  
"Permanente en su caso, harán el cómputo de los  
"votos de las Legislaturas y la declaración de haber  
"sido aprobadas las adiciones o reformas".**



"Es aquí importante recordar los antecedentes de  
"este numeral, no como práctica de exégesis, sino  
"en el entendido de que el examen de la historia  
"nos facilita el conocimiento de los hechos  
"actuales.

"A lo largo de la historia el constitucionalismo  
"mexicano ha ensayado diversos mecanismos de  
"reforma constitucional que, desde una perspectiva  
"formal, al estar caracterizados por sus términos  
"dificultados en la aprobación de las enmiendas.

"La Constitución Federal del 4 de octubre de 1824,  
"primera del México independiente, adoptó para su  
"reforma el modelo francés, aunque atenuado, que  
"como ejemplo le exhibía la Constitución gaditana  
"y además, lo combinó con un toque federalista.

"El artículo 166 de esta Constitución señaló que las  
"legislaturas locales, exclusivamente, estaban  
"facilitadas para hacer observaciones sobre  
"determinados artículos de la Constitución y del  
"Acta Constitutiva.

"La iniciativa debía promoverse ante el Congreso  
"General, quien solamente podría decidir sobre  
"aquellas observaciones merecedoras de ser  
"consideradas por un segundo congreso general  
"ordinario, a quien correspondería aprobarlas  
"definitivamente, sin que el Ejecutivo federal  
"pudiera interponer su veto.

"Las iniciativas de las legislaturas, sin embargo, no  
 "podrían ser tomadas en consideración sino a  
 "partir del año de 1830. Además de esta decisión  
 "sobre la permanencia relativa de su obra, el  
 "Constituyente de 1824 declaró en el artículo 171  
 "que jamás se podrían reformar los artículos que  
 "contenían la libertad e independencia de México,  
 "su religión, su forma de gobierno, la libertad de  
 "imprensa y la división de los poderes supremos de  
 "la Federación y de los estados. Seguramente, la  
 "protección de su permanencia y la declaración de  
 "los referidos principios pétreos obedecía a los  
 "temores que despertaban los fantasmas de  
 "entronización de un príncipe borbón o el retorno  
 "de Iturbide.

"Como fuera, la Constitución del 4 de octubre  
 "permaneció sin cambios hasta su supresión por el  
 "golpe de Estado de 1835.

"La Constitución centralista de 1836, ante la  
 "inestabilidad general que producía una nación en  
 "busca de su propia identidad, hizo patente  
 "también su instinto de sobrevivencia, y declaró en  
 "el artículo primero de la Ley Séptima, que no  
 "podrían hacerse alteraciones a la Constitución  
 "sino pasados seis años de su publicación. Aunque  
 "lo tormentoso de su efímera vigencia no alcanzó  
 "el plazo para que las enmiendas se produjesen, es  
 "pertinente recordar que se encomendaba





"entonces al Poder Ejecutivo, a los diputados y en  
 "ciertas materias también a las juntas  
 "departamentales, la facultad de iniciar ante el  
 "Congreso las reformas constitucionales, que por  
 "éste debían ser aprobadas bajo el mismo  
 "procedimiento que las leyes ordinarias,  
 "incluyendo el veto presidencial, pero con la  
 "necesaria sanción de ese demiurgo teórico  
 "llamado Supremo Poder Conservador.

"El hondo espíritu democrático de la Asamblea  
 "Constituyente de 1856-1857 hizo surgir en este  
 "Congreso, por vez primera en el  
 "constitucionalismo mexicano, el planteamiento de  
 "que las reformas constitucionales fueran  
 "aprobadas por el pueblo. El primer proyecto del  
 "artículo 125 que la Comisión de Constitución  
 "sometió a la consideración del Congreso,  
 "proponía que los proyectos de reforma fueran  
 "aprobados por un primer congreso ordinario, por  
 "votación de las dos terceras partes de sus  
 "miembros presentes, proyecto al que después  
 "tendría que dársele amplia difusión en los  
 "periódicos, para que un segundo congreso  
 "ordinario formulara en definitiva el proyecto de  
 "reformas, y éstas se sometieran al voto del  
 "pueblo.

"El proyecto fue considerado demasiado rígido, y  
 "la propia comisión estuvo de acuerdo en aligerarlo

"suprimiendo la participación del segundo  
"congreso y la publicación de los acuerdos en los  
"periódicos pero, en todo caso, conservando el  
"voto del pueblo.

"A pesar de ello, en un mar de inquietudes,  
"perspicacias y temores fracasó la fórmula,  
"habiéndose aprobado al final, como artículo 127,  
"por 678 votos a favor y 14 en contra, un  
"procedimiento que en definitiva se alejaba del  
"modelo francés y de la apelación al pueblo, para  
"aproximarse al sistema de la Constitución  
"norteamericana. Si en aquél lo medular era dar  
"satisfacción al principio teórico de la soberanía,  
"en éste el problema que se pretendía resolver en  
"el marco del Estado federal, era la relación entre  
"los estados y la Federación.

"El artículo 127 de la última Constitución del siglo  
"pasado declaraba que la misma podía ser  
"adicionada o reformada, pero para que las  
"adiciones o reformas llegaran a ser parte de ella,  
"era requisito que el Congreso de la Unión, por el  
"voto de las dos terceras partes de sus individuos,  
"las acordaran, y que las mismas fuesen aprobadas  
"por la mayoría de las legislaturas de los estados.  
"La mano del único miembro real de la Comisión de  
"Estilo del Constituyente, don Leonardo Francisco  
"Antonio Guzmán Montes de Oca, se hizo sentir  
"también en este artículo, pues al incorporar la



"palabra "presentes", después de la de  
"individuos" atenuó drásticamente el quórum de  
"votación exigido para aprobar las reformas, pues  
"muchacha distancia hay entre las dos terceras partes  
"del total de diputados, y las dos terceras partes de  
"los presentes en la cámara.

"A pesar de los avatares en la positividad de esta  
"Constitución, y de encerrar en su tiempo la  
"intentona reformista de 14 de agosto de 1867, al  
"iniciarse el movimiento de 1910 había sido  
"modificada en 71 artículos.

"El Congreso Constituyente de 1916-1917 ya no  
"discutió acerca del procedimiento de reforma  
"constitucional, adoptándose como artículo 135,  
"con variación de detalles gramaticales, el mismo  
"artículo 127 de la Constitución anterior.

"Este artículo es el que se encuentra en vigor, con  
"una simple precisión adicional que se le incorporó  
"en 1965, a fin de que la comisión permanente  
"pudiera hacer el cómputo de los votos de las  
"legislaturas locales y la declaración de haber sido  
"aprobadas las reformas y adiciones, sin necesidad  
"de esperar para ello a la iniciación del periodo  
"ordinario de sesiones, o de la convocación a  
"sesiones extraordinarias.

"Es prudente transcribir las palabras del Señor  
"Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano,  
"pronunciadas en el debate realizado en sesión

"privada, del Pleno de La Suprema Corte de  
 "Justicia de la Nación celebrada el veintisiete de  
 "enero de mil novecientos noventa y siete, con  
 "motivo del recurso de Revisión del Juicio de  
 "Amparo 2996/97, que en su parte conducente a la  
 "letra dicen:

"De la misma forma que intentamos dar mayor  
 "vigencia a las garantías individuales sin dejar una  
 "serie de microcrisis no resueltas que vayan  
 "multiplicándose y den como resultado la  
 "acumulación de problemas no superables,  
 "contradicciones latentes e incoherencias  
 "debemos esforzarnos en darles funcionalidad a las  
 "instituciones para la supervivencia de los  
 "principios constitucionales y con ello lograr la fe  
 "en el Estado de derecho. Estamos ante nuevos  
 "planteamientos que no podemos abordar con  
 "esquemas de décadas anteriores. Nuestra  
 "actividad en esta época exige mayor esfuerzo para  
 "desasolver los canales de la Constitución hacia  
 "las autoridades y los individuos, y de ambos hacia  
 "la constitución. Tenemos que buscar una lógica  
 "con la clave del derecho y no con la clave de la  
 "política, para salvaguardar la Constitución. No se  
 "trata de encontrar sutiles líneas de incompetencia  
 "constitucional para que todo siga igual, sino por el  
 "contrario, apoyar la competencia para que los  
 "principios constitucionales inmutables se



"afiancen y con una lectura más fresca se puedan  
"conjurar desvíos.

"Yo no concibo al mal llamado Poder Reformador,  
"que sin reformar la Constitución que lo dirige e  
"instrumenta contra sus prevenciones, reforme con  
"indefensión el orden constitucional. Estimo que la  
"Constitución misma en su artículo 135 absorbe un  
"principio de reserva de jurisdicción para la  
"interpretación de la Constitución y la legalidad de  
"las mutaciones a la misma, a favor del Pleno de  
"esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y  
"también absorbe una reserva para la mutabilidad  
"de la misma a cargo del mal llamado Poder  
"Revisor. Ejemplo de lo primero resulta el engarce  
"de los artículos 49 constitucional, inserto en el  
"título <sup>tercero</sup>, capítulo primero, que habla de la  
"división de poderes y establece que el Supremo  
"Poder de la Federación se divide para su ejercicio  
"en legislativo, ejecutivo y judicial, sin que se  
"puedan reunir dos o más de éstos poderes en una  
"sola persona, ni depositarse el legislativo en un  
"solo individuo, y para este último caso marca  
"salvedades.

"El artículo 94 inmerso en el título ya mencionado  
"que nos habla del Poder Judicial, en primer lugar  
"hace depositario del mismo a la Suprema Corte de  
"Justicia de la Nación y luego establece la  
"obligatoriedad de la jurisprudencia de los

"tribunales del Poder Judicial de la Federación  
 "sobre interpretación de la Constitución, Leyes,  
 "reglamentos federales o locales y tratados  
 "internacionales, así como los requisitos para su  
 "interpretación, interrupción y modificación.  
 "Destaco aquí que el texto constitucional hace al  
 "Poder Judicial intérprete de la Constitución sin  
 "taxativas, remitiendo a la Ley el señalamiento de  
 "los términos en que sea obligatoria la  
 "Jurisprudencia.

"A su vez, el artículo 124, incrustado en el título  
 "séptimo: "Prevenciones Generales", en cuanto a  
 "distribución de competencias establece que las  
 "facultades que no estén expresamente concedidas  
 "por esta Constitución a los funcionarios federales,  
 "se entienden reservadas a los Estados. Ninguno  
 "de nosotros podría vislumbrar ni por asomo, de  
 "éste artículo, que la salvaguarda de los procesos  
 "constitucionales incrustados en ella para su  
 "propia modificación, debían ser del resorte  
 "competencial reservado a los Estados.

"El artículo 128 del mismo título y capítulo  
 "establece la protesta, yo diría promesa a cargo de  
 "todo funcionario público, de guardar la  
 "Constitución y las leyes que de ella emanen. Esto  
 "debe entenderse conforme a las competencias y  
 "atribuciones que la Constitución y las demás  
 "Leyes diamantes de ella les otorgan. Otro tanto



"puede decirse del artículo 50, del artículo 94, del  
"artículo 103, del artículo 105, del artículo 124, que  
"ya mencioné. . ."

"De acuerdo al análisis histórico realizado y a las  
"palabras pronunciadas por el señor Ministro  
"Aguirre Anguiano transcritas líneas arriba y  
"apegándonos a la verdad como todos sabemos  
"una Constitución cambia, y necesita cambiar para  
"irse adecuando a la dinámica realidad, estos  
"cambios se producen primordialmente a través de  
"a).- La Reforma Constitucional; b).- la  
"interpretación Constitucional (jurisprudencia); c).-  
"la costumbre Constitucional; y d).- los  
"movimientos violentos (revolución).

"Como me a una serie de circunstancias cada país  
"efectúa sus cambios dándole énfasis a alguno de  
"esos medios. En México nuestra Constitución se  
"ha actualizado primordialmente a través de la  
"reforma, aunque la costumbre y la interpretación  
"constitucional han sido y son importantes,  
"especialmente esta última (jurisprudencia) la que  
"constituye un elemento trascendente en el  
"proceso de adecuación de la norma a la realidad y  
"de la realidad a la norma.

"A la interpretación constitucional se le aplican las  
"reglas generales de la interpretación de las  
"normas del orden jurídico, pero como la norma  
"constitucional posee especiales características

*"derivadas de su materia, de su carácter de  
"suprema, del órgano que las crea y modifica y de  
"su rigidez, existen aspectos peculiares en la  
"interpretación de la norma constitucional.*

*"La propia Constitución en su artículo 94 señala  
"que la Ley fijará los términos en que sea  
"obligatoria la Jurisprudencia que establezcan los  
"Tribunales del Poder Judicial de la Federación a  
"cerca de la interpretación de la Constitución,  
"Leyes y Reglamentos.*

*"Como se ha mencionado en la interpretación  
"constitucional, el que la realiza debe poseer una  
"particular sensibilidad para poder percatarse del  
"significado de la norma constitucional, teniendo  
"en cuenta, la realidad, la vida social, las  
"necesidades y las aspiraciones de los <sup>sup</sup>hombres, la <sup>DE</sup>la  
"finalidad última de la interpretación <sup>SECRETARÍA GENERAL</sup>constitucional  
"debe ser proteger y defender lo mas valioso que  
"existe para cualquier hombre: su libertad y su  
"dignidad. La interpretación constitucional puede  
"hacer que el sistema Judicial agonice o  
"resplandezca. Quien tiene la facultad de  
"interpretar la ley suprema puede hacer que se viva  
"un sistema de libertad o de opresión, que en su  
"caso puede conducir a la modificación violenta de  
"la propia Carta Magna (revolución).*





"Por su parte la Ley de Amparo en sus artículos  
"192 y 193 establecen la obligatoriedad de la  
"Jurisprudencia.

"ARTÍCULO 192.- La jurisprudencia que establezca  
"la Suprema Corte de Justicia, funcionando en  
"Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en  
"tratándose de la que decrete el Pleno, y además  
"para los Tribunales Unitarios y Colegiados de  
"Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales  
"militares y judiciales del orden común de los  
"Estados y del Distrito Federal, y tribunales  
"administrativos y del trabajo, locales o federales.

"~~Las~~ resoluciones constituirán jurisprudencia,  
"siempre que lo resuelto en ellas se sustente en  
"cinco sentencias no interrumpidas por otra en  
"contrario, y que hayan sido aprobadas por lo  
"menos por catorce ministros, si se trata de  
"jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en  
"los casos de jurisprudencia de las Salas.

"También constituyen jurisprudencia las  
"resoluciones que diluciden las contradicciones de  
"tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

"ARTÍCULO 193.- La jurisprudencia que establezca  
"cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito  
"es obligatoria para los tribunales unitarios, los  
"juzgados de Distrito, los tribunales militares y  
"judiciales del fuero común de los Estados y del

**"Distrito Federal, y los tribunales administrativos y  
"del trabajo, locales o federales.**

**"Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de  
"Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo  
"resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias  
"no interrumpidas por otra en contrario, y que  
"hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de  
"los magistrados que integran cada tribunal  
"colegiado.**

**"De donde se puede colegir que la Jurisprudencia  
"como tal, se establece por cinco sentencias no  
"interrumpidas por otra en contrario, así como las  
"resoluciones que diluciden las contradicciones de  
"tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.**

**"La resolución del C. Juez Primero de Distrito en el  
"Estado de Yucatán, se apoya total y totalmente en  
"una tesis aislada que data del año 1937, que  
"corresponde a la Quinta Época, de la entonces**

**"Tercera Sala, de aquella composición de la  
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo  
"rubro dice: INSTITUCIONES DE CREDITO, SU  
"CAPACIDAD PARA POSEER Y ADMINISTRAR  
"BIENES RAICES. y que de su redacción se  
"evidencia que son los razonamientos establecidos  
"en ella los que fueron transcritos por el C. Juez A  
"Quo, sin embargo, tal criterio corresponde  
"únicamente a una añosa tesis aislada, que si bien  
"es cierto, que su invocación y aplicación no**



"contraria lo dispuesto por el numeral 193 de la Ley  
 "de Amparo, también es cierto que las condiciones  
 "Sociales, Políticas, y Económicas, de 1937 a la  
 "fecha no pueden ser las mismas, ya que de la  
 "vigencia del texto Constitucional a la fecha de la  
 "tesis transcurrieron 20 años y de la tesis a la  
 "fecha 62 años, bien es cierto que las instituciones  
 "jurídicas sólidas tiene una vigencia ilimitada, pero  
 "es inadmisibile pretender sostener que un texto  
 "constitucional sea equívoco después de más de  
 "ochenta años de vigencia y lo más grave aun es  
 "pretender en aras de la interpretación  
 "constitucional sostener un criterio de dar un  
 "sentido a fracción V del Artículo 27 Constitucional,  
 "que no le corresponde, pretender sostener que  
 "una adición complementaria al texto que se  
 "propuso, darle vida, darle vigencia, cuando el  
 "poder constituyente se negó a ello de  
 "manera expresa, es bien cierto que la Constitución  
 "(en su numeral 14) autoriza a utilizar mecanismos  
 "de interpretación jurídica para desentrañar el  
 "sentido y el alcance de u mandato constitucional,  
 "cuando nos encontremos ante un texto  
 "insuficiente u obscuro, extremos que no se  
 "actualizan en el presente caso, ya que la  
 "redacción de la Fracción aludida del numeral 27  
 "de la Carta Magna, es claro y preciso, y no admite  
 "lugar a dudas, es tajante y bastante para

"comprender su alcance, y por lo contrario la  
"posición del A Quo de darle vida a un texto  
"legislativo, muerto, o mejor dicho que nunca  
"existió, no solo contraria toda interpretación  
"posible sino que además resulta ofensivo para el  
"propio texto constitucional y para la tarea  
"encomendada al diverso Poder Legislativo en que  
"el pueblo ha depositado el ejercicio de su  
"mandato.

"La tendencia actual de nuestro derecho positivo  
"es permitir la intervención reguladora del Estado  
"en toda clase de derechos individuales, inclusive  
"en el de propiedad; de acuerdo con las tendencias  
"de la época, nuestra ley suprema limita varios de  
"los derechos fundamentales, en beneficio de la  
"comunidad, entre ellos la limitación expresa del  
"artículo 27 de la Constitución Política de los  
"Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V, la  
"cual dispone a la letra: "Los Bancos debidamente  
"autorizados, conforme a las leyes de Instituciones  
"de Crédito podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo". (fin de la fracción)

"Lo que se traduce prácticamente en una clara y  
"expresa prohibición a los bancos de que aun



"temporalmente puedan tener bienes que no sean  
"los permitidos por el mencionado artículo de  
"nuestra carta magna.

"En nuestra Constitución todo el Título Tercero,  
"desde el artículo 49 hasta el 107, trata de la  
"organización y competencia de los poderes  
"federales, en tanto que el Título Cuarto,  
"relacionado con la parte orgánica, establece las  
"responsabilidades de los funcionarios públicos,  
"son dichos preceptos en nuestra constitución los  
"artículos 39, 40, 41, 133, 135 y 136, que aluden a la  
"soberanía popular, a la forma de gobierno, a la  
"supremacía de la constitución y a su inviolabilidad  
"como me he referido a lo largo de todo este punto.  
"En este orden de ideas, la Constitución en sentido  
"formal, es el documento solemne y nuestra ley  
"suprema, de la cual emanan otras normas que no  
"forman parte de la constitución en sentido  
"material y por ningún motivo pueden  
"contradecirla. La maravilla de nuestra  
"constitución, es la protección que tienen sus 136  
"artículos que solo pueden ser reformados o  
"adicionados mediante el procedimiento estricto  
"que acompañar a las enmiendas constitucionales,  
"impidiendo en lo posible su adecuación al interés  
"de un partido en colocar sus conquistas dentro de  
"la ley superior o a la conveniencia de alguna parte  
"minoritaria pero poderosa de la sociedad, quienes

"influyen de alguna forma sobre la opinión mudable  
 "del parlamento, para hacer las reformas de moda.  
 "Conviene en este momento aplicar una exégesis  
 "literal al artículo 135 de la constitución, el cual se  
 "inicia con el siguiente mandamiento general: "LA  
 "PRESENTE CONSTITUCIÓN PUEDE SER  
 "ADICIONADA O REFORMADA". Por si misma, esa  
 "formula no dice, ni permite inferir, si carece de  
 "limites la posibilidad de que la constitución pueda  
 "ser adicionada o reformada. En prosecución de  
 "nuestro objeto, glosemos ahora las demás  
 "disposiciones del precepto, que desarrollan la  
 "Inicial.

"Adviértase ante todo, que el único órgano  
 "competente para llevar a cabo las adiciones  
 "reformas es un órgano complejo, integrado  
 "separada y sucesivamente por el congreso de la  
 "unión y por las legislaturas de los estados  
 "Concurrentes aquel y estas en la formación del  
 "acto modificadorio, para la validez del mismo "SE  
 "REQUIERE -según expresión del artículo 135 -  
 "QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL VOTO  
 "DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS  
 "INDIVIDUOS PRESENTES, ACUERDE LAS  
 "REFORMAS O ADICIONES, Y QUE ESTAS SEAN  
 "APROBADAS POR LA MAYORÍA DE LAS  
 "LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS".



"En caso de haberse reunido la doble mayoría a  
 "que se refiere la anterior transcripción, el artículo  
 "135 consigna en los siguientes términos el último  
 "trámite para que se produzca la adición o la  
 "reforma: "EL CONGRESO DE LA UNIÓN O LA  
 "COMISIÓN PERMANENTE EN SU CASO HARÁN EL  
 "COMPUTO DE LOS VOTOS DE LAS  
 "LEGISLATURAS Y LA DECLARACIÓN DE HABER  
 "SIDO APROBADAS LAS ADICIONES O  
 "REFORMAS". Significa este párrafo que el  
 "cómputo de votos y la declaración de aprobación  
 "del congreso o de la permanente, forman parte  
 "integrante de la reforma o la adición al otorgarle  
 "validez y con ella obligatoriedad, a tal grado que  
 "en caso de omitirse la declaratoria o de haberse  
 "omitido los datos que ella debería contener, la  
 "aparente reforma o adición no sería tal.

"Una vez que en sus debidos términos se produce  
 "la declaratoria, quedan satisfechos los requisitos  
 "que señala el artículo 135 de la Constitución  
 "'PARA QUE LAS ADICIONES O REFORMAS  
 "'LLEGUEN A SER PARTE DE LA MISMA".

"Por ello, y cuales quiera que sean las posiciones  
 "doctrinarias que se adopten lo cierto que,  
 "conforme a nuestro derecho positivo, no sería  
 "procedente considerar que por ser la constitución  
 "norma superior las modificaciones que a ella  
 "ingresan estas referirían de aquella la investidura

"de su validez, lo que autorizaría a solicitar en el  
 "juicio de Amparo la protección de la Justicia  
 "Federal en contra de los preceptos de nueve  
 "ingreso, cuando en todo caso se hayan realizado  
 "como es debido, y no solo con una interpretación  
 "unilateral de una autoridad irresponsable. Negar  
 "el amparo en virtud de una interpretación personal  
 "del Juez de Distrito que más parece una reforma o  
 "adición a todas luces ilegal al precepto  
 "constitucional en comento, equivaldría a contrario  
 "sensu a concederlo en contra de la propia  
 "constitución; y como todos saben el juicio de  
 "amparo nació y subsiste precisamente para  
 "proteger la constitución, no en contra de esta  
 "misma sino de los actos externos de cualquier  
 "autoridad, y mas aun cuando ella se erige en  
 "interprete de la constitución.

JUSTI... DE  
 SECRETARIA GENERAL

"La labor de interpretación de una norma cuando  
 "esta por algún motivo no es clara, efectivamente  
 "no puede realizarse atendiendo únicamente a la  
 "letra del precepto (método gramatical) o  
 "significado estrictamente técnico calificado de la  
 "expresión (como el proporcionado por los peritos  
 "al desahogar un cuestionario), pues en algunos  
 "casos es común que el legislador emplee términos  
 "o palabras con el mismo sentido, alcance o  
 "significado por los cuales éstas se emplean en  
 "otras disposiciones legales atinentes a la misma





"materia, o a otras materias pero del mismo  
"ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando se  
"plantea un conflicto sobre la significación que  
"deba asignarse a un término o palabra empleada  
"en alguna disposición legal, de la que no exista  
"una interpretación auténtica, es decir, elaborada  
"por el propio legislador, es deber del tribunal  
"servirse de todos los métodos gramatical, lógico,  
"sistemático o histórico reconocidos por nuestro  
"sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su  
"tarea. Así debe procederse tratándose de  
"cualquier norma pues en todo caso para su  
"aplicación es indispensable desentrañar el  
"alcance o significado de las expresiones que  
"componen su texto, con la limitación de no  
"introducir elementos normativos novedosos  
"(interpretación extensiva), ni aplicar la norma a  
"casos distintos de los previstos en ella (analogía).  
"El procedimiento adecuado más apegado a la  
"índole judicial que es característica de la Suprema  
"Corte, es acudir al derecho positivo, para inducir,  
"de los aspectos básicos que puedan localizarse, el  
"concepto que se busca, debiendo precisarse que  
"cuando se alude al derecho positivo se hace  
"referencia al vigente, pues si bien es cierto que en  
"el pasado mediato y remoto es posible encontrar  
"elementos históricos relevantes, igualmente cierto  
"resulta que lo determinante es investigar qué se

"entiende por un precepto confuso. El método  
 "interpretativo no puede ser otro que el derivado de  
 "una apreciación jurídica armónica y sistemática;  
 "de ningún modo se puede decir que el espíritu de  
 "la norma es el de empeñarse en que se iba a  
 "adicionar en el artículo de referencia pero al fin y  
 "al cabo no se adicionó lo que equivale, por tanto y  
 "desde luego, a un resultado erróneo.

"Es precisamente en el campo de las normas  
 "constitucionales, las que difieren esencialmente  
 "de las restantes que conforman un sistema  
 "jurídico determinado, en razón no únicamente de  
 "su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los  
 "que se inspiran rigurosamente en fenómenos  
 "sociales y políticos preexistentes de gran entidad  
 "para la conformación de la realidad jurídica, en que  
 "se halla un pueblo determinado, que la  
 "jurisprudencia, pasada la época del legalista, se  
 "ha convertido en una fuente del Derecho que,  
 "aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia  
 "normativa, se remonta más allá de ella cuando el  
 "lenguaje utilizado por el constituyente exige una  
 "recreación por la vía de la interpretación, para el  
 "efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por  
 "su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la  
 "Constitución en el trance de aplicarla tiene por  
 "misión esencial magnificar los valores y principios  
 "inmanentes en la naturaleza de las instituciones,



"convirtiendo a la norma escrita en una expresión  
"del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no  
"sólo de la reconstrucción del pensamiento y  
"voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a  
"través de los métodos clásicos de orden  
"gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino  
"también de la búsqueda del fin que debe perseguir  
"la norma para la consecución de los postulados  
"fundamentales del Derecho.

"De acuerdo a lo anterior y sin olvidar que EN EL  
"PRESENTE CASO NO HAY NADA QUE SE  
"ENCUENTRE REDACTADO DE UNA MANERA  
"CONFUSA U OBSCURA pues es sencillo y claro  
"leer la expresa prohibición que se hace en nuestra  
"Carta magna de que LOS BANCOS SOLO PODRÁN  
"TENER CAPITALES IMPUESTOS SOBRE  
"PROPIEDADES URBANAS Y RÚSTICAS DE  
"ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES DE LAS  
"LEYES, PERO NO PODRÁN TENER EN  
"PROPIEDAD O EN ADMINISTRACIÓN MÁS BIENES  
"RAÍCES QUE LOS ENTERAMENTE NECESARIOS  
"PARA SU OBJETO DIRECTO, sin que haya nada  
"mas expresado o adicionado hasta la presente  
"fecha al mencionado artículo constitucional y no  
"como increíblemente lo intenta argumentar con  
"una falaz interpretación del multicitado precepto el  
"juez de distrito al dictar la sentencia que hoy nos  
"ocupa.

"En este orden de ideas y recordando que la  
 "modificación constitucional debe ser  
 "'formalmente correcta", esto es, realizada y  
 "consumada conforme a los requisitos previstos en  
 "el artículo 135. En esa hipótesis, y solo en ella, se  
 "produce el acto con eficacia modificadora. De otra  
 "suerte la pseudo reforma o adición no forma parte  
 "de la ley suprema y el juicio de amparo conserva  
 "su plena eficacia en contra del acto atentatorio  
 "que, con el falso título de interpretación histórica,  
 "se pretende vulnerar el contenido de la norma  
 "suprema, cuya defensa corre a cargo,  
 "precisamente del juicio de amparo.

"El señor Juez de Distrito al dictar la sentencia que  
 "por este medio se impugna incurre nuevamente  
 "en la falta de estudio de los conceptos de  
 "violación planteados por el quejoso.

"El agraviado argumentó ante la ilegalidad del auto  
 "aprobatorio de remate referido en los  
 "antecedentes de este escrito, por contravenir lo  
 "dispuesto por la fracción V del artículo 27 de la  
 "Constitución Política de los Estados Unidos  
 "Mexicanos.

"En efecto, dicho artículo y fracción establecen  
 "literalmente:

"Artículo 27.- . La capacidad para adquirir el  
 "dominio de las tierras y aguas de la Nación, se  
 "regirá por las siguientes prescripciones:



"V. Los bancos debidamente autorizados, conforme  
"a las leyes de las instituciones de crédito podrán  
"tener capitales impuestos sobre propiedades  
"urbanas y rústicas de acuerdo con las  
"prescripciones de dichas leyes, pero no podrán  
"tener en propiedad o en administración más  
"bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo.

"De la redacción del numeral constitucional en cita  
"se desprende que en un contexto general contiene  
"la garantía de propiedad de tierras y aguas,  
"consagrada originalmente a la Nación, la cual  
"tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a  
"los particulares constituyéndose así la propiedad  
"privada. El propio numeral constitucional ordena  
"que algunas entidades tales como las  
"asociaciones religiosas, las instituciones de  
"beneficencia pública o privada, las sociedades  
"mercantiles, los bancos y las entidades  
"federativas, vean limitada su capacidad de  
"adquirir el dominio de tierras y aguas conforme a  
"lo dispuesto en las fracciones del párrafo Noveno  
"del numeral en estudio, de donde puede colegirse,  
"que las entidades a que se hace referencia líneas  
"arriba son INCAPACES JURÍDICAMENTE PARA  
"ADQUIRIR EL DOMINIO DE TIERRAS, salvo las  
"excepciones a que se refieren en cada una de la  
"fracciones, en especial, para el caso que nos

"interesa, lo dispuesto en la fracción V, que refiere  
 "a los enteramente necesarios para su objeto  
 "directo, es decir, los que sean indispensables para  
 "llevar a cabo su fin social como veremos más  
 "adelante, sin embargo, cabe destacar que la  
 "capacidad como sinónimo de aptitud jurídica,  
 "extiende su alcance a todo ordenamiento jurídico,  
 "no solamente a la Constitución como Carta  
 "Magna, de donde es perfectamente claro que los  
 "incapaces carecen de aptitud jurídica para  
 "celebrar actos de esa naturaleza. En la especie,  
 "se trata de la adquisición del dominio sobre tierras  
 "y aguas, por parte de ciertas entidades entre las  
 "que se encuentran las Instituciones Bancarias o  
 "Bancos como lo menciona el texto constitucional  
 "que contrario a lo sostenido por el Juez A Quo la  
 "prohibición para adquirir a que se impone a las  
 "Instituciones de Crédito, es imperativa y de orden  
 "público, lo cual redundo en la incapacidad jurídica  
 "de estas para adquirir bienes inmuebles, que si  
 "bien no es una incapacidad total, ya que permite  
 "dicha adquisición con ciertas limitaciones  
 "específicas las cuales se consagran en el propio  
 "texto constitucional, sí se plantea como una  
 "incapacidad jurídica expresa e imperativa.  
 "El espíritu del constituyente fue el evitar el  
 "acaparamiento de tierras y bienes inmuebles en  
 "manos muertas. La actividad de los bancos no es



"la administración de bienes inmuebles sino hacer  
"que el dinero produzca dinero. Por eso la  
"prohibición de adquirir o administrar más bienes  
"inmuebles que los enteramente necesarios a su  
"objeto directo.

"El objeto directo a que se refiere el numeral  
"constitucional evidentemente atiende a la  
"capacidad como atributo de la personalidad, la  
"capacidad se divide en: "de goce" y "de  
"ejercicio"; la primera es la aptitud de ser titular de  
"derechos o para ser sujeto de obligaciones, y la  
"segunda es la aptitud de participar directamente  
"en la vida jurídica.

"La capacidad de goce de las personas morales  
"esta delimitada por su objeto social, la declaración  
"del objeto social es quizás el requisito más  
"importante en un contrato de sociedad, puesto  
"que mediante su determinación, los socios fijan  
"los límites de la capacidad de goce de la persona  
"moral.

"En efecto, el artículo 26 del Código Civil Federal  
"establece en relación a la capacidad de ejercicio:

"ARTÍCULO 26.- Las personas morales pueden  
"ejercitar todos los derechos que sean necesarios  
"para realizar el objeto de su institución."

"Asimismo, el artículo 2700 del citado  
"ordenamiento civil de aplicación supletoria a la  
"Ley de Instituciones de Crédito en lo tocante a la

"capacidad jurídica de las personas morales para  
"adquirir bienes inmuebles nos remite  
"expresamente al artículo 27 constitucional al  
"establecer literalmente:

"ARTÍCULO 27.- La capacidad para que las  
"sociedades adquieran bienes raíces, se regirá por  
"lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución  
"Federal y en sus leyes reglamentarias.

"En el caso particular de las instituciones de  
"crédito dicho objeto social (capacidad de goce) se  
"determina por ministerio de la ley, atento a lo  
"dispuesto en el numeral 46 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito, es decir que la capacidad  
"de goce de una persona moral se limita a lo  
"dispuesto en tal numeral 46 de la Ley ibídem en  
"concordancia con la fracción V del Artículo 27  
"constitucional, de que se ha hecho mérito, en los  
"cuales se atiende directamente a que los bancos  
"sólo podrán tener y adquirir los bienes inmuebles  
"que sean enteramente necesarios para su objeto  
"directo, en ese orden de ideas los bienes que no  
"sean estrictamente necesarios para realizar el  
"objeto social de la Institución crediticia no pueden  
"ser adquiridos por la misma.

"En consecuencia, siendo el objeto directo de la  
"hoy tercero perjudicada, la prestación de los  
"servicios bancarios a que se refiere el artículo 46  
"de la Ley de Instituciones de Crédito, es





287

"notoriamente evidente que los bienes inmuebles  
"enteramente necesarios para su objeto son los  
"destinados para oficinas del citado banco.

"Es por esto que por enteramente necesarios  
"debemos entender totalmente útiles,  
"indispensables, sin los cuales no se podría  
"cumplir con el objeto social, es decir, prestar el  
"servicio de banca.

"De ninguna manera podemos concluir que un  
"predio, ubicado en un fraccionamiento como el  
"denominado "Montealban" sea enteramente  
"necesario e indispensable para la prestación del  
"servicio público de banca. Y si dicho bien no es  
"indispensable para la prestación de los servicios  
"bancarios, la institución de crédito no puede  
"adquirirlo.

"Y para el supuesto caso que así fuere, que la  
"Institución bancaria lo considere necesario e  
"indispensable tendría que acreditar tal extremo  
"ante la autoridad judicial de primera Instancia, ya  
"que por ser una Institución de Crédito, tiene  
"limitaciones constitucionales a su régimen para la  
"adquisición de tierras y aguas como ya he  
"mencionado. Sin embargo el Juez A quo interpreta  
"a su manera personalista el artículo 27  
"Constitucional, cuando para resolver lo invoca.  
"Ahora bien, la Sala Responsable y el señor Juez  
"de Distrito consideran que la prohibición a la que

"se contrae la fracción V del artículo 27  
 "constitucional no es imperativa, y pretende  
 "sostener que el segundo párrafo de la fracción XIII  
 "del artículo 106 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito, que autoriza a las Instituciones Bancarias  
 "a adquirir en remate dentro de juicios  
 "relacionados con créditos a su favor títulos o  
 "valores que no deba conservar y sujeta el destino  
 "de los bienes a lo que establezca la Comisión  
 "Nacional Bancaria, ya que tal precepto de la Ley  
 "ibídem establece que el bien le sea adjudicado en  
 "remate, es decir, que si en un juicio en el cual la  
 "institución bancaria es actora y el crédito se  
 "encuentra garantizado con ciertos bienes que  
 "pueden ser inmuebles, el banco puede  
 "adjudicarse tales bienes, si al final no se presenta  
 "postor alguno que cubra los requisitos legales,  
 "pero de ninguna manera la fracción VIII del  
 "artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito  
 "autoriza a la Institución Bancaria a presentarse en  
 "calidad de postor (entiéndase comprador en una  
 "venta judicial) a la diligencia y en su caso hacer  
 "pujas y repujas a fin de adjudicarse el bien que ya  
 "tiene en garantía, y que la prohibición de la  
 "fracción V del Numeral 27 constitucional es  
 "imperativa, y si bien es cierto que como lo  
 "sostiene la responsable las leyes secundarias no  
 "pueden contravenir lo dispuesto



"constitucionalmente, la interpretación que la  
"responsable da a la fracción del artículo de la ley  
"de instituciones de crédito citado es totalmente  
"errónea, porque además la Sala Responsable con  
"el aval del Juez de Distrito insisten en denominar  
"de manera equivocada los actos procesales de la  
"especie, en el sentido de que argumenta que la  
"institución de Crédito compareció a la subasta  
"con su carácter de acreedor directo, a fin de  
"recuperar a posteriori, la inversión que realizó a  
"favor de particulares demandados, ya que  
"contrario a lo sostenido por la responsable y el  
"Juez A Quo, la institución de crédito no  
"compareció a la diligencia de remate en su  
"carácter de acreedor directo sino en un diverso  
"carácter de postor ya que como se lee del acta  
"levantada con motivo de la diligencia de remate la  
"Secretaría que autorizó la citada diligencia dio  
"cuenta al Q. Juez con dos posturas, la primera de  
"los señores García Bert y Rivero Ramírez como  
"apoderados de la Institución Bancaria actora y la  
"segunda de la suscrita; de ahí de donde se insiste  
"que la responsable pretende denominar de  
"manera falaz las acciones que son contundentes  
"por su propia naturaleza.  
"Es interesante el criterio esgrimido por la  
"responsable en su oportunidad y ahora por el  
"resolutor federal:

"PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN REALIZADA  
 "AL CONTRATAR UN CRÉDITO ¿ES NECESARIO  
 "VENDER DOS VECES EL MISMO PREDIO QUE  
 "GARANTIZA EL CRÉDITO?. ESE ES EL SENTIDO  
 "DE LO AFIRMADO POR EL JUEZ A QUO.

"La primera venta es la venta pública que se  
 "celebra ante el Juez que pone el inmueble a  
 "remate. El banco toma parte en el remate y  
 "compra judicialmente el predio (en el caso que  
 "nos ocupa exhibió dinero en efectivo en la  
 "diligencia del remate).

"La segunda venta tiene lugar cuando una vez que  
 "el banco ha comprado el inmueble en la diligencia  
 "de remate En este momento, la institución de  
 "crédito ofrece en el medio inmobiliario el bien  
 "adquirido, vendiéndolo a quien ellos decidan y al  
 "precio por ellos fijados. Justifican esta operación  
 "que de ninguna manera encaja dentro de los  
 "servicios bancarios, argumentando que de esa  
 "forma recuperan la inversión del crédito. Lo cual  
 "nos lleva a cuestionar: ¿Acaso la venta judicial no  
 "tiene el propósito de recuperar las cantidades  
 "adeudadas por el acreditado? Entonces, ¿Es  
 "necesario vender dos veces el mismo inmueble  
 "para recuperar el mismo crédito y que la parte  
 "beneficiada en ambas ventas lo sea el banco?

"Ahora bien, el señor Juez de Distrito considera  
 "que la prohibición a la que se contrae la fracción V



"del artículo 27 constitucional no es imperativa, sin embargo, lo que la responsable deliberadamente omite considerar es que al ser el servicio de banca y crédito una actividad concesionada por el Estado, dicha actividad se encuentra sujeta al régimen de autoridad, y de esta forma, lo que no le está jurídicamente permitido a los bancos, les está legalmente prohibido. Por lo que, con mayor razón si de antemano les está prohibido a los bancos adquirir más bienes que los indispensables a su objeto directo.

"En este punto es necesario reproducir argumentos que aunque fueron planteados por el quejoso, el juez A quo fue totalmente omiso al resolver:

"Las instituciones de crédito prestan un servicio público que es el de banca y crédito. Este servicio es regulado por la Federación, quien ejerce la rectoría económica del Estado y del sistema Bancario Mexicano, según disponen el artículo 25 de nuestra Carta Magna y los numerales 1º, 3º y 4º de la Ley de Instituciones de Crédito.

"De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que estamos en presencia de una actividad, que por una parte está sujeta a un régimen de Derecho Público y por la otra se trata de un Servicio Público.

"Siendo en consecuencia una actividad que  
"corresponde al Estado regular y vigilar, a través  
"de dicha rectoría del Sistema Bancario Mexicano,  
"podemos afirmar que a las instituciones de crédito  
"les es aplicable lo que la doctrina ha definido  
"como el "Régimen de Autoridad" en  
"contraposición al llamado "Régimen de Libertad".  
"Las diferencias esenciales de dichos regímenes  
"son las siguientes:

"En cuanto al régimen de libertad, éste es el que la  
"doctrina ha establecido a favor de los gobernados  
"y que se contiene en el principio de que en el  
"ejercicio de sus derechos subjetivos pueden los  
"gobernados realizar todas las conductas, excepto  
"las que expresamente les estén prohibidas por la  
"ley.

"Es importante hacer notar que dicho enunciado no  
"puede ser aplicado en términos absolutos, pues  
"aun cuando el individuo puede realizar cualquier  
"acto que no le esté prohibido, ello en modo alguno  
"implica que pueda con ello contravenirse  
"disposiciones expresas de una ley.

"El régimen de la autoridad se manifiesta bajo el  
"siguiente principio jurídico incontrovertible que  
"reza: "Las autoridades no tienen más facultades y  
"por lo mismo no deben realizar más actos que los  
"que expresamente les estén autorizados por las  
"leyes".



"Lo anterior está corroborado por diversos  
"tratadistas en materia de fideicomiso, como lo es  
"el señor Julián Bernal Molina (Práctica y Teoría  
"Jurídica del fideicomiso, Miguel Angel Porrúa en  
"colaboración con BANAMEX, S.N.C., 1988, pág.  
"99), quien al respecto dice en relación a los actos  
"que pueden realizar las instituciones bancarias:  
"“Para estas instituciones, como personas  
"morales, no rige el principio que existe para las  
"personas físicas, en el sentido de que pueden  
"realizar todos los actos que no estén prohibidos.  
"Los bancos sólo pueden ejecutar aquellos actos  
"que están expresamente señalados como propios  
"de su objeto, y en este caso, por la Ley.”  
"En mérito de lo anterior podemos concluir  
"válidamente, que para quienes están sujetos al  
"régimen de autoridad, aquellos actos que no le  
"estén expresamente autorizados por la ley, en  
"consecuencia, le están jurídicamente prohibidos y  
"por lo tanto las autoridades como quienes en  
"virtud de concesión o autorización realizan  
"actividades de servicio público, como lo es el de  
"banca y crédito, no pueden realizar ni tienen más  
"atribuciones que las que expresamente les otorga  
"la ley, por lo que no pueden efectuar válidamente  
"algún acto que no esté expresamente o  
"específicamente autorizado por dicha ley, ya que,  
"como antes vimos, si no están permitidos o

**"regulados, les están legalmente prohibido  
"efectuarlos.**

**"En ese sentido, lo que a las instituciones de  
"crédito no les está permitido realizar  
"jurídicamente, les está legalmente prohibido, al  
"contrario del razonamiento esgrimido por la  
"responsable la cual considera que no es total la  
"prohibición constitucional impuesta a los bancos  
"de adquirir bienes inmuebles más que los  
"enteramente necesarios para su objeto directo.**

**"La mejor y más sana práctica bancaria para  
"proteger las inversiones de las instituciones de  
"crédito es un cuidadoso estudio de viabilidad del  
"proyecto de inversión, y de ninguna manera es  
"recuperar el importe del crédito comprando bienes  
"inmuebles por remate.**

**"Asimismo, debe considerarse que en el caso de  
"llevar a cabo un juicio para recuperar la inversión,  
"la institución crediticia tiene la opción de  
"recuperar su inversión mediante las cantidades  
"que los postores convocados exhiban con su  
"postura.**

**"Como se ha manifestado tanto en la apelación del  
"auto aprobatorio como en el juicio de garantías, el  
"adquirir bienes en remate no forma parte del  
"servicio de banca y crédito, y el aquí tercero  
"perjudicado, se encuentra legalmente  
"imposibilitada de entrar a remates, aún y cuando**





"sean relativos a créditos otorgados por dicha  
"institución, máxime que el objeto social de la  
"misma está limitado únicamente a la prestación de  
"los servicios bancarios a los cuales se refiere el  
"artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo  
"que significa otra limitación a la capacidad del  
"mismo, para adjudicarse bienes en pública  
"subasta.

"Esta prohibición de adquirir bienes hacia las  
"Instituciones de Crédito se encuentra  
"puntualizada en lo dispuesto por el artículo 46 de  
"la Ley de Instituciones de Crédito, al no  
"establecerse como una operación de las  
"mencionadas instituciones.

"En efecto, el numeral 46 en comento dispone de  
"manera textual:

"Artículo. 46.- Las Instituciones de Crédito sólo  
"pueden realizar las operaciones siguientes:

"Recibir depósitos bancarios de dinero:

"A la vista;

"Retirables en días preestablecidos;

"De ahorro, y

"A plazo o previo aviso.

"Aceptar préstamos u créditos;

"Emitir bonos bancarios;

"Emitir obligaciones subordinadas;

"Constituir depósitos en instituciones de crédito y

"entidades financieras del exterior;

- "Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;**
- "Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;**
- "Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito;**
- "Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente ley y de la Ley del Mercado de Valores;**
- "Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta ley;**
- "Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;**
- "Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisa, incluyendo reportes sobre estas últimas;**
- "Prestar servicios de cajas de seguridad;**
- "Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes;**
- "Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;**



"Recibir depósitos en administración o custodia, o  
 "en garantía por cuenta de terceros, de títulos o  
 "valores y en general de documentos mercantiles;  
 "Actuar como representante común de los  
 "tenedores de títulos de crédito;  
 "Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos  
 "de crédito, por cuenta de las emisoras;  
 "Llevar la contabilidad y los libros de actas y de  
 "registro de sociedades y empresas;  
 "Desempeñar el cargo de albacea;  
 "Desempeñar la sindicatura o encargarse de la  
 "liquidación judicial o extrajudicial de  
 "negociaciones, establecimientos, concursos o  
 "herencias;  
 "Encargarse de hacer avalúos que tendrán la  
 "misma fuerza probatoria que las leyes asignan a  
 "los hechos, por corredor público o perito;  
 "Adquirir los bienes muebles o inmuebles  
 "necesarios para la realización de su objeto y  
 "enajenarlos cuando corresponda;  
 "Celebrar contratos de arrendamiento financiero y  
 "adquirir los bienes que sean objeto de tales  
 "contratos.  
 "La realización de las operaciones señaladas en  
 "esta fracción, así como el ejercicio de los  
 "derechos o el cumplimiento de las obligaciones de  
 "las partes, se sujetarán a lo previsto por esta Ley  
 "y, en lo que no se oponga a ella, por la Ley

**"General de Organizaciones y Actividades  
"Auxiliares del Crédito, y**

**"Las análogas y conexas que autorice la Secretaría  
"de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión  
"del Banco de México y de la Comisión Nacional  
"Bancaria.**

**"De la transcripción precedente se infiere que los  
"bancos únicamente se podrán dedicar a las  
"actividades listadas en el artículo en este punto  
"mencionado y que por lo tanto, el adquirir un  
"predio en un remate público no está listado en  
"dicho artículo y por consiguiente no le está  
"permitido por la ley a las Instituciones de Crédito  
"realizar esa actividad.**

**"Se podría argumentar que en la fracción XXIII del  
"artículo en comento autoriza a la Institución de  
"Crédito que nos ocupa en el presente caso, sin  
"embargo es menester fijar nuestra atención en  
"dicha fracción: "Adquirir los bienes muebles o  
"inmuebles necesarios para la realización de su  
"objeto y enajenarlos cuando corresponda;" Sin  
"embargo, la situación actual no se encuadra  
"dentro de la hipótesis planteada en dicha fracción.  
"En efecto, en las páginas sesenta y ocho y  
"sesenta y nueve del documento anexo por los  
"señores "GARCIA BERT y/o RIVERO RAMIREZ se  
"puede leer el siguiente párrafo:**



**"Artículo 2º. OBJETO SOCIAL.-** La sociedad  
"tendrá por objeto la prestación del servicio de  
"banca y crédito en los términos de la Ley de  
"Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá  
"realizar las operaciones y prestar los servicios  
"bancarios a que se refiere el artículo 46 de dicha  
"Ley, en todas sus modalidades, de conformidad  
"con las demás disposiciones legales y  
"administrativas aplicables y con apego a las sanas  
"prácticas y a los usos bancarios y mercantiles.- - -  
" "

"Como se puede apreciar, el objeto social de  
"Bancomer" es la prestación del servicio de banca  
"y crédito, y los bienes muebles e inmuebles  
"necesarios para la prestación de tales servicios  
"serán por los tanto los predios en donde  
"funcionaria las oficinas y sucursales de la  
"Institución de Crédito, y al mencionar los muebles  
"se refiere al equipo de computo, escritorios, sillas,  
"equipo telefónico sin los cuales no podría  
"funcionar la Institución de Crédito.

"Los bienes muebles e inmuebles que han sido  
"embargados, o secuestrados en algún  
"procedimiento ya sea mercantil o civil no pueden  
"considerarse como necesarios para la realización  
"de su objeto.

"El Banco no necesita adquirir el predio  
"secuestrado y venderlo con posterioridad para

"cumplir con su objeto social, pues el Banco  
"recupera el dinero invertido en su crédito con el  
"producto de los remates celebrados en los juicios  
"en los que es acreedor. El espíritu del artículo 46  
"es totalmente contrario a considerar a las  
"Instituciones de Crédito como inmobiliarias de  
"oportunidad.

"Asimismo, es oportuno transcribir  
"consideraciones doctrinales acerca de las  
"limitaciones a la capacidad de las sociedades:

"El doctor Walter Frisch Philipps se manifiesta de  
"la siguiente manera:

"... podemos afirmar que la sociedad anónima  
"solamente tiene capacidad de goce en la medida  
"en que el orden jurídico respectivo haya creado  
"normas que sean aplicables a ella, **dato que ella**  
"es el producto de estas normas. **Las normas**  
"constituyen, por ende, el factor generador y  
"relevante, y no la sociedad anónima,  
"equivocadamente supuesta como sujeto  
"preexistente. Por tal motivo, debemos excluir de la  
"esfera de capacidad de goce de la sociedad  
"anónima, todos los derechos y obligaciones que  
"no hayan sido creados para las personas morales  
"y, en especial para la sociedad anónima." 1.

"El jurista Manuel García Rendón se expresa al  
"respecto de la forma que sigue:

299



"A diferencia de las personas físicas, quienes  
 "tienen capacidad plena general para ejecutar todo  
 "tipo de negocios jurídicos no prohibidos o  
 "excluidos de su esfera jurídica por la ley (art. 5º.  
 "Constitucional) las personas morales no solo no  
 "pueden realizar los actos prohibidos o excluidos  
 "por la ley, sino que, además, necesariamente  
 "deben limitar su capacidad a la realización de  
 "ciertas operaciones específicamente establecidas  
 "en el objeto de su institución (art. 26, CCDF).

"La limitación a la capacidad de las personas  
 "morales de derecho privado es necesaria tanto  
 "porque así lo establece la ley (arts. 6º, frac. II,  
 "LGS y 2693, frac. II, CCDF) como porque ofrece  
 "un principio de seguridad a los socios. En efecto,  
 "pocas veces es que algunas personas se resolverían  
 "a formar parte de una sociedad que tuviera por  
 "objeto, digamos, 'el realizar todo tipo de  
 "operaciones comerciales no prohibidas o  
 "excluidas por la ley', toda vez que tal vaguedad de  
 "fines capacitaría a la sociedad a operar en ramas  
 "muy diversas de la actividad mercantil, lo cual, en  
 "la generalidad de los casos, no es acorde con los  
 "motivos que impulsan a los socios a contraer el  
 "contrato de sociedad.

"Y es precisamente por ese requerimiento legal de  
 "limitación y por este principio de seguridad, que la  
 "ley dispone, a contrario sensu, que los órganos de

"administración no podrán realizar operaciones  
"que no sean necesarias o inherentes al objeto  
"social, ni operaciones que la ley o el contrato  
"social reserven a otros órganos sociales." 2.

"De todo lo anteriormente expresado se puede  
"colegir que por disposición del artículo 27  
"fracción V de la Constitución, las limitaciones  
"establecidas en el artículo 46 de la Ley de  
"Instituciones de Crédito y las facultades  
"contenidas en su objeto social, LA INSTITUCIÓN  
"DE CRÉDITO DENOMINADA "BANCOMER",  
"SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA  
"MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, CARECE DE  
"CAPACIDAD LEGAL PARA OSTENTARSE  
"POSTOR EN ALGUNA DILIGENCIA DE REMATE,  
"por lo que la postura presentada por dos  
"licenciados Luis Enrique García Bert y Javier  
"Jesús Rivero Ramírez debió ser desechada.

"Frecuentemente se utiliza almoneda, remate y  
"subasta como sinónimos, por lo que es pertinente  
"transcribir los conceptos relativos:

"ALMONEDA. La venta pública hecha con la  
"intervención y por orden de la autoridad judicial o  
"administrativa de bienes muebles. Se usa sin  
"embargo como sinónimo de subasta, y comprende  
"también la venta de inmuebles. Procede del  
"árabe.3.





**"REMATE.** La acción de rematar o sea de concluir una cosa. En el Derecho procesal esta palabra tiene dos significados:

"a) La adjudicación que se hace a una persona del bien que sale en venta en subasta o almoneda;

"b) La diligencia misma en que se lleva a cabo la subasta o la almoneda. Rematar un bien significa, por lo tanto, no sólo ponerlo en venta pública por orden y con la intervención de una autoridad judicial o administrativa, sino también adquirirlo en dicho acto. 4.

**"SUBASTA.** Como se sabe, esta palabra procede del latín y significa "bajo la lanza, porque en Roma las ventas públicas se realizaban al amparo de la lanza, símbolo del poder militar y de la autoridad del Estado. Actualmente significa toda venta pública que se hace por orden y con la intervención de la autoridad judicial o administrativa, sea de bienes muebles o de inmuebles, aunque respecto de los primeros, es más propio usar la palabra almoneda, de origen árabe. 5.

"La sentencia impugnada causa agravios en detrimento de los derechos de la quejosa en virtud de que LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO PUEDEN OSTENTARSE COMO POSTOR EN LA CELEBRACIÓN DE UNA DILIGENCIA DE REMATE.

"La anterior afirmación se basa en las siguientes  
"dos premisas:

"1.- LA CAPACIDAD DE GOCE Y EJERCICIO DE  
"LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE  
"ENCUENTRA LIMITADA CONSTITUCIONAL Y  
"LEGALMENTE IMPIDIENDO LA PARTICIPACION  
"DE LAS MISMAS COMO POSTOR EN UNA  
"DILIGENCIA DE REMATE.

"El artículo 27 fracción V de la Constitución  
"establece una prohibición que significa una  
"limitación a la capacidad de goce y ejercicio de las  
"Instituciones de Crédito misma que se traduce en  
"la Imposibilidad de tener en propiedad bienes  
"inmuebles más allá de los enteramente necesarios  
"para la realización de su objeto directo. En el  
"mismo sentido, el artículo 46 fracción XXIII de la  
"Ley de Instituciones de Crédito establece que los  
"bancos sólo podrán adquirir los bienes muebles e  
"inmuebles necesarios para la realización de su  
"objeto.

"De la correcta interpretación de las disposiciones  
"en comento se debe colegir que dichos bienes  
"inmuebles son aquéllos en los cuales funcionan  
"las oficinas y demás instalaciones propias de las  
"actividades bancarias.

"2. EL BANCO SIENDO ACTOR EN UN  
"PROCEDIMIENTO PUEDE ADJUDICARSE EL BIEN



**"PUESTO A REMATE SIN NECESIDAD DE SER  
"POSTOR.**

**"Los acreedores pueden adquirir los bienes a  
"través de la "dación en pago" o "la adjudicación  
"en pago", pues dichos actos jurídicos son algunas  
"de las formas en que los actores pueden  
"satisfacer sus pretensiones en el juicio, en el  
"presente caso, las Instituciones de Crédito pueden  
"recuperar sus inversiones de las siguientes  
"maneras:**

**"1. PAGO.**

**"2. DACIÓN EN PAGO.- La transmisión en  
"propiedad de una cosa hecha por el deudor a  
"favor de su acreedor para pagar con ella su  
"deuda. 6.**

**"3. ADJUDICACIÓN EN PAGO. Aplicar a un  
"acreedor la propiedad de una cosa, para pagar su  
"crédito. En principio no puede obligarse al  
"acreedor a recibir en pago una cosa diversa de la  
"devida, porque tiene derecho de exigir  
"precisamente la cosa o prestación estipuladas,  
"pero en caso de remate, la ley le concede el  
"derecho de adjudicarse el bien rematado, si no se  
"han presentado postores que lo compren. 7.**

**"4. POR POSTURA FINAL ofrecida por el postor  
"que se adjudique el bien en remate. Es necesario  
"atender a los siguientes conceptos:**

**"POSTOR. La persona que pone u ofrece precio o  
"alguna cosa que es vendida o arrendada en  
"subasta judicial. 8.**

**"POSTURA. "El precio que se señala a cualquier  
"cosa, como asimismo el modo, pacto o condición  
"que se pone entre dos o más contratantes...; pero  
"muy singularmente se entiende aquel precio que  
"en las almonedas o arrendamientos de abastos,  
"ejecutados públicamente por las ciudades y  
"pueblos, y ventas judiciales hechas de mandatos  
"de la justicia, se fija cuando sacan éstos a público  
"remate alguna cosa." (Diccionario de Cornejo.)**

**"También se entiende por postura el escrito  
"formulado por la persona que quiere comprar la  
"cosa que se remata, y en el cual expresa el precio  
"que ofrece y las condiciones de pago. 9.**

**"De lo anterior se desprende que el precio pagado  
"por el rematador (postura) constituye la forma  
"legal más frecuente mediante la cual el acreedor  
"puede cobrar las prestaciones que reclama en un  
"procedimiento. La ley lo ha planteado de esta  
"manera, y únicamente a falta de postores puede el  
"banco acreedor adjudicarse en pago el bien cuyo  
"remate se ha decretado como venta judicial, pero  
"de ninguna manera puede ostentarse postor para  
"comprar el mismo.**

**"Es necesario remarcar, que es en la adjudicación  
"en pago donde efectivamente se puede considerar**



**"que el banco recupera parte o la totalidad del  
"crédito otorgado al deudor mientras que el hecho  
"de adquirir bienes ostentándose postor en remate  
"NO SIGNIFICA LA RECUPERACIÓN DE UN  
"CRÉDITO SINO UNA INVERSIÓN INMOBILIARIA al  
"comprar predios a un precio normalmente más  
"bajo que el comercial, lo que se traduce en una  
"inmediata violación del artículo 27 fracción V de la  
"Constitución y del artículo 46 fracción XXIII de la  
"Ley de Instituciones de Crédito.**

**"Por lo que es menester resolver que la Justicia de  
"la Unión Ampara y Protege al aquí recurrente."**

**REZUMEN.-** Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente precisar que de las constancias de autos, así como de los hechos expresados por el quejoso se desprende lo siguiente:

1.- Por auto de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el expediente 1291/95 la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en la ciudad de Mérida de la misma entidad federativa, tuvo por interpuesta la demanda en juicio extraordinario hipotecario, promovida por María de los Milagros Espinosa Faller, en su carácter de apoderada de Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, en contra de LUIS EUGENIO MOLINA POOT, al que le reclamó las siguientes prestaciones:

En cobro de la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO NUEVOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, saldo vencido por concepto de mensualidades; la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS NUEVOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de saldo del crédito; la cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN NUEVOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en concepto de intereses moratorios; más todos los intereses que se causen hasta el día en que se realice el pago y de las costas y gastos del procedimiento.

Asimismo, en este auto se declaró sujeto a juicio hipotecario, el predio marcado con el número trescientos veinticinco de la calle treinta y nueve, del Fraccionamiento Montealbán de esa ciudad, se decretó el secuestro del citado bien, se nombró depositario del mismo; y se corrió traslado de la demanda a la parte demandada.

2. Por auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, a petición del apoderado de la actora, fijó el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas como nueva fecha para que tuviera verificativo en pública subasta, en tercera almoneda, el bien a que se hizo referencia en el punto anterior.



3. En la fecha citada en el punto anterior se llevó a cabo la diligencia en pública subasta y tercera almoneda, la cual culminó con el auto aprobatorio a favor de Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

El contenido de este proveído es el siguiente:



*"En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con treinta minutos del día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, estando en audiencia pública la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Abogada SARA ELENA GONZALEZ M. B. DE TOLEDO, asistida de la Secretaria que autoriza, ésta no cuenta con estos autos con 1- (sic) de dos posturas la primera del Licenciado LUIS ENRIQUE GARCIA BERT y/o JAVIER JESUS RIVERO RAMIREZ como Apoderados de BANCO MER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, personalidad reconocida en autos y la segunda del señor EDGARDO MEDINA DURAN, por ser el día y hora señalados para que tenga lugar el remate en pública subasta y tercera moneda del siguiente bien: solar sin casa, ubicado en esta ciudad municipio de Mérida, en la manzana ciento*

"ochenta y ocho de la sección catastral veintiséis,  
 "marcado con el número trescientos veinticinco de  
 "la calle treinta y nueve del fraccionamiento  
 "Montealbán, que mide trece metros treinta y tres  
 "centímetros de frente por veinticinco metros de  
 "fondo, superficie de trescientos treinta y tres  
 "metros veinticinco centímetros cuadrados y con  
 "los linderos siguientes..." "... los señores LUIS  
 "ENRIQUE GARCIA BERT Y/O JAVIER RIVERO  
 "RAMIREZ OFRECE POR EL BIEN QUE DEBE  
 "VENDERSE LA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO  
 "MIL SETECIENTOS PESOS M.N., Y EL SEÑOR  
 "EDGARDO MEDINA DURAN OFRECE POR EL  
 "BIEN QUE DEBE VENDERSE LA CANTIDAD DE  
 "CIEN PESOS MONEDA NACIONAL, que exhiben en  
 "este acto ofreciendo hacer las pujas y repujas que  
 "en el mismo acto de remate fueron  
 "convenientes a sus derechos y se sometieron  
 "expresamente a la jurisdicción y competencia de  
 "este juzgado.

"A continuación la suscrita Juez pasó  
 "personalmente lista de los postores presentes y  
 "declaró que iba a procederse al remate y que ya  
 "no admitirían nuevos postores, dando enseguida  
 "pública lectura y revisión a las posturas  
 "presentadas las cuáles fueron calificadas de  
 "buenas por estar ajustadas a derecho, habiéndose  
 "declarado diferente la postura de los señores

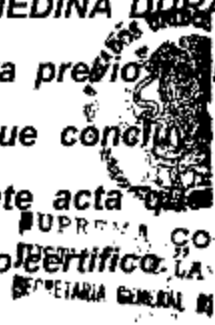




"GARCIA BERT Y/O RIVERO RAMIREZ.

"Seguidamente se interrogó a los postores  
 "presentes acerca de si mejoraban su postura  
 "concediéndose un término de cinco (sic) para tal  
 "efecto y habiendo transcurrido dicho término sin  
 "que los mencionados postores mejoraran su  
 "postura, se declaró cerrado y fincado este remate  
 "a favor de **BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA**,  
 "INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO  
 "FINANCIERO, respecto del predio marcado con el  
 "número **TRESCIENTOS VEINTICINCO DE LA**  
 "CALLE TREINTA Y NUEVE DEL  
 "FRACCIONAMIENTO MONTEALBAN DE ESTA  
 "CIUDAD, descrito y deslindado anteriormente en  
 "nuestra acta, por la cantidad de treinta y ocho mil  
 "setecientos pesos 00/m.n. que fuera exhibida en  
 "esta diligencia. Y la suscrita Juez proveyendo dijo:  
 "VISTOS: Por cuanto en esta diligencia se han  
 "observado las formalidades establecidas en los  
 "artículos 453, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 469 y  
 "478 del Código de Procedimientos Civiles del  
 "Estado, es de aprobarse y se aprueba en cuanto  
 "ha lugar a derecho el remate en pública subasta y  
 "tercera almoneda del predio marcado con el  
 "número **TRESCIENTOS VEINTIOCHO DE LA**  
 "CALLE TREINTA Y NUEVE DEL  
 "FRACCIONAMIENTO MONTEALBAN DE ESTA  
 "CIUDAD, descrito y deslindado anteriormente en

*"esta acta que fuera secuestrado en este juicio,  
 "cerrado y fincado a favor de **BANCOMER**,  
 "SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA  
 "MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO y por la cantidad  
 "de **TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS**  
 "MONEDA NACIONAL, que pagó de contado;  
 "finalmente remítase al Fondo Auxiliar para la  
 "Administración de Justicia del Poder Judicial del  
 "Estado, la cantidad exhibida por los  
 "representantes de la rematadora en concepto de  
 "pago del bien rematado, en calidad de depósito y  
 "a disposición de este Juzgado. Igualmente  
 "devuélvase al postor **EDGARDO MEDINA DURAN**,  
 "la cantidad ofrecida como postura previa al subasta  
 "que otorgue en autos. Con lo que concluya la  
 "diligencia levantándose la presente acta que se  
 "firma y autoriza para constancia. Lo certifico."*



4. El anterior proveído fue impugnado por **EDUARDO MEDINA DURAN** en escrito de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, mediante el recurso de apelación, solicitando con apoyo en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, se remitiese al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5. Por auto de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, admitió el recurso




de referencia y remitió los autos al H. Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, para la resolución del mismo.

6. La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (toca 2456/98), el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictó la resolución que en lo conducente dice lo siguiente:

**"TERCERO.- En este apartado se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias los agravios que la recurrente externó en su correspondiente memorial que obra acumulado a este Toca, y teniendo en cuenta, asimismo, de que el artículo 347 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no exige la formalidad de su transcripción. Sirve de apoyo a este criterio por analogía, la Tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos uno, Tomo catorce, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." (lo transcribe).--**

**"- CUARTO.- En sus dos primeros motivos de inconformidad expuestos por el recurrente se reclama el reconocimiento de la personalidad de los Licenciados Luis Enrique García Bert y/o Javier Jesús Rivero Ramírez, expone que debido**

"a que el poder exhibido por dichas personas  
 "carece de los requisitos exigidos por los artículos  
 "90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 465 del  
 "Código de Procedimientos Civiles y que como  
 "consecuencia se violan los artículos 461 y 464 del  
 "último ordenamiento legal, toda vez que se calificó  
 "como buena una postura que no contenía los  
 "requisitos anteriormente mencionados. Es  
 "infundado este motivo de inconformidad, toda vez  
 "que de la lectura y análisis de las constancias  
 "procesales que integran este Toca, en especial del  
 "documento de poder impugnado, se advierte que  
 "la personalidad de quienes a nombre de  
 "Institución actora comparecieron a la diligencia  
 "de remate, cuyo auto aprobatorio se revisa, se  
 "encuentra debidamente acreditada, toda vez que  
 "exhibieron copia certificada del testimonio de la  
 "escritura pública de fecha veinticinco de  
 "septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
 "otorgada ante fe del Notario Público número  
 "ciento cincuenta y seis del Distrito Federal, que  
 "tiene pleno valor probatorio al tenor de lo  
 "dispuesto en los artículos 290 y 317 del Código de  
 "Procedimientos Civiles del Estado, con la que se  
 "acredita, que en la referida fecha los señores  
 "Miguel García y García, Francisco Javier  
 "Fernández Carvajal, y Víctor Manuel Borrás  
 "Setién, comparecieron ante el Notario actuante a

  
 SUPREMA C  
 JUSTICIA DE LA  
 FEDERACION  
 SECRETARIA GENERAL



"efecto de otorgar a nombre de 'Bancomer',  
"Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,  
"Grupo Financiero, poder general para actos de  
"dominio a favor de los Licenciados Javier Jesús  
"Rivero Ramírez y Luis Enrique García Bert,  
"limitado para que lo ejerciten en forma  
"mancomunada, entre ellos, o con cualquier otro  
"apoderado de la Institución que goce de las  
"mismas facultades, exclusivamente para aquellos  
"casos en que la Institución en su carácter de  
"acreedor, sea parte o tenga interés jurídico en los  
"términos del artículo 465 del Código de  
"Procedimientos Civiles del Estado; que para  
"acreditar la personalidad del primero de los  
"otorgantes exhibieron entre otros documentos, la  
"escritura pública veinticinco mil noventa y siete de  
"fech[redacted] tres de mayo de mil novecientos noventa y  
"seis, otorgada ante el propio notario autorizante,  
"cuya parte conducente fue transcrita por dicho  
"ejidatario en el punto veintiséis de los  
"documentos acumulados al apéndice de la  
"escritura de poder a estudio, (foja cuarenta y  
"siguientes).

"En la que consta la protocolización parcial del  
"acta decisión del Consejo de Administración  
"actora, de fecha veintiocho de marzo de mil  
"novecientos noventa y seis en la que entre otras  
"cosas, el referido consejo de administración,

"acordó el nombramiento del licenciado Miguel  
 "García y García representante legal de la citada  
 "institución así como concederle entre otros poder  
 "general para pleitos y cobranzas y poder general  
 "limitado para actos de dominio, que deberá ejercer  
 "conjuntamente con otro apoderado investido de la  
 "misma facultad, con la facultad expresa para  
 "delegar el poder conferido en favor de terceras  
 "personas; respecto de los dos últimos otorgantes  
 "Ingeniero Francisco Javier Fernández Carbajal y  
 "Contador Público Víctor Borra Setién para  
 "acreditar su personalidad, se exhibieron entre  
 "otros documentos, la escritura número veinticinco  
 "mil noventa y ocho de fecha tres de mayo de mil  
 "novecientos noventa y seis, otorgada ante el  
 "propio autorizante, cuya parte conducente fue  
 "transcrita por dicho fedatario en el punto 27 de los  
 "documentos acumulados al apéndice de poder a  
 "estudio, (fojas 52 y siguientes) en la que consta la  
 "protocolización parcial de la acta de cesión del  
 "consejo de Administración de la Institución  
 "actora, de fecha veintiocho de marzo de mil  
 "novecientos noventa y seis, en la que se entre  
 "otras cosas, el referido consejo de administración  
 "acordó el nombramiento del Ingeniero Francisco  
 "Javier Fernández Carbajal y Contador Público  
 "Víctor Manuel Borrás Setién, entre otras personas,  
 "como representantes legales de la citada



"Institución, así como concederles entre otros,  
"poder general para pleitos y cobranzas y poder  
"general ilimitado para actos de dominio así como  
"la facultad expresa para otorgar y delegar poderes  
"especiales para revocar unos y otros y sustituirlos  
"en todo o en parte, confiriéndoseles también la  
"facultad para que en su caso las personas a  
"quienes otorguen dichos poderes puedan, a su  
"vez, otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o  
"revocarlos en todo o en parte en favor de terceros,  
"con las limitaciones que en cada caso concreto se  
establezcan; así mismo el poder exhibido en autos  
conforme en el punto 22 (foja 14) la inserción  
relativa al nombramiento de los consejeros  
integrantes del consejo de administración y en el  
punto 29 (foja 30 y siguientes) el notario  
"autorizante transcribió las facultades del  
"requerido consejo de administración de la  
"sociedad actora, entre las que destaca la facultad  
"de otorgar poderes generales para pleitos y  
"cobranzas para actos de administración y para  
"actos de dominio, entre otros, así como la facultad  
"para otorgar y delegar poderes generales y  
"especiales revocarlos y otros sustituirlos en todo  
"o en parte, incluyendo expresamente la facultad  
"para que las personas a quienes se otorguen  
"dichos poderes puedan a su vez, delegarlos  
"otorgarlos sustituirlos o revocarlos en todo o en

"parte en favor de terceros; siendo evidente que el  
 "poder exhibido fue otorgado conforme a derecho y  
 "contiene las inserciones exigidas en el artículo  
 "90 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que  
 "resulta suficiente para acreditar la personalidad y  
 "facultades de los comparecientes en  
 "representación de la parte actora, a la diligencia  
 "de remate, cuyo auto aprobatorio nos ocupa, por  
 "lo que en la especie no se actualiza violación  
 "alguna a los artículos que invoca el recurrente.  
 "Como tercer motivo de inconformidad, el  
 "recurrente reclama la violación de los artículos 27  
 "de la Constitución Política de los Estados Unidos  
 "Mexicanos y 46 de la Ley de Instituciones de  
 "Crédito, debido a que considera que de  
 "conformidad con dichos artículos, los bancos no  
 "pueden adquirir más bienes que los estrictamente  
 "necesarios para su objeto directo. Es infundado  
 "este agravio, toda vez que no debe perderse de  
 "vista, que si bien es cierto que el artículo 27  
 "fracción V de la Constitución General de la  
 "República, establece que los bancos no pueden  
 "adquirir en propiedad o en administración, más  
 "bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo, también resulta cierto, que  
 "dicho artículo no establece una prohibición  
 "absoluta a las Instituciones de Crédito de no  
 "poder adquirir bienes raíces, sino que lo limita a





"adquirir más bienes que los estrictamente  
"necesarios para su objeto social; y para el caso,  
"siendo la Constitución, la norma general y los  
"diversos ordenamientos que existen en el derecho  
"mexicano, como es la Ley de Instituciones de  
"Crédito, los que regulan los actos a que se deben  
"sujetar las Instituciones de Crédito y siendo que  
"dicha ley federal no contraviene el espíritu del  
"legislador constitucional, sino todo lo contrario,  
"vigila que se cumpla al disponer en su artículo  
"(sic) fracción VIII, párrafo segundo que cuando  
"una Institución de Crédito reciba en pago de  
"adelantos o para adjudicación en remate, como en  
"la especie, dentro de los juicios relacionados con  
"créditos a su favor, títulos o valores, así como  
"bienes o derechos que no deba conservar en su  
"activo, deberá sujetarse a las disposiciones de  
"carácter general que establezca la Comisión  
"Nacional Bancaria. Además, como ya se ha  
"expresado, el que los bancos se adjudiquen  
"predios a su favor, no contraviene el aludido  
"artículo 27 Constitucional, ya que este no  
"prohíbe tal circunstancia, máxime que la  
"Institución de Crédito compareció a la subasta  
"con el carácter de acreedor directo, a fin de poder  
"recuperar, a posteriori, la inversión que realizó a  
"favor de los particulares demandados, cumpliendo  
"así con el objeto social, que le fue encomendada,

"por lo tanto tal circunstancia queda prevista en la  
 "fracción XXIII del artículo 46 de la Ley de  
 "Instituciones de Crédito, que enumera las  
 "operaciones que podrán ser efectuadas por las  
 "Instituciones de Crédito. Por lo expuesto  
 "anteriormente y ante lo infundado de los agravios  
 "expresados por el recurrente, debe confirmarse el  
 "auto probatorio de remate a revisión por sus  
 "propios y legales fundamentos:--- PRIMERO.- Son  
 "infundados los agravios expresados por  
 "EDGARDO MEDINA DURAN.- SEGUNDO.- Se  
 "CONFIRMA el auto aprobatorio de remate de fecha  
 "dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y  
 "ocho, a las diez horas, dictado por la Juez Cuarta  
 "de lo Civil del Primer Departamento Judicial del  
 "Estado, en el Juicio Extraordinario Hipotecario  
 "promovido por la Licenciada María de los Milagros  
 "Espinosa Faller y continuado por los Licenciados  
 "Luis Enrique García Bert y/o Javier Jesús Rivero  
 "Ramírez como apoderados generales de  
 "'Bancomer', Sociedad Anónima, Institución de  
 "Banca Múltiple, Grupo Financiero, en contra de  
 "LUIS EDUGENIO MOLINA POOT.- TERCERO.-  
 "Notifíquese; remítase a la inferior copia  
 "certificada de la presente resolución y de sus  
 "constancias de notificación a fin de que surta los  
 "correspondientes efectos legales en orden a su



**"cumplimiento y hecho, archívese este Toca como  
"asunto concluido. Cúmplase."**

7. El presente juicio de garantías fue promovido en contra de la resolución precisada en el punto anterior.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán al que correspondió conocer del juicio de amparo, negó el amparo al quejoso, en esencia, con apoyo en las siguientes consideraciones:

Que es inoperante el concepto de violación relativo a que la Sala responsable no fundó ni motivó su resolución, toda vez que no expresó la relación entre el acto reclamado y los derechos fundamentales que estimó violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dicho acto, que comprueben la transgresión a sus derechos públicos fundamentales. Que independientemente de lo anterior, de la lectura de la resolución reclamada en amparo la Sala responsable si expresó los fundamentos aplicables, así como los razonamientos suficientes para estimar improcedentes e infundados los agravios expresados en el recurso de apelación.

Que fue correcta la consideración de la Sala responsable al tener por acreditada la personalidad jurídica de los señores apoderados legales de Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, puesto que los poderes otorgados si

cumplen con los requisitos legales previstos en el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Que la recta interpretación del artículo 27 constitucional, permite inferir que los bancos no están impedidos para adquirir más bienes raíces que los estrictamente necesarios para su objeto, pues de la interpretación histórica de ese precepto constitucional, se advierte que no obstante que no se aprobó la adición propuesta por la Comisión dictaminadora (en relación a que transitoriamente y por el breve plazo que fijaran las leyes, los bancos podían tener en propiedad aquellos bienes que se les adjudicara judicialmente en pago de sus créditos); esto no significaba que el espíritu del legislador fuese el de prohibir tajantemente que los bancos adquirieran, aún provisionalmente, bienes raíces adjudicados judicialmente, supuesto que la Comisión retiró la adición propuesta, lo que originó que la Asamblea no manifestara su opinión al respecto. De manera que si la prohibición contenida en la fracción V del artículo 27 constitucional tenía como propósito impedir que la propiedad raíz se incorporara a bienes de manos muertas, es claro que toda decisión que contrariase el motivo del legislador para consignar esa norma en la Constitución, violaría ésta; sin embargo, las necesidades propias del funcionamiento del crédito y las circunstancias económicas del país requieren que provisionalmente exista esa adjudicación, conservando la movilidad de la propiedad raíz, lo que no contraría en el fondo el motivo del legislador, ya que según se señaló no hubo votación expresa en el sentido de desechar la adición mencionada y, por



otro lado, el precepto constitucional es susceptible de una interpretación progresiva acorde con la economía social y con el desarrollo progresista del país, ya que las condiciones que prevalecían en el país en mil novecientos diecisiete, por la posición en que se encontraban los bancos y por el régimen de derecho en que se desarrollaban sus actividades, no pueden hacerse valer en la actualidad, pues desaparecida la causa del tenor de consagrar un sistema de privilegios en perjuicio de los pobres o de la conveniencia social o colectiva, desaparece también el motivo para desechar la adición a que se ha hecho referencia, la cual no pugna con la razón matriz que inspiró al Constituyente de mil novecientos diecisiete, que actuó en un momento psicológico y sociológico diferente al actual, que requiere que las leyes se interpreten en concordancia con la economía de la época en que deben aplicarse; de donde resulta válido concluir que la adjudicación temporal a los bancos en juicios seguidos por ellos sin ningún privilegio procesal, sólo contravendría la disposición constitucional si esa temporalidad corriese el riesgo de convertirse en perpetuidad, lo que no sucede porque el artículo 106, fracción XIII, de la Ley de Instituciones de Crédito, regula esa situación al disponer que cuando una institución de crédito reciba en pago de adeudos o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor, títulos o valores que no deba conservar en su activo, así como bienes o derechos, deberá sujetarse a las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional Bancaria, esto es a las relativas a que los bancos

saquen a remate los bienes que a su vez hubiese adquirido en remates judiciales.

Como apoyo de su resolución el Juez de Distrito citó la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de este alto Tribunal, que se encuentra transcrita a fojas treinta y seis de la presente resolución y rubro dice: "INSTITUCIONES DE CREDITO, SU CAPACIDAD PARA POSEER Y ADMINISTRAR BIENES RAICES."

**CUARTO.-** A continuación se procede al análisis del quinto agravio que se esgrime en relación a la interpretación que el Juez Federal llevó a cabo en la sentencia que se revisa en relación al artículo 27, fracción V, constitucional.

Como se asentó previamente en los antecedentes que del caso ya se sintetizaron, de la lectura del fallo que se revisa se advierte que dicho juzgador interpretó el artículo 27, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que sí les está permitido a las Instituciones bancarias, constituirse en adjudicatarias de los bienes materia de remate, respecto de los cuales tengan gravámenes derivados de créditos concedidos.

Ahora bien, en razón de que el análisis que se efectúa se constriñe a la situación apuntada en el párrafo que antecede, es menester que en forma previa a la interpretación constitucional se puntualicen las características del procedimiento de remate.



En la diligencia de remate, a efecto de realizar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, se efectúan una serie de actos procesales tendientes a preparar las diligencias en las que se llevará a cabo la licitación de los bienes que fueron embargados en el juicio y con los cuales el deudor garantizó la deuda contraída con la institución crediticia de que se trate. Para ello, una vez que se cuenta con el avalúo del o los inmuebles, se realizan convocatorias a efecto de que quienes estén interesados, comparezcan como postores a la almoneda que corresponda. En esta etapa deben realizarse las publicaciones por edictos en los que se incluirán los datos del juicio así como la fecha y hora en que habrá de tener verificativo la celebración de la almoneda y el precio de los bienes respecto de los cuales se llevará a cabo el remate.

Cabe señalar que para poder intervenir como licitador o postor en el procedimiento de remate resulta indispensable la formulación escrita de su pretensión de actuar en dicho sentido y de que se le reconozca esa calidad, una vez exhibido el importe que corresponda y abrir con ello la posibilidad de que su postura sea tomada en cuenta por el importe inicialmente propuesto o bien, en el evento de que concurren varios postores, realice pujas a efecto de superar las posturas de otros licitadores.

En la hipótesis de que su postura resulte la mejor, el juez procede a declarar fincado el remate de los bienes a su favor, con lo cual se convierte en adjudicatario, de ahí que pueda

afirmarse que la adjudicación constituye una resolución judicial por medio de la cual se declara que la propiedad de determinados bienes pasa al patrimonio de otra persona, surtiendo sus efectos desde ese momento y con independencia de que se otorgue o no la escritura correspondiente.

Al respecto señala Carnelutti, citado por Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, que en los remates judiciales, la adjudicación que hace el Juez al mejor postor, constituye un acto necesario para perfeccionar el contrato de compraventa que se lleva a cabo en el remate. De ese modo, dice, el *iter* del contrato mediante subasta, presenta además de la propuesta y de la aceptación, una tercera fase, a la que se da el nombre de adjudicación y de ahí que el contrato celebrado mediante subasta, no conste sólo de la propuesta y de la aceptación conjuntamente combinadas, sino de otra declaración que consiste en el acercamiento de las declaraciones acertadas para formar un negocio concursal.

En el caso a estudio, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán regula el procedimiento de remate en los artículos 453 a 479, de dichos preceptos se citan los siguientes:

**"ARTICULO 453.- Toda venta que conforme a la ley  
deba hacerse en subasta o almoneda, se sujetará  
a las disposiciones contenidas en este título,  
salvo en los casos en que la ley disponga  
expresamente lo contrario.--- ARTICULO 455.- No**





"podrá procederse al remate de bienes raíces, sin  
"que previamente se haya pedido al Registro  
"Público certificado de los gravámenes, ni sin que  
"se haya citado a los acreedores que aparezcan en  
"dicho certificado. Este comprenderá los últimos  
"veinte años; pero si en autos obrare ya otro  
"certificado sólo se pedirá al Registro el relativo al  
"período transcurrido desde la fecha de aquél  
"hasta la en que se decretó la venta.--- ARTICULO.-  
"458.- Durante el remate se podrán de manifiesto  
"los planos que hubiere y estarán a la vista los  
"avalúos.--- ARTICULO 459.- Los postores tendrán  
"la mayor libertad para hacer sus propuestas,  
"debiendo ministrarles los datos que pidan y se  
"hallen en los autos.--- ARTICULO 460.- El día del  
"remate, a la hora señalada, pasará el juez  
"personalmente lista de los postores presentes y  
"declarará que va a procederse al remate y ya no  
"admitirá nuevos postores.--- ARTICULO 461.-  
"Procederá enseguida a la lectura publica y  
"revisión de las propuestas presentadas  
"desechando desde luego las que no contengan  
"postura legal y las que no estuvieren abonadas  
"conforme al artículo siguiente.--- ARTICULO 462.-  
"Los postores exhibirán con su postura el  
"veinticinco por ciento de su importe total; de lo  
"contrario, no serán admitidos. Si el acreedor se  
"ostenta como postor, no tendrá esta obligación.

"La cantidad exhibida les será devuelta en el acto  
 "del remate en caso de que no hubiere fincado en  
 "su favor. La suma exhibida por el rematador se  
 "mandará depositar conforme al artículo 485, al  
 "terminarse el acto y se agregará a los autos el  
 "billete respectivo.--- ARTICULO 466.- Calificadas  
 "de buenas las posturas el juez leerá en voz por sí  
 "mismo o mandará darles lectura por el Secretario,  
 "para que los postores presentes puedan  
 "mejorarlas. Si hay varias posturas legales, el Juez  
 "decidirá cuál será la preferente.--- Hecha la  
 "declaración de la postura considerada preferente,  
 "el juez preguntará si alguno de los postores la  
 "mejora, y así sucesivamente con respecto a las  
 "pujas que se hagan. En cualquier momento en  
 "que, pasados cinco minutos de hecha la pregunta  
 "correspondiente no se mejore la última postura o  
 "puja, declarará el tribunal fincado el remate en  
 "favor del postor que hubiere hecho aquella. En la  
 "misma audiencia el Juez dictará auto aprobando o  
 "no el remate. Este auto es apelable y el Tribunal  
 "de apelación, sin substanciación alguna, decidirá  
 "de plano dentro de tres días de recibidos los  
 "autos.--- ARTICULO 467.- Si hay varias posturas  
 "iguales, e interrogados los postores conforme al  
 "artículo anterior, ninguno las mejorare, será  
 "preferida la que elija el deudor, si cubre de  
 "contado el crédito que se demande, sus intereses



"y las costas. Si el contado no fuere bastante para  
"satisfacer las prestaciones referidas, la elección  
"será del acreedor. La preferencia de la postura  
"deberá declararse en el acto mismo del remate. Si  
"el que debe elegir postura no lo hiciere en el acto  
"mismo del remate o no asistiere a él, el Juez hará  
"la elección por sorteo en presencia de los  
"interesados.--- ARTICULO 468.- Antes de  
"comenzado el remate puede el deudor librar sus  
"bienes, pagando principal, intereses y costas.---  
"ARTICULO 469.- Ejecutoriado el auto de  
"aprobación del remate, dentro de las veinticuatro  
"horas siguientes, el Juez prevendrá al deudor que  
"exhiba dentro de tres días los títulos del predio  
"rematado y otorgue la escritura de propiedad al  
"rematador; y a éste prevendrá que exhiba dentro  
"del mismo término el saldo que adeude del precio  
"del remate. Si el deudor no cumpliera, el Juez  
"otorgará la escritura. Si no se exhibiere, el saldo,  
"se declarará sin efecto el remate, y lo ya exhibido  
"se abonará al dueño del predio rematado, y si ésta  
"estuviere embargado, al crédito objeto del juicio.--  
"ARTICULO 470.- Otorgada la escritura y pagado el  
"precio, pondrá el Juez al comprador en posesión  
"si la pidiere con citación de los colindantes,  
"arrendatarios y demás interesados. Si el deudor  
"habitare el predio, se le fijarán tres días para  
"desocuparlo, y de no hacerlo así, se le aplicarán

"los medios de apremio que señala la ley.---

"ARTICULO 471.- Con el precio se pagará al  
"acreedor hasta donde alcance, y lo mismo se  
"verificará con las costas hasta donde estén  
"aprobadas, manteniéndose entre tanto, en  
"depósito, la cantidad que se estime conveniente  
"para cubrir las que estén pendiente de aprobar.---

"ARTICULO 472.- Si el precio excediere del monto  
"de la suerte principal y las costas, formada la  
"liquidación, se entregará la parte restante al  
"deudor, si no se hallare retenida a instancia de  
"otro acreedor, observándose en su caso lo  
"dispuesto en el Título Primero del Libro Cuarto  
"para cuando se hubiere formado concurso de  
"acreedores.---

ARTICULO 473.- En la liquidación,  
"deberán comprenderse todas las costas  
"posteriores a la sentencia de remate.---

ARTICULO  
"474.- La segunda y ulteriores ejecuciones  
"proceden su efecto en lo que resulte líquido del  
"precio del remate después de hecho el pago al  
"primer embargo, salvo el caso de preferencia de  
"derechos.---

ARTICULO 475.- El segundo y  
"posteriores ejecutantes pueden ostentarse como  
"terceros coadyuvantes del acto y pedir en el juicio  
"privilegiado el avalúo y remate de la cosa  
"embargada, cuando el primero no lo pidiere.---

"ARTICULO 476.- Si en la primera almoneda no  
"hubiere postura legal, se citará a otra,



**"publicándose un sólo pregón en el 'Diario Oficial'**  
**"con cinco días, cuando menos, de anticipación a**  
**"la fecha fijada para el remate. En esta segunda**  
**"almoneda se tendrá como precio el primitivo, con**  
**"deducción de un veinte por ciento.--- ARTICULO**  
**"477.- Si en la segunda almoneda tampoco hubiere**  
**"postura legal, se citará para la tercera, en la forma**  
**"establecida en el artículo anterior.--- ARTICULO**  
**"478.- (Reformado por Decreto número 44**  
**"publicado en el Diario Oficial de fecha 1º de**  
**"octubre de 1942).- En la tercera almoneda, la venta**  
**"se hará al mejor postor; pero los postores deberán**  
**"exhibirse en el acto mismo del remate el importe**  
**"total de su postura, así como el de las pujas y**  
**"mejoras que hicieren".**

Del contenido de los preceptos legales supracitados se concluye, como se indicó previamente, que salvo que el deudor cumpla con su obligación de pago deberá ceder sus bienes a favor de quien comparece como postor o acreedor a efecto de que con su venta se efectúe el pago de las prestaciones a las que fue condenado.

Una vez precisado lo anterior, por orden lógico debe abordarse en principio, el agravio hecho valer por el quejoso, relativo a que no es atribución del Juez de Distrito la interpretación de un precepto constitucional, lo cual resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 103 constitucional, los Tribunales de la Federación deben resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales.

De este precepto constitucional se deriva la procedencia del juicio de amparo contra leyes que se estimen violatorias de las garantías individuales, así como la obligación de los Tribunales Federales de resolver las controversias en las que se plantee dicha violación.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 de la propia Constitución, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, corresponde, como órgano superior, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciéndose que su competencia se determinará en las leyes, de conformidad con las bases que se establece en la Carta Magna.

Lo anterior obedece a que el sistema de control de la constitucionalidad se encuentra a cargo del Poder Judicial Federal, atendiendo al principio de la división de poderes, ya que la existencia del órgano controlador de la supremacía constitucional se justifica porque tiende a conservar la fuerza de la Ley Suprema y evitar que sea violada impunemente, lo que se logra a través del sistema de control por órgano judicial.



Este órgano tiene la función de controlar la constitucionalidad de actos del poder público que engendren perjuicio a un particular y se encuentra centralizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, en principio, es la única facultada para juzgar, en definitiva, sobre la constitucionalidad de leyes, siendo la materia del conflicto la violación, por una autoridad, a un derecho consagrado en la Constitución.

El artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que el Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

**"El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:---**

**"I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación;--- II.-**

**"El Tribunal electoral;--- III.- Los tribunales**

**"colegiados de circuito; --- IV.- Los tribunales**

**"unitarios de circuito;--- V.- Los juzgados de**

**"distrito;--- VI.- El Consejo de la Judicatura**

**"Federal;--- VII.- El jurado federal de ciudadanos, y--**

**"- VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito**

**"Federal en los casos previstos por el artículo 107,**

**"fracción XII, de la Constitución Política de los**

**"Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que,**

**"por disposición de la ley deban actuar en auxilio**

**"de la Justicia Federal".**

El sistema de control de la constitucionalidad en el Sistema Federal Mexicano, es un control por vía de acción, que requiere de la actuación del agraviado para pedir la reparación del perjuicio causado por la norma que se estima inconstitucional y sus efectos son relativos, es decir, atañen sólo a quien ejercitó la acción.

Al respecto, resulta ilustrativa la cita de algunas consideraciones de Emilio Rabasa, que se realiza en el libro "El control de la Constitucionalidad de las Leyes y el Juicio de Amparo de Garantías en el Estado Federal.- La Defensa Integral de la Constitución", de Manuel Rangel y Vázquez, Editorial Cultura, T.G., S.A., 1952, p.p. 256 y 257, que a continuación se transcribe:

***"La teoría jurídica del poder judicial le atribuye la esencial función de mantener, dentro de todo respeto la soberanía del pueblo que no tiene más expresión que los dictados de la ley fundamental. De modo más concreto, y por virtud de las atribuciones que ésta le señala, aquella función, sintetizada en un solo principio, se traduce por la de interpretar definitivamente la Constitución, y se descompone dentro del régimen federal en estos otros: 1º Mantener a cada poder dentro de sus límites constitucionales con relación a los derechos de las personas, para evitar la arbitrariedad.- 2º Mantener a cada poder dentro de***





"sus propias funciones con respecto a los otros  
 "dos.- 3º Mantener en su esfera de acción tanto al  
 "poder federal como al del Estado para conservar  
 "la forma de gobierno.--- Como medio práctico de  
 "satisfacer estas exigencias de la teoría, se creó el  
 "juicio constitucional que debe ponerse en  
 "ejercicio en cada caso que ocurra de que un poder  
 "o sus agentes traspasen los límites de su acción  
 "legítima. La práctica comienza a ser incompleta  
 "por la sola naturaleza del remedio; éste no puede  
 "ser sino 'del orden jurídico' porque se encomienda  
 "a tribunales; el juicio debe ser iniciado a petición  
 "de parte, porque el procedimiento sin actor sería  
 "una intrusión en la política del gobierno; se  
 "requiere, pues, un agraviado, un derecho personal  
 "violado, y de este modo quedan fuera del  
 "conocimiento de la de la justicia todas las  
 "violaciones que no se resuelven en daño de  
 "individuo particulares. Es ésta una deficiencia que  
 "dimana de las propias virtudes del remedio, y para  
 "aprovechar las virtudes hay que aceptar la  
 "deficiencia.--- Pero al establecer la materia del  
 "juicio deben comprenderse en ella todos los  
 "casos que puedan originarlo; es decir, todos  
 "aquellos en que la violación puede resolverse en  
 "perjuicio de un individuo sobre su persona, sus  
 "bienes, sus intereses de cualquier género y aún

**"sobre las ventajas que del cumplimiento de la  
"Constitución puedan derivarse de él".**

Las bases a que se refiere el artículo 94 antes citado, se encuentra en el artículo 107, cuyo texto, para mayor ilustración, se transcribe en forma parcial a continuación:

**"Artículo 107.- Todas las controversias de que  
"habla el Artículo 103 se sujetarán a los  
"procedimientos y formas del orden jurídico que  
"determine la ley, de acuerdo a las bases  
"siguientes:--- I. El juicio de amparo se seguirá  
"siempre a instancia de parte agraviada;--- II. La  
"sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de  
"individuos particulares, limitándose a ampararlos  
"y protegerlos en el caso especial sobre el que  
"verse la queja, sin hacer una declaración general  
"respecto de la ley o acto que la motivare.--- En el  
"juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de  
"la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley  
"Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta  
"Constitución... --- III. Cuando se reclamen actos  
"de tribunales judiciales, administrativos o del  
"trabajo, el amparo sólo procederá en los casos  
"siguientes:....; --- IV. En materia administrativa el  
"amparo procede, además, contra resoluciones que  
"causen agravio no reparable mediante algún  
"recurso, juicio o medio de defensa legal. No será**



"necesario agotar éstos cuando la ley que los  
"establezca exija, para otorgar la suspensión del  
"acto reclamado, mayores requisitos que los que la  
"Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera  
"como condición para decretar esa suspensión;---  
"V. El amparo contra sentencias definitivas o  
"laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea  
"que la violación se cometa durante el  
"procedimiento o en la sentencia misma, se  
"promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito  
"que corresponda, conforme a la distribución de  
"competencias que establezca la Ley Orgánica del  
"Poder Judicial de la Federación en los casos  
"siguientes:--- VI. En los casos a que se  
"refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria  
"de los artículos 103 y 107 de esta Constitución  
"establecerá el trámite y los términos a que deberán  
"someterse los Tribunales Colegiados de Circuito  
"y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para  
"dictar sus respectivas resoluciones;--- VII. El  
"amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o  
"después de concluido, o que afecten a personas  
"extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de  
"autoridad administrativa, se interpondrá ante el  
"juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se  
"encuentre el lugar en que el acto reclamado se  
"ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se  
"limitará al informe de la autoridad, a una audiencia

"para la que se citará en el mismo auto en el que se  
 "mande pedir el informe y se recibirán las pruebas  
 "que las partes interesadas ofrezcan y oirán los  
 "alegatos, pronunciándose en la misma audiencia  
 "la sentencia;--- VIII. Contra las sentencias que  
 "pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los  
 "Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión.  
 "De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:---;-  
 "-- En los casos no previstos en los párrafos  
 "anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales  
 "Colegiados de Circuito y sus sentencias no  
 "admitirán recurso alguno;--- IX. Las resoluciones  
 "que en materia de amparo directo pronuncien los  
 "Tribunales Colegiados de Circuito no admiten  
 "recurso alguno, a menos de que decidan sobre la  
 "Inconstitucionalidad de una ley o establezcan la  
 "interpretación directa de un precepto de la  
 "Constitución, caso en que serán recurribles ante  
 "la Suprema Corte de Justicia, limitándose la  
 "materia del recurso exclusivamente a la decisión  
 "de las cuestiones propiamente constitucionales;---  
 "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de  
 "suspensión en los casos y mediante las  
 "condiciones y garantías que determine la ley, para  
 "lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la  
 "violación alegada, la dificultad de reparación de  
 "los daños y perjuicios que pueda sufrir el  
 "agraviado con su ejecución, los que la suspensión



"origine a terceros perjudicados y el interés público.--- XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;--- XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII...; --- XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán

"denunciar la contradicción ante la Suprema Corte  
 "de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala  
 "respectiva, según corresponda, decidan la tesis  
 "que debe prevalecer como jurisprudencia...;---  
 "XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la  
 "fracción II de este artículo, se decretará el  
 "sobreseimiento del amparo o la caducidad de la  
 "instancia por inactividad del quejoso o del  
 "recurrente, respectivamente, cuando el acto  
 "reclamado sea del orden civil o administrativo, en  
 "los casos y términos que señale la ley  
 "reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará  
 "firme la sentencia recurrida;--- XV. El Procurador  
 "General de la República o el agente del Ministerio  
 "Público Federal que al efecto designare, será parte  
 "en todos los juicios de amparo; pero podrán  
 "abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando  
 "el caso de que se trate carezca, a su juicio, de  
 "interés público;--- XVI. Si concedido el amparo la  
 "autoridad responsable insistiere en la repetición  
 "del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia  
 "de la autoridad federal, y la Suprema Corte de  
 "Justicia estima que es inexcusable el  
 "incumplimiento,...;--- La inactividad procesal o la  
 "falta de promoción de parte interesada, en los  
 "procedimientos tendientes al cumplimiento de las  
 "sentencias de amparo, producirá su caducidad en  
 "los términos de la ley reglamentaria.--- XVII. La



"autoridad responsable será consignada a la  
 "autoridad correspondiente, cuando no suspenda  
 "el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando  
 "admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente,  
 "siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la  
 "responsabilidad civil de la autoridad con el que  
 "ofreciere la fianza y el que la prestare, y --- XVIII.  
 "Derogada".

El artículo 114, de la Ley de Amparo, establece que

El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito.--- I.-  
 Contra leyes federales o locales, tratados  
 internacionales, reglamentos expedidos por el  
 Presidente de la República de acuerdo con la  
 LA DE "Exposición I del artículo 89 constitucional,  
 "reglamentos de leyes locales expedidos por los  
 "gobernadores de los Estados, u otros  
 "reglamentos, decretos o acuerdos de observancia  
 "general, que por su sola entrada en vigor o con  
 "motivo del primer acto de aplicación, causen  
 "perjuicios al quejoso:--- II.- Contra actos que no  
 "proviengan de tribunales judiciales,  
 "administrativos o del trabajo.--- En estos casos,  
 "cuando el acto reclamado emane de un  
 "procedimiento seguido en forma de juicio, el  
 "amparo sólo podrá promoverse contra la  
 "resolución definitiva por violaciones cometidas en

"la misma resolución o durante el procedimiento, si  
 "por virtud de estas últimas hubiere quedado sin  
 "defensa el quejoso o privado de los derechos que  
 "la ley de la materia le conceda, a no ser que el  
 "amparo sea promovido por persona extraña a la  
 "controversia.--- III.- Contra actos de tribunales  
 "judiciales, administrativos o del trabajo  
 "ejecutados fuera de juicio o después de  
 "concluido.--- Si se trata de actos de ejecución de  
 "sentencia, sólo podrá promoverse el amparo  
 "contra la última procedimiento respectivo,  
 "pudiendo reclamarse en la misma demanda las  
 "demás violaciones cometidas durante ese  
 "procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al  
 "quejoso.--- Tratándose de remates, sólo podrá  
 "promoverse el juicio contra la resolución definitiva  
 "en que se aprueben o desaprueben.--- IV.- Contra  
 "actos en el juicio que tengan sobre las personas o  
 "las cosas una ejecución que sea de imposible  
 "reparación;--- V.- Contra actos ejecutados dentro o  
 "fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a  
 "él, cuando la ley no establezca a favor del  
 "afectado algún recurso ordinario o medio de  
 "defensa que pueda tener por efecto modificarlos o  
 "revocarlos, siempre que no se trate del juicio de  
 "tercería;--- VI.- Contra leyes o actos de la  
 "autoridad federal o de los Estados, en los casos





315

**"de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta  
"ley".**

Como se advierte de los preceptos transcritos, el control constitucional de los actos de autoridad le corresponde al Poder Judicial Federal, que es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior, y por los órganos que se precisan en el artículo 1° de su Ley Orgánica, entre las que se encuentran los juzgados de distrito. Asimismo, se desprende que los jueces de Distrito conocerán de las demandas que se promuevan contra los actos que se precisan en el artículo 114 a que se hizo referencia; y que procede el recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito en que habiéndose impugnado en la demanda, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República o reglamentos expedidos por los Gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

Por tanto, debe concluirse que se encuentra dentro de la competencia de los jueces de Distrito, examinar el alcance de los preceptos constitucionales y, si en la demanda de amparo el agraviado esgrimió como concepto de violación que la autoridad responsable analizó indebidamente el argumento que hizo valer respecto a que el juez de primer grado adjudicó a favor del banco

actor el inmueble materia de remate y que no se tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 27, fracción V constitucional, es inconcuso que el Juez de Distrito debió examinar si existió la violación a la garantía invocada, y determinar el alcance del artículo 27 constitucional, fracción V, en ejercicio de las atribuciones que le conceden las normas invocadas.

Por otra parte, en cuanto a los demás argumentos hechos valer por el quejoso, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo se analizaran en forma conjunta, debe estimarse que al contrario de lo aducido en ellos, la interpretación realizada por el Juez de Distrito de lo dispuesto en el artículo 27, fracción V de la Constitución Federal, sí se apega al espíritu de este precepto.

Para corroborar esa conclusión resulta necesario fijar el alcance de lo dispuesto en este último numeral, acudiendo a los diversos métodos que, ante su redacción, deben utilizarse para desentrañar cuál fue la intención del Constituyente de mil novecientos diecisiete al establecer la restricción allí prevista, lo que permitirá concluir si la adjudicación realizada en favor de una institución de crédito, como consecuencia de una resolución judicial en la que se le reconoce el derecho a recuperar un crédito, se apega o transgrede al referido precepto constitucional.

En ese sentido, como lo realiza ante toda interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia debe acudir, por



principio, a la interpretación literal del artículo 27, fracción V, constitucional, el cual dispone:

**"ARTICULO 27.-...V.- Los bancos debidamente  
"autorizados conforme a las leyes de instituciones  
"de crédito podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo".**

De la lectura del referido precepto se advierte que el Constituyente, a través de él, restringió la capacidad de los bancos para tener en propiedad o administrar bienes raíces, limitándose a que únicamente adquirieran esos bienes cuando fueran enteramente necesarios para su objeto directo.

En ese sentido atendiendo a la literalidad del precepto en comento, resulta patente que en la redacción utilizada por el Constituyente no se expresó en forma precisa qué bienes raíces podrían adquirir y administrar los bancos, pues el ejercicio de tales prerrogativas se condicionó a la circunstancia de que éstos fueran enteramente necesarios para su objeto directo, materia esta última que no se precisó en el referido numeral ni se determinó en alguno de los preceptos que integran la Constitución Política del cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, por lo que al contrario de lo aducido por el recurrente,

la interpretación realizada por el Juez de Distrito del conocimiento no debe calificarse como contraria al texto constitucional.

Ante ello, para arribar a una conclusión sobre el alcance que debe darse a tal precepto constitucional, en relación con la adjudicación de bienes a los bancos, por principio, es conveniente buscar si existe algún elemento en su proceso de creación que permita conocer cuáles fueron las causas y los fines que llevaron al Constituyente a establecer la restricción en comento, lo que implica acudir a su interpretación causal y teleológica.

Al respecto destaca que en el proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza, respecto de su artículo 27 sostuvo:

***"El artículo en cuestión, además de dejar en vigor  
"la prohibición de las Leyes de Reforma sobre la  
"capacidad de las corporaciones civiles y  
"eclesiásticas para adquirir bienes raíces,  
"establece también la incapacidad en las  
"sociedades anónimas, civiles y comerciales, para  
"poseer y administrar bienes raíces, exceptuando  
"de esa incapacidad a las instituciones de  
"beneficencia pública y privada, únicamente por lo  
"que hace a los bienes raíces estrictamente  
"indispensables y que se destinen de una manera  
"inmediata y directa al objeto de dichas***

517



"Instituciones, facultándolas para que puedan tener  
 "sobre los mismos bienes raíces capitales  
 "impuestos e intereses, los que no serán mayores,  
 "en ningún caso, del que se fije como legal y por un  
 "término que no exceda de diez años.--- La  
 "necesidad de esta reforma se impone por sí sola,  
 "pues nadie ignora que el clero, incapacitado para  
 "adquirir bienes raíces, ha burlado la prohibición  
 "de la ley, cubriéndose de sociedades anónimas; y  
 "como por otra parte, estas sociedades han  
 "emprendido en la República la empresa de  
 "adquirir grandes extensiones de tierra, se hace  
 "necesario poner a este mal un correctivo pronto y  
 "eficaz, porque, de lo contrario, no tardaría el  
 "territorio nacional en ir a parar, de hecho o de una  
 "manera ficticia, en manos de extranjeros.--- En  
 "otra parte se os consulta la necesidad de que todo  
 "extranjero, al adquirir bienes raíces en el país,  
 "renuncie expresamente a su nacionalidad, con  
 "relación a dichos bienes, sometiéndose en cuanto  
 "a ellos, de una manera completa y absoluta, a las  
 "leyes mexicanas, cosa que no sería fácil de  
 "conseguir respecto de las sociedades, las que,  
 "por otra parte, constituyen, como se acaba de  
 "indicar, una amenaza seria de monopolización de  
 "la propiedad territorial de la república.---  
 "Finalmente, el artículo en cuestión establece la  
 "prohibición expresa de que las instituciones de

**"beneficencia privada puedan estar a cargo de  
"corporaciones religiosas y de los ministros de los  
"cultos, pues de lo contrario, se abriría nuevamente  
"la puerta al abuso".**

En ese sentido, el artículo 27 del referido proyecto disponía:

**"Artículo 27. La propiedad privada no puede  
"ocuparse para uso público, sin previa  
"indemnización. La necesidad o utilidad de la  
"ocupación deberá ser declarada por la autoridad  
"administrativa correspondiente; pero la  
"expropiación se hará por la autoridad judicial,  
"el caso de que haya desacuerdo sobre sus  
"condiciones entre los interesados."**

**"Las corporaciones e instituciones religiosas,  
"cualquiera que sea su carácter, determinación,  
"duración y objeto, no tendrán capacidad legal para  
"adquirir en propiedad o para administrar más  
"bienes raíces que los edificios destinados  
"inmediata y directamente al servicio u objeto de  
"dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la  
"tendrán para adquirir o administrar capitales  
"impuestos sobre bienes raíces.**

**"Las instituciones de beneficencia pública o  
"privada para el auxilio de los necesitados, la  
"difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de  
"los individuos que a ellas pertenezcan, o para**



"cualquier otro objeto lícito, en ningún caso podrán estar bajo el patronato, dirección o administración de corporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero únicamente los que fueren indispensables y que se destinen de una manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de que se trata.

"También podrán tener sobre bienes raíces, capitales impuestos a interés, el que no será mayor, en ningún caso, del que se fije como legal y por un término que no exceda de 10 años.

"Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren conservado posteriormente a la Ley de Desamortización, ya que se les restituyan o que se ~~restituyan~~ ~~los~~ ~~sean~~ nuevos, conforme a las leyes, se disfrutarán en común por sus habitantes, entretanto se reparten conforme a la ley que al efecto se expida.

"Ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.

"Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales, dentro y fuera de las poblaciones; lo mismo que explotaciones mineras, de petróleo

"o de cualquier otra clase de sustancias que se  
 "encuentren en el subsuelo, así como también vías  
 "férreas u oleoconductos; pero no podrán adquirir  
 "ni administrar por sí, propiedades rústicas en  
 "superficie mayor de la que sea estrictamente  
 "necesaria para los establecimientos o servicios de  
 "los objetos indicados y que el Ejecutivo de la  
 "Unión fijará en cada caso.  
 "Los bancos debidamente autorizados conforme a  
 "las leyes de asociaciones de crédito, podrán tener  
 "capitales impuestos sobre propiedades urbanas y  
 "rústicas, de acuerdo con las prescripciones de  
 "dichas leyes".

Una vez reunido el Constituyente, en su sesión ordinaria número sesenta y uno, celebrada el jueves veinticinco de enero de mil novecientos diecisiete, se presentó una iniciativa referente a la propiedad sobre bienes raíces en la República, elaborada por Pastor Rouix, Julián Adame, D. Pastrana J. , Pedro A. Chapa, José Álvarez, José N. Macías, Porfirio del Castillo, Federico E. Ibarra, Rafael L. de los Ríos, Alberto Terrones B. , S. de los Santos, Jesús de la Torre, Silvestre Dorador, Dionisio Zavala, E. A. Enríquez, Antonio Gutiérrez, Rafael Martínez de Escobar y Rubén Martí, a través de la cual se proponía un nuevo texto del mencionado artículo 27, en cuya fracción VI se establecía:

**"V. Los bancos debidamente autorizados conforme  
 "a las leyes de instituciones de crédito, podrán**





**"tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración, más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo."**

Posteriormente, en la sesión ordinaria número sesenta y seis, celebrada el lunes veintinueve de enero de mil novecientos diecisiete, se dio lectura al dictamen sobre el artículo 27 del proyecto de Constitución, elaborado por la Comisión integrada por los constituyentes Francisco J. Múgica, Alberto Román, L. G. Monzon, Enrique Recio y Enrique Colunga. En el referido dictamen, en relación con la materia en estudio, se dispuso:

**"El estudio del artículo 27 del proyecto de Constitución abarca varios puntos capitales: Si debe considerarse la propiedad como derecho natural; cuál es la extensión de este derecho; a quiénes debe reconocerse capacidad para adquirir bienes raíces y qué bases generales pueden plantearse siquiera como preliminares para la resolución del problema agrario, ya que el tiempo angustioso de que dispone el Congreso no es bastante para encontrar una solución completa de problema tan trascendental. Conforme a este plan, emprendió su estudio la Comisión, teniendo a la vista las numerosas iniciativas que ha recibido, lo**

"mismo que el trabajo que presentó a la Cámara el  
 "diputado Pastor Rouaix, quien ayudó eficazmente  
 "a la Comisión, tomando parte en sus  
 "deliberaciones.--- Si se considera que todo  
 "esfuerzo, todo trabajo humano, va dirigido a la  
 "satisfacción de una necesidad; que la naturaleza  
 "ha establecido una relación constante entre los  
 "actos y sus resultados, y que, cuando se rompe  
 "invariablemente esa relación se hace imposible la  
 "vida, fuerza será convenir en que la propiedad es  
 "un derecho natural, supuesto que la apropiación  
 "de las cosas para sacar de ellas los elementos  
 "necesarios para la conservación de la vida, es  
 "indispensable. El afán de abolir la propiedad  
 "individual inmueble no puede considerarse en su  
 "esencia sino como una utopía; pero ese deseo es  
 "revelador de un intenso malestar social, al cual  
 "nos referimos después, que está reclamando  
 "remedio sin haber llegado a obtenerlo.--- Claro  
 "está que el ejercicio del derecho de propiedad no  
 "es absoluto, y que así como en el pasado ha  
 "sufrido modalidades, es susceptible de admitir  
 "otras en el porvenir, basadas en el deber que tiene  
 "el Estado de conservar la libertad igual de todos  
 "los asociados; deber que no podía cumplir sin el  
 "derecho correlativo. Es un principio admitido sin  
 "contradicción, que el dominio eminente del  
 "territorio mexicano pertenece originariamente a la



"nación; que lo constituye y ha constituido la  
"propiedad privada es el derecho que ha cedido la  
"nación a los particulares, cesión en la que no ha  
"podido quedar comprendido el derecho a los  
"productos del subsuelo ni a las aguas, como vías  
"generales de comunicación. En la práctica se  
"tropieza con grandes dificultades al tratarse de  
"especificar los elementos que se quedan  
"eliminados de la propiedad privada: La Comisión  
"encuentra aceptables sobre este punto las ideas  
"desarrolladas por el señor diputado Rouaix.---  
"Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión,  
"después de consagrar la propiedad como garantía  
"individual, poniéndola a cubierto de toda  
"expropiación que no esté fundada en la utilidad  
"pública, ha fijado las restricciones a que está  
"sujeto ese derecho.--- La capacidad para adquirir  
"bienes raíces se funda en principios de Derecho  
"público y de Derecho Civil. Los primeros autorizan  
"a la Nación para prohibir la adquisición de tierras  
"a los extranjeros si no se sujetan a las  
"condiciones que el mismo artículo prescribe. En  
"cuanto a las corporaciones, es también una teoría  
"generalmente admitida que no pueden adquirir un  
"verdadero derecho de propiedad, supuesto que su  
"existencia se funda en una ficción legal. Con estos  
"fundamentos, la Comisión ha determinado la  
"capacidad de adquirir bienes raíces, de las

"instituciones de beneficencia, las sociedades  
"comerciales y las corporaciones que forman  
"centros poblados.--- Hace más de un siglo se ha  
 "venido palpando en el país el inconveniente de la  
 "distribución exageradamente desigual de la  
 "propiedad privada, y aun espera solución el  
 "problema agrario. En la imposibilidad que tiene la  
 "Comisión, por falta de tiempo, de consultar alguna  
 "solución en detalle, se ha limitado a proponer,  
 "cuando menos, ciertas bases generales, pues  
 "sería faltar a una de las promesas más solemnes  
 "de la revolución pasar este punto en silencio.---

"Siendo en nuestro país la tierra casi la única  
"fuente de riqueza, y estando acaparada en pocas  
"manos, los dueños de ella adquieren un poder  
"formidable y constituyen, como lo demuestra la  
"historia, un estorbo constante para el desarrollo  
"progresivo de la nación. Por otra parte, los  
"antecedentes históricos de la concentración de la  
"propiedad raíz han creado entre los terratenientes  
"y jornaleros una situación que, hoy en día, tiene  
"muchos puntos de semejanza con la situación  
"establecida durante la época colonial, entre los  
"conquistadores y los indios encomendados; y de  
"esta situación proviene el estado depresivo en  
"que se encuentra la clase trabajadora de los  
"campos. Semejante estado de cosas tiene una  
"influencia desastrosa en el orden económico.---



**"Como consecuencia de lo expuesto, proponemos  
"a la consideración de ustedes el siguiente  
"proyecto:"**

Con base en tales consideraciones se proponía que en la  
fracción V del artículo 27 se dispusiera:

**"VI. Los bancos debidamente autorizados a  
"conforme a las leyes de instituciones de crédito  
"podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"mas bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo:"**

La discusión del artículo 27 tuvo lugar en las sesiones  
celebradas los días veintinueve, treinta y treinta y uno de enero  
de mil novecientos diecisiete, destacando sobre la fracción V, lo  
siguiente:

**"El C. Secretario: La fracción V del artículo 27  
"dice:.....Está a discusión.**

**"El C. Espinoza: Pido la palabra para hacer una  
"interpelación a la Comisión (Voces: ¡Esta  
"ocupada!)**

**"El C. Zavala Dionicio: Qué el ministro de Hacienda  
"diga algo sobre esto.**

"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Nieto.

"El C. Nieto: Una sencilla aclaración, señores  
 "diputados. Dice el dictamen: V. Los bancos  
 "debidamente ..... --- Indudablemente, la Comisión  
 "tuvo en su mente el Banco Único de Emisión, pero  
 "no se acordó de que hay otros bancos.  
 "Indudablemente que se establecerá un sistema de  
 "bancos hipotecarios y sería absurdo decir que los  
 "bancos hipotecarios pueden hacer hipotecas;  
 "como si dijéramos que el Banco Único de Emisión  
 "puede emitir billetes. Además, hay casos en que  
 "los bancos, aun los hipotecarios, pueden tener  
 "necesidad de adquirir propiedades  
 "transitoriamente. En una ley de 1859, hay un  
 "precepto que dice que los bancos de emisión  
 "pueden tener propiedades raíces, cuando tengan  
 "créditos que sean insolutos en otra forma; por  
 "consiguiente, me permito proponer que se forme  
 "esta fracción: 'Los bancos hipotecarios  
 "debidamente autorizados por las leyes de  
 "instituciones de crédito, podrán, además de  
 "imponer capitales sobre bienes raíces, poseer y  
 "administrar dichos bienes en el sentido que  
 "determinen las leyes. En cuanto a los bancos no  
 "hipotecarios, sólo podrán poseer los edificios  
 "necesarios para su objeto directo' etcétera".



Ante tal propuesta, una vez que se discutió el texto de la fracción VI del propio artículo, se volvió a la discusión de la referida fracción V, pero con una adición que aparentemente incorporaba el comentario del C. Nieto, pues el texto que se puso a discusión fue del siguiente tenor:

**"V. Los bancos debidamente autorizados conforme  
a las leyes de instituciones de crédito, podrán  
tener capitales impuestos sobre propiedades  
urbanas y rústicas, de acuerdo con las  
prescripciones de dichas leyes, pero no podrán  
tener en propiedad o en administración, más  
bienes raíces que los enteramente necesarios  
para su objeto directo; y transitoriamente, por el  
breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se  
les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
créditos".**

Esta nueva redacción dio lugar a la siguiente discusión:

**"Está a discusión.--- El C. Espinosa: Pido la  
palabra.--- El C. presidente: Tiene la palabra el  
ciudadano Espinosa.--- El C. Espinosa: He pedido  
la palabra para esto: Necesito saber si la Comisión  
ya se desocupó.--- El C. Múgica: Ya esta lista la  
Comisión.--- El C. Espinosa: Las instituciones de  
crédito hipotecario, entre otros objetos  
determinados, tiene el de gravar bienes raíces**

"para que cuando se venza el plazo de la cantidad  
 "prestada, puedan ser devueltas esas propiedades,  
 "como es natural; yo quiero saber si ese es el  
 "objeto a que se contrae esta fracción V; quiero  
 "que se me conteste.--- El C. Lizardi: Como la  
 "Comisión está ocupada, según parece, yo  
 "contestaré en nombre de ella en este sentido: El  
 "objeto de los bancos hipotecarios no es  
 "apoderarse de los bienes raíces, sino  
 "sencillamente garantizarse con ellos para que, en  
 "caso de que no se pague la cantidad prestada,  
 "sacarlos a remate.--- El C. Espinosa: Así es como  
 "lo entiendo, pero de aquí se desprende otra cosa.---  
 "-- V. Los bancos debidamente autorizados  
 "conforme a las leyes de instituciones de crédito  
 "podrán tener capitales impuestos sobre  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes, pero no  
 "podrán tener en propiedad o en administración,  
 "más bienes raíces que los enteramente necesarios  
 "para su objeto directo y transitoriamente, por el  
 "breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se  
 "les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
 "créditos.--- Pero no se entiende eso así, no está  
 "clara la redacción, por eso es que yo pregunto.---  
 "El C. Colunga, miembro de la Comisión: Me voy a  
 "permitir leer nuevamente el inciso a discusión: 'V.  
 "Los bancos debidamente autorizados conforme a





"las leyes de instituciones de crédito, podrán tener  
"capitales impuestos sobre propiedades urbanas y  
"rústicas, de acuerdo con las prescripciones de  
"dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o  
"en administración, más bienes raíces que los  
"enteramente necesarios para su objeto directo; y  
"transitoriamente, por el breve plazo que fijen las  
"mismas leyes, los que se les adjudiquen  
"judicialmente en pago de sus créditos'.--- La  
"Comisión no comprende el fundamento de la  
"objeción del ciudadano diputado Espinosa; parece  
"que está bastante claro el asunto: En primer lugar,  
"autoriza a los bancos para tener capitales  
"impuestos; y, en segundo lugar, se les prohíbe  
"tener bienes raíces, fuera de los que sean  
"estrictamente indispensables para su objeto.--- El  
"secretario: ¿Se considera suficientemente  
"discutido? Se reserva para su votación. (Voces:  
"¡No! ¡No!) El C. secretario: Fracción V del  
"artículo 27.--- 'V Los bancos debidamente  
"autorizados, conforme a las leyes de instituciones  
"crédito, podrán tener capitales impuestos sobre  
"propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
"las prescripciones de dichas leyes, pero no  
"podrán tener en propiedad o en administración  
"más bienes raíces que los enteramente necesarios  
"para su objeto directo; y transitoriamente, por el  
"breve plazo que fijen las mismas leyes, los que se

"les adjudiquen judicialmente en pago de sus  
 "créditos'.--- Está a discusión.--- El C. Espinosa:  
 "'Pido la palabra, señor presidente.--- El C.  
 "presidente: Tiene usted la palabra.--- El C.  
 "Espinosa: Señores diputados: Voy a distraer la  
 "atención de ustedes, pero lo considero muy  
 "necesario porque en este caso creo tener razón en  
 "la observación que hice desde mi asiento cuando  
 "se trató por primera vez de esta fracción V. El  
 "objeto directo de una institución de crédito  
 "hipotecario es imponer su capital sobre bienes;  
 "ese es su objeto directo. Así pues, viene sobrando  
 "esta fracción si se le da esta interpretación,  
 "correcta a lo que es una institución de crédito  
 "hipotecario, y en cambio la Comisión nos pone  
 "esta función esencial del Banco de Crédito como  
 "una función potestativa y no imperativa, y lo van a  
 "ver ustedes:--- 'V. Los bancos debidamente  
 "autorizados, conforme a las leyes de instituciones  
 "de crédito. podrán tener capitales impuestos  
 "sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo  
 "con las prescripciones de dichas leyes.....'--- Es  
 "decir, que si quieren, podrán tenerlo, y no es esto;  
 "he allí el error que yo marco: El remedio que yo  
 "encuentro es muy sencillo: Entiendo que quedaría  
 "perfectamente bien en estas condiciones: 'Los  
 "bancos no hipotecarios debidamente autorizados,  
 "etcétera, porque los bancos de descuento también



"pueden hipotecar. Naturalmente que sí; no es  
"fuerza que sean exclusivamente hipotecarios. Por  
"eso es que esa particularidad puede darse a los  
"que no tienen esa función especial; pero a los que  
"tienen funciones esencialmente hipotecarias, no  
"son atribuciones secundarias sino fundamentales.  
"Me fundo en lo expuesto para decir que no está  
"bien.--- El C. Colunga: Pido la palabra, señor  
"presidente.--- El C. presidente: Tiene usted la  
"palabra.--- El C. Colunga: Señores diputados: En  
"parte tiene razón el señor Espinosa, porque dice él  
"que la función de los bancos hipotecarios es  
"precisamente imponer capitales a rédito; luego  
"hay una redundancia en que el artículo diga que  
"los bancos legalmente autorizados podrán  
"imponer capitales a rédito. Pero hay que tener en  
"cuenta que, bajo la denominación de bancos, se  
"tienen tres clases de instituciones: Los bancos  
"hipotecarios, los de emisión y los refaccionarios.  
"En obvio de la brevedad, para comprender a las  
"tres clases, la Comisión acepta la redacción  
"propuesta. En cuanto a la adición viene la  
"explicación. Cuando un Banco tiene un capital  
"impuesto sobre una finca rústica y si no se paga  
"la hipoteca una vez que se venza el plazo, el  
"Banco tiene que sacarla a remate, puesto que  
"tiene que pagarse su crédito, pero la ley impone la  
"obligación de transmitirla en un plazo breve, de

"manera que puede admitirse perfectamente esta  
"adición, sin peligro.--- El C. Macías: Pido la  
 "palabra, señor presidente.--- El C. presidente:  
 "Tiene la palabra el ciudadano Macías.--- El C.  
 "Macías: Señores diputados: La fracción que se  
 "discute es altamente peligrosa; es necesario tener  
 "en cuenta la naturaleza de los bancos de emisión.  
 "Los bancos hipotecarios se establecen forzosa y  
 "necesariamente para imponer capitales sobre  
 "bienes raíces; pero los bancos de emisión no se  
 "establecen para esa clase de operaciones. Estas  
 "operaciones de los bancos de emisión, que son  
 "los bancos de descuento, deben limitarse a un  
 "período de tiempo; dejar a esos bancos que hagan  
 "operaciones, de una manera directa, es contra la  
 "naturaleza de la institución misma; esto <sup>por lo que</sup>  
 "toca a los bancos de emisión. Un banco de  
 "emisión que distrae sus fondos para hacer  
 "imposiciones hipotecarias es un Banco que quiere  
 "ir al fracaso, porque los créditos de estos bancos  
 "deben hacerse efectivos en un corto período de  
 "tiempo con el objeto de estar siempre listos para  
 "efectuar sus pagos. Así pues, a estos bancos,  
 "conforme a las instituciones de crédito, no deben  
 "permitírseles verificar operaciones bancarias. En  
 "México se ha acostumbrado, según las leyes de  
 "instituciones citadas, hacer una liquidación de las  
 "prendas; pero esto ha sido perjudicial, sobre todo



"a la agricultura, porque estos bancos, que están  
 "directa e inmediatamente establecidos para  
 "favorecer al comercio, no pueden dedicarse al  
 "fomento de la agricultura en vista de que los  
 "agricultores no tienen fondos disponibles para  
 "poder cumplir sus compromisos, cubriendo sus  
 "adeudos en un corto período de tiempo. De aquí  
 "ha resultado que las operaciones bancarias  
 "aplicadas directa e inmediatamente a la  
 "agricultura, han sido forzosa y necesariamente  
 "funestas para ella. Se ha querido establecer en  
 "México un Banco agrícola y este Banco no ha  
 "podido establecerse. Esto es lo que deben hacer  
 "los gobiernos, y principalmente el que resulte de  
 "la revolución, si se quiere favorecer a los  
 "agricultores. Así pues, no debe permitirse que los  
"bancos de emisión hagan operaciones  
"hipotecarias, como lo han hecho, porque esto  
"vendría a poner a todos los agricultores en manos  
"de un Banco de emisión, que es poderosísimo y  
"se adueñará de toda la agricultura. Por lo que toca  
"al segundo punto, ni los bancos de emisión ni los  
"hipotecarios, deben tener facultades para  
"quedarse con las prendas hipotecadas. Estas  
"operaciones son las que han arruinado a México.  
"Si se van a examinar las operaciones de los  
"bancos de México, se cerciorarán de que la mayor  
"parte de la propiedad de la República está en

"manos de esos bancos; y seguirá indudablemente  
"en su poder, porque son bastante poderosos para  
"conseguir que se dé a las leyes una amplitud  
"bastante para conservar todas esas propiedades.  
 "Nosotros debemos seguir la ruta que han tomado  
 "otros países civilizados, de no permitir que se  
"queden con las fincas esas instituciones, que  
"embargan para pagar sus créditos: los  
"propietarios, los agricultores, cuando se les  
"vencen las hipotecas, no deben permitir que el  
"Banco se quede con ellas, porque entonces el  
"Banco puede venderla a precios exagerados y  
"quedarse con una ganancia considerable, y esto  
"no debemos nosotros permitirlo.--- El  
 "secretario: Se suplica a los ciudadanos diputados  
 "que no abandonen el salón, que recuerden que  
 "estamos en sesión permanente.--- El  
 "Truchuelo: Pido la palabra, señor presidente.--- El  
 "C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano  
 "Truchuelo.--- El C. Truchuelo: Señores diputados:  
 "vengo a defender el dictamen de la Comisión,  
 "atacado por el señor licenciado Macías; dos son  
 "los puntos a que se ha referido él; en primer lugar,  
 "que los bancos de emisión no pueden tener  
 "capitales impuestos; desde luego me permito  
 "recordar a ustedes que hemos aprobado un  
 "artículo, en el cual se determina de una manera  
 "expresa que no debe haber más que un banco de



"emisión, y éste estará controlado por el Gobierno.  
 "El peligro a que se refiere el licenciado Macías no  
 "existe en mi concepto, porque se ha modificado  
 "radicalmente el sistema bancario. En cuanto a la  
 "adición propuesta y redactada por los ciudadanos  
 "diputados Pastor Rouaix, Rafael Nieto y por mí, y  
 "aceptada por la Comisión, tampoco debe ser  
 "rechazada, sencillamente porque es una garantía  
 "para los deudores. Efectivamente, se prohíbe que  
 "los bancos tengan propiedades, pero se les  
 "faculta aquí de una manera transitoria para poder  
 "adquirirlas judicialmente, en pago de sus créditos;  
 "ESTA ES UNA FUNCIÓN VERDADERAMENTE  
 "NATURAL, porque cuando el deudor no ha podido  
 "cumplir con su obligación se promueve el juicio  
 "correspondiente, que termina sacando la  
 "propiedad a remate; supongamos que no se  
 "encuentra ningún postor. ¿Qué se hace entonces?  
 "Si se sigue sacando a remate con todos los  
 "descuentos, el deudor se verá perjudicado,  
 "porque a la postre su propiedad se adjudicará en  
 "una cantidad verdaderamente irrisoria. Si el Banco  
 "adquiere esa propiedad, es precisamente porque  
 "la cantidad ofrecida supera a la de algún postor, y  
 "entonces, como según en la misma adición se  
 "indica, sólo transitoriamente y por el breve plazo  
 "que determinan las leyes puede conservarse esa  
 "propiedad, resulta mejorado el deudor desde el

"momento en que se da por el Banco una cantidad  
 "mayor, pues de otra suerte no se le prefiere, y que  
 "tiene la obligación de enajenar esa propiedad; es,  
 "pues, evidente, que quien puede estar expuesto a  
 "perder parte de ese capital es únicamente el  
 "Banco. De esta manera no se sigue ningún  
 "perjuicio al deudor, que por su propiedad obtiene  
 "un precio mayor, puesto que cuenta con un postor  
 "más que es el Banco. De otra manera resultaría  
 "que ese deudor tendría un postor menos, y es  
 "indiscutible que, cualquier cantidad ofrecida, es  
 "un beneficio del deudor para que su propiedad  
 "valga más. No existe, por tanto, el peligro que  
 "señaló el diputado Macías, ni tampoco ningún  
 "peligro para que queden amortizadas esas  
 "cantidades, ni para que la propiedad quede  
 "substraída al comercio de la nación, por la  
 "obligación precisa de que el Banco enajene en  
 "breve la propiedad. En mi concepto, y tratándose  
 "del único caso de adquirir el Banco la propiedad,  
 "que no puede ser sino judicialmente, es una  
 "garantía para los deudores, porque se evitan las  
 "combinaciones que pueden hacer los bancos  
 "comprando créditos o entrando en convenios con  
 "los deudores para en el caso de que no cumplan  
 "sus compromisos, adjudicándose entonces las  
 "propiedades en virtud de los convenios. La  
 "adición, en consecuencia, es absolutamente





"necesaria, porque viene a servir de apoyo a los  
 "deudores. Supongamos otro caso, que  
 "aprobáramos el artículo como estaba; en esa  
 "hipótesis, si los bancos, presentándose como  
 "simples postores, hacían alguna operación, podría  
 "hacerse la reclamación de que la operación  
 "consumada por el Banco había sido contra los  
 "intereses del deudor. Quien en tal supuesto  
 "saldría perjudicado en realidad sería el adquirente  
 "el que hubiera comprado la propiedad al mismo  
 "Banco, porque se le diría: La operación hecha por  
 "el Banco al venderte a ti ha sido nula y ahora  
 "revindico mi propiedad; y entonces el Banco no  
 "sería el perjudicado, porque recogía de todos  
 "modos su dinero, sino el nuevo comprador, que  
 "era desposeído de su nueva propiedad, quizá  
 "después de haberla mejorado. Por todas estas  
 "razones yo pido se sirvan votar el artículo tal  
 "como lo presenta la Comisión.--- El C. Macías:  
 "Pido la palabra.--- El C. presidente: Tiene la  
 "palabra el ciudadano Macías.--- El C. Macías:  
 "Señores diputados: El abogado de los pobres  
 "viene a litigar ante vuestra soberanía contra el  
 "abogado de los bancos, porque el señor  
 "Truchuelo debe haber sido abogado de algún  
 "Banco. Las buenas intenciones se notan desde el  
 "primer momento; en el proyecto del ciudadano  
 "Primer Jefe, viene este artículo en la forma

"siguiente:--- 'Los bancos debidamente autorizados  
 "conforme a las leyes de asociaciones de crédito,  
 "podrán obtener capitales impuestos sobre las  
 "propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con  
 "las prescripciones de dichas leyes'.--- Esto se  
 "refiere única y exclusivamente a los bancos  
 "hipotecarios; la Comisión había aceptado este  
 "artículo, y se le hizo la objeción de que era inútil  
 "decir que se refería a los bancos hipotecarios;  
 "pues no se puede referir más que a ellos, porque  
 "los bancos de emisión y de descuento no pueden  
 "tener hipotecas. Basta ver un tratado de economía  
 "política para convencerse de esta verdad. Ahora  
 "bien, nos dice el señor Truchuelo: 'Saca un Banco  
 "a remate esas fincas, y si no hay postor se queda  
 "con ellas.' Voy a decirles a ustedes como se  
 "hacen esas operaciones: Comienzan los bancos  
 "porque son muy generosos al proteger a los  
 "clientes -, comienzan por exigirles una comisión  
 "muy importante por la enajenación de las fincas;  
 "para valorizar éstas no van a verlas, sino que  
 "desde el ferrocarril las valorizan y aprecian las  
 "ventajas que presenta, y el cliente comienza por  
 "depositar cien, trescientos o mil pesos para  
 "gastos de valorización; después se cobran todos  
 "los honorarios, tanto por la valorización de la finca  
 "como por el estudio de los documentos, sin que el  
 "cliente, hasta entonces, tenga la seguridad de que



"se hace la operación. Si no llega a hacerse el  
"cliente perdió la cantidad que entregó; pero si se  
"hace, satisface el cliente; primero, los gastos del  
"ingeniero, segundo; los gastos del corredor, que  
"intervino en la operación; tercero, los gastos del  
"examen de títulos; y después de hechos estos  
"gastos se impone la hipoteca, y en esa hipoteca el  
"deudor renuncia hasta de su nombre, se entrega  
"por completo a disposición del Banco, teniendo  
"éste la facultad absoluta de ni siquiera ir a los  
"tribunales a exigir su derecho, pues sólo manda el  
"expediente al juez para que se otorgue la escritura  
"por el deudor o el Juzgado en su rebeldía. Estos  
"son los procedimientos humanitarios de los  
"bancos. Es necesario cerrarles la puerta para que  
"no sigan cometiendo tales atrocidades. Que los  
"bancos, siguiendo procedimientos judiciales, no  
"puedan hacer efectivos sus créditos, no hay  
"absolutamente temor de que así sea; los bancos  
"son bastante vivos para que, en caso de embargo,  
"se remate la propiedad por menos de su valor.  
"Cuando una finca sale a remate con todas la  
"formalidades de la ley, como siempre se  
"encontrarán postores, jamás se perjudicará el  
"deudor. Si estos procedimientos se siguen se  
"evita que los bancos se queden con todas las  
"fincas, según lo han hecho, en un precio vil,  
"sacando después una ganancia muy considerable.

**"Esto no lo debemos autorizar.--- El C. secretario:**  
**"Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la**  
**"Asamblea si se toma en consideración la**  
**"proposición del diputado Macías. Los que estén**  
**"por la afirmativa, se servirán poner de pie. La**  
**"Comisión solicita permiso para retirar la adición**  
**"que había hecho. ¿Se le concede? (Voces: ¡Sí!).---**  
**"La Presidencia suplica a los señores diputados no**  
**"abandonen el salón.--- La fracción V ha quedado**  
**"en la siguiente forma:--- 'V. Los bancos**  
**"debidamente autorizados, conforme a las leyes de**  
**"instituciones de crédito, podrán tener capitales**  
**"impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas,**  
**"de acuerdo con las prescripciones de dichas**  
**"leyes; pero no podrán tener en propiedad o en**  
**"administración más bienes raíces <sup>que los</sup>**  
**"enteramente necesarios para su objeto directo. <sup>que</sup>**  
**"Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la**  
**"palabra? Se reserva para su votación."**

Los antecedentes antes relatados constituyen los elementos que pueden, en su caso, generar convicción sobre cuáles fueron las causas y los fines que buscó el Constituyente de mil novecientos diecisiete al establecer la restricción prevista en la fracción V del artículo 27 constitucional.



En ese sentido destaca que en el proyecto presentado por Venustiano Carranza, se restringía la capacidad para adquirir bienes raíces, en los siguientes términos:

a) Las instituciones de beneficencia pública o privada únicamente podrían adquirir los bienes raíces indispensables y que se destinaran de una manera directa e inmediata al objeto de aquéllas.

b) Las corporaciones civiles, en general, no podrían tener en propiedad bienes raíces, salvo la excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.

c) Las sociedades civiles y comerciales podrían poseer fincas urbanas, pero no podrían adquirir ni administrar por sí, propiedades rústicas en superficie mayor de la estrictamente necesaria para su objeto.

d) En cuanto a los bancos, únicamente se precisaba que podrían tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de las leyes de asociaciones de crédito.

Como deriva del mensaje que dirigió Venustiano Carranza a los diputados constituyentes, el cual hace las veces de exposición de motivos del referido proyecto, el objetivo de las citadas restricciones a la capacidad de adquirir bienes raíces, estribó, fundamentalmente, en evitar que a través de sociedades

anónimas el territorio nacional fuera a parar, de hecho, en manos del clero o de extranjeros.

Por otra parte, del dictamen rendido por la Comisión que se integró al seno del Constituyente, respecto del artículo 27 constitucional, a través del cual se propuso el texto de este precepto, en cuya estructura esencial finalmente se aprobaría, conviene precisar que los argumentos que se dieron para justificar las restricciones para adquirir la propiedad de bienes raíces partieron de señalar que el tiempo del que se disponía para regular constitucionalmente lo relativo a la propiedad no era bastante para encontrar una solución completa de problema tan trascendental y consistieron en:

a) Las corporaciones no pueden adquirir un verdadero derecho de propiedad, puesto que su existencia se basa en una ficción legal.

b) Ante la distribución exageradamente desigual de la propiedad privada, y en espera de solucionar el problema agrario, ante la imposibilidad que tiene la Comisión por falta de tiempo, se limita a proponer ciertas bases generales.

c) Siendo la tierra en México casi la única fuente de riqueza y estando acaparada en pocas manos, los dueños de ella adquieren un poder formidable y constituyen un estorbo para el desarrollo de la Nación.



d) La concentración de la propiedad raíz ha generado el estado depresivo en que se encuentra la clase trabajadora, provocando una influencia desastrosa en el orden económico.

En síntesis, el motivo fundamental que tuvo el Constituyente para sentar las bases de determinadas restricciones a la capacidad para adquirir la propiedad de bienes raíces consistió en evitar su concentración en unos cuantos individuos, por las consecuencias que ello podría acarrear a la soberanía nacional, al desarrollo económico del país y a la distribución de la riqueza entre los nacionales.

Por ello, puede sostenerse que, en principio, la restricción establecida en la fracción V, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo por objeto evitar que las instituciones de crédito acumularan y concentraran bienes raíces en detrimento de la soberanía nacional, del desarrollo económico del país y de la distribución de la riqueza entre los nacionales, elementos que deben tenerse presentes para concluir si la adjudicación que a tales instituciones se realice de bienes inmuebles conlleva una transgresión a ese precepto constitucional. Debiendo señalarse que no obstante lo anterior, de esos elementos no se colige en qué consistía, para el Constituyente, el objeto directo de los bancos.

Para una correcta interpretación causal y teleológica de la restricción constitucional en comento es necesario, también, acudir al análisis del debate suscitado respecto de las diversas

redacciones que propuso la Comisión, de la mencionada fracción del artículo 27 constitucional.

Como ya quedó precisado, la Comisión inicialmente sometió a discusión el mismo texto que a la fecha continúa vigente, estableciendo que los bancos podrían tener en propiedad los bienes raíces enteramente necesarios para su objeto directo; posteriormente, dada la intervención del C. Nieto, la propia Comisión propuso la adición relativa a que los bancos podrían adquirir transitoriamente, por el breve plazo que fijen las leyes, los bienes raíces que se les adjudiquen judicialmente en pago de sus créditos.

Ahora bien, en el debate suscitado respecto de la fracción, se advierte que el diputado Espinoza precisó que el objeto directo de una institución de crédito hipotecario es imponer su capital sobre bienes, por lo que proponía modificar la redacción original, sin cuestionar la adición referida; en cambio, por lo que concierne a ésta, destaca que, por un lado, el diputado Truchuelo defendió su inclusión y, por otro, el diputado Macías propugnó por su eliminación.

La adición se defendió con los siguientes argumentos:

La adjudicación temporal de bienes raíces a las instituciones de crédito es una garantía para los deudores, además, constituye una función verdaderamente natural, porque cuando éste no ha podido cumplir con su obligación se promueve el juicio





correspondiente, que termina sacando a remate la propiedad, de no existir ningún postor el deudor se vería perjudicado, con tal medida se beneficia a éste, pues cuenta con un postor más. No existe el peligro de que se amortice la deuda, ni de que se sustraiga el bien raíz del comercio, por la obligación precisa de que el banco lo enajene a la brevedad posible.

Por otro lado, se propuso la eliminación de la adición en comento, por estimarse que:

Ni los bancos de emisión, ni los hipotecarios deben tener facultades para quedarse con las prendas hipotecarias, pues si se examinan las operaciones de los bancos de México se advertirá que la mayor parte de la propiedad de la República está en sus manos, debe seguirse la ruta de los países civilizados de no permitir que el banco se quede con las fincas; en los procedimientos de remate, gracias a su poder económico, esas instituciones realizan atrocidades en perjuicio de los deudores y, cuando una finca sale a remate con las formalidades de la ley siempre se encuentran postores, por lo que jamás se perjudicará al deudor.

Una vez que los referidos diputados expresaron los argumentos antes sintetizados, la Comisión solicitó autorización para retirar la adición, la que le fue concedida; a continuación, con el texto presentado originalmente por la Comisión, se sometió nuevamente a discusión la fracción V del artículo 27,

dado que nadie hizo uso de la palabra se reservó para su votación.

Posteriormente, después de que se sometió a consideración una modificación al inciso f) de la última fracción del referido artículo 27, y que se desechó una propuesta del diputado Ibarra relativa al pago que los particulares realizarían respecto de las concesiones que les fueran otorgadas, se sometió a votación, en su totalidad, el artículo 27, siendo aprobado por unanimidad de ciento cincuenta votos.

De los elementos que derivan de lo acontecido en las sesiones que se discutió el mencionado artículo 27, fracción V, constitucional, resulta patente que para los miembros de la Comisión, en específico para su integrante que defendió la adición, la adjudicación temporal de bienes raíces a los bancos es una función natural, es decir, propia de las instituciones de crédito por tanto, al contrario de lo aducido por el recurrente, no existe certeza sobre si la Comisión retiró la adición al estimar que tal adjudicación se equiparaba a una adquisición de un bien raíz, enteramente necesaria para su objeto directo, o bien porque las objeciones del diputado Macías la llevaron a la convicción de que esa adjudicación temporal debía suprimirse, por ser contraria a los fines de la restricción de mérito.

Similar incertidumbre deriva de la posterior aprobación que realizó la Asamblea de la totalidad del artículo 27 constitucional, pues no existen elementos que permitan concluir si la supresión



del texto de su fracción V se aceptó por el Constituyente, por estimar que tal adjudicación temporal trascendía al objeto directo de los bancos o en razón de que facultarlos para ello tornaría nugatorios los fines de la respectiva restricción.

En esa medida, aun cuando la interpretación causal y teleológica de la fracción V del artículo 27 constitucional brinda algunos elementos para resolver el justo alcance de ésta, dado que por sí solos, esta Suprema Corte de Justicia no los considera suficientes, resulta necesario acudir a diversos métodos de interpretación jurídica cuya aplicación, ante la incertidumbre que genera el texto del referido precepto, autoriza el artículo 14, párrafo cuarto, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que como lo advirtió la Comisión redactora de este ordenamiento, las limitaciones que sobre la propiedad se establecieron en el mencionado artículo 27 constituyen bases generales sujetas en su caso, y ante su imprecisión, a los diversos métodos de interpretación jurídica, con el fin de considerar tanto los antecedentes históricos que dentro de nuestro orden jurídico han tenido tales restricciones, como las nuevas condiciones y necesidades de la sociedad, pues por la redacción utilizada por el Constituyente se advierte que en el dispositivo en comento se plasmó una visión de futuro, predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción, y las respectivas modificaciones de tales condiciones y necesidades.

Por tanto, se estima necesario acudir tanto a la interpretación histórica como a la progresiva de la fracción V del artículo 27 constitucional, lo que brindará los elementos que, vinculados con los obtenidos de la causal y teleológica antes realizada, permitirá concluir si la adjudicación temporal de bienes a las instituciones de crédito genera una transgresión a la restricción contenida en ese precepto.

En el caso, para desentrañar con la mayor veracidad y exactitud posible el sentido de la fracción V del artículo 27 constitucional, tomando en cuenta los objetivos que, en general tuvo el Constituyente de mil novecientos diecisiete para establecer en tal precepto diversas restricciones a la capacidad para adquirir bienes raíces, resulta necesario acudir tanto a los antecedentes legislativos que demuestran con mayor claridad cuál ha sido el objeto de establecer esas restricciones, como a los propios que permiten llegar a una conclusión sobre cuáles son los bienes raíces cuya adquisición es enteramente necesaria para el objeto directo de los bancos, pues de lo contrario la norma constitucional quedaría expuesta a que se le atribuyeran propósitos que nunca estuvieron en la mente del Constituyente.

Debiendo recordarse que en general la interpretación histórica constitucional debe basarse en el estudio de las disposiciones del propio orden jurídico que preceden en el tiempo a la norma cuyo sentido se pretende desentrañar, pues por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior, máxime cuando de la interpretación causal teleológica del



precepto constitucional en estudio deriva que fue intención del creador de éste plasmar en su contenido un principio del pasado; por tanto, ante tales circunstancias, para encontrar la verdadera intención del Constituyente, la respuesta se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que ya se sostenía en el pasado, pues todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, histórico al emitirse, es porque se mantiene.

Sentado lo anterior, debe señalarse que las restricciones legales al acaparamiento de la propiedad de bienes raíces, en el contexto del orden jurídico nacional, encuentran su principal antecedente en la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, promulgada por Ignacio Comonfort, el veinticinco de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, que se integró por los siguientes artículos:

"Artículo 1°. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito a seis por ciento anual."

"Artículo 2°. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo enfiteútico fincas rústicas"

"o urbanas de corporación, capitalizando al seis  
"por ciento el canon que pagan, para determinar el  
"valor de aquéllas."

"Artículo 3°. Bajo el nombre de corporaciones se  
"comprenden todas las comunidades religiosas de  
"ambos sexos, cofradías y archicofradías,  
"congregaciones, hermandades, parroquias,  
"ayuntamientos, colegios, y en general todo  
"establecimiento o fundación que tenga el carácter  
"de duración perpetua e indefinida."

"Artículo 4°. Las fincas urbanas arrendadas  
"directamente por las corporaciones a varios  
"inquilinos se adjudicarán, capitalizando la suma  
"de arrendamientos, a aquel de los actuales  
"inquilinos que paguen mayor renta, y en caso de  
"igualdad, al más antiguo. Respecto de las rústicas  
"que se hallen en el mismo caso, se adjudicará a  
"cada arrendatario la parte que tenga arrendada."

"Artículo 5°. Tanto las urbanas, como las rústicas  
"que no estén arrendadas a la fecha de la  
"publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor  
"postor, en almoneda que se celebrará ante la  
"primera autoridad política del partido."

"Artículo 6°. Habiendo fallos ya ejecutoriados en la  
"misma fecha para la desocupación de algunas



"fincas, se considerarán como no arrendadas,  
 "aunque todavía las ocupen de hecho los  
 "arrendatarios; pero estos conservarán los  
 "derechos que les da la presente ley, si estuviere  
 "pendiente el juicio sobre desocupación. También  
 "serán considerados como inquilinos o  
 "arrendatarios para los efectos de esta ley, todos  
 "aquellos que tengan contratado ya formalmente el  
 "arrendamiento de alguna finca rústica o urbana,  
 "aun cuando no estén todavía de hecho en  
 "posesión de ella."

"Artículo 7°. En todas las adjudicaciones de que  
 "trata esta ley, quedará el precio de ellas impuesto  
 "al seis por ciento anual, y a censo redimible sobre  
 "las fincas, pudiendo cuando quieran los nuevos  
 "dueños redimir el todo o una parte que no sea  
 "menor de mil pesos, respecto de fincas cuyo valor  
 "exceda de dos mil, y de 250 en las que bajen de  
 "dicho precio."

"Artículo 8°. Sólo se exceptúan de la enajenación  
"que queda prevenida, los edificios destinados,  
"inmediatamente y directamente al servicio u  
"objeto del instituto de las corporaciones, aun  
"cuando se arriende alguna parte no separada de  
"ellos, como los conventos, palacios, hospitales,  
"hospicios, mercados, casas de corrección, y de

"beneficencia. Como parte de cada uno de dichos  
"edificios podrá comprenderse en esta excepción  
"una casa que esté unida a ellos, y la habiten por  
"razón de oficio, los que sirven al objeto de la  
"institución, como las casas de los párrocos y de  
"los capellanes de religiosas. De las propiedades  
"pertenecientes a los ayuntamientos, se  
"exceptuarán también los edificios, ejidos y  
"terrenos destinados exclusivamente al servicio  
"público de las poblaciones a que pertenezcan."

"Artículo 9°. Las adjudicaciones y remates deberán  
"hacerse dentro del término de tres meses  
"contados desde la publicación de esta ley en cada  
"cabecera de partido."

SUPLENTE  
JUSTI  
LA  
RA

"Artículo 10. Transcurridos los tres meses sin que  
"haya formalizado la adjudicación el inquilino  
"arrendatario, perderá su derecho a ella,  
"subrogándose en su lugar con igual derecho el  
"subarrendatario, o cualquier otra persona que en  
"su defecto presente la denuncia ante la primera  
"autoridad política del partido, con tal que haga que  
"se formalice a su favor la adjudicación, dentro de  
"los quince días siguientes a la fecha de la  
"denuncia. En caso contrario, o faltando ésta, la  
"expresada autoridad hará que se adjudique la  
"finca en almoneda al mejor postor."





**"Artículo 11. No promoviendo alguna corporación  
"ante la misma autoridad dentro del término de los  
"tres meses el remate de las fincas no arrendadas,  
"si hubiere denunciante de ellas, se le aplicará la  
"octava parte del precio, que para el efecto deberá  
"exhibir de contado aquél en quien finque el  
"remate; quedando a reconocer el resto a favor de  
"la corporación."**

**"Artículo 12. Cuando la adjudicación se haga a  
"favor del arrendatario, no podrá éste descontar del  
"precio ninguna cantidad por guantes, traspaso o  
"mejoras; y cuando se haga en favor del que se  
"subroga en su lugar, pagará de contado al  
"arrendatario tan solo el importe de los guantes,  
"traspaso o mejoras que la corporación le hubiere  
"reconocido precisamente, por escrito antes de la  
"publicación de esta ley; quedando en ambos  
"casos a favor de aquella todo el precio,  
"capitalizada la renta actual al seis por ciento. En  
"el caso de remate al mejor postor, se descontará  
"del precio que ha de quedar impuesto sobre la  
"finca, lo que deba pagarse al arrendatario, por  
"estarle reconocido en la forma expresada."**

**"Artículo 13. Por las deudas de arrendamiento  
"anteriores a la adjudicación, podrá la corporación**

"ejercitar sus acciones conforme a derecho común."

"Artículo 14. Además, el inquilino o arrendatario deudor de rentas, no podrá hacer que se formalice a su favor la adjudicación, sin que demuestre liquidada antes la deuda con presencia del último recibo, o la pague de contado, o consienta en que se anote la escritura de adjudicación, para que sobre el precio de ella quede hipotecada la finca por el importe de la deuda, entre tanto no sea satisfecha. Esta hipoteca será sin causa de réditos, salvo que prescindiendo la corporación de sus acciones para exigir desde luego el pago, como podrá exigirlo, aun pidiendo conforme a derecho el remate de la finca adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda se formalice imposición sobre la misma finca."

"Artículo 15. Cuando un denunciante se subrogue en lugar del arrendatario, deberá éste, si lo pide la corporación, presentar el último recibo, a fin de que habiendo deuda de rentas, se anote la escritura para todos los efectos del artículo anterior. Entonces podrá el nuevo dueño usar también de las acciones de la corporación para exigir el pago de esa deuda. Más en el caso de remate al mejor postor, no que para exigir el pago de esa deuda. Más en el caso de remate al mejor



"postor, no quedará por ese título obligada la  
"finca."

"Artículo 16. Siempre que no se pacten otros  
"plazos, los réditos que se causen en virtud del  
"remate o adjudicación, se pagarán por meses  
"vencidos en las fincas urbanas, y por semestres  
"vencidos en las rústicas."

"Artículo 17. En todo caso de remate en almoneda  
"se dará fiador de los réditos, y también cuando la  
"adjudicación se haga en favor del arrendatario o  
"de quien se subrogue en su lugar, si aquél tiene  
"dado fiador por su arrendamiento, pero no en caso  
"contrario."

"Artículo 18. Las corporaciones no sólo podrán  
"conforme a derecho cobrar los réditos adeudados  
"sino que llegado a deber los nuevos dueños seis  
"meses en las fincas urbanas y dos semestres en  
"las rústicas, si dieren lugar que se les haga  
"citación judicial para el cobro, y no tuviesen fiador  
"de réditos, quedarán obligados a darlo desde  
"entonces, aun cuando verifiquen el pago en  
"cualquier tiempo después de la citación."

"Artículo 19. Tanto en los casos de remate como en  
"los de adjudicación a los arrendatarios, o a los

"que se subroguen en su lugar, y en las  
 "enajenaciones que unos u otros hagan, deberán  
 "los nuevos dueños respetar y cumplir los  
 "contratos de arrendamientos de tiempo  
 "determinado, celebrados antes de la publicación  
 "de esta ley; y no tendrán derecho para que cesen  
 "o se modifiquen los de tiempo indeterminado, sino  
 "después de tres años, contados desde la misma  
 "fecha. Cuando la adjudicación se haga a los  
 "arrendatarios, no podrán modificarse dentro del  
 "mismo término los actuales subarrendados que  
 "hubieren celebrado. Lo dispuesto en este artículo  
 "se entenderá sin perjuicio del derecho para pedir  
 "la desocupación por otras causas, conforme a las  
 "leyes vigentes."

"Artículo 20. En general todos los actuales  
 "arrendamientos de fincas rústicas y urbanas de la  
 "República, celebrados por tiempo indefinido,  
 "podrán renovarse a voluntad de los propietarios  
 "después de tres años, contados desde la  
 "publicación de esta ley; desde ahora para lo  
 "sucesivo se entenderá siempre que tienen el  
 "mismo término de tres años todos los  
 "arrendamientos de tiempo indefinido, para que a  
 "ese plazo puedan libremente renovarlos los  
 "propietarios."



**"Artículo 21. Los que por remate o adjudicación  
"adquieran fincas rústicas o urbanas en virtud de  
"esta ley, podrán en todo tiempo enajenarlas  
"libremente y disponer de ellas como de una  
"propiedad legalmente adquirida, quedando tan  
"sólo a las corporaciones a que pertenecían, los  
"derechos que conforme a las leyes corresponden  
"a los censualistas por el capital y réditos."**

**"Artículo 22. Todos los que en virtud de esta ley  
"adquieran la propiedad de fincas rústicas, podrán  
"dividir los terrenos de ellas, para el efecto de  
"enajenarlos a diversas personas, sin que las  
"corporaciones y censualistas puedan oponerse a  
"la división, sino sólo usar de sus derechos, para  
"que se distribuya el reconocimiento del capital  
"sobre las fracciones en proporción de su valor, de  
"modo que quede asegurada la misma suma que  
"antes reconocía toda la finca."**

**"Artículo 23. Los capitales que como precio de las  
"rústicas o urbanas queden impuestos sobre ellas  
"a favor de las corporaciones, tendrán el lugar y  
"prelación que conforme a derecho les  
"corresponda, entre los gravámenes anteriores de  
"la finca y los que se le impongan en lo sucesivo."**

"Artículo 24. Sin embargo de la hipoteca a que  
"quedan afectadas las fincas rematadas o  
"adjudicadas por esta ley, nunca podrán volver en  
"propiedad a las corporaciones, quienes al ejercer  
"sus acciones sobre aquéllas, sólo podrán pedir el  
"remate en almoneda al mejor postor, sin perjuicio  
"de sus derechos personales contra el deudor."

"Artículo 25. Desde ahora en adelante, ninguna  
"corporación civil o eclesiástica, cualquiera que  
"sea su carácter, denominación u objeto, tendrá  
"capacidad legal para adquirir en propiedad o  
"administrar por sí bienes raíces, con la única  
"excepción que expresa el artículo 8º, respecto de  
"los edificios destinados inmediatamente  
"directamente al servicio u objeto de la  
"institución."



"Artículo 26. En consecuencia, todas las sumas de  
"numerario que en lo sucesivo ingresen a las arcas  
"de las corporaciones, por redención de capitales,  
"nuevas donaciones, u otro título, podrán  
"imponerlas sobre propiedades particulares o  
"invertirlas como accionistas en empresas  
"agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder  
"por esto adquirir para sí ni administrar ninguna  
"propiedad raíz."



"Artículo 27. Todas las enajenaciones que por  
"adjudicación o remate se verifiquen en virtud de  
"esta ley, deberán constar por escritura pública, sin  
"que contra éstas y con el objeto de evadirlas en  
"fraude de la ley, puedan admitirse en ningún  
"tiempo cualesquiera contradocumentos, ya se les  
"dé la forma de instrumentos privados o públicos,  
"y a los que pretendieren hacer verles tales  
"contradocumentos, así como a todos los que los  
"hayan suscrito, se les perseguirá criminalmente  
"como falsarios."

"Artículo 28. Al fin de cada semana, desde la  
"publicación de esta ley, los escribanos del distrito  
"enviarán directamente al ministerio de hacienda  
"una noticia de todas las escrituras de  
"adjudicación o remate otorgadas ante ellos,  
"expresando la corporación que enajena, el precio  
"y el nombre del comprador. Los escribanos de los  
"estados y territorios enviarán la misma noticia al  
"jefe superior de hacienda respectivo, para que  
"éste la dirija al ministerio. A los escribanos que  
"no cumplan con esta obligación, por sólo el aviso  
"de la falta que dé el ministerio o el jefe superior de  
"hacienda a la primera autoridad política del  
"partido, les impondrá ésta gubernativamente, por  
"primera vez, una multa que no baje de cien pesos,  
"ni exceda de doscientos, o en defecto de pago, un

*"mes de prisión; por segunda vez, doble multa o  
"prisión, y por tercera vez un año de suspensión de  
"oficio."*

*"Artículo 29. Las escrituras de adjudicación o  
"remate se otorgarán a los compradores por los  
"representantes de las corporaciones que  
"enajenen; más si éstos se rehusaren, después de  
"hacerles una notificación judicial para que  
"concurran al otorgamiento, se verificará éste en  
"nombre de la corporación por la primera autoridad  
"política o el juez de primera instancia del partido,  
"con vista de la cantidad de renta designada en los  
"contratos de arrendamiento, o en los últimos  
"recibos que presenten los arrendatarios."*

Suprema  
Corte  
de Justicia

*"Artículo 30. Todos los juicios que ocurran sobre  
"puntos relativos a la ejecución de esta ley, en  
"cuanto envuelvan la necesidad de alguna  
"declaración previa para que desde luego pueda  
"procederse a adjudicar o rematar las fincas, se  
"sustanciarán verbalmente ante los jueces de  
"primera instancia, cuyos fallos se ejecutarán, sin  
"admitirse sobre ellos más recursos que el de  
"responsabilidad."*

*"Artículo 31. Siempre que, previa una notificación  
"judicial, rehuse alguna corporación otorgar*





"llanamente, sin reservas ni protestas relativas a  
"los efectos de esta ley, recibos de los pagos de  
"réditos o redenciones de capitales que hagan los  
"nuevos dueños, verificándolos en las oficinas  
"respectivas del gobierno general, las que los  
"recibirán en depósito por cuenta de la  
"corporación."



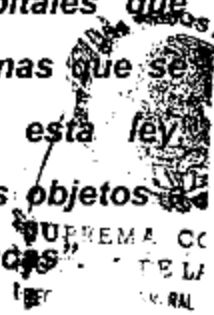
"Artículo 32. Todas las traslaciones de dominio de  
"finca rústica y urbana que se ejecuten en  
"virtud de esta ley, causarán la alcabala de cinco  
"por ciento, que se pagará en las oficinas  
"correspondientes del gobierno general, quedando  
"derogada la ley de 13 de febrero de este año en lo  
"relativo a este impuesto en las enajenaciones de  
"finca de manos muertas. Esta alcabala se pagará  
"en la forma siguiente: una mitad en numerario y la  
"otra en bonos consolidados de la deuda interior,  
"por las adjudicaciones que se verifiquen dentro  
"del primer mes; dos terceras partes en numerario  
"y una tercera en bonos por las que se hagan en el  
"segundo; y sólo una cuarta parte en bonos y tres  
"cuartas en numerario por las que se practiquen  
"dentro del tercero. Después de cumplidos los tres  
"meses toda alcabala se pagará en numerario."

"Artículo 33. Tanto en los casos de adjudicación  
"como en los de remate, pagará esta alcabala el

**"comprador, quien hará igualmente los gastos del remate o adjudicación."**

**"Artículo 34. Del producto de estas alcabalas se separará un millón de pesos, que unido a los otros fondos que designará una ley que se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los retiros, montepíos y pensiones civiles y militares, así como a la amortización de alcances de los empleados civiles y militares en actual servicio."**

**"Artículo 35. Los réditos de los capitales que reconozcan las fincas rústicas o urbanas que se adjudiquen o rematen conforme a esta ley, continuarán aplicándose a los mismos objetos que se destinan las rentas de dichas fincas."**



Por virtud de este ordenamiento se determinó que todos los bienes raíces propiedad de las corporaciones civiles o eclesiásticas se adjudicarían en propiedad a los individuos que los tuvieran arrendados; inclusive, si tales bienes no se encontraban arrendados, se adjudicarían al mejor postor.

Destaca que en su artículo 8° se exceptuó de la aplicación de tales medidas, los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del las referidas corporaciones.



No obstante que se privaría de la propiedad sobre bienes raíces a las corporaciones, se reconocía el derecho de los anteriores propietarios para recibir el pago de las deudas de arrendamiento anteriores a la adjudicación. En caso de que el inquilino no pudiera pagar tales deudas, la finca quedaría hipotecada por su importe; sin embargo, tales bienes no podrían volver a propiedad de las corporaciones, las que al ejercer sus derechos respecto de ellos, únicamente podrían pedir el remate en almoneda al mejor postor.

En la misma línea, en el transcrito artículo 25 se dispuso que ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que fuere su carácter, denominación u objeto, tendría capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la excepción de los edificios destinados inmediatamente y directamente al servicio u objeto de la institución.

Ante tal restricción, en el siguiente precepto, el 26, se precisó que todos los ingresos de numerario que tuvieran las corporaciones, si bien podrían imponerse sobre propiedades particulares, ello no les facultaría para adquirir o administrar algún bien raíz.

De lo anterior se advierte que a través de la Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas se establecía una restricción absoluta para toda corporación, ya fuera civil o eclesiástica, de adquirir bienes raíces ajenos a su servicio u objeto, pues ni siquiera tratándose de la recuperación de

capitales impuestos por una corporación civil a un determinado inmueble, sería posible que ante la falta de pago del deudor, una vez seguido el juicio respectivo, se adjudicará el respectivo bien en favor de la corporación acreedora.

En conclusión, el ordenamiento en comento buscaba, a toda costa, evitar que cualquier bien raíz que no se destinara inmediata y directamente para el servicio o para el objetivo de las corporaciones, fuera de la propiedad de éstas.

Las restricciones de esa naturaleza continuaron su evolución, así, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, se plasmaron las restricciones a la propiedad sobre bienes en los siguientes términos:

**"Artículo 27. ....**

**"Ninguna corporación civil ó eclesiástica,**  
**"cualquiera que sea su carácter, denominación u**  
**"objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en**  
**"propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con**  
**"la única excepción de los edificios destinados**  
**"inmediata ó directamente al servicio u objeto de la**  
**"institución."**

Como se advierte, los constituyentes de mil ochocientos cincuenta y siete estimaron conveniente continuar limitando la capacidad de las corporaciones civiles para adquirir bienes



taíces, permitiendo que únicamente tuvieran en propiedad los necesarios inmediata o directamente para el objeto de la institución.

En relación con lo dispuesto en el artículo 27 antes transcrito, deben tenerse presentes las ideas que plasmó en su voto particular el diputado constituyente Ponciano Arriaga, las que si bien no fueron adoptadas en los términos por el planteados, sin duda reflejan algunas de las inquietudes que movieron al Constituyente de aquella época a establecer las restricciones en comento. Del referido voto conviene destacar lo siguiente:

*Al juicio de los hombres más eminentes, que han observado y comparado con meditación y prolijidad, las condiciones políticas y económicas de nuestra existencia social; y a juicio del pueblo, que unas veces por entre el seno mismo de las "tinieblas, se encamina a la luz de las reformas, y "otras, ya ilustrado, acepta y consagra las "doctrinas más saludables; uno de los vicios más "arraigados y profundos de que adolece nuestro "país, y que debiera merecer una atención "exclusiva de sus legisladores cuando se trata de "su código fundamental, consiste en la monstruosa "división de la propiedad territorial.*

*"Mientras que pocos individuos están en posesión*

*"de inmensos e incultos terrenos, que podrían dar*

"subsistencia para muchos millones de hombres,  
"un pueblo numeroso, crecida mayoría de  
"ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin  
"propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo.

"Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano, y  
"mucho menos venturoso, por más que cien  
"constituciones y millares de leyes proclamen  
"derechos abstractos, teorías bellísimas, pero  
"impracticables, en consecuencia del absurdo  
"sistema económico de la sociedad.

"Poseedores de tierras hay en la República  
"Mexicana, que en fincas de campo o haciendas  
"rústicas, ocupan (si se puede llamar ocupación lo  
"que es inmaterial y puramente imaginario) una  
"superficie de tierra mayor que la que tienen  
"nuestros Estados soberanos, y aun más dilatada  
"que la que alcanzan alguna o algunas naciones de  
"Europa.

"En esta gran extensión territorial, mucha parte de  
"la cual está ociosa, desierta y abandonado,  
"reclamando los brazos y el trabajo del hombre, se  
"ven diseminados cuatro o cinco millones de  
"mexicanos, que sin más industria que la agrícola,  
"careciendo de materia primera y de todos los  
"elementos para ejercerla, no teniendo a dónde ni  
"cómo emigrar con esperanza de otra honesta  
"fortuna, o se hacen perezosos y holgazanes,  
"cuando no se lanzan al camino del robo y de la



"perdición, o necesariamente viven bajo el yugo del  
"monopolista, que o los condena a la miseria, o les  
"impone condiciones exorbitantes.

"¿Cómo se puede racionalmente concebir ni  
"esperar, que tales infelices salgan alguna vez por  
"las vías legales de la esfera de colonos abyectos y  
"se convierten por las mágicas palabras de una ley  
"escrita, en ciudadanos libres, que conozcan y  
"defiendan la dignidad e importancia de sus  
"derechos?

"Se proclaman ideas y se olvidan las cosas. Nos  
"divagamos en la discusión de derechos, y  
"ponemos aparte los hechos positivos. La  
"Constitución debiera ser la ley de la tierra, pero no  
"se constituye ni se examina el estado de la tierra.

"No siendo la sociedad más que el hombre  
"colectivo o la humanidad, dice un sabio  
"economista, que tendré ocasión de citar  
"frecuentemente, la existencia social, lo mismo que  
"la individual, se compone de dos especies de vida,  
"a saber, la que se refiere a la existencia material, y  
"la que se refiere a la existencia intelectual; aquella  
"que tiene por objeto la existencia del cuerpo y la  
"que mira a las relaciones del alma. De esta doble  
"consideración sobre la vida de la sociedad, nacen  
"también dos series de condiciones o de leyes que  
"constituyen respectivamente dos órdenes de

"*existencia social: el orden material y el orden  
"intelectual.*

"*¿Por qué olvidar nosotros enteramente el primero  
"para pensar únicamente en el segundo?*

"*De la más acertada combinación de ambos debe  
"resultar la armonía que se busca como el principio  
"de la verdad en todas las cosas. Si  
"exclusivamente nos ocupamos de la discusión de  
"principios políticos, adelantaremos mucho  
"ciertamente, porque demostraremos que son  
"injustos y contrarios a la naturaleza del hombre  
"todos los obstáculos que como un derecho, se  
"han puesto a la igualdad y a la libertad; pero no  
"habremos andado sino la mitad del camino, y la  
"obra no será perfecta mientras tanto no quede  
"también expedita la actividad humana en todo lo  
"que interesa a la vida material de los pueblos.*

"*Y es precisamente lo que se ha verificado al pie de  
"la letra con nosotros los mexicanos, después que  
"salimos de la servidumbre española. El estado  
"económico de la sociedad antes de la  
"independencia, era el cimiento de la servidumbre,  
"correspondía a sus antecedentes, era la expresión  
"de sus monopolios, y en la agricultura, en el  
"comercio y en los empleos, solamente figuraban  
"los privilegiados. Llegó la época nueva,  
"invocando otras teorías, sembrando otras  
"doctrinas; pero no hallaron preparada la tierra, el*





"estado social era el mismo que antes, y no  
"pudieron arraigarse y florecer.

"Lo hemos visto y lo seguiremos viendo, si no se  
"piensa en transformar de alguna manera las  
"condiciones del bienestar físico de nuestros  
"conciudadanos.

"El esfuerzo de la educación, es decir, la  
"proclamación de los derechos para los hombres  
"de la era contemporánea, ha bastado para  
"hacerlos ilustrados y aun sabios si se quiere; pero  
"no ha servido para darles capitales ni materias.  
"Se han hecho abogados y médicos sin clientela,  
"agricultores sin hacienda, ingenieros y geógrafos  
"sin canales ni caminos, artesanos muy hábiles,  
"pero sin recursos. La sociedad en su parte  
"materia se ha quedado la misma; la tierra en  
"pocas manos, los capitales acumulados, la  
"circulación estancada.

".....

"Muchas veces cuando oigo hablar de la  
"colonización extranjera, y sin que yo me oponga  
"ni la repugne, y con todo mi vivo deseo de  
"favorecerla, me pregunto si sería posible la  
"colonización mexicana, si sería difícil que  
"distribuyendo nuestras tierras feraces y hoy  
"incultas entre los hombres laboriosos de nuestro  
"país, y dándoles semillas y herramientas, y  
"declarándolos exentos de toda contribución por

"cierto número de años, y dejándolos trabajar la  
 "tierra y vivir libres, sin policía, ni esbirros, ni  
 "cofradías, ni obvenciones parroquiales, ni el  
 "derecho de alcabala, y el derecho de estola, y el  
 "derecho de juez, y el derecho de escribano, y el  
 "derecho de papel sellado, y el derecho de  
 "capitación, y el derecho de encarcelaje, y el derecho  
 "de peaje, y otros muchos derechos más que no  
 "recuerdo; si sería difícil, me pregunto, que  
 "viéramos dentro de poco tiempo brotar de esos  
 "desiertos inmensos de esos montes oscuros,  
 "poblaciones nuevas, ricas y felices... Se cree ó se  
 "afecta creer que los mexicanos todos son  
 "inmorales y perezosos, enemigos del trabajo  
 "incapaces de todo bien, y se olvida cómo y con  
 "qué gente se pobló California, cómo y con qué  
 "gente se está poblando Texas. ¿Se piensa que  
 "nuestra gente es la peor de todo el mundo? ¿Se  
 "piensa que nuestros mexicanos, hoy tan dóciles y  
 "tan sufridos, estando en la ociosidad y en la  
 "miseria, no mejorarían en su educación y en su  
 "parte moral, teniendo una propiedad, un bienestar,  
 "que son elementos tan moralizadores como la  
 "misma educación teórica? ¿Y no llegaríamos por  
 "este camino á poner en actividad la enorme  
 "riqueza territorial del país, hoy muerta, inútil,  
 "verdaderamente improductiva? ¿No realizaríamos  
 "por este medio, un sistema de municipalidades



"que equiparase en lo posible la fuerza y poder en  
 "nuestros Estados, que hoy son tan desiguales y  
 "que teniendo tan divergentes y aun  
 "contradictorios intereses, ejercer una influencia  
 "discordante, poniéndose en choque unos con  
 "otros y fomentando, sin saberlo, la discordia,  
 "cuando podrían ser verdaderamente confederados  
 "y amigos? ¿Y no podrían nuestros gobiernos,  
 "todos los días urgidos por la falta de un sistema de  
 "hacienda, tener en la medición y deslinde de las  
 "tierras, en el reparto de los baldíos, en el  
 "movimiento de esta riqueza, ahora estéril, un  
 "grande elemento de vida y un recurso para  
 "fomentar la agricultura y las artes, para fundar  
 "bancos que prestasen capitales al trabajo, que  
 "favoreciesen la competencia, que quitasen su  
 "poder al monopolio, que aumentasen la  
 "circulación del numerario, que protegiesen las  
 "empresas de caminos y canales; y en suma, que  
 "hiciesen despertar todos esos gérmenes de vida,  
 "todos esos grandes elementos con que nos ha  
 "dotado la naturaleza; pero que nosotros hemos  
 "abandonado y descuidado?

".....

"Lo único que digo es, que al grave asunto de la  
 "situación económica de nuestra sociedad debe  
 "merecer la atención y el estudio de los  
 "legisladores del país. Que mis proposiciones se

"aprueben o no; que merezcan la honra de la  
"discusión, o las burlas y los dicterios de la crítica  
"y la calumnia; mi objeto capital es, dejar  
"satisfecha y tranquila mi conciencia.

"Las proposiciones dicen lo siguiente:

"1ª El derecho de propiedad consiste en la  
"ocupación ó posesión, teniendo los requisitos  
"legales; pero no se declara, confirma y  
"perfecciona, sino por medio del trabajo y la  
"producción. La acumulación en poder de una ó  
"pocas personas, de grandes posesiones  
"territoriales, sin trabajo, cultivo, ni producción,  
"perjudica el bien común y es contraria a la moral  
"del gobierno republicano y democrático.

"2ª Los poseedores de finas rústicas ~~que tengan~~  
"una extensión mayor de quince leguas cuadradas  
"de terreno, para ser reconocidos ante las leyes del  
"país como perfectos propietarios, deberán  
"deslindar y cultivar sus territorios acotándolos y  
"cercándolos por aquellos rumbos que estén en  
"contacto con propiedades ajenas ó con cominos  
"públicos. Sin estos requisitos no tendrán derecho  
"á quejarse de daños causados por los vecinos ó  
"transeúntes, ó por caballerías ó ganados que se  
"apacienten en la comarca, ni á cobrar cosa alguna  
"por los pastos, montes, aguas ó cualesquiera  
"otros frutos naturales del campo.



"3ª Si después del término de un año  
 "permanecieren sin cercado, incultos ú ociosos  
 "algunos de los terrenos de que haba el artículo  
 "precedente, causarán en favor del erario federal  
 "una contribución del veinticinco al milla, sobre su  
 "valor verificado por peritos que nombre el  
 "gobierno. En caso de no pagarse con puntualidad  
 "esta contribución, se irá capitalizando sobre el  
 "mismo terreno hasta que se extinga su justo  
 "precio. En este caso, el causante estará obligado á  
 "otorgar una escritura de adjudicación en favor de  
 "la hacienda federal.

"2ª Siempre que en la vecindad ó cercanía de  
 "cualquiera finca rústica, existiesen rancherías,  
 "congregaciones ó pueblos que, á juicio de la  
 "administración federal, carezcan de terrenos  
 "suficientes para pastos, montes ó cultivos, la  
 "administración tendrá el deber de proporcionar  
 "los suficientes, indemnizando previamente al  
 "anterior legítimo propietario y repartiendo entre  
 "los vecinos ó familias de la congregación ó  
 "pueblos, solares ó suertes de tierra á censo  
 "enfiteútico ó de la manera más propia para que el  
 "erario recobre el justo importe de la  
 "indemnización.

"9ª Cuando dentro del territorio de cualquiera finca  
 "estuviere abandonada alguna explotación de

*"riqueza conocida, ó se descubriere y de nunciare  
"cualquiera otra extraordinaria, los tribunales de la  
"Federación podrán adjudicar el derecho de  
"explotarla y hacerla suya á los descubridores y  
"denunciantes, y fijar lo que la hacienda federal  
"debe pagar al propietario por justa indemnización  
"del terreno, sin respecto á la riqueza ó explotación  
"denunciada o descubierta. Quedan extinguidos los  
"monopolios para el pago de los puentes, ríos y  
"calzadas, y no hay obligación de pagar sino las  
"contribuciones establecidas por las leyes del país.  
"El comercio y la honesta industria no pueden ser  
"coartados por los propietarios de fincas rústicas  
"dentro del territorio de ellas".*

En esos términos, de la lectura de la parte condicional del voto formulado el veintitrés de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, por el diputado Ponciano Arriaga, se advierte, a grandes rasgos, cuáles eran los problemas que enfrentaba la nación como consecuencia de la concentración en pocas manos que existía de los bienes raíces, así como las consecuencias negativas que esto acarrearba para la sociedad y la economía nacionales.

Encontrándose vigente con su texto original el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de mil ochocientos cincuenta y siete, se reguló el funcionamiento de los bancos en los artículos del 954 al 995 del Código de Comercio de mil



ochocientos ochenta y cuatro, de los cuales resultan relevantes, para esta resolución, los que a continuación se reproducen.

**"CÓDIGO DE COMERCIO DE QUINCE DE ABRIL DE  
"MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.**

**"TÍTULO XIII.  
"DE LOS BANCOS.**

**"ARTÍCULO 954. No podrán establecerse en la  
"República, bancos de emisión, circulación,  
"descuento, depósitos, hipotecarios, agrícolas, de  
"minería o con cualquier otro objeto de comercio,  
"sino con autorización de la Secretaría de  
"Hacienda, a juicio del Ejecutivo Federal, y  
"cumpliendo los requisitos y condiciones establecidas  
"en este Código.**

**"ARTÍCULO 955. Los bancos sólo podrán  
"establecerse por sociedades anónimas o de  
"responsabilidad limitada, que se organizarán  
"conforme a los preceptos de este Código,  
"quedando sujetas a sus demás disposiciones, en  
"lo que no se opongan a las de este título.**

**"ARTÍCULO 956. Antes de que el banco dé principio  
"a sus operaciones, someterá a la Secretaría de  
"Hacienda los estatutos que hayan de servir para el  
"manejo de los negocios de la sociedad; y dicha**

"Secretaría los aprobará, si no contuvieren ninguna  
"estipulación que de algún modo contrarie lo  
"dispuesto en este Código.

"ARTÍCULO 960. Los bancos no podrán adquirir ni  
"poseer bienes raíces, con excepción de los  
"necesarios para establecer sus oficinas y  
"dependencias, y de los que tuvieren que recibir en  
"pago o adjudicarse en remate, porque no puedan  
"cubrirse sus créditos de otra manera. Sin  
"embargo, respecto de estos últimos, los bancos  
"tendrán obligación de enajenarlos dentro de dos  
"años si dichos bancos no fueren hipotecarios,  
"dentro de cinco si lo fueren. Si los bancos no  
"verificaren la venta dentro de dichos plazos, la  
"Secretaría de Hacienda los mandará sacar a  
"remate por el corredor adscrito al banco, y en la  
"misma forma consignada en el artículo 982."

"ARTÍCULO 981. Los bancos hipotecarios no  
"podrán emitir billetes pagaderos a la vista y al  
"portador; pero sí podrán poner en circulación  
"bonos hipotecarios, que se considerarán como  
"bienes muebles y que serán amortizables en los  
"términos que fijen sus estatutos, por un importe  
"igual al de la hipoteca que se hubieren constituido  
"en su favor."





**"ARTÍCULO 987. Si el producto de los bienes dados  
"en garantía no bastase a cubrir integralmente el  
"crédito del banco, podrá éste proceder por la  
"diferencia contra el deudor, a quien por el  
"contrario se entregará el exceso, si lo hubiere,  
"previa deducción de los gastos del remate o  
"venta."**

**"ARTÍCULO 988. Si la garantía consiste en hipoteca  
"en primer lugar, se rematará el inmueble  
"hipotecado sin formalidad de juicio, haciéndose la  
"venta en un solo remate que presidirá el  
"interventor del Gobierno y que se anunciará al  
"público con treinta días de anticipación en el  
"Diario oficial y en otro periódico de la localidad en  
"que la finca esté ubicada, si lo hubiere.**

**"Si la hipoteca fuere en segundo o tercer lugar, el  
"banco sólo podrá hacer el remate pagando las  
"hipotecas anteriores, o quedando éstas impuestas  
"sin alteración sobre el inmueble que se venda.**

**"ARTÍCULO 989. Para que el banco pueda proceder  
"al remate de la finca hipotecada, bastará que haya  
"dejado de pagarse puntualmente un período de  
"intereses ó un abono del capital, sin que sea  
"necesario que todo éste se haya vencido."**

**"ARTÍCULO 990. En caso de remate de un inmueble, bastará la protocolización ante notario del acto del remate, para que el título del adquirente se considere perfecto."**

**"ARTÍCULO 991. Los concursos no impedirán a los bancos el ejercicio de los derechos que este Código les concede."**

**"ARTÍCULO 992. Los adeudos al fisco únicamente tendrán preferencia sobre el crédito del banco, cuando procedan de contribuciones causadas durante el último año fiscal, las cuales se cubrirán de toda preferencia. Los demás adeudos se pagarán con el sobrante del precio, después de reembolsado el banco."**

**"ARTÍCULO 993. Las excepciones de los deudores del banco en los casos de remate, se tomarán en consideración después de que éste haya sido pagado, a cuyo efecto se seguirá el juicio respectivo, que en ningún caso ni por ningún motivo impedirá la celebración, ni la validez del remate; pero siempre quedará el banco responsable a los daños y perjuicios cuando hubiere lugar conforme a derecho."**



**"ARTÍCULO 995. La Secretaría de Hacienda  
"expedirá los reglamentos que fueren necesarios  
"para la puntual y fácil observancia de las  
"disposiciones de este Código relativas a bancos,  
"pudiendo delegar las facultades de intervención y  
"vigilancia que ellas le conceden, en los jefes  
"superiores u otros empleados de Hacienda  
"respecto de bancos establecidos en los Estados".**

De la lectura de los preceptos anteriores, se advierte que los bancos debían dedicarse a una determinada actividad relacionada con la intermediación financiera, por lo que podrían constituirse, entre otros, bancos de emisión, de depósito, hipotecarios, agrícolas y de minería, para cuyo funcionamiento sería necesario el establecimiento de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada y el otorgamiento por parte de la Secretaría de Hacienda, a juicio del Ejecutivo Federal, de la respectiva autorización.

De especial relevancia resulta el transcrito artículo 960, conforme al cual los bancos no podrían adquirir ni poseer bienes raíces, con excepción de los necesarios para establecer sus oficinas y dependencias, y de los que tuvieran que recibir en pago o adjudicarse en remate. Tales bienes deberían enajenarse en tres años, si los bancos no fueren hipotecarios y, en cinco, tratándose de estos últimos.

Por otra parte, en el caso de los bancos hipotecarios, se establecía un procedimiento, ciertamente peculiar, a través del cual se remataría el inmueble sin formalidad de juicio, para lo cual bastaría que hubiera dejado de pagarse puntualmente un período de intereses o un abono del capital, por ello, las excepciones de los deudores del banco en los casos de remate, se tomarían en consideración después de que éste se hubiere pagado, a cuyo efecto se seguiría el juicio respectivo, el que no afectaría la validez del remate, el cual de resultar ilegal únicamente daría lugar a que el banco fuera responsable por los daños y perjuicios causados.

En esos términos destaca, por una parte, que en el referido Código de Comercio el legislador realizaba, propiamente, una interpretación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 27 constitucional, que lo llevaba a concluir, implícitamente, que la adjudicación temporal de bienes raíces para recuperar los créditos otorgados encuadraba dentro de los inmediata y directamente destinados para su objeto, la intermediación financiera; y, por otra, que en el caso de que se tratara de un inmueble hipotecado, el banco podría recuperarlo a través de un procedimiento sin audiencia, en el que una vez aprobado el remate respectivo, se iniciaría el juicio correspondiente.

Lo dispuesto en tales preceptos del Código de Comercio viene a erigirse en el primer antecedente legislativo donde, estando vigente una restricción constitucional a la capacidad de cualquier corporación civil para adquirir bienes raíces, se faculta



los bancos para obtener la propiedad, a través de una adjudicación temporal, de los bienes inmuebles que se hayan dado en garantía para la obtención de algún crédito.

Cabe agregar que el apego al artículo 27 constitucional de tales disposiciones ordinarias es una cuestión que escapa a la materia de este fallo, siendo relevante, únicamente, estimarlas como antecedentes de la cuestión a dilucidar.

Por otra parte, el quince de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve se expidió un nuevo Código de Comercio, donde se suprimió la regulación de los bancos, precisándose en su artículo 640 lo siguiente:

**"ARTICULO 640. Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda y sin el contrato respectivo aprobado, en cada caso, por el Congreso de la Unión".**

En esa medida, dada la importancia y las particularidades de la organización y funcionamiento de los bancos, el diecinueve de marzo de mil ochocientos noventa y siete se expidió un ordenamiento especial para tal materia, la Ley de Instituciones de Crédito, precisándose que éstas podrían ser de tres especies, bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios

y que tendrían de común el carácter de intermediarias en el uso del crédito, distinguiéndose por la naturaleza de los títulos especiales que pondrían en circulación.

En ese sentido, las primeras instituciones serían las que emiten billetes de valores determinados y reembolsables, a la par, a la vista y al portador; los hipotecarios se caracterizarían por hacer préstamos con garantía de fincas rústicas o urbanas, emitiendo bonos que disfrutaran de la misma garantía; en tanto que los refaccionarios, tendrían por objeto facilitar las operaciones mineras, agrícolas e industriales, por medio de préstamos privilegiados, pero sin hipoteca.

En relación con los bancos hipotecarios destaca el procedimiento para hacer efectiva la garantía por falta de pago del capital o de los intereses, pues ante ello, los bancos tenían, previo requerimiento hecho por un notario, con anticipación de cinco días o más, el derecho de ocurrir al juez y de obtener, con la presentación de la escritura debidamente registrada, la posesión interina de la propiedad hipotecada, o un auto que autorizara su intervención, en este último caso el interventor sería nombrado por el Banco acreedor. El referido auto se publicaría en el periódico oficial, inscribiéndose en el Registro Público. Posteriormente, dentro de los ocho días siguientes se admitía al deudor justificar el pago de lo reclamado o el cumplimiento de las estipulaciones cuya violación dio lugar al procedimiento, sin que se pudiera admitir otra prueba que el recibo por escrito del Banco; transcurrido tal plazo sin que se hubiere rendido prueba,



el juez ordenaría entregar los autos al Banco, el que remataría el bien, en presencia del interventor del gobierno.

Para efectos de los remates se fijaba, inclusive, como postura admisible la que cubriera las dos terceras partes del precio que hubiera servido de base para la almoneda y que a la vez cubriera el crédito del Banco por el principal, intereses y costas. Si no hubiere postor la institución de crédito se adjudicaría la finca por las dos terceras partes del precio, inclusive, si ésta estimaba que no le convenían los términos de la adjudicación, podría convocar a nuevas almonedas.

Por otra parte, en los artículos 100 y 101 de la referida Ley de Instituciones de Crédito, nuevamente se prohibía a éstas adquirir por cualquier título bienes raíces, hecha excepción de los necesarios para establecer sus oficinas o dependencias, y de los que tuvierén que adjudicarse o recibir, al cobrar sus créditos, o al ejercer los derechos que les conferían las operaciones que llevaban a cabo.

La incorporación de estos últimos bienes al patrimonio de la institución de crédito también debía ser temporal, pues tratándose de bancos hipotecarios los enajenarían dentro de tres años, y si no fueran de esta naturaleza en el plazo de dos años.

Lo anterior deriva de los preceptos que a continuación se transcriben del ordenamiento de mérito.

**"LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL  
"DIECINUEVE DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS  
"NOVENTA Y SIETE.**

**"Artículo 1. Para los efectos de esta ley, sólo se  
"consideran como Instituciones de Crédito:**

**"I. Los Bancos de Emisión.**

**"II. Los Bancos Hipotecarios.**

**"III. Los Bancos Refaccionarios. Los demás  
"establecimientos en que se practiquen  
"operaciones de crédito, seguirán sujetos a las  
"leyes generales o a las concesiones que otorgue  
"el Poder público, mientras no se expidan las  
"especiales que deban regirlos."**

**"Artículo 2. Las Instituciones de Crédito tienen  
"común el carácter de intermediarias en el uso del  
"crédito, y se distinguen entre sí por la naturaleza  
"de los títulos especiales que pone en circulación  
"cada clase de Bancos."**

**"Artículo 3. Son Bancos de Emisión los que emiten  
"billetes de valores determinados, y reembolsables  
"a la par, a la vista y al portador.**

**"Artículo 4. Bancos Hipotecarios son aquéllos que  
"hacen préstamos con garantía de fincas rústicas o  
"urbanas, y emiten bonos que disfrutan de la**





**"propia garantía, causan réditos y son amortizables  
"en circunstancias o fechas determinadas."**

**"Artículo 5. Bajo la denominación de Bancos  
"Refaccionarios se designan aquellos  
"establecimientos destinados especialmente a  
"facilitar las operaciones mineras, agrícolas e  
"industriales, por medio de préstamos  
"privilegiados, pero sin hipoteca, otorgando su  
"garantía para operaciones determinadas y  
"emitiendo títulos de crédito a plazo corto, que  
"causan rédito y son pagaderos en día fijo."**

**"Artículo 6. Las instituciones de crédito sólo  
"podrán establecerse en la República, mediante  
"concesión especial otorgada por el Ejecutivo de la  
"Unión, con todos los requisitos y condiciones que  
"determina la presente ley."**

**"Artículo 7. No se autorizará bajo el amparo de una  
"misma concesión, el establecimiento de dos  
"Instituciones de Crédito distintas, ni tampoco la  
"emisión de diversos títulos de crédito que por su  
"naturaleza y según los artículos anteriores,  
"correspondan a Instituciones de diferente  
"género."**

"Artículo 39. Los préstamos con garantía hipotecaria que están autorizados a hacer los Bancos de que trata este capítulo son de dos clases:

"Préstamos con interés simple pagadero en días fijos, y capital reembolsable en plazo corto.

"Préstamos reembolsables en plazo largo, mediante anualidades que comprenden los réditos, la parte capital que se amortiza y la remuneración del Banco."

"Artículo 43. La hipoteca deberá constituirse siempre en primer lugar, ya porque la finca no estuviese aún hipotecada, o porque, en caso de estarlo, la prelación correspondiera al nuevo préstamo, por su subrogación o en virtud de consentimiento expreso de los acreedores preferentes, o por cualquier otro medio de los que la ley autoriza."

"Artículo 44. El préstamo hipotecario nunca excederá de la mitad del valor de los bienes dados en garantía; ni la anualidad que corresponda pagar por la operación, en el segundo caso del art. 39, habrá de ser mayor que el producto del capital que represente la finca, calculando dicho producto al tipo de interés que fijen los estatutos."



"Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior,  
"el valor de los bienes que se trate de hipotecar  
"será fijado por peritos nombrados por el Banco, a  
"no ser que exista un avalúo catastral practicado  
"en toda forma, y que la Secretaría de Hacienda  
"autorice a los Bancos para que se atengan a dicho  
"avalúo catastral."



"Artículo 46. Sólo se admitirán en garantía  
"hipotecaria las fincas rústicas o urbanas que  
"estén ubicadas en los Estados, Distrito Federal o  
"Territorios donde el Banco tenga su  
"establecimiento principal o sucursales, y siempre  
"que la propiedad de la finca de que se trate esté  
"inscrita en el Registro Público respectivo en favor  
"de la persona que constituya la garantía."

"Artículo 47. No se admitirán en garantía las  
"propiedades que estén pro indiviso, ni aquellas en  
"que la nula propiedad y el usufructo correspondan  
"a diversas personas, a menos de que consientan  
"expresamente en el gravamen todos los  
"copropietarios y, en su caso, el usufructuario  
"también. Igual requisito es indispensable  
"respecto de todos los interesados, en los demás  
"casos en que el derecho de propiedad esté  
"desmembrado en favor de distintas personas, así  
"como cuando exista pacto de retroventa."

**"Artículo 48. Tampoco aceptarán los Bancos la  
"hipoteca de minas, bosques, muebles  
"inmovilizados y templos, ni la de fincas  
"destinadas especialmente a algún servicio público  
"de la Federación, de los Estados, o de los  
"municipios."**

**"Artículo 78. Para hacer efectiva la garantía  
"hipotecaria por falta de pago del capital o de los  
"intereses en los términos estipulados, los Bancos  
"tienen, previo requerimiento hecho por Notario  
"con una anticipación de cinco días o más, el  
"derecho de ocurrir al juez competente y de  
"obtener, con sólo la presentación de la escritura  
"debidamente registrada, la posesión interina de la  
"propiedad hipotecada, o un auto que autorice la  
"intervención. En este último caso, el interventor  
"será nombrado por el Banco acreedor y estará  
"exento de la obligación de dar fianza."**

**"Artículo 79. El auto que decrete la posesión  
"interina o la intervención a favor de un Banco, se  
"publicará en el periódico oficial, se inscribirá en el  
"Registro Público correspondiente, y surtirá los  
"mismos efectos legales que a la cédula  
"hipotecaria atribuye la legislación del Distrito**



**"Federal. A esta misma legislación se sujetarán las facultades y obligaciones del interventor."**

**"Artículo 80. Dentro de los ocho días siguientes a la fecha del auto que decreta la posesión interina o la intervención, el deudor será admitido a justificar el pago de lo que se le reclame, o el cumplimiento de las estipulaciones cuya violación haya dado lugar al procedimiento; pero no se admitirá otra prueba que el recibo por escrito del propio Banco. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere rendido esa prueba, el juez mandará que se entreguen los autos al Banco, para que éste proceda al remate de la propiedad hipotecada."**

**"Artículo 81. Los remates se verificarán siempre en la oficina del Banco acreedor, en presencia del interventor del Gobierno y con asistencia de un escribano público. Se anunciarán las almonedas en el periódico oficial y en otro de los de mayor circulación en el lugar, con la anticipación que fijen los estatutos del Banco, la que en ningún caso será menor de nueve días."**

**"Artículo 82. En los remates será postura admisible la que cubra, ofreciendo el pago al contado, las dos tercias partes del precio que haya servido de base para la almoneda, y que, a la vez cubra el**

*"crédito del Banco por principal, intereses y  
"costas. El avalúo pericial que haya servido para el  
"préstamo, servirá también, salvo pacto en  
"contrario, de base para la almoneda."*

*"Artículo 83. Si no hubiere postor, el Banco podrá  
"adjudicarse la finca por las dos tercias partes del  
"precio; pero en caso de que se presente postura  
"que, si bien no fuere admisible por no cubrir el  
"crédito y sus accesorios, si cubriere las  
"expresadas dos tercias partes del precio, la  
"adjudicación sólo se podrá hacer por el total  
"monto del crédito. El Banco tendrá el derecho en  
"caso de no convenirle la adjudicación, o cuando  
"faltare postor, de proceder a nuevas almonedas,  
"previo el anuncio respectivo, y haciendo en cada  
"una de ellas un descuento de 10 por ciento sobre  
"el precio fijado como base para la anterior. En  
"toda almoneda tendrá el Banco el derecho de  
"adjudicación en los términos expresados."*

*"Artículo 84. Para el otorgamiento de la escritura de  
"venta a favor de un postor, o de adjudicación a  
"favor del Banco, serán devueltos al juez que  
"conoció del negocio, los autos, acompañados de  
"la copia del acta de la almoneda, certificada por el  
"notario que hubiere asistido a ésta; y el juez  
"pasará dichos documentos al notario que*



"designen el postor o el Banco para que se  
 "extienda la escritura, señalando al propio tiempo  
 "al deudor un término que no pasará de diez días  
 "para que firme la expresada escritura. Si pasado  
 "ese término, el deudor no hubiere firmado, lo hará  
 "el juez."

"Artículo 85. Todos los gastos judiciales, los de  
 "intervención y los demás que originen los  
 "procedimientos necesarios para hacer efectiva la  
 "hipoteca, serán a cargo del deudor. Si éste no  
 "objetare en el acto de la almoneda la cuenta de  
 "gastos, que al efecto deberá estar a la vista y  
 "hacerse constar su monto en el acta respectiva,  
 "dicha cuenta se reputará consentida, perdiendo el  
 "deudor todo derecho a reclamación ulterior. Si la  
 "expresada cuenta se objetare, el incidente se  
 "resolverá en la vía judicial, sin perjuicio de que se  
 "otorgue la escritura, y quedando el Banco a las  
 "resultas del incidente."

"Artículo 86. Los Bancos Hipotecarios no están  
 "obligados a dar fianza en los casos en que las  
 "leyes prescriben el otorgamiento previo de esa  
 "garantía en materia de procedimientos judiciales."

"Artículo 87. No se admitirán tercería de dominio o  
 "de preferencia sobre la propiedad hipotecada a un  
 "Banco, a no ser que para fundarlas se presenten

"escrituras registradas en debida forma con  
 "anterioridad a las escrituras del Banco; ni quedará  
 "éste obligado a entrar en concursos hipotecarios  
 "para el pago de sus créditos. Los demás  
 "acreedores, sean de la clase que fueren, no  
 "tendrán más derecho que el de exigir del Banco  
 "que les entregue el sobrante del precio de los  
 "bienes rematados o adjudicados, después de  
 "cubierto su crédito íntegramente."

"Artículo 100. Queda prohibido a las Instituciones  
 "de Crédito adquirir, por cualquier título, bienes  
 "raíces, con excepción de los necesarios para  
 "establecer sus oficinas o dependencias, y de los  
 "que tuvieren que adjudicarse o recibir, al cobrar  
 "sus créditos, o al ejercitar los derechos que les  
 "confieran las operaciones que lleven a término."

"Artículo 101. En los casos de excepción del  
 "artículo anterior, los Bancos están obligados a  
 "enajenar, dentro de tres años, si son Hipotecarios,  
 "o de dos años si son de Emisión o Refaccionarios,  
 "los inmuebles que se hubiesen visto en la  
 "necesidad de adquirir. Si transcurridos dichos  
 "plazos no se hubiere transferido la propiedad, la  
 "Secretaría de Hacienda mandará sacar a remate  
 "los inmuebles".





Volviendo al ámbito constitucional, de especial relevancia resulta la reforma realizada el veinticuatro de abril de mil novecientos uno al párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Política de cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, quedando el nuevo texto en los siguientes términos:

**"Artículo 27. ....**

**"Las corporaciones e instituciones religiosas,**  
**"cualesquiera que sean su carácter, denominación,**  
**"duración ú objeto, y las civiles cuando estén bajo**  
**"el patronato, dirección ó administración de**  
**"aquéllas ó de ministros de algún culto, no tendrán**  
**"capacidad legal para adquirir en propiedad ó**  
**"administrar más bienes raíces que los edificios**  
**"que se destinen inmediata y directamente al**  
**"servicio ú objeto de dichas corporaciones é**  
**"instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir ó**  
**"administrar capitales impuestos sobre bienes**  
**"raíces.--- Las corporaciones e instituciones**  
**"civiles, que no se encuentren en el caso**  
**"expresado, podrán adquirir y administrar, además**  
**"de los referidos edificios, los bienes inmuebles y**  
**"capitales impuestos sobre ellos, que se requieran**  
**"para el sostenimiento y fin de las mismas, pero**  
**"con sujeción a los requisitos y limitaciones que**  
**"establezca la ley federal que al efecto expida el**  
**"Congreso de la Unión".**

A través de esta última reforma, se modificó radicalmente el sistema que impedía a cualquier corporación, civil o eclesiástica adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, que no se destinaran inmediata o directamente al servicio u objeto de ellas.

Con la referida reforma, la prohibición se mantuvo para las corporaciones eclesiásticas; en cambio, para las corporaciones e instituciones civiles que no mantenía algún nexo de patronato, dirección ó administración con aquéllas, se estableció que podrían adquirir y administrar, además, los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requieran para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones que establezca la ley federal que al efecto expida el Congreso de la Unión.

Así, la reforma de mil novecientos uno dio un trato diverso a las instituciones civiles y a las eclesiásticas, sujetando a las primeras ya no a una prohibición constitucional para adquirir bienes raíces que no fueran inmediatamente necesarios para el servicio u objeto de ellos, permitiéndoles, inclusive, adquirir bienes raíces necesarios para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones que el legislador ordinario estableciera.

Ahora bien; las disposiciones constitucionales y legales antes referidas constituyen, en esencia, los antecedentes



legislativos de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, en cierta medida, brindan a este Alto Tribunal elementos para corroborar cuáles fueron las causas y los fines que llevaron al Constituyente de mil novecientos diecisiete a establecer la restricción contenida en el mencionado precepto.

Así es, del análisis conjunto de los antecedentes legislativos del dispositivo constitucional en comento y de su interpretación causal y teleológica realizada con antelación, es válido llegar a las siguientes conclusiones:

a) Las restricciones a la capacidad de las llamadas corporaciones civiles o eclesiásticas para adquirir la propiedad de bienes raíces se sustentaron en las condiciones en las que se encontraba distribuido el territorio nacional, concentrado en unos cuantos individuos y corporaciones, lo que ya afectaba el desarrollo económico y social del país, y podría perjudicar a la soberanía nacional.

b) A mediados del siglo diecinueve, ante tales circunstancias, a través de la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas y del artículo 27, párrafo segundo de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, se limitó la capacidad de todas las corporaciones, civiles y eclesiásticas, para adquirir bienes raíces, permitiéndoles esa prerrogativa, únicamente, respecto de aquellos que se destinaran inmediata o directamente al servicio u objeto de la institución.

c) Encontrándose vigente esta restricción constitucional, a través de las diversas disposiciones que regularon la actividad de las instituciones de crédito, se facultó a éstas para adquirir temporalmente, vía adjudicación, la propiedad sobre bienes raíces que respondieran por los créditos otorgados.

d) Los procedimientos establecidos para que los bancos recuperaran los créditos que confirieran, cuando se garantizaran con un bien inmueble, los favorecían notoriamente, llegando a dejar al deudor, inclusive, en estado de indefensión.

e) Mediante la reforma de veinticuatro de abril de mil novecientos uno realizada al párrafo segundo del artículo 27 constitucional, se atemperó la restricción en comento respecto de las corporaciones civiles, permitiéndoles, cuando no tuvieran determinados vínculos con las eclesiásticas, adquirir además de los edificios que se destinan inmediata y directamente a su servicio, los bienes inmuebles que requieran para el sostenimiento y fin de las mismas.

f) La restricción establecida por el constituyente de mil novecientos diecisiete en el artículo 27, fracción V, constitucional, es una base general, a través de la cual se incorpora la meta de los gobiernos liberales, plasmada en diversas disposiciones constitucionales y legales desde mediados del siglo diecinueve, consistente en evitar la concentración de la propiedad territorial y



as consecuencias negativas que sobre el ámbito económico y social provoca.

g) Las causas y fines que expresó el constituyente de mil novecientos diecisiete para establecer lo dispuesto en la fracción V del artículo 27 constitucional y el análisis de los antecedentes legislativos de tal especie de restricciones no brinda elementos que permitan concluir sobre la inconstitucionalidad de la adjudicación temporal de bienes a las instituciones de crédito. Máxime que de los debates relativos no se genera certeza sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a retirar la adición que expresamente facultaría a los bancos para adquirir inmuebles por esa vía.

Ante tales conclusiones resulta que de la interpretación causal teleológica e histórica del artículo 27, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que la restricción establecida en él, tuvo por objeto evitar que las instituciones de crédito acumularan y concentraran bienes raíces en detrimento de la soberanía nacional, del desarrollo económico del país y de la distribución de la riqueza entre los nacionales. Sin que de esa interpretación conjunta surja elemento alguno que lleve a concluir que la adjudicación temporal de bienes inmuebles a una institución de crédito se hubiera proscrito por el Constituyente.

De ahí que, dada la redacción empleada al redactarse el dispositivo en comento, para determinar si en la actualidad la

referida adjudicación atenta contra esa norma fundamental, tomando en cuenta el espíritu que llevó a su establecimiento, es pertinente precisar si en las circunstancias actuales, fundamentalmente las de carácter jurídico, la adjudicación temporal de bienes raíces encuadra dentro de las adquisiciones de propiedad que el precepto constitucional en estudio permite a las instituciones de crédito.

Al respecto, siendo la Constitución Política un instrumento permanente de gobierno, en su interpretación debe tomarse en cuenta, no solamente las condiciones y necesidades existentes al momento de su sanción, sino también las condiciones que existen al tiempo de su interpretación y aplicación, a la luz de los fines que informan la Ley Suprema de la Nación.

En efecto, la Constitución establece normas fundamentales que en sus preceptos aseguran estabilidad y certeza, que son necesarias para la existencia del Estado y de su orden jurídico, y en ocasiones determinadas previsiones constitucionales, por la materia que regulan, son redactadas por el Constituyente con el fin de que su contenido pueda ser ajustado a las nuevas condiciones sin experimentar un cambio sustancial, circunstancia que brinda mayor fuerza al principio de estabilidad de la preceptiva constitucional.

Por ello, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias ya sea jurídicas, económicas, sociales o políticas,



para fijar su justo alcance debe atenderse, precisamente, a esas circunstancias; sin que la interpretación relativa permita desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecerlo, lo cual ocasionaría una violación de la Carta Magna, cimiento de todo el orden jurídico que tiene la capacidad necesaria para gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias diferentes a las que existían en tiempos de su sanción.

Además, dado que la interpretación constitucional es dar efecto a la intención del Constituyente, y esta intención debe resultar tanto de la letra como del espíritu del precepto fundamental, cuando el lenguaje de la Constitución admite varias interpretaciones debe adoptarse aquella que mejor haga efectivo el propósito del Constituyente, pues las disposiciones constitucionales deben recibir una interpretación más amplia y liberal que los preceptos de una ley ordinaria, ya que la interpretación constitucional no puede conducir, con exactitud matemática, a extremos lógicos. Los preceptos constitucionales no son fórmulas matemáticas que tienen su esencia en la forma, sino que son instituciones orgánicas vivientes, su significado es vital, no formal y debe ser determinado teniendo en cuenta su origen y su desenvolvimiento y no simplemente el significado literal de sus palabras.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, para obtener más elementos que permitan fijar el justo alcance de la restricción prevista en el artículo 27, fracción V, constitucional, al tenor del

cual los bancos únicamente pueden adquirir en propiedad los bienes enteramente necesarios para su objeto directo, resulta indispensable analizar cuales son las condiciones, especialmente jurídicas, bajo las cuales tiene lugar, actualmente, la adjudicación de bienes a las instituciones de crédito, pues como se verá, la modificación de tales condiciones es relevante para la interpretación constitucional que sustenta este fallo.

Por principio, destaca que a diferencia de lo aducido en el dictamen rendido por la Comisión de Diputados Constituyentes que propuso el texto original y finalmente aprobado del referido precepto constitucional, en el marco jurídico vigente se reconoce plenamente personalidad jurídica a las personas jurídicas colectivas y, por ende, la capacidad para adquirir toda clase de derechos y obligaciones, entre otros, por supuesto, el de la propiedad sobre un determinado bien, ya sea mueble o inmueble, como deriva, de entre otros, de lo dispuesto en los artículos del 25 al 28 y del 2688 al 2690 del Código Civil, aplicable en materia federal; 2º, 10 y 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y, 8º y 9º de la Ley de Instituciones de Crédito; los cuales son del siguiente tenor:

**"CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN  
"MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA  
"EN MATERIA FEDERAL**

**"ARTÍCULO 25. Son personas morales:**

**"I.- La Nación, los Estados y los Municipios;**





**"II. Las demás corporaciones de carácter público  
"reconocidas por la ley;**

**"III. Las sociedades civiles o mercantiles;**

**"IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales  
"y las demás a que se refiere la fracción XVI del  
"artículo 123 de la Constitución Federal;**

**"V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;**

**"VI. Las asociaciones distintas a las enumeradas  
"que se propongan fines políticos, científicos,  
"artísticos, de recreo o cualquier otro fin ilícito,  
"siempre que no fueren desconocidas por la ley."**

**"ARTÍCULO 26. Las personas morales pueden  
"ejercitar todos los derechos que sean necesarios  
"para lograr el objeto de la institución."**

**"ARTÍCULO 27. Las personas morales obran y se  
"obligan por medio de los órganos que las  
"representan sea por disposición de la ley o  
"conforme a las disposiciones relativas de sus  
"escrituras constitutivas y de sus estatutos."**

**"ARTÍCULO 28. Las personas morales se registrarán  
"por las leyes correspondientes, por su escritura  
"constitutiva y por sus estatutos."**

**"ARTÍCULO 2,688. Por el contrato de sociedad los  
"socios se obligan mutuamente a combinar sus**

**"recursos o sus esfuerzos para la realización de un  
fin común, de carácter preponderantemente  
económico, pero que no constituya una  
especulación comercial."**

**"ARTÍCULO 2,689. La aportación de los socios  
puede consistir en una cantidad de dinero u otros  
bienes, o en su industria. La aportación de bienes  
implica la transmisión de su dominio a la  
sociedad, salvo que expresamente se pacte otra  
cosa."**

**"ARTÍCULO 2,690. El contrato de sociedad debe  
constar por escrito; pero se hará constar en  
escritura pública, cuando algún socio transfiera a  
la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse  
en escritura pública."**

## **LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES**

**"ARTÍCULO 2º. Las sociedades mercantiles  
inscritas en el Registro Público de Comercio,  
tienen personalidad jurídica distinta de la de los  
socios."**

**"Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no  
podrán ser declaradas nulas las sociedades  
inscritas en el Registro Público de Comercio."**

**"Las sociedades no inscritas en el Registro Público  
de Comercio que se hayan exteriorizado como"**



"tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica.

"Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las especiales de esta ley, según la clase de sociedad de que se trate.

"Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.

"Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular."

"ARTÍCULO 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social.

"Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso,

"basta con la protocolización ante notario de la  
"parte del acta en que conste el acuerdo relativo a  
"su otorgamiento, debidamente firmada por  
"quienes actuaron como presidente o secretario de  
"la asamblea o del órgano de administración según  
"corresponda, quienes deberán firmar el  
"instrumento notarial, o en su defecto lo podrá  
"firmar el delegado especialmente designado para  
"ello en sustitución de los anteriores.

"El notario hará constar en el instrumento  
"correspondiente, mediante la relación, inserción o  
"el agregado al apéndice de las certificaciones, en  
"lo conducente, de los documentos que al efecto  
"se le exhiban, la denominación o razón social de  
"la sociedad, su domicilio, duración, importe del  
"capital social y objeto de la misma, así como las  
"facultades que conforme a sus estatutos le  
"correspondan al órgano que acordó el  
"otorgamiento del poder y, en su caso, la  
"designación de los miembros del órgano de  
"administración.

"Si la sociedad otorgare el poder por conducto de  
"una persona distinta a los órganos mencionados,  
"en adición a la relación o inserción indicadas en el  
"párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que  
"dicha persona tiene las facultades para ello."



**"ARTÍCULO 11. Salvo pacto en contrario, las  
"aportaciones de bienes se entenderán traslativas  
"de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo  
"de la sociedad, sino hasta que se le haga la  
"entrega respectiva."**

### **LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO**

**"ARTÍCULO 8o. Para organizarse y operar como  
"Institución de banca múltiple se requiere  
"autorización del Gobierno Federal, que compete  
"otorgar discrecionalmente a la Secretaría de  
"Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del  
"Banco de México y de la Comisión Nacional  
"Bancaria. Por su naturaleza, estas autorizaciones  
"serán intransmisibles."**

**"Las autorizaciones que al efecto se otorguen, así  
"como sus modificaciones, se publicarán en el  
"Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos  
"de amplia circulación del domicilio social de la  
"institución de que se trate."**

**"ARTÍCULO 9o. Sólo gozarán de autorización las  
"sociedades anónimas de capital fijo, organizadas  
"de conformidad con lo dispuesto por la Ley  
"General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que  
"no esté previsto en esta Ley y, particularmente,  
"con lo siguiente:**

**"I. Tendrán por objeto la prestación del servicio de  
"banca y crédito, en los términos de la presente  
"Ley;**

**"II. La duración de la sociedad será indefinida;**

**"III. Deberán contar con el capital social y el capital  
"mínimo que corresponda conforme a lo previsto  
"en esta Ley, y**

**"IV. Su domicilio social estará en el territorio  
"nacional.**

**"La escritura constitutiva y cualquier modificación  
"de la misma, deberá ser sometida a la aprobación  
"de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

**"Una vez aprobadas la escritura o sus reformas  
"deberán inscribirse en el Registro Público de  
"Comercio sin que sea preciso mandamiento  
"judicial".**

Por otra parte, también resulta relevante que al tenor del marco jurídico actual, a diferencia de lo que acontecía en mil novecientos diecisiete, las instituciones de crédito realizan actividades de banca múltiple, es decir, están facultadas para celebrar operaciones de depósito y descuento, hipotecarias, refaccionarias, agrícolas, industriales o de fideicomiso; situación que al momento del establecimiento del artículo 27, fracción V constitucional, era diversa, pues en aquél momento legalmente no era posible que una misma institución de crédito gozara del acto administrativo que le permitiera realizar más de una de esas operaciones, situación que se reprodujo en las Leyes de



Instituciones de Crédito emitidas el siete de enero de mil novecientos veinticinco y el tres de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, y que se modificó hasta las reformas de veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y ocho a este último ordenamiento, a través de las cuales se estableció la posibilidad de que una misma sociedad gozara de la concesión para el ejercicio de la banca múltiple, prerrogativa que actualmente se confiere a través de una autorización.

En el mismo orden de ideas, destaca también que la regulación de los procedimientos para el remate de bienes en favor de una institución de crédito, se ha modificado radicalmente de aquella época al presente, situación que inquietaba al diputado constituyente que se opuso a la adición antes contenida al artículo 27, fracción V constitucional.

Así es, el marco jurídico actual, generalmente, sí respeta a cabalidad los diversos derechos constitucionales que asisten a los gobernados, pues el remate y la adjudicación de bienes inmuebles tiene lugar con posterioridad a la celebración de un juicio en el que se siguen las formalidades esenciales que derivan de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, constitucional; como puede advertirse del procedimiento que se prevé en los diversos preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que transcritos quedaron en el considerando cuarto de esta resolución.

Por otra parte, continuando con la interpretación del referido dispositivo constitucional, atendiendo a las condiciones jurídicas actuales, es necesario determinar, a la fecha, cuáles son las actividades que constituyen el objeto directo de los bancos, para lo cual debe acudirse a la regulación que rige a las instituciones de crédito. En específico a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 46 y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, los cuales prevén:

**"ARTÍCULO 1o. La presente Ley tiene por objeto**  
**"regular el servicio de banca y crédito; la**  
**"organización y funcionamiento de las**  
**"instituciones de crédito; las actividades y**  
**"operaciones que las mismas podrán realizar; su**  
**"sano y equilibrado desarrollo; la protección de los**  
**"intereses del público; y los términos en que el**  
**"Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema**  
**"Bancario Mexicano."**

**"ARTÍCULO 2o. El servicio de banca y crédito sólo**  
**"podrá prestarse por instituciones de crédito, que**  
**"podrán ser:**

**"I. Instituciones de banca múltiple, y**

**"II. Instituciones de banca de desarrollo.**

**"Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley,**  
**"se considera servicio de banca y crédito la**  
**"captación de recursos del público en el mercado**  
**"nacional para su colocación en el público,**  
**"mediante actos causantes de pasivo directo o**





"contingente, quedando el intermediario obligado a  
"cubrir el principal y, en su caso, los accesorios  
"financieros de los recursos captados.

"No se consideran operaciones de banca y crédito  
"aquellas que, en el ejercicio de las actividades que  
"les sean propias, celebren intermediarios  
"financieros distintos a Instituciones de crédito que  
"se encuentren debidamente autorizados conforme  
"a los ordenamientos legales aplicables. Dichos  
"intermediarios en ningún caso podrán recibir  
"depósitos irregulares de dinero en cuenta de  
"cheques."

ARTICULO 46.- Las instituciones de crédito sólo  
"podrán realizar las operaciones siguientes:--- I.  
"recibir depósitos bancarios de dinero:--- a) A la  
"vista;--- b) Retirables en días preestablecidos;--- c)  
"de ahorro, y d) A plazo o con previo aviso;--- II.  
"Aceptar préstamos y créditos;--- III. Emitir bonos  
"bancarios;--- IV. Emitir obligaciones  
"subordinadas;--- V. Constituir depósitos en  
"instituciones de crédito y entidades financieras  
"del exterior;--- VI. Efectuar descuentos y otorgar  
"préstamos o créditos;--- VII. Expedir tarjetas de  
"crédito con base en contratos de apertura de  
"crédito en cuenta corriente;--- VIII. Asumir  
"obligaciones por cuenta de terceros, con base en  
"créditos concedidos, a través del otorgamiento de

"aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito,  
 "así como de la expedición de cartas de crédito.---  
 "IX. Operar con valores en los términos de las  
 "disposiciones de la presente Ley y de la Ley  
 "Mercado de Valores;--- X. Promover la  
 "organización y transformación de toda clase de  
 "empresas o sociedades mercantiles y suscribir y  
 "conservar acciones o partes de interés en las  
 "mismas, en los términos de esa Ley;--- XI. Operar  
 "con documentos mercantiles por cuenta propia;---  
 "XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros  
 "operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo  
 "reportos sobre estas últimas;--- XIII. Prestar  
 "servicio de cajas de seguridad;--- XIV. Expedir  
 "cartas de crédito previa recepción de su importe,  
 "hacer efectivos créditos y realizar pagos por  
 "cuenta de clientes;--- XV. Practicar las  
 "operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley  
 "General de Títulos y Operaciones de Crédito, y  
 "llevar a cabo mandatos y comisiones;--- XVI.  
 "Recibir depósitos en administración o custodia, o  
 "en garantía por cuenta de terceros, de títulos o  
 "valores y en general de documentos mercantiles;--  
 "- XVII. Actuar como representante común de los  
 "tenedores de títulos de crédito;--- XVIII. Hacer  
 "servicio de caja y tesorería relativo a títulos de  
 "crédito, por cuenta de las emisoras;--- XIX. Llevar  
 "la contabilidad y los libros de actas y de registro



"de sociedades y empresas;--- XX. Desempeñar el  
 "cargo de albacea;--- XXI. Desempeñar la  
 "sindicatura o encargarse de la liquidación judicial  
 "o extrajudicial de negociaciones,  
 "establecimientos, concursos o herencias;--- XXII.  
 "Encargarse de hacer avalúos que tendrán la  
 "misma fuerza probatoria que las leyes asignan a  
 "los hechos por corredor público o perito;--- XXIII.  
 "Adquirir los bienes muebles e inmuebles  
 "necesarios para la realización de su objeto y  
 "enajenarlos cuando corresponda, y (ADICIONADA,  
 "D.O. 23 DE JULIO DE 1993) XXIV. Celebrar  
 "contratos de arrendamiento financiero y adquirir  
 "los bienes que sean objeto de tales contratos.---  
 "La realización de las operaciones señaladas en  
 "esta fracción, así como el ejercicio de los  
 "derechos o el cumplimiento de las obligaciones de  
 "las partes, se sujetarán a lo previsto por esta Ley  
 "y, en lo que no se oponga a ella, por la Ley  
 "General de Organizaciones y Actividades  
 "Auxiliares del Crédito, y las análogas y conexas  
 "que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito  
 "Público, oyendo la opinión del Banco de México y  
 "de la Comisión Nacional Bancaria.--- ARTÍCULO  
 "106.- A las instituciones de crédito les estará  
 "prohibido: ... XIII. Adquirir con recursos  
 "provenientes de sus pasivos, títulos, valores, o  
 "bienes de los señalados en las fracciones I y III del

**"artículo 55 de esta Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar excepciones, mediante reglas de carácter general.-- (REFORMADO, D.O. 23 DE DICIEMBRE DE 1993) "Cuando una institución de crédito reciba en pago de adeudos o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor, títulos o valores, que no deba conservar en su activo, así como bienes o derechos de los señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional Bancaria'."**

De los preceptos antes transcritos, deriva que las instituciones de crédito tiene como función principal el servicio de banca y crédito, que consiste en la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente; de ahí que, el otorgamiento de préstamos o créditos encuadra dentro de su objeto directo.

Además, de las propias disposiciones se advierte que cuando las instituciones de crédito reciban en pago de adeudos o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor, títulos de propiedad que no deban conservar en su activo, deberán someterse a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria.



Ahora bien, respecto de la referida actividad que trasciende al objeto directo de las citadas instituciones, las operaciones de crédito, cabe señalar que en la actualidad éstas han alcanzado una gran diversificación; partiendo de la distinción entre crédito simple y crédito en cuenta corriente. El primero consiste en el otorgamiento de una cantidad determinada por una sola ocasión, en tanto que en el segundo el acreditado puede libremente hacer distintas remesas, antes de la fecha fijada para el reembolso total o parcial de las sumas dispuestas.

Entre las diversas operaciones de crédito que realizan las instituciones de crédito, destacan, entre otras, el crédito de habilitación o avío y el refaccionario; el crédito comercial documentario; el crédito automotriz; el crédito hipotecario; el crédito con colateral; el crédito prendario; el crédito quirografario; la apertura de crédito con la posibilidad de que sea en cuenta corriente o sin ésta; el crédito confirmado y el crédito de descuento, los cuales, en su mayoría, encuentran su fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ordenamiento que entró en vigor el quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos, y genera, por ende, una condición jurídica más que distingue las condiciones que actualmente trascienden al objeto directo, de las que prevalecían en mil novecientos diecisiete.

En abono a lo anterior, para precisar el objeto de la actividad crediticia cuyo ejercicio corresponde por antonomasia a

las instituciones de crédito, conviene tener presente cuál es el origen de esa actividad, así como su finalidad.

En ese sentido, al seno de toda sociedad, dentro de las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de sus integrantes, con los diversos y escasos recursos con los que aquélla cuenta, se distinguen, por un lado, las que se dirigen hacia la obtención y transformación de esos recursos generando productos y, por otro, las que consisten en el uso de éstos para satisfacer una determinada necesidad, el consumo.

Para que la efectiva conjunción de tales actividades se lleve a cabo, es necesaria la circulación de los productos, en la cual se encuentra implícito el cambio de estos entre los diferentes agentes económicos, los que acuden a un mercado, ya sea ofreciendo sus productos o requiriendo éstos, mecanismo a través del cual cada uno de los integrantes buscará satisfacer sus necesidades. Debiendo destacarse que el cambio económico no se limita a las mercancías, pues abarca también los servicios que los individuos se otorgan unos a otros.

Con el fin de agilizar la circulación de los productos y servicios, resulta indispensable encontrar un medio de cambio que haga las veces de equivalente general de los productos del mercado.

Ante tal necesidad, el desarrollo de las sociedades llevó a adoptar a la moneda como el producto o mercancía que sirve de

266



instrumento del cambio, que facilita la realización de este último, haciendo desaparecer los obstáculos que por motivos de cantidad o de calidad, presenta el trueque o cambio directo y que permite fijar, de un modo general y uniforme, el valor de todos los productos concurrentes a un mercado.

No es la moneda el único instrumento de cambio, pues con el desarrollo de las actividades económicas surgió un diverso mecanismo para facilitar la circulación de los productos y las mercancías, el crédito, el cual viene a sustituir temporalmente a la moneda en su función económica.

Así, en las operaciones de cambio con intervención del crédito, la moneda comenzó a funcionar únicamente como medida de valor, sin que fuera necesaria su presencia material, obrando a través de su representante, el crédito.

El crédito, en su concepto rudimentario, es sinónimo de confianza, cualidad subjetiva, que cuando se relaciona con una mercancía monetaria que en un día futuro ha de ser entregada por el deudor al acreedor, introduce un elemento objetivo.

El crédito es en su origen un anticipo de valores o capitales debido a la necesidad, por lo que en principio sirve para nivelar los desequilibrios generados cuando los gastos o necesidades exceden a los ingresos o recursos.

Posteriormente, los efectos del crédito se extienden y los individuos comienzan a utilizarlo como un medio de comprar o adquirir sin tener lo necesario para pagar y, se comienza a utilizar como un mecanismo para aumentar la potencia económica de cada uno, donde el crédito ya no será producto de la necesidad, sino de la conveniencia.

La existencia del crédito se manifiesta tanto en un aspecto pasivo como en uno activo, correspondiente este último de aquél.

Por ello, así como el crédito facilita al deudor el uso de un capital que no es suyo, por la obtención de tal prerrogativa, surge una retribución o interés, pues de no ser así, el deudor que obtiene un beneficio del capital tomado en préstamo, realizaría una ganancia debida en parte al acreedor. Inclusive, la regulación jurídica de la actividad crediticia, en aras de proteger al individuo que facilita el crédito, estableció diversas formas de garantizar que el deudor devolvería al acreedor, una vez vencido el plazo pactado para ello, el capital cuyo uso le fue facilitado previamente por éste, y los intereses generados sobre él.

En el ámbito jurídico, la evolución del crédito transformó el vínculo que originalmente ligaba al vendedor u oferente de una mercancía, con su comprador o demandante, pues al poder disponer este último libremente del producto adquirido sin haber pagado su importe, la antigua relación jurídica entre comprador y vendedor se tornó en una relación entre deudor y acreedor.





El vendedor ya no es el dueño de la mercancía, pues en la venta la cambió por un derecho contra el comprador, prerrogativa que como cualquier otra, puede ser enajenable, siempre y cuando se cumplan las prescripciones legales relativas. En esa medida, una vez que jurídicamente se admitió el derecho del vendedor a enajenar o ceder su crédito, este último empezó a funcionar como instrumento de cambio.

En ese contexto, la actividad crediticia, en esencia, consiste en un acuerdo de voluntades a través del cual una persona física o jurídica colectiva otorga a otra el poder jurídico y económico para disponer en un momento determinado o dentro de un período, de una cantidad cierta de capital, determinada o indeterminable.

Esa actividad inicia con el referido acuerdo de voluntades y tiene como forma ordinaria de culminación, el cumplimiento, en el futuro, de la obligación aceptada por el deudor, el otorgamiento en una o más ocasiones de una cantidad monetaria equivalente a la que le fue puesta a su disposición por el acreedor, inicialmente, y que efectivamente utilizó.

Sin embargo, en ocasiones, por diversos motivos, el cumplimiento de la obligación asumida por el deudor no puede llevarse a cabo por ese medio ordinario y, en tales circunstancias, el acreedor podrá hacer valer los medios judiciales que tutelan el cumplimiento de las operaciones de crédito.

Así, como consecuencia de una resolución jurisdiccional que estime fundada la pretensión hecha valer por el acreedor crediticio, la cual podrá desarrollarse en juicios de diversa especie, ya fuera ejecutivos u ordinarios, según el título que respalde la operación de crédito, el acreedor u otorgante del crédito podrá recuperar el capital que puso a disposición del deudor, así como los intereses que aquél hubiera generado.

De ahí que dentro de la actividad crediticia debe comprenderse como uno de sus objetos directos, la recuperación de los créditos otorgados, lo cual puede realizarse a través de los mecanismos ordinarios acordados en el convenio respectivo o bien, mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales instauradas para tutelar los derechos adquiridos por los celebrantes de una operación de crédito, lo que puede provocar que, temporalmente, el préstamo concedido se recupere a través de la adjudicación de un bien inmueble.

Sentadas tales bases y volviendo al estudio del marco jurídico vigente al momento de realizarse el acto impugnado en este juicio, debe precisarse que la adjudicación de un inmueble como pago de un crédito previamente otorgado por una institución de crédito, como deriva del artículo 106 antes transcrito, se encuentra sujeto a las disposiciones de observancia general que emite la Comisión Nacional Bancaria.

En ese tenor, dicha Comisión, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cuyo objeto



consiste en supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público, según deriva de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria; en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 106, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, emitió con fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cinco las disposiciones generales a que se sujetará el tratamiento contable y las inversiones de capital y reservas de capital en bienes, valores y derechos que reciban por adjudicación en remate en pago de adeudos, las instituciones crediticias, las que prevén:

E  
C  
R

**"DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE**

**"SE SUJETARA EL TRATAMIENTO CONTABLE Y**

**"LAS INVERSIONES DE CAPITAL Y RESERVAS DE**

**"CAPITAL EN BIENES, VALORES Y DERECHOS**

**"QUE SE RECIBAN POR ADJUDICACION EN**

**"REMATE O DACION EN PAGO DE ADEUDOS.---**

**"PRIMERA.- Los bienes, valores y derechos**

**"adjudicados, deberán registrarse en contabilidad**

**"en la fecha en que cause ejecutoria el auto**

**"aprobatorio del remate en el cual se decretó la**

**"adjudicación.--- SEGUNDA.- El valor de**

**"contabilización de los bienes, valores o derechos**

**"adquiridos en remate como consecuencia de**

"juicios relacionados con créditos a favor de esas  
 "sociedades, será el que se fije para efectos de la  
 "adjudicación.--- TERCERA.- Los valores de  
 "contabilización de los bienes, valores y derechos  
 "a que se refiere la disposición precedente,  
 "deberán mantenerse sin modificación hasta llevar  
 "a cabo su realización o baja de inventario por caso  
 "fortuito, pérdida por robo u otras causas que  
 "determinen la imposibilidad práctica de  
 "realización de los efectos. Por consiguiente, tales  
 "bienes, valores y derechos no podrán ser objeto  
 "de apreciación o depreciación contable.---  
 "CUARTA.- En caso de que esas sociedades  
 "llegaran a sufrir la pérdida parcial o total de  
 "alguno o algunos de tales bienes, valores o  
 "derechos, o bien que determinen que su valor es  
 "nulo, deberán reflejar esta situación mediante  
 "registro en la contabilidad del quebranto  
 "correspondiente. --- QUINTA.- De los bienes,  
 "valores y derechos adjudicados o recibidos en  
 "pago, sólo podrán retenerse y reflejar tal situación  
 "mediante traspaso a la cuenta de activo o que  
 "corresponda, únicamente aquéllos que por sus  
 "características sean susceptibles de utilizarse  
 "para los fines propios de la operación de esas  
 "sociedades y siempre que sean estrictamente  
 "indispensables para los mismos.--- Para tales  
 "efectos, no se requerirá autorización previa de



"esta Comisión.--- SEXTA.- El valor total de los  
"bienes, valores y derechos que reciban en pago  
"de créditos por adjudicación no podrá exceder del  
"20% en 1995, del 15% en 1996 y del 10% a partir de  
"1997, del capital pagado y reservas de capital que  
"se consideran para efectos de los artículos 55 de  
"la Ley de Instituciones de Crédito y 15, 37, 43,  
"fracciones VIII, X y XII, y 45-p de la Ley General de  
"Organizaciones y Actividades Auxiliares del  
"Crédito.--- SEPTIMA.- Por los excedentes de  
"inversión en que incurran al cierre de un mes  
"respecto de los porcentajes señalados en la  
"disposición precedente, deberá constituirse  
"reserva para castigo mediante aplicaciones  
"mensuales e equivalentes a la parte alícuota que  
"resulte de dividir el importe del excedente entre el  
"número de meses que resten del ejercicio de que  
"se trate, incluyendo el propio mes en que se dé  
"dicho excedente, de modo que éste quede  
"reservado en su totalidad a más tardar al 31 de  
"diciembre del mismo ejercicio.--- En el caso de  
"excedentes sucesivos dentro del mismo ejercicio  
"a partir del segundo mes en que esto ocurra la  
"constitución mensual de reserva se hará en  
"cantidad equivalente a la parte alícuota que se  
"obtenga de dividir el saldo del excedente al mes  
"del cómputo, entre el número de meses que resten  
"del ejercicio, incluyendo aquel en que se

"determine el saldo excedente.--- OCTAVA.- Las  
"instituciones de crédito y organizaciones  
"auxiliares deberán abstenerse de formalizar la  
"adquisición de bienes, valores y derechos que  
"reciban en pago de adeudos, mediante la  
"celebración de contratos de fideicomiso u otros  
"actos que incidan o puedan incidir en omisión del  
"registro en las cuentas de activo establecidas  
"para ese efecto.--- NOVENA.- Respecto a los  
 "bienes, valores y derechos materia de la presente  
 "circular, deberán mantener un registro actualizado  
 "y elaborar y conservar a disposición de esta  
 "Comisión información trimestral de los  
"movimientos de las cuentas y subcuentas de  
"registro, que contenga los siguientes datos:---  
 "Número de altas (adjudicaciones y daciones  
 "pago) e importe total.--- Número de bajas  
 "venta y aplicaciones), valor total de registro,  
 "importe de su reserva para castigo creada e  
 "importe de la utilidad o pérdida, en su caso.---  
 "DISPOSICIONES TRANSITORIAS--- PRIMERA.- Las  
 "presentes disposiciones serán de observancia  
 "obligatoria a partir del 31 de diciembre de 1994.---  
 "SEGUNDA.- Con Números al 31 de diciembre de  
 "1994, esas sociedades podrán cancelar las  
 "reservas para castigo de bienes, valores y  
 "derechos recibidos en pago o por adjudicación,  
 "constituídas en el propio ejercicio de 1994 de



"conformidad con las disposiciones de la Circular  
"Núm. 1198 que se deroga.--- TERCERA.- A partir  
"de una relación pormenorizada que contenga la  
"posición de los efectos adjudicados o recibidos  
"en pago, existentes en esas sociedades al 31 de  
"diciembre de 1994, deberán establecer un  
"mecanismo que permita su control adecuado y el  
"cumplimiento de las presentes disposiciones.---  
"Los datos que deberá contener la relación  
"mencionada serán: nombre del deudor original,  
"importe del adeudo a la fecha de la adjudicación o  
"dación en pago, fecha de adquisición, descripción  
"de los bienes, valores o derechos recibidos y  
"valor de adquisición.--- Esta relación deberá  
"mantenerse a disposición de la comisión.---  
"CUARTA.- En lo tocante al ejercicio de 1995 y para  
"los efectos de la disposición séptima de esta  
"Circular, esas instituciones y organizaciones  
"auxiliares deberán considerar el excedente que  
"resulte en el computo de inversiones al 31 de  
"enero del propio 1995.--- QUINTA.- Quedan sin  
"efecto las instrucciones sobre afectación de las  
"cuentas 3105.- ESTIMACION PARA CASTIGO DE  
"BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS  
"ADJUDICADOS, 3106.- ESTIMACION PARA  
"CASTIGO DE INMUEBLES ADJUDICADOS y 5114.-  
"CASTIGOS. Relacionadas con disposiciones de la  
"Circular Núm. 1198."

Asimismo, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la citada Comisión emitió la siguiente circular:

**"A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO:---**  
**"En atención a los planteamientos hechos por esas entidades, esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los artículos 99 y 106, fracción XIII de la Ley de Instituciones de Crédito, 52 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 4, fracciones III y XXXVI de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha resuelto emitir la siguiente disposición:---** **UNICA.** Se modifica la **"Segunda; se adiciona una Décima, y se deroga la Sexta y Séptima de las Disposiciones de carácter general a que se sujetará el tratamiento contable y las inversiones de capital y reservas de capital en bienes, valores y derechos que se reciban por adjudicación en remate o dación en pago de adeudos, contenidas en la Circular Núm. 1231, para quedar en los términos que a continuación se indican:---** **'SEGUNDA.-...** Respecto de aquéllos **"que se reciban mediante dación en pago, el valor de contabilización será el que arroje el avalúo practicado para ese objeto y el precio convenido por las partes'.---** **'SEXTA.- (Se deroga)'---**



371



**"SEPTIMA.- (Se deroga).--- 'DECIMA.- Las**  
**"instituciones de crédito considerarán dentro de**  
**"los bienes, valores y derechos recibidos en pago**  
**"de créditos o por adjudicación, las inversiones**  
**"que realicen en títulos representativos del capital**  
**"social de sociedades a las que hubieren**  
**"transmitido la propiedad de los bienes, valores y**  
**"derechos que las propias instituciones hayan**  
**"recibido en pago de créditos o por adjudicación'.--**  
**"- TRANSITORIAS.--- PRIMERA. Las reservas para**  
**"castigo que se hayan constituido con anterioridad**  
**"al 30 de septiembre del año en curso no podrán**  
**"liberarse contra resultados. Estas reservas para**  
**"castigo deberán considerarse como provisiones**  
**"preventivas para cobertura de riesgos crediticios**  
**"o estimación para castigo de cartera y otros**  
**"adeudos, según corresponda.--- SEGUNDA. Las**  
**"instituciones de crédito que con motivo de los**  
**"bienes, valores y derechos que reciban en pago o**  
**"por adjudicación, excedan el límite establecido en**  
**"el penúltimo párrafo del artículo 55 de la Ley de**  
**"Instituciones de Crédito, deberán presentar a la**  
**"Comisión Nacional Bancaria y de Valores un**  
**"programa de regularización que tenga por objeto**  
**"eliminar dicho exceso. Tales programas de**  
**"presentarán a más tardar el 15 de noviembre del**  
**"presente año o dentro de los 30 días naturales**

**"siguientes a la fecha en que incurran en el citado  
"exceso".**

De la lectura de las disposiciones antes transcritas, deriva que a través de ellas se determina en forma expresa que los bienes adjudicados en remate se sujetarán a un régimen contable especial de cuyo estado deberán informar trimestralmente a la Comisión, destacando que no podrán conservar en su activo aquellos bienes que no se encuentren relacionados con su objeto directo, prohibiendo, por otro lado, la formalización de la adquisición de bienes, valores y derechos que reciban en pago de adeudos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso, u otros actos que incidan o puedan incidir en omisión del registro en las cuentas de activo establecidas para ese efecto.

Por tanto, debe concluirse que, por una parte, la adquisición que realizan las instituciones de crédito de un bien raíz, vía adjudicación, constituye, inicialmente, una actividad propia de su objeto directo y que, por otra, la propiedad que se otorga por esa vía a las referidas instituciones es de carácter temporal, sujeta a control administrativo.

En ese sentido, la interpretación progresiva de lo dispuesto en el artículo 27, fracción V, constitucional, genera convicción en este Alto Tribunal de que el marco jurídico que rige actualmente la actividad de las instituciones de crédito, del que deriva cuáles son las que trascienden a su objeto directo; así como los procedimientos de ejecución que culminan con la adjudicación en

572



favor de éstas de un bien inmueble; y, el control administrativo al que esta sujeta la propiedad conferida por ese medio, conforma un entorno radicalmente diferente al que subsistía en mil novecientos diecisiete, de donde se sigue que la adjudicación temporal de un bien inmueble en favor de un banco no contraría lo dispuesto en el citado precepto constitucional.

Entonces, es corolario de la interpretación literal, causal teleológica, histórica y progresiva de lo dispuesto en el artículo 27, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al tenor del marco jurídico actual, la propiedad temporal de un inmueble, sujeta a control administrativo, que adquiere una institución de crédito, vía adjudicación, en tanto constituye una actividad que deriva directa y necesariamente de su objeto directo, es una expresión válida de la capacidad legal restringida de aquéllas para adquirir bienes inmuebles, pues con ello no se afectan los fines que persiguió el Constituyente, los que históricamente se han perseguido a través de diversas disposiciones vigentes en el orden jurídico nacional, y que consisten en evitar la concentración y acumulación de la propiedad del territorio nacional, por las consecuencias negativas que acarrea al desarrollo económico, a la distribución de la riqueza y a la soberanía nacional.

Debiendo señalarse que, en razón del objeto directo de las instituciones de crédito, es de carácter temporal la necesidad de la adquisición de los bienes cuya propiedad deriva de una adjudicación decretada en un juicio que se substanció con el fin

de recuperar un crédito, pues únicamente será indispensable para que aquéllas reciban, como una forma alternativa y extraordinaria, el pago del crédito concedido, pero por la naturaleza de las funciones de esas instituciones, en aras de continuar con su actividad de intermediación financiera, deberán, en el menor tiempo posible, trasladar la propiedad de ese bien inmueble, para que la suma equivalente se dedique, nuevamente, a sus fines.

En esos términos, únicamente la propiedad temporal de los inmuebles adjudicados trasciende al objeto directo de las instituciones de crédito, ya que sólo como medio alternativo y extraordinario de pago de los créditos otorgados, esa determinación judicial constituye una expresión válida del objeto referido, al tenor de lo dispuesto en la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, conviene agregar que las conclusiones adoptadas en este fallo encuentran coincidencias con el criterio emitido por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación se reproducen a continuación:

**"INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SU CAPACIDAD  
"PARA POSEER Y ADMINISTRAR BIENES RAÍCES.  
"La comisión respectiva del Congreso  
"Constituyente, siguiendo el criterio sustentado en  
"el proyecto, respecto de las corporaciones civiles**



"y eclesiásticas y de las sociedades anónimas  
"civiles y mercantiles, sometió a la aprobación de  
"la asamblea una adición al artículo 27  
"constitucional, en el sentido de que los bancos no  
"podrían tener propiedad ni administrar más bienes  
"raíces que los enteramente necesarios para su  
"objeto directo, adición que primordial y  
"esencialmente tuvo como origen seguir la  
"tendencia de que la propiedad raíz fuera manejada  
"individualmente y no por personas morales, y  
"dejar esos bienes raíces dentro del juego  
"económico del país; ésta idea fundamental es la  
"que se objetiva en la fracción V del artículo 27  
"constitucional y la que da su significado jurídico.  
"Es cierto que también se propuso la adición en el  
"sentido de conceder a los bancos la facultad de  
"adjudicarse transitoriamente los bienes sobre los  
"que accionaran a virtud de sus créditos, y que al  
"ponerse a discusión fue objetada, fundándose la  
"objeción, esencialmente, en el sentido de las  
"irregularidades y abusos que cometían las  
"instituciones de crédito, por los privilegios y  
"prerrogativas que les concedía la Ley de  
"Instituciones de Crédito de 1897, ya que sólo  
"utilizaban a los jueces para la aprobación de los  
"remates y privaban a sus deudores de todos los  
"derechos que les confieren en los litigios que se  
"desarrollan entre particulares, haciendo mención

"también a las grandes ganancias que obtenían  
 "con sus operaciones y con la adjudicación de las  
 "propiedades raíces, y cuando ya se iba a someter  
 "a votación la fracción, por haberse considerado  
 "suficientemente discutida, la comisión retiró la  
 "adición propuesta, circunstancia que originó que  
 "la asamblea no manifestara su opinión mediante  
 "una votación sobre la facultad de adjudicación  
 "temporal de los bancos quedando el precepto en  
 "la forma que actualmente existe en la Carta  
 "Magna. Si pues, no hubo manifestación expresa  
 "de la voluntad de la asamblea constituyente,  
 "prohibiendo a los bancos, de manera absoluta la  
 "tenencia y administración de bienes raíces, y en  
 "cambio, la prohibición que contiene la fracción V  
 "del artículo 27 constitucional, tenía por origen el  
 "de impedir que la propiedad raíz se incorporara  
 "bienes de manos muertas, es inconcuso e  
 "indudable que toda decisión que contraría el  
 "motivo del legislador para consignar esa norma en  
 "la Constitución, violará ésta; pero las necesidades  
 "propias del funcionamiento del crédito y las  
 "circunstancias económicas del país, requieren  
 "que provisionalmente exista esa adjudicación;  
 "conservando la movilidad de la propiedad raíz,  
 "resulta evidente que no se contraría en el fondo el  
 "motivo ni la mente del legislador constitucional al  
 "considerar esas limitaciones. A mayor



"abundamiento, no hubo, como ya se dijo, votación  
"expresa en el sentido de desechar la adición, ni  
"pudo haberla, porque ésta fue retirada por la  
"comisión, por haber sido objetada, pero aun  
"recurriendo como medio de interpretación  
"auténtica a la ficción de establecer que el criterio  
"de la Asamblea Constituyente fue el mismo de la  
"comisión, puede asegurarse que el texto  
"constitucional es susceptible de una  
"interpretación progresiva, acorde con la economía  
"social y con el desarrollo evolutivo y progresista  
"del país. El argumento de la objeción, o mejor  
"dicho, sus conclusiones, no pueden  
"desarticularse de los hechos en que descansa: las  
"condiciones que prevalecían en el país en 1917,  
"por la posición especial en que se encontraban  
"los bancos y por el régimen de derecho en que se  
"desarrollaban sus actividades de lo que es lógico  
"concluir que suprimidos de la República, sobre  
"bases distintas más acordes con la equidad y más  
"bien encausadas para derivar los resultados de la  
"función económica de los bancos hacia el  
"colectivo beneficio y no para el singular privilegio  
"de los capitales privados con interés en aquellas  
"instituciones, la conclusión obtenida entonces ya  
"no puede valer después, y desaparecida la causa  
"del temor de consagrar un sistema de privilegios  
"en perjuicio de los pobres, o con más propiedad

"de la conveniencia social o colectiva, desaparece  
 "también la repugnancia que aquella adición  
 "propuesta, no pugna con el espíritu filosófico, con  
 "la causa esencia, con la razón motriz en la que se  
 "inspiró el Constituyente de proteger el libre juego  
 "de la riqueza pública, evitando su estancamiento y  
 "defectuosa productividad en poder de manos  
 "muertas. El momento psicológico en que actuaron  
 "los legisladores constituyentes, ha cambiado; el  
 "sociológico también; la evolución no se detiene, y  
 "la economía del país requiere que las leyes, aun  
 "las constitucionales, se interpreten en  
 "concordancia y armonía con la época en que  
 "deben aplicarse, sin desatender a las variantes y  
 "modalidades que presenta el progreso económico  
 "y a los organismos encargados  
 "cuidadosamente de llenar una verdadera  
 "necesidad social. La adjudicación temporal para  
 "los bancos, en juicios seguidos por ellos, sin  
 "privilegio procesal alguno, exactamente en las  
 "condiciones de cualquier particular y después de  
 "que no se han conseguido en la almoneda, sólo  
 "podría estimarse encaminada al desacato de la  
 "prohibición constitucional de adquirir y  
 "administrar, si esa temporalidad corriese riesgo  
 "de convertirse en perpetuidad; pero aun siendo  
 "así, existiendo la prevención expresa de  
 "desprenderse de lo adquirido en corto plazo, no







*"sólo no se atenta contra el espíritu y objetos  
"verdaderos de la ley fundamental, sino que  
"conciliándose intereses respetables, se garantiza  
"el desarrollo de una importante rama de la  
"economía nacional" (Quinta Epoca, Tercera Sala,  
"Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LIV,  
"Página: 2586)."*

**QUINTO.-** Por último, en virtud de que en los restantes agravios expresados en la demanda de garantías, la parte quejosa se limita a argumentar cuestiones relacionadas con la legalidad de la resolución de diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, procede reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en turno, para que se haga cargo de dichos argumentos, por lo cual, con testimonio de la presente resolución, deberán remitírsele los autos del juicio de amparo número 690/99, así como copia certificada del escrito de agravios.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

**PRIMERO.-** En la materia competencia de este Tribunal Pleno, se confirma la sentencia recurrida en términos del considerando cuarto de esta resolución.

**SEGUNDO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a EDGARDO MEDINA DURAN en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.

**TERCERO.-** Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, en turno, para que conozca de las cuestiones de su competencia; para tal efecto remítanse los presentes autos con testimonio de esa ejecutoria.

Notifíquese; y, con testimonio de este fallo, devuélvanselos autos al juzgado de su origen; y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Castro y Castro, Gudiño Pelayo, Díaz Romero, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Góngora Pimentel. Fue Ponente en este asunto el señor Ministro Juan N. Silva Meza.- El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó su inconformidad con las consideraciones y dijo que formulará voto aclaratorio.- Durante la votación del asunto estuvieron ausentes el señor Ministro Azuela Güitrón, por estar disfrutando de vacaciones, y el señor Ministro Aguinaco Alemán, por licencia concedida. Doy fe.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.



AMPARO EN REVISION 690/99.

MINISTRO PRESIDENTE:

  
 GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

  
 MINISTRO PONENTE:

JUAN N. SILVA MEZA.

  
 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

Esta foja corresponde al A.R. 690/99, promovido por Edgardo Medina Durán, fallado el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de nueve votos, en el sentido de: **PRIMERO.-** En la materia competencia de este Tribunal Pleno, se confirma la sentencia recurrida en términos del considerando cuarto de esta resolución. **SEGUNDO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege EDGARDO MEDINA DURAN en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución. **TERCERO.-** Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, en turno, para que conozca de las cuestiones de su competencia; para tal efecto remítanse los presentes autos con testimonio de esa ejecutoria. Conste.

MSOD/pbg/aam.

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  
PARA NOTIFICACION EL 05 NOV. 1990

08 NOV. 1990  
notificó la resolución anterior por lista de la misma fecha, es a los interesados. Conste

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA,  
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTEREGADOS  
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION.  
POR MEDIO DE LISTA, DOY FE





**AMPARO EN REVISIÓN 690/99.  
QUEJOSO: EDGARDO MEDINA  
DURÁN.**

**VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO  
JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO  
SECRETARIA: LIC. GUADALUPE M. ORTIZ.**

Vo. BQ.  
PONENTE

Estoy de acuerdo con el sentido de la decisión tomada por el Tribunal Pleno, pues considero que la sentencia recurrida debe confirmarse, en la parte cuyo conocimiento corresponde a esta Suprema Corte de Justicia; sin embargo, lo que no comparto son los motivos que sustentan esa decisión.

COTIZADO.

El quejoso promovió demanda de amparo en contra del acuerdo que aprueba el remate de un bien inmueble en favor de una institución de crédito. Como argumento toral de su impugnación planteó que dicho acto es inconstitucional, pues desatiende la prohibición contenida en la fracción V del artículo 27 de la Carta Magna.



Es así que el juez de Distrito, al revisar la constitucionalidad del acto reclamado, procedió a interpretar el texto del artículo 27, fracción V, de la Constitución Federal, para concluir que la autoridad responsable no transgredió esta norma suprema.

Creo que ese análisis que se realizó en la sentencia es indebido, porque el planteamiento del quejoso, en los términos en que fue propuesto, resulta improcedente, ya que el acuerdo que

aprobó el remate en favor de la institución tercera perjudicada no tiene su fundamento directo en el artículo 27, fracción V, de la Constitución, sino en el artículo 106, fracción XIII, de la Ley de Instituciones de Crédito, que prevé la posibilidad de que las instituciones de crédito reciban bienes en adjudicación por remate.

Así es, el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la fracción citada dispone que:

***"ARTÍCULO 106.- A las instituciones de crédito les  
"estará prohibido: ...***

***"XIII. Adquirir con recursos provenientes de sus  
"pasivos, títulos valores o bienes de los señalados  
"en las fracciones I y III del artículo 55 de esta ley.***

***"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá  
"autorizar excepciones, mediante reglas de  
"carácter general.***

***"Cuando una institución de crédito reciba en pago  
"de adeudos o por adjudicación en remate dentro  
"de juicios relacionados con créditos a su favor  
"títulos o valores, que no deba conservar en su  
"activo, así como bienes o derechos de los  
"señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las  
"disposiciones de carácter general que establezca  
"la Comisión Nacional Bancaria".***



Siendo éste el precepto que autoriza a la autoridad responsable a adjudicar en remate un inmueble en favor de una institución de crédito, estimo que no puede plantearse como argumento que el acuerdo reclamado viola el artículo 27 constitucional, si no se plantea también la inconstitucionalidad de la norma secundaria que constituye el fundamento de dicha determinación.

Aun cuando no se hubiere citado de forma expresa la Ley de Instituciones de Crédito, como el fundamento del acto reclamado, ello no justifica que el quejoso pretenda que se analice dicho acto a la luz de lo dispuesto por la Constitución Federal, cuando en realidad lo que se aplicó en su perjuicio fue una norma secundaria, conforme a la cual se puede adjudicar bienes en favor de una institución de crédito.

Es decir, no puede analizarse si el acuerdo reclamado transgrede el contenido de la fracción V del artículo 27 de la Carta Magna, porque esta norma constitucional no es su fundamento.

Actuar de esta manera significa analizar implícitamente la constitucionalidad de la fracción XIII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que esta disposición es la que prevé la posibilidad de que se adjudiquen bienes en la forma en que la autoridad responsable lo hizo.

Ahora bien, ese análisis implícito importa, también, la determinación igualmente implícita de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma; pues si se determina que la responsable acató en sus términos lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, ello equivaldría a un reconocimiento de que se apega a la Constitución el precepto que la faculta a actuar del modo en que lo hizo; y si, por el contrario, se llega a la conclusión de que el acuerdo reclamado transgrede el contenido del precepto constitucional, no cabría más que concluir que la fracción XIII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional.

Y todo esto de manera implícita, ya que la ley secundaria no fue reclamada, ni se llamó a juicio, en defensa de sus actos, a las autoridades que la crearon.

Como se ve, resulta notoriamente inconducente el análisis de los conceptos de violación hechos valer, pues si lo que causa perjuicio al quejoso es la adjudicación de bienes en favor de la tercero perjudicada, lo que debió impugnar necesariamente es la ley que autoriza al juez a adjudicarlos en esos términos; de lo contrario, por más que aduzca que el acuerdo reclamado transgrede directamente la fracción V del artículo 27 constitucional, sus argumentos deben calificarse de inoperantes.

Al realizar el juez de Distrito el análisis de fondo y al confirmar este Tribunal Pleno la decisión de primera instancia,



519



implícitamente reconoció la constitucionalidad de la ley secundaria tantas veces citada y, al mismo tiempo, dio un tratamiento de amparo directo a un juicio que se tramitó como indirecto; con la consecuencia de que las condiciones de procedencia y efectos de la sentencia también se alteraron.

Recuérdese que en el juicio de amparo que se tramita en la vía directa no se reclama la ley que el quejoso estima inconstitucional, ni las autoridades que intervinieron en su creación son llamadas a juicio; únicamente se expresan conceptos de violación en contra de esa ley, y la decisión que el tribunal colegiado toma al respecto se ve reflejada sólo en las consideraciones de la sentencia, mas no se otorga protección en contra de esa ley.

En el amparo indirecto, en cambio, se debe reclamar como acto destacado la ley que el promovente tilda de anticonstitucional y se debe señalar a las autoridades responsables de su creación; los efectos de la sentencia son distintos, desde luego, pues la protección constitucional se otorga o se niega en contra de esa ley.

En este caso, en que el Tribunal Pleno analizó los agravios hechos valer y, por tanto, el fondo del asunto, actuó como si de un amparo directo en revisión se tratara; puesto que no se reclamó ninguna ley, ni se llamó a juicio a las autoridades legislativas, aunque implícitamente se analizó y reconoció la constitucionalidad de sus actos, reconocimiento que quedó

reflejado en la parte considerativa de la sentencia y no en la decisión final.

Pienso, por todo esto, que lo correcto debió haber sido confirmar en sus términos la sentencia recurrida, ante la inoperancia de los argumentos hechos valer, pues, como expliqué, no es posible realizar la interpretación directa de la fracción V del artículo 27 constitucional, si no se reclamó la fracción XIII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

  
**Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo**  